

Camacho, Juan Francisco, 1817-1896

**Memoria sobre la hacienda pública de España : en
1881 a 1883 / por Juan Francisco Camacho.**

Madrid : Establecimiento Tipográfico de los Sucesores
de Rivadeneyra, 1883.

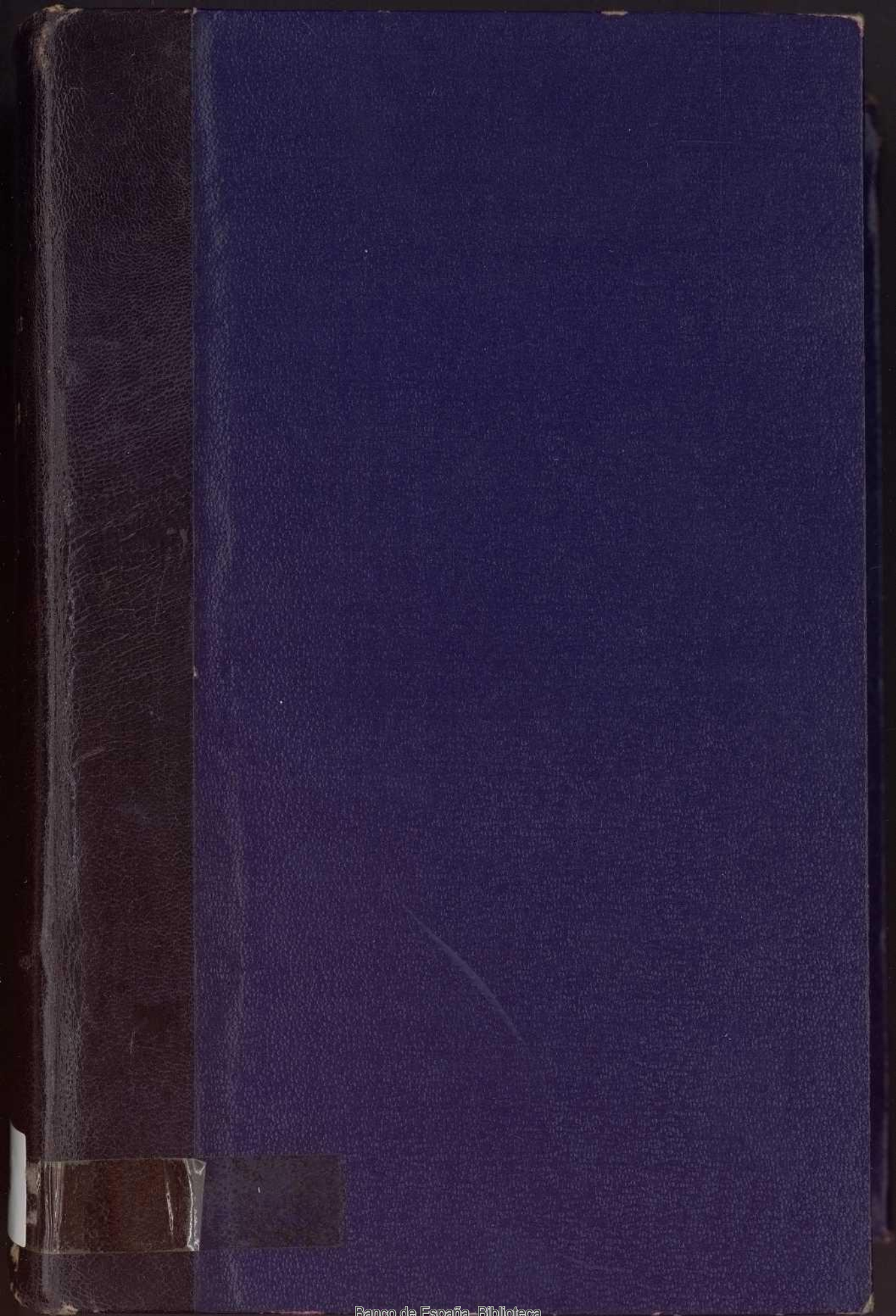
Signatura: 28484

La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

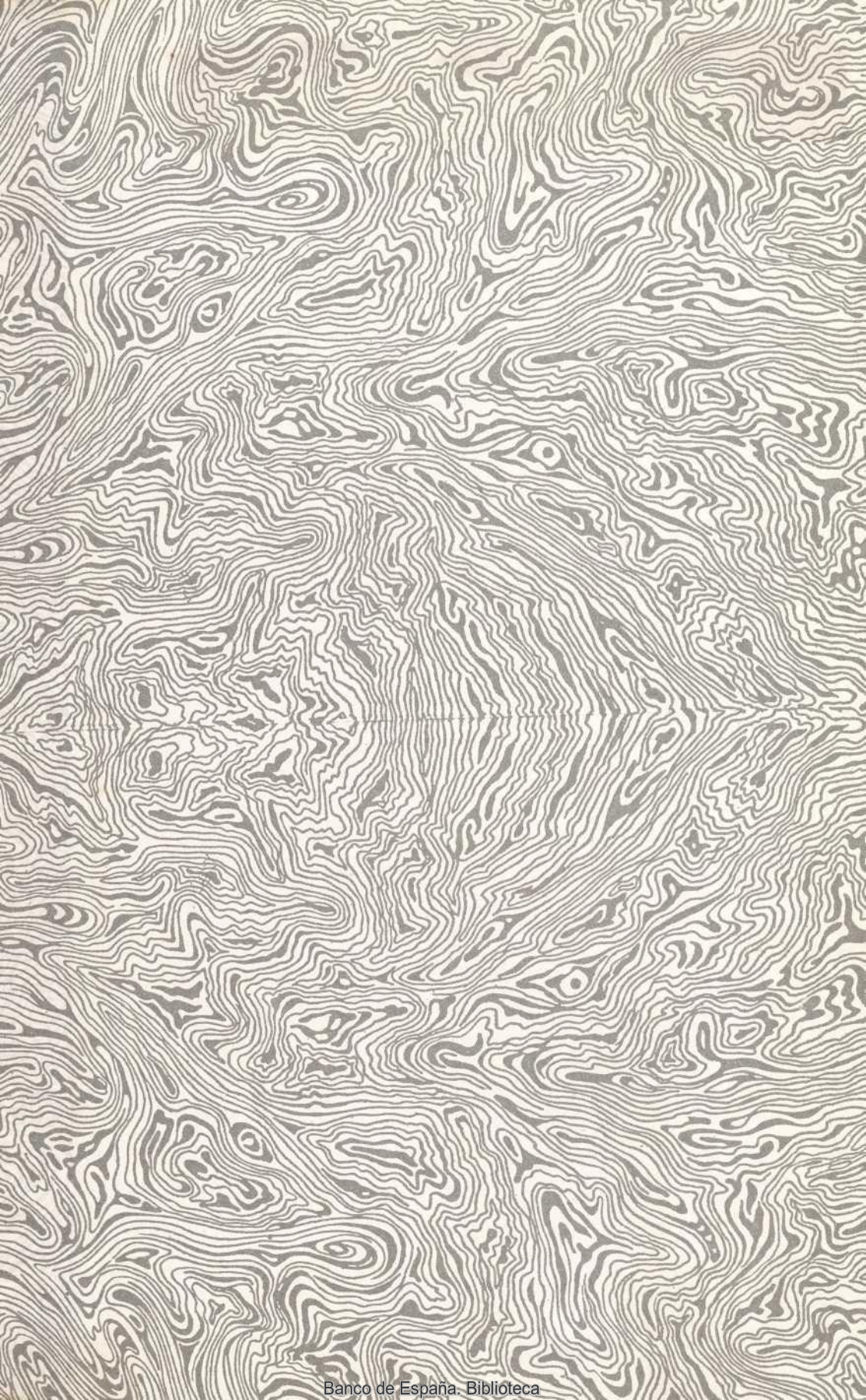
<http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html>

Aviso legal

*Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de
lucro siempre y cuando se cite la fuente*







78184

BANCO DE ESPAÑA

BIBLIOTECA



28484



MEMORIA
SOBRE LA
HACIENDA PÚBLICA DE ESPAÑA
EN 1881 Á 1883.



MEMORIA

SOBRE LA

HACIENDA PÚBLICA DE ESPAÑA

EN 1881 Á 1883

POR

D. JUAN FRANCISCO CAMACHO.



MADRID.

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE LOS SUCESTORES DE RIVADENEYRA,

IMPRESORES DE LA REAL CASA.

Paseo de San Vicente, núm. 20.

1883.

Con solícito afán ha procurado mi Gobierno mejorar la Hacienda nacional; y si el sagrado respeto que las leyes le merecen ha contenido sus propósitos de reforma, tan pronto como esté constituido el Congreso os propondrá las medidas que considera necesarias para salvar la situación de nuestro presupuesto, á pesar de todos, en progresivos y crecientes déficits, y para obtener desde luego la segura nivelación, tan apetecida y hasta ahora no lograda.

Al efecto, someterá á vuestras deliberaciones el presupuesto general del Estado y los proyectos de ley necesarios para modificar la organización económico-administrativa y sus procedimientos, y para establecer las alteraciones convenientes en las bases de los tributos, de modo que acrecienten los ingresos, haciendo más equitativa su distribución, suprimiendo algunos que dificultan el tráfico; disminuyendo otros en interés del contribuyente y de la Administración, y reformando las rentas en los términos que los intereses generales del País reclaman, inspirándose siempre en el criterio de la justicia, que es el verdadero criterio de la libertad. También os presentará mi Gobierno, y será sin duda objeto de vuestra preferente atención, un proyecto que tiende á unificar las Deudas amortizables á tipo fijo y otras que por su escasa importancia es conveniente cancelar desde luego. Por este medio, que la mejora del crédito facilita, se consigue la nivelación del presupuesto, y se podrá llegar á las negociaciones con los acreedores por la Deuda del Estado, que ordenó la ley de 21 de Julio de 1876, en situación favorable á obtener transacciones convenientes para todos. A este fin, y con objeto de que el rigorismo de la ley no se oponga á las aspiraciones de los acreedores, mi Gobierno os pedirá una autorización para tratar desde luego en el caso que así conviniere.

(Discurso leído por S. M. el Rey en la apertura de las Cortes verificada el 20 de Setiembre de 1881).

Desde el Ministerio de Hacienda habría cumplido mi deber de presentar á las Cortes el resultado oficial de mi gestión administrativa; y aunque en mi puesto

de Senador, y con ocasión de los debates de la última crisis ministerial, he podido anticipar algunas explicaciones, que estimaba oportunas y hasta perentorias, no entiendo hallarme todavía descargado de la obligación de dar á mi país más extensa cuenta de mis actos, porque esto, que habría sido natural para justificación de las reformas y del sentido general de mi administración, se hace preciso desde el punto en que he sido el objetivo de vivísimos y tenaces ataques, que comenzaron de una manera inusitada y extraña cuando todavía no era mi modesta personalidad más que un candidato posible, aunque en mi sentir poco probable, para volver á ocupar inmerecidamente el Ministerio de Hacienda, en principios del año de 1881, fecha en la cual se intentó prestar vida artificial á cargos contra mi administración anterior formulados, los cuales habían sido solemnemente retirados años atrás; y es todavía más ineludible, visto que igual empresa se continúa ahora contra mi última administración, con la persistencia de una preocupación fija ó una enfermedad moral. Y como yo por mi parte deseo no verme de ella poseído, procuraré la terminación de controversias ya estériles, aunque dejando consignados antes cuantos datos se puedan solicitar del administrador y del hombre público, para que puedan ser compulsados y examinados por todos los espíritus imparciales y serenos con rectitud igual á la que á mí propio me ha inspirado en mi conducta.

Si después de esto, el interés político ó la creencia leal y sincera de algunos, de que sólo un partido, y dentro de un partido determinadas y sin duda competentísimas personalidades pueden y deben regir la Hacienda de la Nación, son causa de la prolongación de ciertas polémicas, no me alcanzará á mí la responsabilidad de sus efectos políticos y económicos, que

creo por demás deplorables; las consecuencias políticas, porque tienden á hacer imposible la alternativa de los partidos, que es base esencial de los gobiernos constitucionales, desde el momento en que se supone que la Hacienda ha de estar siempre regida por los mismos hombres; y los resultados en el orden económico, porque si la riqueza de todos y cada uno y la honra del País en el exterior, representadas por el crédito público, no son respetadas, ó teniéndolas por pequeño estorbo ante las necesidades de la discusión, sirven de *anima vilis* en la controversia, estos grandes intereses quedan heridos, no ciertamente con propósito deliberado, sino porque, cuando los contendientes abundan tanto en su propio sentido que tienen por absolutas sus opiniones y por axiomáticos sus fallos, el convencimiento propio les lleva á sostener, sin consideración alguna, la que ellos imaginan ser la verdad salvadora, cualesquiera que sean los tristes efectos de semejante procedimiento.

Yo, por el contrario, he entendido siempre que la Hacienda pública y los asuntos económicos que con ella se ligan, tienen un carácter esencial de neutralidad, en virtud del cual las bases capitales, los organismos y las resoluciones que á una y otros se refieren, son cosa separada de los intereses y aun de la representación política doctrinal de los partidos, por más que cada uno de éstos al concurrir con igual patriotismo á la obra común, lleve á sus soluciones el carácter circunstancial ó la influencia de su concepto propio en la política general; porque solamente de este modo las bases fundamentales de la Hacienda están exentas del peligro de la inestabilidad y pueden ser sólidos y continuados sus progresos.

Cuando el establecimiento definitivo del gobierno constitucional se realizó entre nosotros, el sentido po-

lítico general de la situación nueva debió, naturalmente, informar las grandes reformas económicas que el estado deplorable de la riqueza pública exigía, y el espíritu administrativo de la escuela liberal en sus matices diversos había luego de realizar la organización científica de una Hacienda nacional, que reemplazase al desorden, la irresponsabilidad y el empirismo anteriores. En estas empresas sucesivas, así cuando se desamortizaba para hacer prosperar la riqueza general, como cuando se implantaban los tributos, los temores que tales novedades despertaban, y acaso los intereses inmediatos y pasajeros de las parcialidades, hubieron de producir dificultades más ó menos graves; pero al cabo el bien quedó hecho y patentes después para todos los esfuerzos de cada uno y la parte que todos tomaron en el trabajo de reconstrucción y perfeccionamiento paulatino de nuestra Hacienda, ya en lo que á la riqueza imponible se refiere, como en lo que tiene por objeto la dotación racional del presupuesto de gastos y los sacrificios proporcionados que la manera de ser de los pueblos modernos impone á las naciones.

Por mi parte, encuentro en mis antecedentes administrativos algo que apropiarme, siquiera sea en participación modesta, en esta historia de nuestra Administración; y si hago ahora ligerísima mención de tales recuerdos, es sólo para justificar con el ejemplo de lo pasado mi sentido gubernamental y la manera en que, sin detenerme ante consideraciones puramente políticas ó intereses de partido, he procurado siempre sacar á salvo la integridad del presupuesto, base del crédito y fuente única de todo progreso positivo.

La formación y realización del presupuesto de 1874-75, demandada por la gravedad suma de las cir-

cunstancias en momentos en que su discusión parlamentaria no era posible; el restablecimiento en él de la contribución de consumos y otros tributos; la creación de algunos nuevos; la clausura del Tesoro para las negociaciones de Deuda flotante con particulares, y la liquidación de una gran parte de la que á la sazón existía, llevada á cabo por un procedimiento que después ha servido de norma para las liquidaciones posteriores, no fueron medidas egoístas, ideadas y realizadas con miras estrechas de partido, sino que, por el contrario, estuvieron inspiradas en motivos exclusivos de conveniencia del Estado, con prescindimiento de propósitos políticos y del afán de una popularidad mal entendida; que nada hay á la larga más peligroso y ocasionado á tardíos arrepentimientos que remover intereses particulares en todas estas cuestiones que se han de dilucidar á la postre en un sentido complejo, resolviendo las antítesis en una armonía común y con el predominio prudente del bien general.

Aquellos tiempos azarosos exigían la reunión de grandes recursos para hacer frente á necesidades gravísimas y perentorias; y no era obra fácil la de formar un presupuesto con carácter definitivo, ni regularizar la Administración, ni perfeccionar los servicios.

Por esta razón dejé consignado en la Memoria que precedía á aquel documento lo siguiente :

« En este ejercicio anormal es imposible dar solución completa á la crisis de nuestra Hacienda, y
» harto se hará si con un presupuesto de carácter
» transitorio todavía y con otras medidas complementarias se prepara para un día próximo un presupuesto normal, que encuentre ya en éste los recursos de
» una tributación efectiva y el auxilio de rentas bien
» administradas, sin las graves perturbaciones, por otro

» lado, que el estado del Tesoro produce ahora en el
» sistema general de la Hacienda. Es preciso dirigir
» los esfuerzos de la Administración á restablecer la
» tributación normal que el País necesita para que no
» se extinga del todo su vida económica, haciendo re-
» vivir los obstruídos veneros de las rentas é impues-
» tos. De esta sola tarea debe esperarse un resultado
» importante. La ocultación de la riqueza imponible,
» los atrasos en el cobro de débitos en varios concep-
» tos á favor del Erario, la defraudación, han empo-
» brecido al Estado ; el remedio enérgico que este
» mal demanda toca á la Administración ; á procurar-
» lo consagran el Ministro y los Jefes de los Centros
» directivos y de provincias oscuros pero fructuosos
» trabajos, y tiene fundada esperanza de que ha de
» restablecerse la noción del deber en las relaciones
» del individuo con la Hacienda. »

« Á tal situación, ligeramente expuesta, correspon-
» de el mecanismo del nuevo presupuesto de ingresos,
» que lo es de transición y preparación para los futu-
» ros presupuestos de la paz y de la reorganización
» rentística ; y anormal ó extraordinario en cuanto á
» ello obligan las necesidades de la guerra. Por esto
» hay dentro de él soluciones definitivas, ensayos, car-
» gas pasajeras y aplazamientos necesarios. Una expe-
» riencia próxima, producto de un esfuerzo común,
» vendrá en ayuda de los propósitos que el Gobierno
» abraiga, ya para confirmar sus esperanzas, ya para
» rectificar en lo ulterior sus planes. »

La época presente exigía del Ministro que aquellas ideas había manifestado, su realización en cuanto fuese posible ; que no es obra de un día ciertamente dar término á la empresa laboriosa de la reorganización definitiva de nuestra Hacienda, comenzada de antiguo y proseguida después por todos con celo y perseve-

rancia, ni los esfuerzos de un sólo hombre, aunque con condiciones muy superiores á las mías, podrían ser suficientes para conseguirlo.

Cinco años de paz permitían ya avanzar en el camino de las reformas; una voluntad enérgica y la abnegación patriótica necesaria para que el clamoreo de pasiones é intereses personales no produjese vacilación en el propósito, y para que la injusticia de la opinión desfavorable que muchos pudieran formar no intimidase el ánimo, eran condiciones precisas para efectuarlo, y consideré, por lo tanto, un deber de honra y consecuencia ineludible afrontar con espíritu sereno las inmensas dificultades que esperaba se me ofrecieran en el camino de progreso que me proponía emprender.

Bajo estos puntos de vista, por lo pasado y para lo futuro, se concibió el presupuesto del segundo semestre del ejercicio de 1881-82 y el correspondiente al ejercicio actual 1882-83; y el que, como yo, reconoce á cada uno sus legítimos merecimientos; el que cree, convencido y sincero, que el resultado adquirido por el trabajo de todos es del patrimonio de la Nación, y quien estima un tributo, á ella debido, el de pasadas amarguras, natural es que solicite ahora una apreciación justa del fruto de tareas y esfuerzos que por lo bien intencionados pudieran merecer este premio.

Al encargarse el Gobierno del 8 de Febrero de los negocios, el Ministro de Hacienda debió considerar atentamente el estado de este Departamento, y pudo estimar que la organización de las rentas y de los servicios, así como el producto de los tributos, no habían llegado á una situación definitiva, y que existían además materias varias de la más grande importancia, como el arreglo y conversión de la Deuda, la reforma arancelaria, los tratados de comercio, la organización

administrativa y otras, cuya resolución estaba pendiente; de suerte que los Gobiernos debían todavía ocuparse, con evidente utilidad pública, no sólo en la administración de lo existente, sino también de su perfeccionamiento, y en otros asuntos de supremo interés para el Estado, tal como el acrecentamiento de la recaudación hasta los límites debidos, sin lo cual no hay presupuesto ni Hacienda posibles.

Pero ninguna, entre todas estas materias, alcanzaba acaso importancia tan grande como el punto relativo á la situación del crédito público español en Europa, porque en estos tiempos la situación de los Estados y su valer se miden por su solvencia y por la dotación y nivel de su presupuesto; en tal manera, que las naciones que aparecen deficientes á sus obligaciones en estos conceptos, apenas si figuran entre las demás como un pueblo normalmente constituido. Era, pues, de la mayor urgencia afirmar nuestra solvencia é incorporarse resueltamente aun á costa de grandes sacrificios á la comunidad de las naciones serias; y al logro de este objetivo se encaminaron los trabajos de aquel Gobierno desde el momento en que la responsabilidad del poder pesó sobre él.

Para la nivelación de los presupuestos, base del crédito, propuso la conversión de las Deudas amortizables y de la flotante del Tesoro; para la solvencia de España ante los mercados financieros de Europa, el arreglo de la Deuda perpetua; y para ambas operaciones un tipo común nuevo y de indudables ventajas para lo porvenir.

Pero como los más enérgicos y sostenidos esfuerzos para vigorizar y hacer eficaz la gestión administrativa y la recaudación, que es su resultado, no eran bastantes para el logro de sus propósitos, el Ministro de Hacienda, con el concurso y la aprobación de las

Cortes, llevó al presupuesto de ingresos, por reformas trascendentales y por bases nuevas, mayores recursos, contando con ser ayudado en sus miras patrióticas por el País mismo, á cuya importancia fuera y prosperidad ulterior dentro se encaminaban los trabajos emprendidos.

Y yo tengo motivos para creer, cada día con mayores datos, que la generalidad lo comprendió así, lo mismo en el interior que en el exterior, hasta el punto de que las alarmas que pudieron parecer más naturales han desaparecido después ante la experiencia y la realidad, y que donde quiera que han podido estimarse las cosas en sí y sin la influencia de intereses extraños, se ha hecho justicia á la utilidad de la empresa y se han reconocido sus propósitos patrióticos.

Bien es verdad que yo no he podido aportar á su realización más que una larga práctica de los negocios y un estudio continuado del estado de nuestra Hacienda; pero como mis trabajos han estado exentos de todo espíritu de partido y de pretensiones de vanagloria personal, su perfeccionamiento podrá llevarse luego á cabo por mis dignos sucesores, y por mi parte, si hubiera continuado en el puesto que desempeñé, lo habría intentado en aquellos puntos que la experiencia me aconsejase que eran dignos de ello.

TESORO PÚBLICO.

Uno de los asuntos en que especialmente fijé mi atención al encargarme del Ministerio de Hacienda fué el de la situación en que se encontraba el Tesoro público, con presencia del conocimiento oficial que se me dió.

Esta situación era la siguiente :

SITUACIÓN DEL TESORO EN 10 DE FEBRERO DE 1881

CON LA CALIFICACIÓN DEL ACTIVO.

PASIVO.

Pesetas.

El pasivo del Tesoro, representado por la Deuda flotante, préstamos recibidos, partícipes de las rentas y obligaciones de presupuestos pendientes de pago, importaba, en la indicada fecha.	<u>340.530.853,31</u>
---	-----------------------

ACTIVO.

En total ascendían los créditos á favor del Tesoro á.	295.150.230,91
---	----------------

Su calificación es la siguiente :

CRÉDITOS DISPONIBLES Ó DE INMEDIATA
REALIZACIÓN.

Existencias en Caja.	48.390.499,37	}	112.337.304,77
Anticipaciones á la Caja de los Cuerpos de Ultramar.	361.645,47		
Anticipaciones al Consejo de Redenciones y Enganches del servicio militar.	9.700.000 »		
Valores de presupuestos veni- dos y á realizar.	53.885.159,93		
	<u>53.885.159,93</u>		

CRÉDITOS DE LEJANA REALIZACIÓN Y DUDOSO
COBRO.

Anticipaciones á Compañías de ferrocarriles.	3.500.000 »	}	22.378.075,71
Anticipaciones á varios.	1.000.000 »		
Valores presupuestos vencidos y no realizados (79-80).	17.878.075,71		
	<u>17.878.075,71</u>		

CRÉDITOS INCOBRABLES.

Anticipaciones á las Cajas de Ultramar.	72.155.718,94	}	160.434.850,43
Anticipaciones á varios.	8.279.131,49		
Valores presupuestos de ejerci- cios cerrados.	80.000.000 »		
	<u>80.000.000 »</u>		
			<u>295.150.230,91</u>
			<u>IGUAL.</u>

RESULTADOS.

Deduciendo del importe total del pasivo, ya ex- presado.	340.530.853,31
la parte del activo que representa créditos dis- ponibles ó de fácil é inmediata realización, que asciende, como queda dicho, á.	112.337.304,77
resulta un descubierto de.	228.193.548,54
y si de dicha suma se deduce el valor de los cré- ditos de lejana realización ó dudoso cobro, que importan.	22.378.075,71
todavía queda un descubierto de.	<u>205.815.472,83</u>

Madrid, 23 de Febrero de 1881.—*J. R. de Oya.*

En verdad que podía preverse por cuantos seguían con atención la marcha de los asuntos económicos que la situación del Tesoro no era desahogada; pero también es cierto que por mi parte no la había considerado tan difícil como realmente la veía.

Porque si era verdad que, para los que no se preocupaban del aumento de la Deuda flotante y contaban con que teniendo el Banco de España recursos suficientes á conllevarla en más elevados límites de los á que á la sazón llegaba, aquella situación no era alarmante, el que entraba á formar parte del Gobierno, animado del propósito de disminuir en cuanto fuera dable la mencionada Deuda ínterin era venido el momento de su conversión, había de considerar tal estado de cosas poco tranquilizador.

Pero de todos modos, bueno es que conste, como punto de partida de mi administración, cuál era el verdadero estado del Tesoro público al hacerme cargo de la gestión de la Hacienda.

La manera con que esta situación mejoró ha de desprenderse de lo que en los capítulos siguientes exponga sobre reforma de la tributación, impulso dado á la recaudación, conversión de las Deudas amortizables y demás desenvolvimientos de mis planes económicos y financieros, bastando ahora á mi propósito demostrar cuál ha sido el estado en que dejé el Tesoro al cesar en el Ministerio de Hacienda el día 9 de Enero del presente año de 1883.

Desde mi puesto de Senador, en la sesión del 12 del mismo mes, la expliqué al justificar mis actos y para probar que mi salida del Gobierno no había respondido á propósitos de buscar pretexto para ello.

He aquí los datos que entonces presenté :

Metálico existente en la Tesorería Central, en <i>Ptas.</i>	3.155.685
Metálico existente en las Tesorerías y Depositarias de provincias.	20.756.900
Metálico existente en las Comisiones de Hacienda en París y Londres.	4.269.060
Metálico existente en cuenta corriente en el Banco de España, devengando interés de 4,71 por 100 á favor del Tesoro.	62.618.249
<i>Total en pesetas.</i>	90.799.894
<i>En Reales.</i>	<u>363.199.576</u>

En el mismo Banco, como reservas hechas en el semestre último para pago del cupon consolidado vencido en 31 de Diciembre último.. . . .	50.125.960
Este cupón, garantizado con la reserva anterior, importará, segun presupuesto, sobre 56.400.000. Igualmente tiene el Banco reservados 22.008.750 como importe del trimestre 4 por 100 amortizable, cuyo pago está á su cargo segun la ley, vencimiento 31 Diciembre.	22.008.750
<i>Total reservas en el Banco.</i>	<u>72.134.710</u>

Y añadí que estaban cubiertas hasta fin de Diciembre último todas las obligaciones del personal de los diferentes servicios del Estado, incluso Clero y Clases pasivas; que las del material estaban tambien al corriente en relación con los devengos y presentación de los oportunos libramientos que expiden las Ordenaciones de pagos; y por último, que contaba el Tesoro con unos 13 millones en títulos del 4 por 100 amortizable, de que en su caso podría disponer.

Con estas demostraciones, apoyadas en datos oficiales que me habían sido entregados por la Dirección general del ramo, dejaba suficientemente probado, á mi juicio, que la situación del Tesoro era muy favorable, y sobre todo, comparada con la que yo encontré en 8 de Febrero de 1881.

Mas como quiera que un digno Sr. Senador de la oposición manifestase que lo que yo había leído con el objeto de hacer ver el estado satisfactorio en que á mi salida del Ministerio quedaba el Tesoro público, era sólo la *Cuenta de Caja*, la cual no se podía poner enfrente de un *Balance del Tesoro*, como yo había hecho, siendo datos que no era dado comparar entre sí, considero oportuno presentar ahora el balance de su situación en 8 de Enero del presente año, cuyo documento no tenía á mano en aquellos momentos. El demostrará la exactitud de cuanto expuse, y me permitirá entrar en ciertas comparaciones de que entonces prescindí.

SITUACIÓN DEL TESORO EN 8 DE ENERO DE 1883

CON LA CALIFICACIÓN DEL ACTIVO.

PASIVO.

Pesetas.

El pasivo del Tesoro, representado por créditos de Ayuntamientos por la tercera parte del 80 por 100 de Propios, depósitos del Consejo de redenciones del servicio militar, préstamos, partícipes de las rentas y obligaciones de presupuestos pendientes de pago, importaba en la indicada fecha.	<u>229.203.929,72</u>
--	-----------------------

ACTIVO.

En total ascendían los créditos á favor del Tesoro á.	<u>346.954.416,34</u>
---	-----------------------

Su calificación es la siguiente :

CRÉDITOS DISPONIBLES Ó DE INMEDIATA
REALIZACIÓN.

Existencias en Caja.	28.181.645 »	}	232.699.861,27
Reservas en poder del Banco. .	94.143.460 »		
Débito del Banco procedente de la negociación de 4 por 100 amortizable.	62.618.249 »		
Anticipaciones á la Caja de los Cuerpos de Ultramar.	361.645,47		
Anticipaciones á la Compañía del ferrocarril de Triano á Bilbao.	22.963 »		
Valores presupuestos vencidos y á realizar.	<u>47.371.898,80</u>		

CRÉDITOS DE LEJANA REALIZACIÓN Y DUDOSO
COBRO.

Anticipaciones á los que su- frieron pérdidas en las inun- daciones.	340.783,73	}	41.820.986,23
Anticipaciones por obligacio- nes de instruccion primaria. .	3.852.101,30		
Valores presupuestos vencidos y no realizados.—Ejercicios cerrados.	22.628.101,20		
Anticipaciones á Ultramar. —			
Cuba.	<u>15.000.000 »</u>		

CRÉDITOS INCOBRABLES.

Anticipaciones á Ultramar. . .	70.549.928,30	}	72.433.568,84
Anticipaciones á varios. . . .	<u>1.883.640,54</u>		
			<u>346.954.416,34</u>
			<u>IGUAL.</u>

RESULTADOS.

Comparando el total importe del pasivo ya ex- presado.	229.203.929,72
con la parte del activo que representa créditos disponibles ó de fácil é inmediata realización, que asciende á.	<u>232.699.861,27</u>

resulta un exceso de activo de.	<u>3.495.931,55</u>
y si se aumentan los créditos de lejana realización, que importan.	<u>41.820.986,23</u>
se eleva el exceso de activo á.	<u>45.316.917,78</u>

Madrid, 9 de Enero de 1883.—*J. R. de Oya.*

De la comparación de ambos balances resulta desde luego lo siguiente:

1.º Que en el formado á la salida de mi digno antecesor, el pasivo se elevaba á..	<i>Ptas.</i> 340.530.853,31
Y en el formado al cesar yo en el Ministe- rio ascendía á.	» <u>229.203.923,72</u>
Es decir, que rebajé los débitos del Tesoro en.	<i>Ptas.</i> <u>111.326.929,59</u>
2.º Que el activo, en el primero de los precitados balances, se elevaba á. . .	<i>Ptas.</i> 295.150.230,91
Y en el segundo de los expresados docu- mentos á.. . . .	<i>Ptas.</i> <u>346.954.416,34</u>
Es decir, que á mi salida del Ministerio quedaban aumentados los créditos á fa- vor del Tesoro en.	<i>Ptas.</i> <u>51.804.185,43</u>

Pero es de advertir que en los 295.150.230,91 están comprendidos 80 millones por presupuestos cerrados, que se han eliminado de las pesetas 346.954.416,34, y que por lo tanto, si la comparación hubiera de ser exacta, los 51.804.185,43 se elevarían á 131.804.185 pesetas 43 céntimos.

Vengamos ahora á la calificación de los respectivos activos.

CRÉDITOS DISPONIBLES Ó DE INMEDIATA
REALIZACIÓN.

En el balance de 10 de Febrero de 1881 importaban.. . . .	<i>Ptas.</i> 112.337.304,77
En el de 8 de Enero de 1883.	» <u>232.699.861,27</u>
Es decir, que dejé un aumento de créditos disponibles ó de inmediata realización importantes.. . . .	<i>Ptas.</i> <u>120.362.556,50</u>

CRÉDITOS DE LEJANA REALIZACIÓN.

Importaban en el balance de 10 de Febrero de 1881.	Ptas.	22.378.075,71
Importaban en el balance de 8 de Enero de 1883.	»	41.820.986,23
Se aumentaron los créditos de lejana realización en el período de mi administración por.	Ptas.	<u>19.442.910,52</u>

CRÉDITOS INCOBRABLES.

Ascendía el importe de ellos en 10 de Febrero de 1881 á.	Ptas.	160.434.850,43
Ascendía el importe de ellos en 8 de Enero de 1883 á.	»	72.433.568,84
Han disminuido, pues, en.	Ptas.	<u>88.001.281,59</u>

por haberse realizado 8.001.281,59 de lo que se creía incobrable y haber hecho desaparecer de la liquidación la cantidad de 80 millones que venía arrastrándose en todas las que se practicaban, si bien calificándose siempre como de incobrable y cuya partida no procedía ya incluirla en el activo de 8 de Enero último.

Resumiendo los datos que preceden, resulta que, al cesar en mi administración, el estado en que dejé el Tesoro, comparando su situación con la que recibí, fué el siguiente :

Aumentados los créditos disponibles en. .	Ptas.	120.362.556,50
Aumentados los créditos de lejana realización en.	»	19.442.910,52
Disminuidos los créditos incobrables en. .	»	8.001.281,59

Para apreciar mejor la situación del Tesoro en la fecha de 8 de Enero último, aun cuando los datos expuestos demuestran evidentemente que era más satisfactoria, debe tenerse en cuenta que he tomado el pasivo por todo su total; y como quiera que alguna

parte de él no es de inmediato pago, por ejemplo, los 30 millones de pesetas, número redondo, importe de la tercera parte del 80 por 100 de Propios, de los que la mayor parte no se pagará en el año corriente, así como otros créditos, comprendidos también en el pasivo, lo han sido por toda la resultancia de las cuentas, y sin embargo no se satisfarán en su totalidad, según acontece con respecto á los débitos de ejercicios cerrados, cuanto de ellos deje de abonarse será aumento del exceso de activo del Tesoro.

Habré pecado quizás de minucioso, pero lo he considerado necesario para que la comparación fuese verdad, y sobre todo, á fin de desvanecer las dudas á que antes me refería, expuestas por el digno Sr. Senador, y demostrar que si ventajosa era la situación de la Caja, no lo era menos la del Tesoro, puesto que la liquidación de éste, que queda inserta, está en perfecta consonancia con los datos que tuve la honra de leer ante el Senado y dieron lugar á aquella duda, que abrigo la esperanza desaparecerá hasta para los que entonces la tenían.

LA DEUDA FLOTANTE.

Como consecuencia natural de lo que queda expuesto en el capítulo precedente, otro de los asuntos que más preocuparon mi atención al encargarme del Ministerio de Hacienda, en 8 de Febrero de 1881, fué el de las proporciones que alcanzaba la Deuda flotante.

No me habría alarmado su existencia si su importancia no hubiese excedido de los límites en que siempre debe estar contenida, y el presupuesto para que se había contraído ofreciera recursos á realizar bastantes para extinguirla dentro del mismo ejercicio.

Que un Tesoro tenga Deuda flotante, no solamente no es extraño, sino que es natural; y más aún, á no ser por circunstancias especiales, no puede lograrse, dadas las relaciones del presupuesto con el Tesoro, que éste se encuentre sin Deuda flotante.

Si los ingresos pudieran realizarse con la misma periodicidad con que vencen las obligaciones; si los recursos llegaran á las arcas del Tesoro antes que tuviera que satisfacer los gastos, supuestos un presupuesto nivelado y una Administración celosa, la

necesidad de la Deuda flotante desaparecería, porque el Tesoro, que siempre ha de suplir al presupuesto, tendría de éste lo bastante para pagar con puntualidad todos los gastos á su vencimiento.

Pero como esto no acontece; como los gastos comienzan á deberse desde el primer día del año económico, y la mayor parte de los ingresos no empiezan á cobrarse sino á mediados del segundo mes; como no es posible dilatar el pago de lo debido por la no realización de los ingresos, el Tesoro, que no tiene recursos propios, sino los que obtiene del presupuesto, se ve en la precisión de acudir al crédito, haciendo operaciones de Tesorería, por las que adquiere fondos con que satisfacer todas las obligaciones á su vencimiento.

Pero si este desnivel momentáneo del presupuesto justifica la Deuda flotante, ésta no debe tener más larga duración que la precisa para que los ingresos se realicen y con ellos se satisfaga la Deuda de la Tesorería, contraída para pagar los gastos del presupuesto. Así es que, cuando éstos se hallan verdaderamente nivelados y la Administración es tan eficaz como debe, no sólo quedarán realizados al terminar el ejercicio todos los ingresos y pagos, sino también extinguida la Deuda flotante sin que ofrezca quebranto al presupuesto, pues para ello en el de gastos se consignó el crédito suficiente al entretenimiento de ésta. Cuando la nivelación no es cierta, cuando los ingresos del presupuesto no bastan á cubrir los gastos, la Deuda flotante no puede extinguirse con los recursos de aquél; y si la desnivelación continúa, si los déficits en vez de minorarse crecen, crece también la Deuda flotante, se arrastra la de uno á otro año, se suman las dos, las tres ó las cuatro, exigiendo cada día mayor gasto el entretenimiento; porque, agravando la

situación del Tesoro, necesita éste capitales y no los tiene sino á costa de grandes sacrificios, hasta que se salda, ó por una consolidación, emitiendo Deuda del Estado, que echa una carga perpetua sobre los presupuestos venideros; ó por una operación del Tesoro á largo plazo, que impone un gasto al presupuesto por intereses y amortización durante ese mismo plazo; ó exigiendo, por último, al país contribuyente ó á los bienes del Estado lo bastante para saldarla; siendo más frecuentes los dos primeros medios que el último.

Si al realizar cualquiera de las operaciones llevadas á cabo para saldar el Tesoro se hubiera hecho su liquidación sin contar con activos ilusorios y en términos que fuera exacto el saldo deudor; si se hubiera hecho la operación con la amplitud necesaria para conseguir por completo el fin apetecido, y si á la vez se hubieran limitado los gastos y arbitrado recursos para llegar á una nivelación verdad, tiempo hace que la Deuda flotante estaría contenida dentro de los límites debidos que antes expuse. Explicase fácil y satisfactoriamente que en las azarosas épocas que atravesó el Tesoro desde 1869 al 74, y también hasta 1876, en que los inmensos gastos que ocasionaron las guerras y las dificultades para realizar los ingresos producían considerables déficits, la Deuda flotante tuviese proporciones alarmantes; pero no tiene tan fácil y satisfactoria explicación desde Julio de 1876, en que se arbitraron medios para saldarla y se proyectó un presupuesto con un sobrante de más de 19 millones de pesetas, para cuya realización se contaba con la paz felizmente conquistada, con la estabilidad de las instituciones, con la fuerza que el Gobierno tenía, condiciones todas que nos daban crédito para la operación del Tesoro y prestigio á la autoridad para que los ingresos se realizaran. Si aquella operación se hubiese practi-

cado buscando el verdadero saldo deudor; si no se hubiera contado con un activo realizable dentro del año de 1876-77, en gran parte ilusorio, y si el presupuesto se hubiera formado calculando los ingresos convenientemente, se hubiera visto que era preciso agrandar la operación para que el Tesoro quedase saldado y arbitrar más recursos á fin de que el presupuesto resultase nivelado en su realización.

Sólo así se concibe que hecha la negociación de las obligaciones Banco y Tesoro por 580 millones nominales, que produjeron 490 efectivos en los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre de 1876, al terminar el de Diciembre inmediato tuviéramos 127 millones de Deuda flotante, y en fin de Julio siguiente 143 millones. Dadas las suposiciones anteriormente hechas, era natural que tal sucediese.

Cuando se realizaba la operación, ó lo que es lo mismo, en 1.º de Setiembre, importaba solamente la Deuda flotante 557 millones de pesetas, y por lo tanto, mal podía saldarse, no digo el Tesoro, sino ni aun dicha Deuda, cuando no se obtenían sino 490 millones de pesetas, quedando un descubierto de 67 millones. Y como se había contado con la realización de un activo ilusorio, y como se partía de obtener un sobrante en el presupuesto y ofrecía un déficit de relativa importancia, la insuficiencia de la operación, la no realización del activo del Tesoro y el déficit del presupuesto eran los elementos que constituían los 143 millones de Deuda flotante que teníamos al expirar Julio de 1877.

Parecía natural que en vista de la enseñanza que estos hechos proporcionaban serían utilizados por los gestores de la Hacienda, y que para el año siguiente, aprovechándose de la mejora del crédito, y dando el impulso debido y posible ya á la administración y re-

caudación (aunque en este punto declaro que se adelantó, y no poco), se hubiese liquidado mejor el Tesoro y se hubieran calculado con más exactitud los presupuestos; pero no sucedió así, sino todo lo contrario.

En efecto, partiéndose de que en 28 de Febrero de 1877 había 121 millones de pesetas de Deuda flotante, comparando el pasivo con el activo realizable, se liquidaba el Tesoro en los términos siguientes (Memoria de presupuestos):

Pasivo á pagar.	Plas.	381.144.681,63
Activo á realizar.	»	247.462.578,64
Saldo á cubrir.	»	<u>133.682.102,99</u>

y á la vez el presupuesto se calculaba nivelado ó con un *superavit* insignificante. De aquí que se pensara en saldar el Tesoro con la operación de obligaciones sobre la renta de Aduanas por 160 millones nominales de pesetas, que llegaron á producir 139 millones.

Si los cálculos hubieran sido exactos, hubiérase saldado efectivamente el Tesoro; pero, ¿cómo habia de conseguirse este fin, si solamente de Deuda flotante existían en 1.º de Febrero de 1878 210 millones de pesetas? ¿Cómo se habia de saldar ésta con la operación, si no producía más que 139 millones? Así fué que, al terminarse la negociación, ó sea en fin de Abril de 1878, teníamos una Deuda flotante de 127 millones, es decir, consumido el producto de la nueva operación, y seis millones de pesetas más de Deuda flotante que en la fecha que se tomó como punto de partida para liquidar el Tesoro, que, como antes he dicho, se fijaba en 121 millones. Y esto era lógico, porque las mismas causas producen idénticos efectos.

Dos hechos repetidos, y en tan corto espacio de

tiempo, parecía natural que no dejaran lugar ni á la duda de que el sistema de las operaciones insuficientes y los cálculos inexactos en los presupuestos no conducían á saldar el Tesoro. Sin embargo, se incidió en él, al realizarse en los meses de Abril y siguientes de 1879 la operación de los Bonos del Tesoro, ofreciendo esta negociación un resultado digno de llamar la atención. Llevábase á cabo por 250 millones de pesetas; produjo efectivos 205 millones: pues bien, en 1.º de Abril de 1879, cuando comenzó la operación, no había de Deuda flotante sino 170 millones, y dicho se está que habiendo producido 205, debió saldarse, si no el Tesoro, al menos la Deuda flotante, y ofreciendo aun el remanente de 35 millones. Pues sin embargo, en fin de Julio existían 38 millones de Deuda flotante, es decir, 73 de diferencia; de manera, que ni se tuvo en cuenta el pago del cupón, que importaba menos de esa cantidad, y eso que en fin de Julio restaba no poco que pagar.

¿Á qué se debía esto? Á las mismas causas: á que se calculó mal el activo del Tesoro, á que el déficit del presupuesto iba en progresión ascendente, no obstante la paz, sin embargo de la mejora del crédito y á pesar de la tranquilidad de que se disfrutaba, que ofrecía medios de nivelar el presupuesto y saldar el Tesoro para que nuestra Hacienda entrase en la normalidad apetecida.

¿Y cuál ha sido en resumen el resultado de este sistema? Ya lo dije en el Senado y lo repetiré aquí con una demostración aritmética:

En 1.º de Enero de 1876 importaba la Deuda
flotante del Tesoro. Ptas. 510.000.000

Se obtuvieron como recursos extraordinarios:

De las obligaciones Banco y			
Tesoro.	490.000.000		
De las de Aduanas.	139.000.000		
De los Bonos.	205.000.000	»	834.000.000
Resultó un sobrante de recursos de. . . .		»	<u>324.000.000</u>
Sin embargo, en 7 de Febrero de 1881, es decir, á los 19 meses de la última opera- cion del Tesoro, debía este sólo por Deuda flotante.			
		»	194.000.000
Que con el sobrante arriba dicho. . . , .		»	324.000.000
Hacen en junto una diferencia de. . . .		»	<u>518.000.000</u>

debida indudablemente á las causas anteriormente expuestas, á no hacer bien las liquidaciones del Tesoro, y sobre todo, á los déficits de los presupuestos.

Esta era la situación que venían teniendo la Deuda flotante y el presupuesto al hacerme cargo de la cartera de Hacienda. Y en verdad que yo, que siempre combatí aquella situación, que constantemente me lamenté de estos males, había de aprovechar los recientes hechos de nuestra historia financiera y había de tratar de remediarlos, procurando, es más, asegurando la nivelación del presupuesto, el saldo del Tesoro, contener la Deuda en los límites debidos, y aun aspirar á hacerla innecesaria, caso de ser esto posible, que lo ha sido, como los hechos han venido á demostrar.

Mas en los primeros momentos nada podía hacer, porque necesitaba contar con el Poder legislativo; pero ya que no me era dable aplicar desde luego el remedio que me proponía utilizar, tuve cuidadoso esmero en contener la Deuda flotante para que no se elevara, en disminuirla á ser posible, mientras llegaba el momento de proponer y obtener de las Cortes los medios necesarios para saldar el Tesoro y nivelar el presupuesto.

No era en verdad fácil la tarea, pero no por eso ha-

bía de dejar de emprenderla con la fe y la energía necesarias.

Me encontraba con un presupuesto en déficit de tal consideración, que la liquidación vino á demostrar que se elevó á 116 millones de pesetas. Mi digno predecesor tenía contratado con el Banco de España, para el pago del cupón de Enero, un anticipo de 66 millones de pesetas: de esta cantidad había dispuesto ya el 7 de Febrero de 60 millones, de modo que no tenía más crédito disponible del anticipo que seis millones de pesetas: en cambio, tenía que pagar por intereses más de 12 millones, por amortizaciones más de 10; en junto, más de 22 millones. Mi primer cuidado fué no llegar á disponer ni aun de los seis millones, resto del crédito abierto; y en efecto, no los utilicé, é inmediatamente di todo el impulso necesario á la administración y á la recaudación para que, liquidando más y recaudando mucho y conteniendo prudentemente los gastos, cobrara más que pagase; y así, á pesar de las circunstancias en que me encontraba, podría realizar mis deseos.

Si lo conseguí ó no, los hechos lo han demostrado; y lo cierto es que para el cupón de Julio de 1881 ya no pedí anticipados sino 60 millones, y de éstos no hice uso de 12. Y para abreviar, resumiré los resultados de los once meses hasta 31 de Diciembre de 1881, y reproduciré lo que ante el Senado expuse:

Se pagaron por intereses de la Deuda, cupón de		
1.º de Enero de 1881, y por amortizaciones.	<i>Ptas.</i>	22.000.000
Por el cupón de 1.º de Julio.	»	55.000.000
Por amortizaciones en ese semestre.	»	16.000.000
<i>Total.</i>	»	93.000.000
Se hizo un anticipo á Ultramar de.	»	15.000.000
que, á no haberse obtenido de la recaudación, se hubiera conseguido por medio de la Deuda flotante.		
En junto hacen.	»	<u>108.000.000</u>

Y sin embargo de estar pagadas con regularidad todas las obligaciones vencidas, en fin de Diciembre importaba la Deuda flotante 186 millones, es decir, ocho menos que el 8 de Febrero.

En 24 de Octubre sometí á la deliberación de las Cortes mis proyectos de Hacienda, y fácilmente pudo comprenderse que los cuatro fines principales que me propuse fueron : nivelar el presupuesto, saldar el Tesoro, establecer los impuestos y las rentas sobre bases sólidas y de justicia para llegar por medio de compensaciones mutuas á la conversión de la Deuda. No me toca ahora sino hablar del segundo, y por incidencia necesaria del primero, y debo empezar por repetir que no hubiera creído cumplir mi deber si al tratar del arreglo de la Deuda del Tesoro hubiera incurrido en los mismos errores de años anteriores, que constantemente había censurado, siquiera en los términos que la prudencia aconseja. Por lo tanto, tenía necesidad imprescindible de hacer con todo cuidado la liquidación del Tesoro; ampliar la operación para evitar cualquiera insuficiencia, y nivelar el presupuesto, para que, saldado real y positivamente el Tesoro, libre de los vencimientos á corto plazo, la Deuda flotante jamás pasara los límites de lo preciso, como al principio he indicado, y á ser posible, que no fuera necesaria.

De aquí el arreglo de las amortizables, que produjo lo bastante para convertir las deudas del Tesoro en ella comprendidas, saldar la Deuda flotante existente en 31 de Diciembre y el aumento que hubiera tenido por el pago del cupón de Enero de 1882 y demás débitos de la Tesorería, y aun ofreció un remanente, que está disponible, devengando el 4,71 por 100 de interés.

No falta quien censure que se la diese tal amplitud;

pero ¿qué se quiere? ¿Que la hubiese hecho deficiente para que la Deuda flotante hubiera continuado? Porque no hay que dudarlo: si el Tesoro no hubiese sido saldado, aunque el presupuesto se nivelara, hubiera producido para sus gastos, pero no para solventar débitos atrasados. ¿Es que se dice que al liquidar no se consideró realizable todo el activo que después se hizo efectivo? ¿Es que se dice que se calculó mal el déficit probable del presupuesto de 1880-81 en ampliación al hacerse la liquidación y el del primer semestre de 1881-82, que se dividía para cortar el déficit? Pues preferible es haber contraído un poco más de deuda pagadera en cuarenta años, que dejar subsistente la flotante, que siempre ahoga y que por fin habría que saldar por uno de los tres medios indicados al principio. Además, que si hubo algún error en el cálculo del déficit, desfavorable en el presupuesto de 1880-81, favorable en el primer semestre de 1881-82, nada tiene de particular que tal sucediera, porque las enseñanzas de lo pasado me hacían no calcular con optimismo en aquel instante. Se supuso que el déficit de 1880-81 se elevaría á 106 millones, y aún no estuve exacto, pues llegó á 116. Natural y lógico era calcular en la mitad de los 106 el que ofreciera el primer semestre de 1881-82, que después se ha visto pudo calcularse en la mitad de 116 millones, porque, teniendo iguales previsiones legislativas que el anterior, aun cuando fuera grande el impulso que se diera á la liquidación y recaudación de los ingresos, la prudencia exigía proceder en términos que evitasen los errores en el cálculo. Cierto es que en su realización ha ofrecido menos déficit ese semestre que el calculado, gracias al celo de la Administración en liquidar y recaudar y al mejoramiento de las rentas; verdad es que en vez de 50 millones

produjo 30; pero esto se ha sabido en fin de Julio de 1882, y no era fácil preverlo, y en la duda, preferible era, como he dicho, hacer la operación con holgura, á dejar una deuda flotante, que hubiera sido base de otra mayor.

Gracias, pues, á esa operación, desde 1.º de Enero de 1882 la Deuda flotante quedó completamente extinguida, y una vez saldado el Tesoro, pagado el cupón de Enero sin acudir al medio que siempre se empleaba, nivelado el presupuesto en términos que sus ingresos bastan á los gastos y aun hay *superavit*, y no habiéndose engreído la Administración con el éxito, se ha conseguido más. Si me hubiera limitado á saldar el Tesoro y nivelar el presupuesto, en el primer semestre hubiera existido alguna Deuda flotante, puesto que los vencimientos de pagos tuvieron lugar antes que los de ingresos, y más por el ligero retraso con que éstos se realizaron por efecto de las reformas; pero como al calificar el activo huyendo de los procedimientos anteriores se calculó menos aún de lo realizable, porque no se creía que se realizase más; como no por ver al Tesoro libre de la Deuda flotante la administración ni la recaudación cesaron en su esfuerzo, antes bien lo redoblaron, el Tesoro fué realizando y ahorrando el remanente de ingresos, en términos que al finalizar Junio de 1882 tenía en arcas cincuenta y tantos millones con que atender al pago del cupón de Julio sin pedir nada prestado, y al finalizar Diciembre tenía el Banco reservados 72 millones de las contribuciones para el pago de la Deuda perpetua y trimestre de la amortizable, y aun había una existencia en Caja del producto de los demás ingresos y remanente de la operación de las amortizables que se elevaba á 90 millones de pesetas. Es decir, que el nuevo sistema no sólo dió por resultado que la Deuda

flotante se contuviera en sus justos límites, para quedar liquidada dentro del ejercicio, sino que la hizo innecesaria después.

Estimando, como estimo, satisfactorios los resultados obtenidos en esta parte de mi gestión administrativa, llevo con resignación las censuras que se me han dirigido por considerar excesivos los cálculos que sirvieron de base para la operación de las amortizables, pues nadie podrá negar que la Deuda flotante no existe desde 1.º de Enero de 1882; que ha quedado un remanente de 90 millones de pesetas después de pagadas las obligaciones; y economizados casi los cinco millones presupuestos para el entretenimiento de esa Deuda, cuya suma se limitará á satisfacer lo que exija la situación de fondos en el extranjero, de escasa importancia ciertamente, pero que es de desear que en día no lejano otras medidas económicas adoptadas produzcan resultados que favorezcan los cambios con el exterior, y en vez de quebrantos experimentemos beneficios en aquellas operaciones.

PRESUPUESTOS.

I.

Como el presente trabajo es sólo el comentario de una administración económica y financiera tan rudamente combatida y que atiende en él á su natural y legítima defensa por medio de explicaciones y datos que estima conducentes al fin que se propone, estaría fuera de lugar el hacer aquí la exposición de esas teorías generales sobre los presupuestos contenidas en los libros que andan en manos de los aficionados á estas materias, de lo que, por otra parte, algo he dicho ya en el preámbulo que da comienzo á esta Memoria. He de limitarme, pues, á las consideraciones que sean suficientes á explicar mis puntos de vista en la preparación de un presupuesto acomodado á las necesidades de la Hacienda y á los compromisos y la honra de la Nación, según mi leal saber y entender.

La obra no era liviana, porque aun cuando las leyes de Presupuestos tienen un carácter anual, son, sin embargo, de las más comprensivas é importantes, pues no sólo dan lugar á la discusión de todos los asuntos económicos y administrativos, sino que tras-

cienden á la generalidad de los servicios públicos y proporcionan á las Cortes la ocasión de examinar el empleo que haya de darse á la fortuna pública. Por esto los Gobiernos dan á la preparación de estas leyes verdadera y legítima importancia, los Cuerpos colegisladores les consagran un atento estudio, y el País las aguarda siempre con natural interés, esperando lograr por ellas el menor gravamen posible en los tributos y la mayor reducción en los gastos; si bien estas respectivas aspiraciones, aunque sinceramente originadas en un deseo común, suelen presentarse discordantes en la práctica, ya porque los Gobiernos poseen los verdaderos datos, no de todos conocidos, de las necesidades imprescindibles á que deben atender en sus proyectos, ya porque los mismos representantes de la Nación se encuentran rodeados de compromisos y exigencias de localidad, naturales y legítimos si se quiere, pero que de continuo llevan á los Presupuestos presentados aumentos que contribuyen á alterar el resultado de los cálculos y previsiones de los Gobiernos.

La experiencia más ó menos aprovechada de mis administraciones anteriores y el atento estudio que como Diputado primero y Senador después había yo hecho de los presupuestos siguientes al de 1874, me habían proporcionado preparación bastante para haber podido acometer desde luego la tarea de confeccionar un presupuesto en la primera mitad del año de 1881; pero debo declarar con franqueza que tenía el convencimiento de lo infructuoso del propósito.

Á no mediar la pasión de partido, habrá de reconocerse que el Ministerio de 8 de Febrero se veía en la imprescindible necesidad de disolver las Cortes á la sazón existentes, por razones de todos sabidas, y aunque lo hubiera verificado, transcurrido sólo el

término que á todo nuevo Gobierno se concede para el examen y conocimiento de la situación, las nuevas Cámaras no hubieran podido reunirse hasta los primeros días de Junio, quedando así menos de un mes para discutir el proyecto de Deudas amortizables, las especiales de los tributos y el presupuesto general, tiempo insuficiente hasta para que la Comisión diera dictamen.

Y esa insuficiencia hubiera existido igualmente para cualquier presupuesto, aunque no envolviese reformas trascendentales, dando sólo por resultado su presentación el que continuara para el siguiente año el que estaba en ejercicio.

Pero las cosas siguieron otro curso por la fuerza misma de las circunstancias, y las elecciones generales y la reunión de las Cortes quedaron aplazadas en virtud de una leal interpretación de la Constitución, harto debatida ya, y cuya discusión aquí sería por lo mismo innecesaria y trasnochada. Esto me proporcionó, lo confieso, un período más amplio para la preparación seria y provechosa de los trabajos que en su día había de someter á las Cortes, y también para atender con eficacia á la administración y recaudación de las rentas y contribuciones, empresa á que me consagré con decidido empeño desde los primeros momentos.

Además, la situación del presupuesto en sí ofrecía á mis ojos gravedad, y para reconocerla bastaba sólo observar los déficits de los anteriores y el considerable que se calculaba para aquel que iba corriendo, déficit que yo, con sincero intento y probado afán, quise en lo posible reducir con mi gestión en los meses que restaban del ejercicio.

La importancia de esos déficits era la siguiente:

El presupuesto correspondiente al año económico de 1876-77 ofreció uno de..	<i>Plas.</i>	12.706.673,59
El de 1877-78 otro de.	»	59.877.328 »
El de 1878-79 íd.	»	73.482.356,34
El de 1879-80 íd.	»	91.810.604,79
Y el de 1880-81 se calculaba que presentaría uno de.	»	106.373.580 »

Para combatir este mal, que ya sean unas ú otras las explicaciones que sobre él se puedan dar, lo era de trascendentales consecuencias, y cumplir por mi parte el compromiso moral que ante la opinión tenía contraído, censurando desde la oposición los procedimientos que se habian seguido y eran la causa de aquél, se necesitaba un plan complejo, que los medios que se empleasen se refiriesen á ramos y elementos muy variados de nuestro organismo económico y financiero, y que la acción administrativa cobrase mayor vigor y fuera convenientemente utilizada.

Por esto presenté á las Cortes, con los proyectos de ley de Presupuestos, otros cuyo número se ha censurado suponiéndolos hijos de una presunción injustificada de hacer mucho y de hacerlo en corto tiempo; pero el cargo á poco que se considere resulta improcedente, porque la obra tenía un carácter simultáneo y comprensivo y porque en los presupuestos anteriores se resolvían por artículos de la ley que los Gobiernos presentaban ó por otros de la iniciativa parlamentaria, y á título de reglas, notas y autorizaciones, multitud de medidas importantísimas que eran aprobadas sin toda la detención que llevan consigo los proyectos especiales. Y yo quise desde el primer momento separarme y apartar á las Cortes de ese funesto sistema, para que se estudiasen en lo sucesivo independientemente y se discutiesen los proyectos con la mayor amplitud posible.

La conversión de las Deudas amortizables era base

esencial de la formación del presupuesto que sometí á las Cortes, y exigía por sí sola un proyecto de ley, como exigirá en este trabajo capítulo aparte; y si se examina desapasionadamente la naturaleza de los demás que tuve la honra de presentar, se verá que sólo alguno pudiera no ser por el momento absolutamente preciso para el desenvolvimiento de mis planes.

He dicho que consideraba como base esencial del presupuesto que me proponía formar, la ley de conversión de las Deudas amortizables, porque ella proporcionaba gran parte de los medios necesarios para conseguir que aquél quedase nivelado, toda vez que los gastos que dichas Deudas venían exigiendo se disminuían en una suma de cuantía.

Con efecto, la reducción que se alcanzaba por medio de la operación proyectada ascendía á. *Ptas.* 101.480.097 »

Pero el déficit del presupuesto, según el cálculo hecho á la sazón, se elevaba á. 106.373.580,22

Debiéndose tener en cuenta además que el aumento de un cuartillo por ciento que experimentaban los intereses de la Deuda pública en el año de 1882 exigían.. . . . 22.988.349,50 » 129.361.929,72

Resultando, por lo tanto, que todavía faltaban para conseguir la nivelación del presupuesto que se formara. » 27.881.832,72

Y eso contando con que se obtuviese la economía de las pesetas 101.408.097 por presentarse á la conversión todas las Deudas que á ella se llamaban, pues sabido es que era potestativo en los tenedores de la amortizable de 2 por 100 exterior el aceptarla ó no,

y una parte no hizo uso del derecho que se le concedía; con que las Cortes no introdujeran modificación, como introdujeron, en lo relativo á las acciones de Carreteras, Obras públicas y Deuda del personal; con que el déficit del presupuesto de 1880-81 no resultase, como resultó en su liquidación, mayor que lo calculado, y sin tener en cuenta, por último, el aumento que los gastos experimentasen por la iniciativa del Gobierno ó de las Cortes.

No cabe, pues, duda en que había que buscar por medio de la tributación, no sólo los 27.881.832,72 pesetas, sino también lo que las necesidades últimamente expuestas demandasen, si había de formarse un presupuesto verdaderamente nivelado.

Por otra parte, el presupuesto para el ejercicio de 1880-81, que regía á mi entrada en el Ministerio de Hacienda, fué prorogado, por las razones antes expuestas, en virtud de Real decreto de 28 de Junio de 1881 y mientras otra cosa no se dispusiera por la ley. En rigor, una vez prorogado, debía continuar todo el ejercicio de 1881-82; pero en presencia del considerable déficit que ofrecía, mi deber era procurar que durase el menor tiempo posible, y resolví, por lo tanto, de acuerdo con el Consejo de Ministros, desde el primer momento en que la necesidad de la próroga fué reconocida, proponer á las Cortes quedase limitada á sólo seis meses, es decir, hasta 31 de Diciembre de 1881.

Pero de esta determinación nacía otra dificultad: el presupuesto que se formase, ¿debería constituir un ejercicio por el año natural de 1882, alterándose de esta manera el orden establecido, por fundados motivos, de que los años económicos empiecen en 1.º de Julio, terminando en 30 de Junio del siguiente?

No me pareció lo procedente, siendo luego las Cor-

tes de la misma opinión, y en su consecuencia me decidí á proponer que el año económico de 1881-82 se dividiese en dos ejercicios, el uno de 1.º de Julio á 31 de Diciembre de 1881, el otro de 1.º de Enero á 30 de Junio de 1882.

Por este medio, la reforma administrativa y en la tributación podía tener cumplidamente lugar desde el principio del segundo de dichos ejercicios semestrales, y conseguirse, bajo el punto de vista de mis planes, que los 106 millones de pesetas en que en aquella fecha se calculaba el déficit, quedase reducido á la mitad en el primero y desapareciese en el segundo.

Pero ¿había de limitarme á formar el presupuesto para el ejercicio semestral de 1.º de Enero á 30 de Junio de 1882 y aplazar la presentación por dos ó tres meses del correspondiente al ejercicio de 1882-83, es decir, que comenzase la discusión de éste cuando terminara la de aquél, pues esto era lógico que sucediese? Consideré poco serio, y además ocasionado á muchas dificultades, semejante procedimiento, cuando se trataba de plantear una reforma trascendental.

En rigor, los dos presupuestos, aunque constituyan dos ejercicios, pudiera decirse que eran uno solo, pues en nada se diferenciaban, sino en que en el primero se comprendían la mitad de los gastos y de los ingresos que se presuponían para el segundo.

Pues si la continuación del presupuesto de 1880-81 por todo el ejercicio de 1881-82 perjudicaba al Tesoro en 50 millones de pesetas, según los cálculos que hasta entonces podían hacerse, y había que renunciar á ello; si un presupuesto de año natural tenía los inconvenientes expuestos; si el que se formara para 18 meses ofrecía otros no menores y desde luego hubiera sido objeto de igual oposición á la que tuvo el

pensamiento de los dos presupuestos, al fin realizado, ¿no está plenísimamente justificado que se obró de la manera más acertada?

II.

Se ha supuesto que yo lo sacrificaba todo al pensamiento de obtener el equilibrio de los gastos y los ingresos, y aún cuando éste sea un principio de utilidad y de necesidad incontrovertibles, á cuya realización se encaminan los esfuerzos de cuantos tienen la obligación de formar en cualquier país un presupuesto, no es justo que esta aseveración se exagere y se me haga pasar por un administrador enemigo de la riqueza pública y que no se para en perjudicarla á trueque de obtener productos para el Fisco.

No es cierto; al explicar la índole de las reformas planteadas por mí, su desenvolvimiento y sus resultados, quedará probado este aserto que dejo hecho.

Los pueblos tienen como los individuos obligaciones que satisfacer, y bueno, y aun debido es, en tesis general, que en sus presupuestos de gastos no aumenten sino lo estrictamente necesario para cubrirlas, prescindiendo por completo, si se quiere, de cuanto no tenga este carácter; pero si el importe de lo necesario asciende á más que el de los ingresos de que dispone el país, tendrá éste por necesidad que escogitar los medios de encontrar la suma que sea precisa para atender á aquéllos. ¿Dónde puede encontrarlos? En la tributación, en el crédito ó en los recursos extraordinarios.

En el primer caso habrá que elevar la tributación

al límite de lo posible, y si no fuera bastante, acudir á los otros medios.

El aumento de la tributación, se dirá, no siempre es posible; verdad es ésta que exige algunas explicaciones de mi parte, las cuales aplazo para examinar ahora el asunto bajo los otros dos aspectos que quedan establecidos.

Al acudir al crédito, es de toda necesidad que quepan con la debida holgura dentro de los presupuestos los intereses que el préstamo devengue temporal ó perpetuamente, y además, en el primer caso, el importe de las amortizaciones que se establecieren, si se han de evitar los déficits, pues de otro modo éstos exigirían más pronto ó más tarde aumentos en la tributación ó un nuevo uso del crédito; siendo la reproducción constante de este sistema el medio más seguro de perdición para la Hacienda de un Estado.

Los recursos extraordinarios, prescindiendo del uso del crédito, sólo pueden consistir en la enajenación de propiedades del Estado, y hay que tener muy presente la oportunidad en que se verifique y la especial aplicación á que sus productos estén llamados.

Para dejar concluído este punto, réstame cumplir el compromiso que he contraído de expresar mi opinión sobre el aumento de los tributos, y por lo tanto, del presupuesto de ingresos.

Hay momentos solemnes, que no por dejar de ser comprendidos por muchos son ménos dignos de la consideración de los hombres de gobierno, y en los cuales es necesario que el país haga esfuerzos pecuniarios, superiores á los que venga practicando, para que queden á salvo su dignidad y sus propios intereses en lo porvenir; y si en esos momentos la conveniencia y aun la razón más vulgar impide á los mismos pueblos hacer uso de su crédito y no les es

posible utilizar otros recursos extraordinarios, es evidente que el aumento en la tributación es el único medio que tienen y al que, en mi juicio, deben apelar.

Estas y no otras eran las circunstancias en que nos encontrábamos el año de 1881.

Entonces existía un presupuesto que ofreció de déficit 116.988.899,03 pesetas, con una Deuda flotante cuyo importe se elevaba, cuando me hice cargo del Ministerio, á la suma de 194.828.772.

Y frente á frente de esta situación nacía la necesidad de convertir las Deudas amortizables, llevar á cabo un definitivo arreglo de la Deuda perpetua y formar un presupuesto en condiciones tales que ofreciera la seguridad de que el déficit no se reproduciría.

¿Podía ser esa la ocasión de acudir al crédito ó utilizar los recursos extraordinarios que nos restan y que deben ser aplicados en interés del país al fomento de la riqueza y de las obras públicas, al de la marina y á la defensa de las plazas, costas y fronteras que están lejos de considerarse en un estado satisfactorio?

Evidentemente que todos los hombres imparciales y cuantos no se encuentren ofuscados por la pasión política han de responder conmigo á esa pregunta que he formulado, con una rotunda negativa.

No; ni bajo el punto de vista del interés del Estado para lo futuro, ni del que aconsejaba su conveniencia del momento, era ocasión propicia de acudir á esos medios especiales; y forzoso será reconocer que, ante la urgencia y precisión del caso, procedía el aumento de la tributación; y siendo esto así, habrá que reconocer igualmente que no puede asegurarse en absoluto que deba prescindirse del aumento en la tributación, siquiera se la estime recargada.

¡Bueno hubiera sido que al proponer una conversión de las Deudas amortizables hiciésemos nuevas emisiones de valores! ¡Excelente posición hubiéramos tenido si al negociar con los tenedores de la Deuda pública, especialmente del exterior, nos hubiésemos presentado con presupuestos en déficit!

Ya sé yo que, por desgracia, lo que se refiere á las Deudas del Estado tiene escasa importancia para algunos, y á éstos no me dirijo ciertamente; pero hay otros que creen, sin duda de buena fe, que la situación podía haberse resuelto llevando á cabo la conversión de las amortizables en otros términos, y á éstos procuraré convencerles del error que padecen cuando llegue á ocuparme de este importantísimo particular.

Y sin embargo de lo que lógicamente pudiera deducirse en presencia de las opiniones que acabo de consignar, lo cierto es que no aumenté la tributación en general, sino que, atendida la necesidad que existía de nivelar nuestro presupuesto para presentarse ante el exterior en condiciones de seriedad y decoro, al verificar el proyectado arreglo de nuestra Deuda perpetua y también el de las amortizables me limité á reformar las contribuciones é impuestos á fin de encontrar en ellos un aumento de recaudación, según ya tengo dicho.

En la contribución Territorial, por ejemplo, persiguiendo la ocultación para que los pueblos que de buena fe declarasen la riqueza que poseen obtuviesen las ventajas concedidas por la ley.

En la Industrial y de Comercio, procurando que contribuyesen los comprendidos en ella en proporción á las utilidades que rectamente puede suponerseles, á fin de realizar por lo menos cantidades iguales á las presupuestas por Administraciones anteriores.

En el impuesto de Consumos, buscando que por medio de una equitativa proporcionalidad contribuyesen los pueblos con una suma algún tanto superior á la que antes satisfacían, pero que realmente no les agobiase; pensamiento que rectifiqué más tarde para hacer más viable el impuesto y para evitar en lo posible lo fuerte de la transición que experimentaban localidades anteriormente beneficiadas en perjuicio de otras, resultando que el impuesto, por efecto de la última reforma, ha producido y producirá menos que lo que en realidad hubiese resultado si se aplicaran las disposiciones de mis predecesores.

Además, en otras rentas é impuestos se establecieron reglas nuevas con presencia del conocimiento que de su necesidad tenía la Administración.

III.

Una comparación entre el presupuesto de ingresos correspondiente al año económico de 1880-81 y el presentado por mí para el de 1882-83 confirmará la aseveración que dejo hecha de lo injustas que han sido las apreciaciones que se han formulado sobre mis procedimientos.

Importe del presupuesto de ingresos para 1880-81.	Plas.	762.103.692
Importe del presupuesto de ingresos para 1882-83.	»	<u>760.291.225</u>
Diferencia en baja para el presupuesto de 1882-83.	»	1.812.467
A cuya suma hay que añadir la rebaja que en el impuesto de Consumos hizo la ley de 6 de Julio de 1882, cuyo proyecto fué presentado por mí.	»	<u>11.500.000</u>
Total diferencia en baja entre las cantidades presupuestas, á favor del presupuesto para 1882-83.	»	<u>13.312.467</u>

Otra demostración que justificará por completo mis aserciones.

Las diferencias del presupuesto de 1882-83 comparado con el de 1880-81, entre las contribuciones é impuestos, fueron las siguientes:

VALORES Á CARGO DE LA DIRECCION GENERAL
DE CONTRIBUCIONES.

	En más.	En menos.
Contribución industrial y de comercio.	»	4.400.000
Impuesto de minas.	»	862.500
Portazgos, pontazgos y barcajes. . .	»	4.500.000
Subvenciones de las provincias y pueblos para carreteras.	»	4.386.000
	»	14.148.500
<i>De menos en el presupuesto para 1882-83.</i>	<u>14.148.500</u>	

VALORES Á CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE IMPUESTOS.

	En más.	En menos.
Impuesto sobre tarifas de viajeros y mercancías.	»	300.000
Id. de consumos.	23.200.000	»
Id. sobre la sal ó en su sustitucion.	8.500.000	»
	<u>31.700.000</u>	<u>300.000</u>
<i>Diferencia en más.</i>	<u>31.400.000</u>	

Pero deducida la suma rebajada en el impuesto de Consumos por la ley de 6 de Julio de 1882. 11.500.000

Resultan de más en el presupuesto para 1882-83. 19.900.000

VALORES Á CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS.

	En más.	En menos.
Impuesto de carga..	500.000	»
Id. de descarga.	100.000	»
Id. de viajeros.	»	20.000
Id. sobre los géneros coloniales.	4.000.000	»
Derechos extraordinarios sobre el valor de algunas mercancías, y otros conceptos.	»	8.300.000
	<u>4.600.000</u>	<u>8.320.000</u>
<i>De menos en el presupuesto para 1882-83.</i>	<u>3.720.000</u>	

VALORES Á CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

	En más.	En menos.
Timbre del Estado.	<u>1.238.673</u>	<u>»</u>

RESÚMEN.

	En más.	En menos.
En el presupuesto para 1882-83.		
Por Contribuciones.	»	14.148.500
» Impuestos.	19.900.000	»
» Aduanas.	»	3.720.000
» Rentas.	1.238.673	»
	<u>21.138.673</u>	<u>17.868.500</u>
<i>De más en el presupuesto para 1882-83.. . . .</i>	<u>3.270.173</u>	

Pero acaso se diga que entre los créditos presupuestos y lo que se realice de los valores que comprende la anterior demostración existen diferencias que acrediten el mayor aumento de los tributos.

Voy á examinar también este punto, pero para ello, hallándose, como se encuentra, en ejecución el presupuesto de 1882-83, tengo por necesidad que partir del resultado que ha ofrecido en la recaudación el del

2.º semestre de 1881-82, primero de la reforma, duplicando las cantidades, pues que todos los créditos de éste son la mitad de los de aquél.

	CANTIDAD presupuesta.	CANTIDAD recaudada.
Contribución industrial y de comercio.	33.000.000	39.566.275,38
Impuesto de Minas.	1.600.000	2.033.285,52
Id. sobre las tarifas de viajeros y mercancías. . .	9.700.000	9.298.789,42
Impuesto equivalente á los que existían sobre la sal. . . .	21.000.000	18.787.644,58
Impuesto de carga.	2.700.000	3.401.579,92
Id. de descarga.	3.600.000	4.063.968,60
Id. de viajeros.. . . .	180.000	170.892,34
Id. sobre los géneros co- loniales.	19.000.000	19.304.150,12
Derechos extraordinarios sobre el valor de algunas mer- cancías.. . . .	4.100.000	3.073.206,08
Timbre del Estado.	45.500.000	41.568.564,56
	<u>140.380.000</u>	<u>141.268.356,52</u>
<i>Aumento en la recaudación sobre lo presupuesto. . .</i>		<u>888.356,52</u>

Por manera que excediendo el presupuesto para 1882-83 en los conceptos expresados á lo fijado en el de 1880-81 en. *Plas.* 3.260.173

Y la diferencia que se supone como máximo en la recaudación para el presente ejercicio á. » 888.356,52

El total en que realmente puede estimarse aumentada la tributación en las Contribuciones é Impuestos que más directamente afectan á la riqueza pública es de. . . . » 4.148.529,52

Todavía quiero añadir al resultado de las demostraciones anteriores el importe de las cantidades que por los mismos conceptos de que vengo ocupándome han pasado á la cuenta de *Ejercicios cerrados*, pues pu-

diera decirse que no me he hecho cargo de las partidas liquidadas, sino solamente de las recaudadas, y que aquéllas pueden realizarse en todo ó en parte. Sabido es por experiencia que lo primero no se verifica; pero aun así voy á tomar en cuenta la totalidad de ellas.

Han pasado á la cuenta de *Ejercicios cerrados* en el semestre del 1.º de Enero á 30 de Junio de 1882:

Por contribución industrial y de comercio.	Ptas.	1.869.773,43
» impuesto de minas.	»	1.050.494,24
» equivalente á los de sal.	»	1.766.933,80
	»	<u>4.687.201,47</u>

Y duplicando esta cantidad, que sólo corresponde á un semestre, el primero de la reforma, y se trata en estas demostraciones, como procede, del año.	»	<u>4.687.201,47</u>
--	---	---------------------

Dan un total de partidas liquidadas y no recaudadas que se eleva á.	»	<u>9.374.402,94</u>
---	---	---------------------

De suerte que resultando un aumento en el presupuesto para 1882-83, coparamdo con el de 1880-81, en los tributos que pudieran considerarse que pesaban inmediatamente sobre las fuentes de la riqueza pública, y teniendo en cuenta además la mayor suma recaudada sobre las previstas en aquel, asciende el verdadero aumento, segun queda demostrado, á.	Ptas.	4.148.529,52
--	-------	--------------

A las que agregando para la más completa y exagerada demostración que me he propuesto hacer la suma, duplicada, que ha pasado á <i>Ejercicios cerrados</i>	»	<u>9.374.402,94</u>
--	---	---------------------

Dan un total máximo de liquidación superior á lo presupuesto para 1880-81 por los conceptos de que se trata, que se eleva á.	»	<u>13.522.932,46</u>
--	---	----------------------

No he tomado en cuenta en las demostraciones precedentes sobre mayor recaudación y pase á la cuenta de *Resultas de ejercicios cerrados* lo relativo á Derechos reales y traslaciones de dominio, porque en verdad, la multiplicidad de actos que puedan te-

ner lugar por la reforma acrecerán ciertamente la recaudación, pero no afectan á la riqueza pública, pues no se aumentaron los tipos, y las excepciones que existían y se suprimieron son de escasisima importancia con relación á su producto.

No se me dirá que he economizado cifra alguna para dejar patente, aun con la mayor exageración, como antes he dicho, la suma en que por las reformas que sometí á la deliberación de las Cortes y éstas aprobaron pueden aparecer gravadas las fuentes de la riqueza pública.

He prescindido en los datos que he expuesto para las comparaciones de tomar en cuenta los aumentos que por recaudación tuvieran, sobre las cantidades presupuestas para el ejercicio de 1880-81, algunos de los conceptos de que me he ocupado, lo cual resultaría en desventaja para mí en la demostración que me he propuesto.

Y por último, he tomado la suma total de cantidades liquidadas desde el momento que he aceptado para la comparación cuanto ha pasado á la cuenta de *Resultas*; mas como quiera que en la suma total de ellas ha de haber baja en el ejercicio que examino, porque nunca se realiza, ni con mucho, todo lo liquidado, y por otra parte, en lugar oportuno demostraré la baja de 3.900.000 pesetas que á consecuencia de lo establecido en el reglamento y tarifas definitivos tendrá la contribución Industrial y de Comercio en el ejercicio de 1882-83, es evidente que no puede apreciarse en justicia como aumento á los conceptos que son objeto de estas demostraciones, sino una cantidad que no excederá de 8 millones de pesetas.

Pero téngase en cuenta que en el presupuesto de 1882-83 se rebajaron además en los ingresos las

siguientes partidas de las que constituían tributación en el de 1880-81:

En descuento sobre sueldos y asignaciones.	<i>Plas.</i>	12.000.000
En donativo de Clero y Monjas.	»	4.500.000
En el impuesto sobre los sueldos de empleados municipales y provinciales.	»	600.000
En el de cargas de justicia.	»	152.000
En el de tarifas de viajeros y mercancías.	»	300.000
<i>Total.</i>	»	<u>17.552.000</u>

En resumen: sólo pueden imputarse en el presupuesto de 1882-83 como aumento en la tributación de los conceptos que han sido examinados y son los que realmente se relacionan con las fuentes de la riqueza pública, 8 millones de pesetas; pero al propio tiempo se rebajaron en el mismo pesetas 17.552.000 por impuestos que naturalmente refluyen en favor de aquélla, y que por lo tanto, la misma debe considerarse beneficiada por mis procedimientos en más de 9 millones de pesetas.

No debe ponerse en duda esta afirmación, porque las 17.552.000 pesetas rebajadas en los ingresos por disminución en el impuesto sobre sueldos y asignaciones y donativo del Clero y Monjas, han de beneficiar la propiedad, la industria y el comercio, toda vez que nadie creará que las clases que utilizan la rebaja destinen á formar capitales las sumas que á su favor resultan.

Y, por último, si se estimasen la notable rebaja hecha en el porte de la correspondencia, de la que me ocuparé al tratar del *Timbre del Estado*, las reformas introducidas en el Arancel de Aduanas por efecto del levantamiento de la suspensión de la base 5.^a, del tratado de comercio con Francia y de la ley de relaciones mercantiles con Cuba, Puerto Rico

y Filipinas, que tuve el honor de proponer á las Cortes y que tan directa é importantemente benefician intereses que se ha supuesto yo lastimaba, de seguro que toda persona imparcial ha de reconocer la prudencia y mesura que observé en la redacción de los presupuestos que con tanta pasión han sido discutidos por mis adversarios, y en los que, lejos de perjudicar las fuentes de la riqueza pública, las beneficié grandemente, con relación á lo pasado, adoptando una justa y equitativa proporcionalidad en la distribución de los impuestos.

Verdad es que mis constantes contradictores han combatido la deducción en el presupuesto de los 17.552.000 pesetas mencionadas, partiendo del principio de que yo prescindía de un saneado y fácil recurso, según ellos, dando lugar al aumento en otros tributos. Pero no han querido advertir que, aun prescindiendo de la demostración que dejo hecha, la justicia es la base del impuesto, y que en este punto la justicia se aunaba en estrecho lazo con la moralidad y la conveniencia de la Administración pública.

Expuestos estos datos, dejo al juicio de mis ciudadanos el fallar sobre si fué ó no recto y justo el pensamiento que presidió á la formación del presupuesto de 1882-83 y á la reforma de los tributos.

Me he limitado hasta el presente á hablar de los ingresos comprendidos en el presupuesto, y debo decir respecto á los gastos, particular igualmente importante, que los debidos á mi exclusiva iniciativa, los cuales han sido con predilección censurados, tienen en sí mismos su natural explicación; y también he de demostrar en lugar oportuno la justicia con que fueron propuestos y la utilidad que el servicio ha reportado y reportará de ellos con la aprobación que las Cortes se sirvieron darles. Los demás, que co-

rresponden á la iniciativa de mis dignos compañeros, considero que se encuentran en idéntico caso.

IV.

Proponiéndome dar cuenta exacta en esta Memoria de todos los actos principales de mi gestión, cúmpleme consignar los resultados del presupuesto de 1880-81, que administré cinco meses, del semestral de 1.º de Julio á 31 de Diciembre de 1881, del igualmente semestral de 1.º de Enero á 30 de Junio de 1882, y del cálculo formado por la Intervención general del resultado que ofrecerá el ejercicio corriente.

En cada uno de estos puntos daré todas las explicaciones que mi deber y mi defensa exigen, y seguidamente me ocuparé de lo concerniente á las reformas hechas en las contribuciones, rentas é impuestos.

PRESUPUESTO DE 1880-81.

Este presupuesto fué presentado á las Cortes con un déficit de pesetas 37.007.784.

Por la ley que las mismas votaron resultaba dicho déficit elevado á pesetas 45.000.401.

Á mi entrada en el Ministerio de Hacienda el 8 de Febrero de 1881 iba ya transcurrida más de la mitad del año económico; el aspecto que presentaba el curso del presupuesto y los precedentes estaban muy lejos de tranquilizarme, haciendo todo prever que el déficit que en definitiva resultase de su liquidación excedería con mucho á los anteriores. Puse de mi parte cuanto me era dable y el deber me exigía, á fin de minorarle en cuanto fuera posible, y después en el semestre de ampliación excité constantemente á los

Delegados y Administradores para la realización de las sumas liquidadas. Y esto queda demostrado, así como que mi deseo fué siempre opuesto á exagerar la importancia del déficit, con sólo considerar el cálculo que presenté á las Cortes y que se elevaba á 106 millones de pesetas, cuando el resultado definitivo fué muy superior.

He aquí el resumen de la liquidación :

Ingresos obtenidos.	Ptas.	771.496.294,38
Pagos realizados.	»	888.485.193,41
Déficit.	»	<u>116.988.899,03</u>

Nada más me cumple decir sobre este ejercicio.

PRESUPUESTO DEL 1.^{er} SEMESTRE DE 1881-82.

(1.º de Julio á 31 de Diciembre de 1881.)

El mismo presupuesto de 1880-81 regía por prorroga-
ción en virtud del art. 85 de la Constitución y Real decreto de 28 de Junio de 1881, é interin no se determinara otra cosa por la ley. La de 31 de Diciembre del precitado año de 1881 determinó que se considerase limitado en el primer semestre, Julio á Diciembre de 1881, á la mitad de los créditos del de 1880-81.

Existió, pues, en este semestre el presupuesto formado por la Administración anterior.

Como queda dicho, el presupuesto de 1880-81 ofreció, en su liquidación provisional, un déficit de.	Ptas.	116.988.899,03
Y por consiguiente el del primer semestre de 1881-82 debía dar por resultado un déficit de.	»	58.494.449,51

Y sin embargo, la liquidación provisional presenta las cifras siguientes :

Ingresos obtenidos.	Ptas.	400.352.453,83
Pagos realizados.	»	430.062.069,48
<i>Déficit.</i>	<i>Ptas.</i>	<u>29.709.615,65</u>
El cual comparado con el 50 por 100 del que presentó el presupuesto de 1880-81 da una diferencia de.		
	»	<u>28.784.833,86</u>

que representa el 24,60 por 100 del déficit
de 1880-81.

Esta diferencia se funda :

1.º En haber recaudado más que el 50 por 100 de la recaudación obtenida en 1880-81..	<i>Ptas.</i>	14.604.306,64
2.º En haberse pagado menos que el 50 por 100 de los pagos efectuados en 1880-81..	»	<u>14.180.527,22</u>
<i>En junto las mismas.</i>	»	<u>28.784.833,86</u>

Los datos precedentes prueban el celo desplegado por la Administración, que procuró para dicho presupuesto el mayor aumento posible de ingresos.

Del resultado obtenido, relativamente satisfactorio, han pretendido algunos sacar partido, formando cuentas, en verdad caprichosas, pues dan á entender que si el déficit del primer semestre de 1881-82, incluyendo las *Resultas de ejercicios cerrados*, fué solo de 30 millones de pesetas, corresponderían al año 60 millones, y añaden que las cantidades aplicadas á la amortización de la Deuda importaban entonces sobre 128 millones : todo para deducir que la situación financiera era, por lo tanto, desahogada y existían en el presupuesto recursos más que suficientes para extinguir el déficit.

Sin que yo niegue que la minoración del déficit en el precitado semestre pudiera haberla conseguido cualquiera otro que regentase la Hacienda, es lo cierto que las mismas previsiones contenía el presupuesto de 1880-81, de que aquél era continuación, y cuyo

déficit se elevó á 116 millones. Quizás se diga que de su período natural lo administré cinco meses; pero es evidente que si tuve interés en disminuir por medio de una eficaz gestión el déficit del primer semestre de 1881-82, igual hube de tener para el del ejercicio de 1880-81, aunque ni uno ni otro estuviese formado por mí, pues no entiendo de otro modo el cumplimiento del deber, y á él procuro atender siempre.

Pero por lo que pueda significar la apreciación de que me ocupo, debo decir que los tributos más importantes se liquidan en el primer semestre y que las rentas ofrecen también mejores resultados en la primera mitad del año natural, pasado el cual con exceso en el ejercicio de 1880-81 me encargué de la cartera de Hacienda. Desde que dió principio el semestre de 1881-82 administré su presupuesto y pude atender á lo que antes no me había sido dado.

Después de todo, mi celo en la administración del presupuesto de 1880-81 lo acredita la suma realizada de los valores liquidados, pues la cantidad que pasó á *Resultas de ejercicios cerrados* fué bastante menor que la de los años precedentes, á contar desde el ejercicio de 1875-76 al de que ahora me ocupo, según lo demuestra el siguiente estado :

EJERCICIOS.	CANTIDADES pendientes de cobro á la terminación del ejercicio.
1875-76.	73.100.550,58
1876-77.	36.489.736,75
1877-78.	29.837.448,40
1878-79.	31.601.038,47
1879-80.	34.878.075,71
1880-81.	25.562.673,19

Y en punto á obligaciones pendientes de pago, puedo demostrar también que, á excepción del ejer-

cicio de 1876-77, en ninguno quedaron menos que en el de 1880-81.

EJERCICIOS.	OBLIGACIONES pendientes de pago á la terminación del ejercicio.
1875-76.	37.807.923,06
1876-77.	14.542.466,00
1877-78.	18.010.240,74
1878-79.	19.512.460,73
1879-80.	17.079.767,65
1880-81.	16.901.835,55

Para demostrar, por último, todo el interés de mi gestión respecto á los créditos del presupuesto de 1880-81, debo presentar también el cuadro de los ingresos obtenidos y de los pagos ejecutados por *Resultas* de años anteriores durante los presupuestos de 1875-76 á 1880-81, ambos inclusive.

EJERCICIOS.	INGRESOS obtenidos.	PAGOS ejecutados.	EXCESO en los pagos sobre los ingresos.
1875-76.	44.190.088,50	79.960.829,14	35.770.740,64
1876-77.	49.851.686,65	70.050.478,89	20.198.792,24
1877-78.	59.629.159,83	74.348.767,09	14.719.607,26
1878-79.	31.721.680,69	42.231.600,18	10.509.919,49
1879-80.	27.716.800,78	31.153.153,28	3.436.352,50
1880-81.	27.942.853,81	64.307.665,45	36.364.811,64

Tampoco en este último cuadro la comparación puede acusar la menor tibieza de mi parte; respecto á ingresos, que es donde se conoce la mayor ó menor eficacia de la Administración, y sin embargo de que de uno en otro ejercicio va siendo menor la masa de créditos antiguos á cobrar, obtuve una recaudación algún tanto superior á la del de 1879-80, y por lo que hace á pagos que es obligatorio satisfacer, tuve que hacerlo por pesetas 64.307.665,45, lo cual prueba la suma de débitos de los últimos ejercicios precedentes que vinieron á pesar sobre mí. Y si quiere decirse que

esta suma de descubiertos satisfechos es baja del déficit del presupuesto de 1880-81, puede aplicarla el que así lo creyere al que mejor estime de los anteriores, pues á ellos pertenece, toda vez que ya no hay el recurso de aplicarlas á los de los ejercicios anteriores al de 1876-77, después de las emisiones de las obligaciones de Banco y Tesoro y de Aduanas, y de las públicas demostraciones que se han hecho.

Y en cuanto á la nueva doctrina sustentada en las apreciaciones que he juzgado conveniente recoger, de que no debe considerarse que existe déficit cuando se amortiza mayor cantidad de Deuda que la importancia de aquél, no es en verdad muy correcta, á menos que se crea que las amortizaciones, cuando son permanentes y dispuestas por la ley, no constituyen gasto ordinario.

Pero en todo caso, esa teoría de que aun habiendo déficit no debe considerarse como tal cuando se amortice una cantidad mayor, conduce lógicamente á que los que la profesan se vean obligados á reconocer que cuando el déficit no existe y sí las amortizaciones, el importe de éstas constituye un superavit, y que cuando el superavit resulta de la liquidación de un presupuesto, como próximamente demostraré ha acontecido con el ejercicio del semestre de 1.º de Enero á 30 de Junio de 1882, el importe de las amortizaciones que se hayan verificado es un mayor aumento del superavit, sin el inconveniente del déficit, que obliga primero á mantener una Deuda flotante con abono de intereses, y más tarde á hacer emisiones por bajo de la par, que llevan aparejados el abono de intereses y el de su amortización por el valor nominal.

Paréceme que mis razonamientos son suficientes para disipar las dudas que existieran en el ánimo de

los que aquellas opiniones han formulado respecto á las liquidaciones de los presupuestos de 1880-81 y primer semestre de 1881-82, y de su justificación es- pero que habrán de reconocerlo así.

PRESUPUESTO DEL 2.º SEMESTRE DE 1881-82.

(1.º de Enero á 30 de Junio de 1882.)

Presentado este presupuesto como muestra de que no sólo debían, sino que podían formarse y realizarse sin que resultase déficit alguno, ha sido objeto cons- tante de un examen apasionado y de juicios erróneos que únicamente pueden ser explicados por la preocu- pación incurable de que tan clara muestra dan mis habituales impugnadores al ocuparse de mis actos y procedimientos administrativos.

Examinemos fría y tranquilamente todos los ante- cedentes necesarios para formar debido juicio.

El presupuesto fué presentado á las Cortes con los siguientes resultados, comprendidos en ellos los co- rrespondientes al especial de ventas de bienes des- amortizados.

Suma de Ingresos.	Plas.	392.497.612
Id. de Gastos.	»	392.759.777
<i>Déficit que aparece.</i>	»	<u>262.165</u>

Déficit insignificante, y de todas maneras más apa- rente que real, pues la liquidación había de ofrecer necesariamente un superavit, habida consideración á que nunca se consume el importe de los gastos que se presuponen.

Las Cortes examinaron el presupuesto y por su voto quedaron fijadas las sumas de sus cifras en las siguien- tes cantidades :

Suma de Ingresos.	Ptas. 391.497.612 »
Id. de Gastos.	» 396.288.976,50
<i>Déficit que resultaba.</i>	<u>» 4.791.364,50</u>

Pero estas previsiones de la ley de 31 de Diciembre de 1881 no podían considerarse definitivas, porque tanto los ingresos como los gastos probables estimados entonces se hallaban sujetos á las modificaciones que necesariamente habían de producir á la liquidación del presupuesto las disposiciones emanadas de la misma ley y las alteraciones que por medidas gubernativas ó leyes posteriores pudieran introducirse. El resultado de unas y otras afectó á los primitivos créditos en la proporción y forma siguientes:

GASTOS.

Se fijaron como queda dicho en. . . . Ptas. 396.288.966,50

AUMENTOS.

El del crédito necesario para satisfacer los intereses y amortización de los títulos de Deuda amortizable al 2 por 100 exterior, de acciones de Carreteras, de Obras públicas y de Deuda del personal cuyos tenedores no aceptaron la conversión. . . .	1.709.722 »
Por el importe de las cargas de justicia convertidas.	1.407,38
Por el exceso que representan las obligaciones reconocidas y liquidadas por clases pasivas sobre el crédito presupuesto. . . .	1.851.038,22
<i>Suma y sigue. . . .</i>	<u>3.562.167,60</u>
	396.288.966,50

<i>Suma anterior.</i>	3.562.167,60	396.288.966,50
<i>Créditos extraordinarios y suplementos de crédito concedidos por disposiciones especiales, á saber:</i>		
Al Ministerio de		
Gracia y Justicia.	65.000 »	
Id. de la Guerra..	625.000 »	
Id. de Gobernación.	1.255.769,09	
Id. de Fomento..	70.000 »	2.015.769,09
Por el exceso que representan los pagos ejecutados por diferencias de cambio y quebrantos en el extranjero.		1.415.826,91
Por el producto de las ventas de bienes desamortizados posteriores á 1876, premios de ventas y demás conceptos del presupuesto especial que figuran sin crédito determinado en el presupuesto.	914.125,13	7.907.888,73
<i>Suman, pues, los gastos autorizados.</i>	<i>Ptas.</i>	<u>404.196.865,23</u>

INGRESOS.

Se calcularon por la ley de presupuestos,
segun queda dicho, en. *Ptas.* 391.497.612 »

AUMENTOS.

Los valores reconocidos y liquidados por el suprimido impuesto de portazgos, pontazgos y barcajes, procedentes de los contratos celebrados antes de la supresión y no rescindidos posteriormente.	390.412,65	
Lo ingresado bajo el concepto <i>Derechos de Aduanas por material de obras públicas.</i>	53.687,33	
<i>Suma y sigue.</i>	444.099,98	391.497.612 »

<i>Suma anterior.</i>	444.099,98	391.497.612 »
Lo reconocido y liquidado como subvención que deben satisfacer las Diputaciones de Avila, Guadalajara, Madrid, Segovia y Toledo y el Ayuntamiento de esta corte para obras de la cárcel modelo.. . . .	849.269,09	
El importe de las fianzas de procesados adjudicadas al Estado, en atención á que, no detallándose partida por este concepto en el presupuesto, se han fijado los ingresos como recursos eventuales á cargo de la Dirección de Propiedades.	5.580,13	
El importe de los plazos al contado y vencimientos del primer semestre de 1882 por ventas y redenciones á metálico desde 1.º de Julio de 1876.. . . .	1.244.693,14	
El producto de ventas de cuarteles y terrenos cedidos por el ramo de Guerra, enajenación de edificios públicos y conceptos extraordinarios.	531.915,95	3.075.558,29
<i>Suma, por tanto, los ingresos que deben estimarse presupuestos.</i>	<i>Plas.</i>	394.573.170,29
Mas como quiera que la ley de 6 de Julio de 1882 autorizó una baja para este semestre en el impuesto de Consumos, cuyo importe determinaba el preámbulo del proyecto de ley presentado á las Córtes en 20 de Marzo del mismo año y ascendía á.	»	5.750.000 »
Es evidente que los ingresos que deben estimarse presupuestos son.	»	388.823.170,29

Como consecuencia de las modificaciones que sufrieron las previsiones primitivas de la ley, el déficit, que se estimó entonces en pesetas 4.791.364,50, tuvo

el aumento que se desprende de la siguiente comparación :

Gastos autorizados.	Ptas.	404.196.865,23
Ingresos calculados.	»	<u>388.823.170,29</u>
<i>Verdadero déficit legal del presupuesto.</i>	»	15.373.694,94

Y si á este resultado se añade que deben considerarse minorados los ingresos por las partidas siguientes :

- 1.^a Por haberse padecido el error de fijar para el 2.^o semestre por la renta de Loterías la mitad de la recaudación anual, siendo así que en el mes de Diciembre de 1881 se obtuvo el 230,95 por 100 de la dozava parte del crédito anual. Representando esta dozava parte Ptas. 9.608.334 y ascendiendo los ingresos del expresado Diciembre á 22.191,59 resulta un exceso de 12.582.825, correspondiendo á un mes 1.048.568,75 ó lo que es lo mismo, un quebranto para el 2.^o semestre con relación al primero de. . . . 6.291.412
 - 2.^a En las cédulas personales se fijó también como crédito para el semestre la mitad de los ingresos calculados para el año ; y como es sabido que la recaudación tiene lugar en su mayor parte en el primer semestre, hay necesidad de rebajar, cuando menos. 3.200.000 9.491.412 »
- El verdadero déficit que entrañaba el presupuesto para 1882-83 era de. . . . Ptas. 24.865.106,94

En su consecuencia, el presupuesto ofrecía en realidad el siguiente resultado :

Gastos autorizados.	Ptas. 404.196.865,23
Ingresos calculados.. . . .	394.573.170,29
Baja por los conceptos y razones expresados.	15.241.412 »
<i>Diferencia igual á la anteriormente demostrada.. . . .</i>	
	» 24.865.106,94

No es de extrañar, por tanto, que mis sistemáticos opositores proclamasen desde el primer momento que mi propósito de llegar á liquidar un presupuesto sin que ofreciera déficit había fracasado por completo. Verdad es que ellos sabían, como conocedores que son de estas materias, pero desgraciadamente lo habían olvidado, que el resultado que dejo bosquejado no era suficiente para asegurar lo que afirmaban, pues no pueden ignorar que si los ingresos todos no se realizan en el período del ejercicio, mucho menos hay que satisfacer todos los gastos, una parte de los cuales, y en realidad importante, queda anulada siempre por no haber respondido la necesidad á la previsión que de ellos se hizo.

Pero es lo cierto que aun contra la voluntad de los que aquello afirmaban, la opinión podía fácilmente extraviarse en daño del Ministro con tales declaraciones, y muy natural también, teniendo en cuenta la flaqueza humana, que los que en tal situación se colocaban considerasen comprometido su amor propio y procurasen los medios de demostrar antes y después que sus vaticinios se realizaban.

Comenzó el ejercicio, y la recaudación, como era natural, caminaba con el consiguiente retraso á toda variación de sistema, á toda implantación de nuevos tributos ó modificación de los que con anterioridad

existían; y á los tres meses, es decir, cuando aun restaban nueve del ejercicio, tres del periodo natural y seis del de ampliación, se decía en uno de los Cuerpos colegisladores por autorizadísimos miembros de él:

(1) «En efecto; en los datos que publica hoy la *Gaceta* me encuentro una noticia que verdaderamente me ha descorazonado. El presupuesto de ingresos que está rigiendo desde 1.º de Enero á fin de Junio importa, según la ley de 31 de Diciembre, 380 millones de pesetas. ¿Qué es lo que se ha recaudado en la mitad de este ejercicio? Pues, según la *Gaceta* de hoy, se han recaudado 152 millones de pesetas. Si se recauda igual cantidad en los otros tres meses, ascenderá la recaudación total á 304 millones de pesetas, y por consiguiente, hasta los 380 presupuestos, habrá una diferencia de 76 millones de pesetas.

»Esta cifra asusta verdaderamente. En seis meses 76 millones de pesetas recaudadas de menos (si es que la recaudación sigue la proporción de lo recaudado hasta ahora) es verdaderamente una noticia que va á sorprender á toda España. Yo bien sé, porque me gusta discutir con toda la buena fe posible, que además de lo que se recaude en los seis meses desde Enero á fin de Junio, podrá recaudarse también alguna cantidad en los seis meses de ampliación por cuenta de este presupuesto de seis meses. *Pero ¿puede el señor Ministro de Hacienda, ni nadie, hacer creer al País que al respecto de lo que se ha recaudado en ese primer trimestre, no sólo se recaudará lo mismo en el segundo, sino 76 millones de pesetas más?*»

(1) Discurso del Sr. Senador D. José García Barzanallana en la sesión del 13 de Mayo de 1882.

(1) «Ya lo habeis oido; la recaudación acusa un déficit tan considerable, que es de 76 millones de pesetas en tres meses, y en un presupuesto de seis meses será de 152 millones. Yo diré que por lo menos (2) 100 millones podrán cobrarse en el presupuesto de ampliación, aunque con gran dificultad; pero siempre encontraremos un déficit de 50 millones en un presupuesto de seis meses, esto es, un déficit de 100 millones durante todo el año. ¿Se puede marchar así? ¿Es esto conveniente para la Hacienda, para el País, para el partido conservador, para el partido fusionista?»

Y más tarde, cuando ya era conocido lo recaudado hasta Octubre, es decir, dentro del semestre de ampliación, consignaba sus opiniones por medio de la prensa otra autorizadísima persona, en la forma siguiente :

(3) «La perspectiva que ya ofrecen los elementos de déficit para 1882-83 y para 1883-84, no tiene nada de halagüeña. Los dos primeros artículos de la ley de presupuestos señalan ya un desnivel de más de ocho millones de pesetas. Las reformas despues introducidas por otra ley en la contribución de Consumos deben hacer bajar los productos de ésta en 11 millones y medio, segun el cálculo presentado á las

(1) Discurso del Sr. Senador, Marqués de Orovio, en la sesión del 13 de Mayo de 1882.

(2) Seguramente quiso decir S. S. «cuando más.»

(3) Artículo publicado por el Sr. D. Fernando Cos-Gayon en el número 36 de la *Revista Hispano-Americana*, correspondiente al 16 de Diciembre de 1882, y titulado: *El déficit de ayer, el de hoy y el de mañana*.— El Sr. Cos-Gayon no se ocupa especialmente del presupuesto de 1.º de Enero á 30 de Junio de 1882, y sí del déficit en 1881-82 y en 1882-83; y como quiera que las cifras del primero son la mitad de las consignadas en el segundo, las apreciaciones que hace de los resultados que ofrecerán deben considerarse, cuando menos, para el precitado semestre en la mitad de lo que estima el déficit.

»Cortes por el Sr. Ministro, debiendo, por tanto, ser
»añadida esa cantidad á la anterior, para determinar
»la porción de déficit que resulta ya de las primeras
»previsiones del legislador. Por créditos extraordinarios y suplementos de crédito no se puede presumir, vistos los ya concedidos en los primeros meses del ejercicio, que sea menor de 10 millones lo que al déficit haya que añadir. Por resultas de ejercicios cerrados no pongamos 34 millones de pesetas, que fué su saldo en 1880-81; pero preciso será temer, por lo menos, 14 millones, término medio anual en el último quinquenio. Las cuatro cantidades indicadas dan un déficit de más de 43 millones para 1882-83.

»Faltaria calcular las nuevas aportaciones que al déficit traerán sus demás ordinarios elementos, especialmente, las diferencias de menos entre los ingresos presupuestos y la recaudación, y las diferencias de más que en los gastos produzcan los pagos por los capítulos señalados con la palabra *Memo-ria* y por ampliaciones de los créditos fijados. Por este último concepto habrá sin duda cantidades no despreciables. En cuanto á las contribuciones, es indudable que alguna, como la de Cédulas personales, difícilmente llegará á la mitad de lo presupuestado. También habría que agregar para el cálculo del déficit la reaparición de gastos que se suponían suprimidos, y que renacen por haber quedado sin convertir una parte de los títulos de la Deuda llamados á conversión. Pero el Sr. Ministro de Hacienda ha mostrado la confianza de que el exceso de recaudación de algunas rentas compensará muchos aumentos de gastos y las bajas en varias contribuciones, contando entre estas últimas los 11 millones y medio de pesetas disminuidos en los Consumos. Por mucho que concedamos á tan grandes esperanzas, resultaría

»que no debemos añadir nuevas cantidades á las ya
»indicadas para el déficit de 1882-83 y de 1883-84;
»pero no se puede llegar hasta considerarlas anuladas
»ni aun disminuídas.

»Entre tanto, son tantos y tan crecidos los aumen-
»tos de gastos que se anuncian como próximos, que
»los de las rentas no los compensarán, ni mucho me-
»nos, y el déficit adquirirá mayores proporciones.»

¿ No evidencia lo que dejo expuesto la firmeza de
las opiniones que sustentaban los autorizados señores
á quienes me refiero? ¿Es posible que dejen de pro-
curar los que de ellas participaban, por medio de há-
biles explicaciones, que queden desvirtuados los resul-
tados que el presupuesto ha ofrecido, de todo punto
contrarios á sus razonamientos y pronósticos?

Pero no debo detenerme más en este punto, y llego
al período de la liquidación del tan combatido presu-
puesto de 1.º de Enero á 30 de Junio de 1882.

El resultado que ha presentado es el siguiente :

Importe de los ingresos realizados.	Plas.	387.133.337,38
» pagos ejecutados.. . . .	»	380.563.540,44
<i>Importa el remanente.</i>	»	<u>6.569.796,94</u>

CUENTA ESPECIAL DE RESULTAS DE EJERCICIOS CERRADOS.

Ingresos realizados.	Plas.	17.743.886,94
Pagos ejecutados.. . . .	»	24.243.286,79
<i>Exceso de los pagos sobre los ingresos,</i> <i>déficit.</i>	»	<u>6.499.399,85</u>

DÉBITOS Y CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO Y PAGO QUE PASAN
Á LA CUENTA ESPECIAL DE RESULTAS.

Débitos pendientes de cobro.. . . .	Plas.	14.925.798,56
Obligaciones pendientes de pago.	»	10.197.904,72
<i>Exceso en los débitos pendientes de cobro.</i>	»	<u>3.727.893,84</u>

Se ve, pues, que con los recursos realizados por va-

lores del citado presupuesto, no solamente se han satisfecho las obligaciones que le son peculiares, sino también la suma de pesetas 6.499.399,85 que representa el exceso en los pagos por resultas de ejercicios anteriores sobre los ingresos de igual procedencia.

Este resultado, altamente satisfactorio, lo es tanto más teniendo en cuenta lo que sobre reducciones de ingresos presupuestos queda anteriormente dicho.

Resumiendo :

El presupuesto del semestre de 1.º de Enero á 30 de Junio del pasado año de 1882, que constituía un ejercicio que pudiera llamarse de demostración para acreditar que podían liquidarse los presupuestos sin déficit, arroja un sobrante en su liquidación de.	Ptas.	6.569.796,94
Pero como quiera que mis adversarios pudieran decir que esto es debido á que llevé á una cuenta especial los resultados de los ejercicios cerrados, que ántes alteraban el equilibrio de los presupuestos, debo decir que áun tomando en cuenta el déficit que en dicho semestre aparece por ejercicios cerrados.	»	<u>6.499.399,85</u>
todavía resulta liquidado el presupuesto del expresado semestre con un sobrante de ingresos de.	»	<u>70.397,09</u>

En presencia de lo acontecido, apuran su ingenio algunos de mis adversarios para demostrar lo contrario de lo que los hechos patentizan, lo cual me obliga á tratar la cuestión de los déficits de los presupuestos con mayor amplitud de lo que acaso debiera, y aun antes de ocuparme del presupuesto de 1882-83, toda vez que la cuestión se ha suscitado más especialmente al terminarse el ejercicio del segundo semestre de 1881-82.

Esto constituirá una digresión; pero fácilmente se

comprende que no puedo dejar sin respuesta las aseveraciones formuladas.

Como hay falta de conformidad en la exacta determinación de lo que debe entenderse por déficit ó superavit de un presupuesto, la crítica suele emplear ciertas habilidades aritméticas para pretender demostrar cuanto le place, aunque la base de sus razonamientos sea deleznable. Esto último ha acontecido con el presupuesto del segundo semestre de 1881-82, proyectado con dos fines: uno, el de cortar el déficit, que hubiera sido inevitable si la prorogación del presupuesto de 1880-81 hubiese durado en todo el año económico siguiente; otro, el de ofrecerle como prueba que sirviera de norma para lo porvenir.

Esa falta de conformidad me obliga á exponer las reglas que en mi opinión deben tenerse presentes para apreciar los resultados de un presupuesto.

En mi concepto, no pueden juzgarse sino bajo tres aspectos, á saber: el de la *previsión*, el de la *liquidación* y el de la *realización*, siendo necesario apreciarle bajo los tres para tener la seguridad de no emitir un juicio equivocado, pues cabe en lo posible, y es más, en lo probable, que cuando se toma uno solo de ellos la apreciación sea errónea.

La *previsión* resulta del proyecto que el Gobierno presenta á las Cortes y de la ley, puesto que las Cortes con el Rey, en su sabiduría, pueden hacer las alteraciones que consideren convenientes á los intereses del País.

Mientras no se sale del terreno de las previsiones, todo es problemático, pudiéndose incurrir en error al formar juicios, el que no cabe cuando se ha llegado á la época de la realización.

Puede preverse un presupuesto nivelado, con déficit ó con superavit; pero son tales las contingencias

que pueden sobrevenir, que alteren por completo el resultado que se buscaba, alteraciones debidas, unas veces, á exageraciones al calcular los ingresos y determinar los gastos; otras, á circunstancias de difícil previsión, que pueden aumentar ó disminuir los gastos y los ingresos; otras, en fin, á sucesos graves que escapan á la más exquisita previsión, y de los que, por regla general, no puede hacerse responsable al Ministro que formulara las previsiones.

Presentado un presupuesto nivelado, si los cálculos de ingresos y las previsiones de gastos están hechos con la prudencia debida, teniendo en cuenta los resultados anteriores y prescindiendo de halagüeñas esperanzas, hijas muchas veces de los mejores propósitos, pero con olvido de la realidad, en la práctica las previsiones se cumplen, dependiendo en gran parte del celo, la actividad y la energía del encargado de realizar lo que el Gobierno proyectó, lo que las Cortes votaron.

Pero si los cálculos y las previsiones no se llevaron á cabo con aquel tacto, puede muy bien suceder que la nivelación del proyecto y de la ley se truequen en un déficit; es más, que previsto un superavit, ofrezca un déficit de consideración. En cambio, puede ocurrir que un déficit previsto se convierta en una nivelación, quizás en un superavit, que es lo acontecido con el presupuesto del segundo semestre de 1881-82.

Cuando los ingresos se calculan con exageración, en esta misma llevan el germen de un déficit, y si los gastos se fijan en menos de lo necesario, y se piden créditos supletorios ó extraordinarios, esto origina otro déficit, que será en conjunto igual á la minoración del ingreso, más el aumento de gastos, que podrá atenuarse algo si algunos recursos ofrecen resultados más ventajosos que lo calculado y si se logra

hacer innecesarios algunos de los gastos previstos, resultando por ello un remanente de crédito que no se utiliza, porque aquéllos compensan la baja de otros recursos, y éstos aminoran el aumento de los gastos.

Si los ingresos se calculan con prudencia y los gastos se fijan con la posible exactitud, una buena gestión administrativa puede fácilmente hacer que las bajas en algunos recursos sea compensada con ventaja por el aumento de otros, evitando el déficit en los ingresos; y si se acuerdan los gastos solamente en los casos necesarios, como algunos de los previstos no se realizan, la economía del crédito autorizado para éstos compensa el aumento que necesidades imprevistas exigieran, y á veces con ventaja, sin que por esto pueda decirse que se echa una carga sobre las Administraciones venideras, porque gasto que se evita por innecesario no tiene por qué realizarse, ni se liquida su importe, y, por lo tanto, no llega á ser *debe* en la cuenta del presupuesto que más tarde haya de satisfacerse.

Conllevar los ingresos con los gastos, procurando constantemente liquidar y realizar los primeros y economizar los segundos, debe ser el cuidado de todo administrador.

Sancionada la ley y puesto en vigor un presupuesto, empieza el período de *liquidación*, tanto en lo relativo á los ingresos como á los gastos, y simultáneamente se hace la realización, que llevadas con celo y energía deben dar un resultado análogo al de la previsión.

Si se liquida por ingresos menor cantidad que la presupuesta, esa es la primera partida de déficit, y si no se economizan gastos y, por el contrario, se hacen suplementos de crédito ó créditos extraordinarios, y

al acordar éstos no se proponen recursos para atender á los mismos; si se liquida por gastos más de lo previsto en la ley, sin que el aumento se compense con sobrantes de créditos por gastos no acordados ni menos realizados, la diferencia entre lo previsto y liquidado es la segunda partida del déficit, porque recurso que no se liquida se pierde en absoluto para el presupuesto á que se aplicaba, y gasto que se liquida se convierte en débito, que se satisfará más pronto ó más tarde.

Si por el contrario se liquida con celo y actividad y con el cuidado debido, para evitar en lo sucesivo devoluciones de ingresos, y la cantidad liquidada es superior á la calculada al proyectar y votar el presupuesto, la diferencia es la primera partida de superavit; y si los gastos no se acuerdan sino cuando son absolutamente necesarios; si algunos de éstos, aunque previstos, no llegan á realizarse, y la economía que se alcanza en ellos es superior al importe de los créditos supletorios y extraordinarios, la diferencia es la segunda partida de superavit, que sumada con la obtenida por la mayor liquidación en los ingresos, da el importe del superavit del presupuesto en su *liquidación*, haciendo buenos los cálculos del Gobierno, y justificando las previsiones en los gastos.

Pero no basta esto, sino que es preciso procurar á todo trance que lo liquidado se realice dentro del periodo natural y del de ampliación, sobre todo en los ingresos, pues en los gastos el interés particular se encarga de realizar los créditos contra el Estado, mientras que lo no realizado por ingresos, pasando á *Resultas de ejercicios cerrados*, aun cuando puede hacerse efectivo, no es tan seguro, toda vez que al entorpecerse la realización se dificulta para en lo porvenir, dando lugar muchas veces á partidas fallidas

que aminoran el importe de lo liquidado en los ingresos, lo que no sucede con los gastos, porque éstos, una vez liquidados, se transmiten por todo su importe á las Administraciones posteriores.

De aquí que en la *realización* sea más necesaria la actividad, el celo y la energía para lograr que ingrese en el Tesoro dentro del período natural y de ampliación todo lo liquidado. Si se consigue así, y el Tesoro está desahogado, como realizando ingresos se satisfacen los gastos, el presupuesto, en su período legal de realización, ofrece un resultado exactamente igual al de liquidación.

No suele esto acontecer; pero si se liquidó un superavit por más ingresos y por menos gastos, si se han conllevado los unos y los otros, las *Resultas* que pasan á *Ejercicios cerrados* deben ser mayores en los créditos á cobrar que en los débitos á satisfacer, y el déficit es imposible y casi seguro el superavit liquidado.

Pero si tomando el importe de los ingresos realizados y comparándole con el importe de los gastos satisfechos, más los débitos á pagar que pasan á ejercicios cerrados, resulta de importancia el crédito á cobrar ó insignificante la diferencia del débito á satisfacer, el superavit es evidente.

No importa que se tenga á veces que suplir á ejercicios anteriores; es un error suponer que un presupuesto suple á otro. Si tiene sobrante, éste va al Tesoro, que es el que suple á los ejercicios anteriores con los remanentes del posterior, si son bastantes á suplir la deficiencia de aquéllos, y si nó, con operaciones de Tesorería ó con recursos extraordinarios de crédito que la ley autorice.

Un ejemplo aritmético de un presupuesto patentizará la verdad de todo lo expuesto en este punto.

Si se calcularon en el proyecto y en la ley		
los ingresos en.	Ptas.	100.000.000
y los gastos en.	»	<u>100.000.000</u>

en las previsiones resultaba un presupuesto nivelado.

Si los ingresos de ese mismo presupuesto se		
liquidaron por.. . . .	Ptas.	110.000.000
y los gastos por.	»	<u>99.000.000</u>

aun cuando en los gastos hubiera créditos supletorios y extraordinarios, resultará el superavit siguiente :

Por mayor liquidación en los ingresos. . .	Ptas.	10.000.000
Por menos gastos acordados.. . . .	»	<u>1.000.000</u>
<i>Superavit en la liquidación.</i>	»	<u>11.000.000</u>

Si de los 110 millones liquidados se realizan		
en el período natural y de ampliación por		
ingresos.. . . .	Ptas.	98.000.000
y por gastos.	»	<u>92.000.000</u>
<i>Es evidente el superavit en la realización de.</i>	»	<u>6.000.000</u>

Y pasarán á ejercicios cerrados :

Por ingresos.	Ptas.	12.000.000
Por gastos.. . . .	»	<u>7.000.000</u>
<i>Diferencia á favor.</i>	»	<u>5.000.000</u>

Aun en el caso de no realizarse todos los ingresos que pasen á resultas, como por gastos no pasan débitos á satisfacer sino por 7 millones y para saldarlos se habían ya realizado ingresos por 6 millones, no queda en descubierto sino un millón, y en cambio se tienen 12 millones de ingresos á cobrar; es decir, que con que se recaude el 25 por 100 de lo que pasa á resultas, es indudable el superavit.

No altera este resultado el que por ejercicios anteriores se pague alguna mayor cantidad que la que por tal concepto se recaude; esto será suplido por el Tesoro, pero no puede afectar al presupuesto de cuya liquidación se trate.

Pues bien ; aplicando estas reglas á la liquidación del presupuesto del segundo semestre de 1881-82, ofrece el resultado siguiente :

En el proyecto presentado por mí á las Cortes, el déficit calculado se elevó á . . .	Plas.	<u>252.167 »</u>
Por resultado del voto de las Cortes ascendió el déficit á »		4.791.364,50
Se aumentaron los gastos, según se ha consignado, en.. . . . »		7.907.888,73
Se disminuyeron los ingresos por Consumos, según queda dicho, por efecto de la ley de 6 de Julio de 1882 en. Plas.	5.750.000 »	
Pero se aumentaron por los conceptos que igualmente quedan expresados en. . .	3.075.588,29	
<i>Total minoración de ingresos. . . »</i>		<u>2.674.441,71</u>
<i>Total déficit legal del presupuesto. . . »</i>		<u>15.373.694,94</u>
Se liquidaron ingresos por. Plas.	402.059.135,94	
Id. gastos por. »	390.761.445,16	
<i>Superavit que ofreció la LIQUIDACIÓN. »</i>		<u>11.297.690,78</u>
Y agregando á esta partida la de. . . . »	15.373.694,94	
que importaba el déficit de la ley, arroja un total de. »		<u>26.671.385,72</u>

diferencia entre las previsiones y la liquidación, puesto que, contándose con el déficit indicado, se obtuvo el superavit expuesto.

Se realizaron durante el período natural y de ampliación :

Ingresos..	Plas.	387.133.337,38
Pagos. »		<u>380.563.540,44</u>
<i>Resulta un superavit en la REALIZACIÓN del presupuesto de. »</i>		<u>6.569.796,94</u>

Este resultado no debe alterarse sino en favor del superavit, por lo que pasa á ejercicios cerrados, pues

aunque no se realizase sino una cantidad igual por ingresos y por gastos, aparecería siempre el mismo superavit, y lo que exceda de lo que se realice por ingresos sobre los pagos, será mayor superavit.

Es más : aunque no se realizase tanto como se pagara, el superavit no ofrece duda.

Se liquidaron gastos por.	Ptas.	390.761.445,16
Y como se han realizado y han ingresado		
en caja.	»	387.133.337,38
Falta para cubrir lo liquidado por gastos. »		<u>3.628.107,78</u>

y para esto se cuenta con 15 millones, número redondo á cobrar; de modo que con realizar el 25 por 100 de las resultas se habrá cobrado más que se ha liquidado por gastos. No importa que por ejercicios cerrados se hayan pagado durante el del semestre 6.499.399,85 más que lo recaudado; esta partida la ha suplido el Tesoro y no tiene por qué lucir en la liquidación del presupuesto.

Si, pues, á pesar de las reducciones que proceden en los ingresos presupuestos y de los suplementos de crédito y extraordinarios que aumentan los gastos, y no obstante el escaso tiempo que la Administración tuvo para el desarrollo de los impuestos reformados; si á pesar de las dificultades que en principio lleva toda reforma, y de consiguiente la nueva organización dada á las oficinas provinciales de Hacienda, resulta el presupuesto no sólo nivelado, sino con un sobrante para cubrir atenciones de otros ejercicios, preciso es reconocer que desde 1.º de Enero de 1882, en que empezaron á régir los nuevos presupuestos, dejó de existir el déficit, que ya por fortuna no reaparecerá, si se tiene el cuidado de recaudar lo que el Estado tiene derecho á percibir y un poco de parsimonia en la fijación de los gastos públicos.

Por mi parte, después de las demostraciones que dejo hechas, espero tranquilo el fallo de la opinión pública, que dirá de parte de quién estuvo la previsión: si de los que pronosticaban un espantoso desastre ó del que ha demostrado con la realidad que se pueden nivelar los presupuestos, no sólo en los proyectos, sino en las cuentas, y aún ofrecer superavit, á pesar de las dificultades que entraña una completa reforma en el plan rentístico de un país.

PRESUPUESTO DE 1882-83.

(*En ejercicio actualmente.*)

Tuve el honor de presentar á las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos para 1882-83, que es el que en la actualidad se encuentra en ejercicio, con las siguientes previsiones :

Ingresos..	Ptas.	782.995.225
Gastos.	»	<u>782.649.212</u>
<i>Sobrante de ingresos que ofrecian las previsiones.</i>	<i>»</i>	<u>346.013</u>

Las Cortes votaron la ley, y ésta presentaba los siguientes resultados :

Ingresos..	Ptas.	780.995.225
Gastos.	»	<u>789.326.090</u>
<i>Déficit según la ley.</i>	<i>»</i>	8.330.865

Pero despues, á consecuencia de disposiciones legislativas, ha tenido aumento dicho déficit por los conceptos siguientes:

Por la rebaja en los ingresos que á consecuencia de la ley de 6 de

Julio de 1882 se produjo en la contribución de Consumos. . .	11.500.000	
Por los créditos extraordinarios y supletorios concedidos para varios servicios de Gracia y Justicia, Guerra, Gobernacion y Fomento, que aumentaron los gastos.	4.114.415	15.614.415
<i>Verdadero déficit del presupuesto en sus previsiones.</i>	<i>Ptas.</i>	<u>23.945.280</u>

De consiguiente las cifras totales de ingresos y gastos quedaron alteradas en la siguiente forma:

Ingresos.. . . .	<i>Ptas.</i>	769.495.225
Gastos.	»	793.440.505
<i>Y el déficit, según queda expresado. »</i>		<u>23.945.280</u>

Y sin embargo de lo alarmante de esta cifra, debe esperarse con fiadamente que el presupuesto ofrezca en su liquidación un superavit de importancia.

Desde luego basta considerar que el presupuesto del segundo semestre de 1881-82 (1.º de Enero á 30 de Junio de 1882) comprendía en los ingresos la mitad exacta de las cifras del que ahora examino, y que por errores cometidos al redactarlo, por la rebaja correspondiente al impuesto de Consumos como resultado de la ley de 6 de Julio de 1882, y por otros motivos expuestos en su lugar, el presupuesto de dicho semestre entrañaba un déficit de 24.865.106,64 pesetas, no obstante lo cual ha ofrecido en su liquidación un superavit de pesetas 6.569.796,94.

Téngase en cuenta, además, el natural y progresivo aumento de las rentas en general, que compensará con creces la baja que por efecto de circunstancias especiales pueda haber en alguna contribución ó impuesto.

No deben, pues, preocupar grandemente déficits

de esa importancia en las previsiones; lo que se necesita para extinguirlos y obtener ventajas es recaudar lo más posible, y en materia de gastos, prescindir de todo aquel que no reclamen la obligación del Estado ó necesidades perentorias.

Transcurrido el primer semestre del ejercicio, se han podido conocer con exactitud los ingresos realizados en él, los créditos pendientes de cobro y la comparación de los derechos reconocidos con los ingresos calculados; así como respecto á los gastos el total de las obligaciones liquidadas, el de los pagos ejecutados en dicho primer semestre y el de los pendientes en fin de Diciembre. El resumen de estos datos es el siguiente:

INGRESOS.

Mitad de los créditos anuales presupuestos.	Ptas.	390.497.612 »
Ingresos verificados en el primer semestre.	»	374.888.683,63
Créditos pendientes de cobro en fin de Diciembre.	»	47.371.898,80
<i>Total de los valores liquidados. . .</i>	<i>»</i>	<u>422.260.582,43</u>

DIFFERENCIAS QUE HAN RESULTADO ENTRE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTOS Y LOS VALORES LIQUIDADOS.

En más.	Ptas.	42.699.050,30
En menos.	»	10.936.079,87
<i>Diferencia líquida por exceso de las liquidaciones sobre los créditos presupuestos.</i>	<i>»</i>	<u>31.762.970,43</u>

GASTOS.

Mitad de los créditos anuales presupuestos.	Ptas.	404.726.178,26
Pagos ejecutados en el primer semestre. .	»	249.278.136,13
Obligaciones pendientes de pago en fin de Diciembre.	»	123.491.911,06
<i>Total de las obligaciones liquidadas.</i>	<i>»</i>	<u>372.770.047,19</u>

DIFFERENCIAS QUE HAN RESULTADO ENTRE LOS CRÉDITOS
PRESUPUESTOS Y LAS OBLIGACIONES LIQUIDADAS.

En más.	Ptas.	34.378.896,79
En ménos.	»	<u>2.422.765,72</u>
<i>Diferencia líquida por exceso de los créditos presupuestos sobre las obligaciones liquidadas.</i>		
	»	<u>31.956.131,07</u>
Los ingresos verificados en el primer semestre, han ascendido, segun queda consignado, á.	Ptas.	374.888.863,63
Los probables en el segundo semestre se calcula que ascenderán á.		367.947.000
Y los que se calcula que tendrán lugar en el semestre de ampliación á.		<u>52.641.000</u>
	»	420.588.000 »
<i>Total.. . . .</i>	»	<u>795.476.863,63</u>
Los pagos ejecutados en el primer semestre ascienden á.	Ptas.	249.278.136,13
Se calculan para el segundo semestre en.		427.154.327
Y en el semestre de ampliación en.		<u>117.010.066</u>
	»	544.164.393 »
Importarán por lo tanto los pagos probables del ejercicio.	»	<u>793.442.529,13</u>

RESUMEN.

Importan los ingresos realizados y á realizar.	Ptas.	795.476.863,63
Importan los pagos ejecutados y á satisfacer.	»	<u>793.442.529,13</u>
Por consiguiente se calcula que resultará un remanente ó sobrante de ingresos. .	»	<u>2.034.334,50</u>

En las demostraciones que anteceden he prescindido en los ingresos de detallar los conceptos á que corresponden, y en los gastos el pormenor de las secciones á que pertenecen, pues publicada ya la Memoria que el Sr. Ministro de Hacienda ha presentado á las

Cortes, inserta además en la *Gaceta* y examinándola la prensa periódica, he creído innecesaria la exhibición de datos que todos conocen oficialmente, limitándome, por lo tanto, á consignar los resultados que he estimado precisos para dejar debidamente cumplido el compromiso que me he impuesto.

En aquel documento se expresan con detención las razones que han servido de base para el cálculo del resultado que ofrecerá el presupuesto, cuyo cálculo por mi parte considero prudentísimamente formado.

Por lo demás, creo haber dicho lo bastante con relación á los presupuestos en cuya formación ó administración he intervenido, para que puedan ser juzgados mis procedimientos y con el fin de ilustrar la opinión en todo aquello que, á mi juicio, pudo y aún podría ser extraviada por falta de antecedentes.

Paso ahora á ocuparme de las contribuciones é impuestos á que alcanzó la reforma.

CONTRIBUCIÓN DE INMUEBLES,

CULTIVO Y GANADERÍA.

I.

Natural es que siendo este recurso del Estado el de mayor importancia, el de más segura realización y el que figura á la cabeza de los impuestos directos, ocupe el primer lugar en la reseña que me propongo hacer de las modificaciones que se introdujeron, á propuesta mía, en el sistema tributario.

Establecido por el decreto-ley de 23 de Mayo de 1845 en sustitución de otros impuestos, cuya desaparición se hacía necesaria en buenos principios, implantóse, contra la voluntad sin duda del ilustre Ministro que acometió la reforma, en condiciones poco ventajosas para la buena administración del mismo, que no solamente dificultaron la organización primitiva de lo que había de ser el más pingüe ingreso del presupuesto, sino que fueron la verdadera causa de obstáculos con que ha venido luchando constantemente la Administración; obstáculos que aún no han sido vencidos y que tardarán todavía algún tiempo en desaparecer por completo. Prueba evidente de que ni la inteligencia ni la fuerza de voluntad que distinguieron á

aquel hombre de Estado pudieron ser bastantes á evitar los graves inconvenientes con que lucha siempre la implantación de toda reforma.

Aparte de las dificultades que habían de surgir por la oposición que en nuestro país se hace de ordinario á toda reforma cuando afecta á determinados intereses, la absoluta carencia de datos estadísticos para fijar con exactitud el cálculo de lo que debía ofrecer ese nuevo ingreso, y la falta de un amillaramiento que sirviera de base al reparto de la cantidad presupuesta, dieron lugar á que una contribución proyectada con el carácter de cupo repartible, y cuya incógnita era el tanto por ciento con que saldría gravada la riqueza, se alterara en sus términos, fijando la cuota en un 12 por 100 para obtener 300 millones de reales, que más tarde quedaron reducidos á 250.

Á partir de esta dificultad, que obligó á la Administración á empezar por donde debía concluir, hubiera sido conveniente dejar como base el tanto por ciento de cuota, buscar la riqueza contributiva y ser lo desconocido el importe que había de ofrecer como recurso del presupuesto.

Pero á esto se oponía el pensamiento del legislador, que había querido organizar una contribución de cupo repartible, no de cuota fija, con el fin sin duda de saber con certeza la cantidad anual con que el Estado podía contar, y hacer solidariamente responsables, del total importe del cupo, á la masa de contribuyentes; á la provincia, del cupo provincial; y al pueblo, del municipal.

Buscando la Administración la realización de este ideal, dió margen á una lucha de vecino á vecino, de pueblo á pueblo, de provincia á provincia y de la masa general de contribuyentes contra el Estado, que se tradujo en una serie de ocultaciones de imposible

descubrimiento, y por de pronto se convirtió en una dificultad punto menos que insuperable para la formación del amillaramiento, que no le tuvimos sino en 1850, y éste lleno de imperfecciones é irritantes desigualdades, dándose el caso de que algunas provincias, como las del Noroeste, no le hicieron so pretexto del modo de estar organizada en ellas la propiedad y su disfrute, sin que hasta la fecha haya podido lograrse su formación.

Esta oposición era natural : el vecino que ocultaba no se preocupaba de la carga que echaba sobre sus convecinos y hacendados forasteros del mismo municipio ; el pueblo que salía beneficiado en todo lo que ocultaba, se lisonjeaba con el resultado ; y la provincia, teniendo el propio interés que los pueblos, no prestaba, desgraciadamente, su eficaz apoyo al descubrimiento de la riqueza oculta.

En tanto, la Administración, segura como estaba de la grande ocultación, viéndola palpable al considerar que, comparando los datos estadísticos que los amillaramientos ofrecían con los trabajos catastrales del Marqués de la Ensenada, apenas si arrojaban un imperceptible aumento de riqueza, no obstante haber duplicado casi la riqueza, la producción, el comercio y el consumo ; y ante la impotencia de fijar la verdadera base del repartimiento, ó sea la riqueza líquida imponible, buscó su defensa en la elevación del tipo tributario, en la confianza de que, aún elevándolo, no rebasaba los límites de la conveniencia, ni compensaba la baja que la ocultación representaba ; pero no tuvo en cuenta que al subir el tipo perjudicaba á los contribuyentes y pueblos que obraban de buena fe ; y cuando las necesidades del presupuesto obligaron uno y otro año al aumento del tipo para poder repartir mayor cantidad y asegurar su cobro, cuando se tuvo

que llegar al 21 por 100, las desigualdades subieron á tal punto, que era imposible sostener el impuesto en aquella situación, porque para unos el tipo había pasado, no solamente del límite de lo conveniente y de lo justo, sino de lo posible, al propio tiempo que para otros no se aproximaba ni con mucho á lo debido.

No diré yo que la Administración careciese en absoluto de razón para obrar así: estaba persuadida de las ocultaciones; las había patentizado uno y otro día, demostrándolo más y más en la Estadística que publicó en 1877 la Dirección general de Contribuciones, trabajo de mucha estima; y parecía natural que, dadas las necesidades del Tesoro, siempre crecientes, apelara á la elevación del tipo, ya que no podía llegar, á pesar de sus esfuerzos, á la fijación de la riqueza que sirviera de base para el reparto. Mas al obrar de este modo agrandaba sin duda las dificultades, haciendo odioso un impuesto que, como ninguno, podrá en no lejano día ser exigido con la debida igualdad.

Un ejemplo demostrará hasta la evidencia la verdad de todo lo expuesto.

Cierto funcionario celoso é inteligente, administrando esta renta en la provincia de Salamanca en 1856, es decir, cuando ya existía lo que se llama amillaramiento, recogió por curiosidad los datos siguientes:

26	pueblos contribuían al 12 %	
48	»	» 11 »
113	»	» 10 »
74	»	» 9 »
46	»	» 8 »
43	»	» 7 »
20	»	» 6 »
14	»	» 5 »
5	»	» 4 »
1	»	» 3 »
<hr/>		
390	total de Ayuntamientos.	

¿ Con cuánto no hubiera contribuido esa provincia si á todos se hubiera exigido la cuota del 12 por 100, buscando en ella la base y no en el cupo? ¿Y qué se logró con sostener éste y repartirle? Esa desigualdad inconcebible, y, lo que es lo peor, que al aumentar el tipo desde 12 á 21, á este máximum llegaran unos pocos, y otros en cambio no pasaran del mismo tanto por ciento que se había señalado en 1845, porque los nuevos amillaramientos, hechos en 1862, adolecían de iguales defectos que los de 1850, y la Administración, con tal que aumentaran algo la masa de riqueza imponible, aumento que generalmente se obtenía á costa de los hacendados forasteros, se daba por satisfecha, y las desigualdades seguían en la misma escala proporcional, y las quejas de los contribuyentes de buena fe se dejaban sentir por todas partes.

Antes de llegar á ese máximum del tipo tributario, la Administración, persuadida sin duda de que el sistema que había emprendido, en vez de disminuir, aumentaba la injusticia con que la contribución se repartía, se ocupó seriamente de formar una buena estadística territorial, que, dado el sistema de repartimiento, ofreciera una base que garantizase la mayor proporcionalidad posible en el tributo; y empezaron los estudios para la formación de los amillaramientos, nombrándose por orden de 9 de Marzo de 1874 una Comisión compuesta de cuatro jefes de Administración de la clase de activos, bajo la presidencia del Secretario general del Ministerio, la cual, en el término de un mes, debería formular el reglamento especial para conseguir aquel objeto.

Esta medida era tanto más necesaria, cuanto que, por circunstancias que no es del momento apreciar, no se había hecho amillaramiento desde 1862, sin em-

bargo de que existía la obligación de efectuarlo cada diez años.

Más tarde, sobre todo, cuando la Dirección general de Contribuciones, con un celo digno de elogio, preparaba sus trabajos estadísticos de los que resultaban muchas más unidades contributivas, más elevados precios de evaluación, mejor cultivo, mayor producción, siquiera aumentasen también los gastos de ésta; en 1878, en fin, se dió gran impulso á los trabajos estadísticos, publicándose el reglamento de 10 de Diciembre de dicho año.

Según él, debían los contribuyentes declarar su riqueza contributiva en cédulas que comprendieran toda la que poseían; las Juntas municipales reunir las y formar el registro de fincas; aprobarlas la Administración, previa la comprobación pericial; formar de común acuerdo las Juntas y la Administración las nuevas cartillas evaluatorias, y así conocida la extensión tributaria y la naturaleza del cultivo, fijado el valor de las unidades de producción y los gastos deducibles, señalar la riqueza líquida imponible que sirviera de base á los repartos posteriores.

Inútiles fueron, en parte, los esfuerzos de la Administración en los primeros años, viéndose obligada á conceder prórogas y prórogas, primero para la presentación de las cédulas, que aún no ha terminado, y después para los trabajos de resumen que las Juntas de Estadística tenían que realizar, concediendo perdones de multas, ya generales, ya parciales.

En tal situación encontré los trabajos de estadística territorial al hacerme cargo del Ministerio de Hacienda en Febrero de 1881.

Abrigando la convicción de la desigualdad que existía en el reparto del tributo, la lógica me llevaba á procurar que desapareciera lo más pronto posible. Yo

había tenido el honor de decir en el Congreso de señores Diputados, sesión del 30 de Junio de 1876, refiriéndome á mis actos como Ministro en 1874, lo siguiente, que después he ratificado más de una vez en el Senado :

«Aquel Gobierno declaró que, en su opinión, no
»podía elevarse más la tributación sobre la propiedad
»territorial, pues se encontraba excesivamente recar-
»gada, creyendo, como por mi parte creo y sostengo,
»que si dicha propiedad, por ser una de las manifes-
»taciones de la riqueza, es la llamada á sufrir los tri-
»butos extraordinarios, con preferencia á todas las
»demás, en los momentos críticos en que el País tiene
»necesidad de ellos, por ser la que más fácilmente
»puede proporcionarlos, esta misma consideración
»debe obligar á los Gobiernos á que, una vez pasadas
»las circunstancias que les han decidido á la imposi-
»ción de aquellos sacrificios, hagan las mayores bajas
»posibles en el impuesto, para que la propiedad se re-
»ponga, robustezca y esté en situación de volver á
»contribuir en otros momentos dados, si desgraciada-
»mente fuera preciso, lo cual es de desear que no
»acontezca.»

Pues si por una parte había yo sostenido en la oposición el ineludible deber que existía de hacer más soportable para los contribuyentes el impuesto sobre la propiedad territorial, pesando, por lo tanto, sobre mí el de llevarlo á cabo desde las esferas del Gobierno, y por otra, las declaraciones de los mismos interesados, corroborando lo que de todos era sabido, la ocultación de riqueza que existía, me facilitaban el medio de realizarlo, ¿debiera renunciar á ello? ¿Podía dejar de atender las quejas que en justicia se formulaban? Adopté, por lo tanto, las disposiciones convenientes para ver de conseguir la más breve realización

de mi deseo, y no podía ser éste otro que el que la contribución se repartiera en equitativa y justa proporcionalidad, gozando los contribuyentes de buena fe del beneficio á que tenían derecho.

Para llevar á cabo la reforma que procediese en este impuesto, era preciso reunir todos los antecedentes necesarios, si había de realizarse con perfecto conocimiento de causa y con la prudencia debida, preparando de esta manera el oportuno proyecto de ley que en su día se presentara á las Cortes; y consideré como mi primer deber impulsar cuanto me fuera dado los trabajos estadísticos, para que el reglamento de 1878 tuviese el más pronto y debido cumplimiento.

Entre tanto, y según me lo permitían las múltiples atenciones que sobre mí pesaban, aproveché valiosos elementos que en la Administración existían para conocer mejor la verdad aproximada de las ocultaciones, y de ellas deducir la rebaja posible en el tipo tributario, sin aminorar el ingreso presupuestado; utilicé para ello los servicios de celosos funcionarios encanecidos en los trabajos estadísticos, y ordené se fueran organizando los resultados que ofrecieran las cédulas presentadas y resumidas por las Juntas municipales, para hacer el estudio comparativo con los amillaramientos, apéndices y repartimientos vigentes.

Curiosos fueron los datos que se me proporcionaron, pues notables eran las diferencias que existían entre los amillaramientos y las cédulas extendidas y autorizadas por los mismos interesados: pueblos había en que la ocultación excedía, y no poco, del 70 por 100, por la mayor extensión del terreno contributivo ó por la mejora del cultivo, sin tener en cuenta el mayor precio de las unidades de producción, por el mayor consumo, facilidad del transporte y desarrollo del comercio. En la casi totalidad de los casos, la

extensión tributaria aumentaba considerablemente, en términos que el celoso funcionario encargado del servicio de esa renta del presupuesto creía que se podía rebajar el tipo al 18 por 100, dando el impuesto 41 millones de pesetas más, y llegar al 14 por 100, ofreciendo todavía mayor cantidad que la de 166 millones presupuesta; opinando, en fin, que debería fijarse desde luego el tipo últimamente citado y proponerse á las Cortes, según todo consta de documento extraoficial autógrafo que conservo.

En vista del resultado que ofrecían las comparaciones hechas por el Centro encargado de administrar esta contribución, siendo patentes las ocultaciones con la prueba más perfecta que se conoce, cual es la confesión de los interesados, que libre y espontáneamente habían extendido y suscrito las cédulas, apareciendo de ellas una mayor extensión tributaria, que hacía innecesario el tipo de 21 por 100, deduciéndose también que existían terratenientes y cultivadores que no tributaban, no me era lícito consentir que la riqueza descubierta dejara de contribuir, no debía sostener ese tipo tributario excesivo para los contribuyentes de buena fe, ni podía evitar la reducción del tanto por ciento, puesto que la riqueza descubierta le hacía innecesario.

Cierto es que la Administración hubiera quizás podido utilizar ese descubrimiento de la riqueza oculta y hacerla tributar al tipo corriente; pero esto hubiera sido por demás injusto, puesto que el propósito que se abrigaba al pedir á los contribuyentes una espontánea declaración de su riqueza era la baja del tipo tributario, haciendo que cada cual pagara con arreglo á su haber, rebajando á los que tenían ya declarada la verdad en los amillaramientos, y compensando estas bajas con los aumentos que ofreciera la riqueza que

de nuevo venía á tributar. Además, que no estando ultimados, ni mucho menos, los trabajos estadísticos en muchos pueblos, existiendo provincias enteras en que ni una cédula se había presentado á las Juntas municipales, ó al menos éstas no habían entregado los resúmenes á la Administración, si se hubiese adoptado tal temperamento, perfectamente legal por otra parte, hubiera constituido un aviso poco prudente para que los morosos redactaran sus cédulas con toda la ocultación posible, y un castigo para los que, obedientes á los preceptos reglamentarios, habían presentado aquéllas confesando sinceramente la riqueza que poseían. Por otra parte, detenerse ante el hecho de no estar ultimados en todos los pueblos los trabajos prevenidos en el reglamento de 10 de Diciembre de 1878, era imposible, pues equivalía á dilatar la reforma, con notorio perjuicio de los contribuyentes que habían cumplido sus deberes.

En este estado las cosas, surgió para mí una contrariedad: el funcionario más autorizado é inteligente que me prestaba su cooperación en estos estudios y preparaciones, opinó que desde luego podía hacerse, y en menos de un año, el repartimiento de los 166 millones de pesetas, importe del cupo presupuesto para esta contribución, con una riqueza que sólo tributase al 14 por 100, empleando para ello trabajos de avance y evaluaciones alzadas de la riqueza contributiva.

A mí no me pareció procedente entrar en la designación de la riqueza imponible, que era el punto capital de la reforma, por el sistema de las evaluaciones alzadas, que tantos perjuicios podían ocasionar. Me concretaba á tomar como base de la reforma la que no podía rechazarse, y consistía en la declaración espontánea del contribuyente en cuanto á la extensión superficial y los cultivos, y le estimulé á que dentro

de este criterio procediese sin levantar mano, todo lo cual podía efectuarse en mucho menos tiempo que el que él señalaba para realizar su plan.

Creí haberle convencido, y era mi propósito adelantar lo más posible los trabajos á que me refiero, para obtener, como antes he dicho, el conocimiento de la importancia aproximada de la ocultación y fijar el tipo con que la riqueza pudiera ser gravada; pero después me dirigió la renuncia de su cargo. Y como quiera que este particular fué tratado en el Congreso de los Diputados (sesión del 1.º de Abril de 1882), y el interesado ha fallecido, no considero procedente detenerme más en este punto.

Preferible hubiera sido, repito, que los trabajos se hallasen terminados en todas las provincias, en todos los pueblos; pero si la reforma no podía ser tan extensa, por causas ajenas á la voluntad de la Administración, justo era que alcanzara sin más demora á los que estuviesen en el caso de disfrutarla, y que se adoptasen las reglas convenientes para que sucesivamente fuera comprendiendo á los demás.

Debía intentarse, en cuanto fuera posible, que la reforma se hiciese general, y á este fin, y después de repetidas excitaciones á los pueblos morosos, antes de la presentación á las Cortes del proyecto de ley, no siempre apoyadas y muchas veces contrariadas por elementos importantes que tenían el deber de darme ayuda, me reservaba proponer en el precitado proyecto que el plazo para la presentación de las cédulas con derecho á la rebaja quedase ampliado hasta la aprobación de aquél.

Otra dificultad, y de no escasa importancia, parecía oponerse al planteamiento de la reforma. En las cédulas constaba la extensión superficial y la naturaleza del cultivo, pero no se había llegado en los tra-

bajos para la rectificación de los amillaramientos á fijar la clasificación de los terrenos, las unidades de producción, ni la valoración de éstas, previa la designación de precios medios, y por lo tanto, no se había podido determinar los gastos deducibles para obtener con fijeza la riqueza líquida imponible que había de servir de base para la designación de la cuota; pero tampoco había de detenerme ante esta dificultad.

Tres medios podían utilizarse para vencerla.

Primero, adoptar las valoraciones de la Estadística publicada por la Dirección general del ramo en 1879; segundo, hacer unas valoraciones alzadas por regiones en cada provincia, que se aproximaran todo lo posible á la verdad; y tercero, aceptar provisionalmente las valoraciones y clasificaciones vigentes.

Desde luego opté por el último, por dos razones, poderosas en mi opinión: la primera, porque éstas valoraciones y clasificaciones habían sido hechas de acuerdo con los Ayuntamientos y Juntas periciales, lo cual estimaba bastante á decidirme; la segunda, porque eran más ventajosas para el cuerpo contribuyente, punto que no admite la más ligera duda. Las cartillas evaluatorias se habían hecho en 1861 tomando como tipos la producción y los precios medios del decenio de 1850 al 60, deduciendo para fijar éstos los dos años, el de precio más elevado y el de más bajo. Pues bien; nadie podrá afirmar que la producción se encuentra estacionada desde 1860; es palmario que ha mejorado notabilísimamente: luego son mayores las unidades de producción; y en cuanto á los precios de éstas, recuérdese el que alcanzaron los cereales en aquel decenio, fuera del excepcional de 1857, que no se computó para las valoraciones por ser el más alto; tráigase

á la memoria el precio que en aquella época tenía el vino, y compárese con el que hoy alcanza, gracias á los tratados de comercio; véase el valor de la arroba de aceite de entonces y de ahora; compárense los ganados, los alquileres de las casas y todo lo que sirve de base á esta contribución, y nadie podrá dudar de la notable diferencia en los precios. Y si bién es verdad que algunos gastos de producción han sufrido aumento, otros han tenido disminución, y como resultado, el valor del producto, deducidos los gastos, es mucho mayor que el que ofrecía en el decenio del 50 al 60.

Si, pues, son hoy mayores las unidades de producción, y cada una de éstas vale más, la valoración hecha con arreglo á las cartillas de 1861 es altamente ventajosa á los contribuyentes, y por lo tanto, la dificultad estaba vencida, y el cuerpo contribuyente no puede quejarse del medio que creí justo y equitativo utilizar.

Y por último, otra cuestión me preocupaba al acometer la reforma: ¿era justo que al particular, contribuyente de buena fe, se le privase de los beneficios de ella, si había cumplido su deber en la presentación de la cédula y declarado su verdadera riqueza, porque sus convecinos ó la municipalidad no hubiesen procedido de idéntica manera ó no llenaran los suyos? Sin embargo, bien examinado el asunto, comprendí que el remedio era imposible, pues hubiera existido un dualismo en el procedimiento dentro de cada pueblo, perjudicial además para el Tesoro, tocándose por otra parte la dificultad de que, no habiendo sido presentadas todas las cédulas, no podían resumirse, y sin este trámite, no podía prestárseles su aprobación, si la merecieran.

Creo haber expuesto con leal franqueza los antece-

dentes y fundamentos que me decidieron á la reforma, y con igual sinceridad me propongo tratar todos los particulares que con el curso de ella se relacionan.

II.

Tuve la honra de presentar á las Cortes el correspondiente proyecto de ley en 24 de Octubre de 1881, y en él se fijó el plazo para la presentación de las cédulas hasta 15 de Noviembre siguiente, el cual se amplió naturalmente hasta 31 de Diciembre, en cuya fecha aquél quedó convertido en ley. Esperaba por este medio obtener un favorable resultado, pues el aliciente que á los pueblos morosos se ofrecía para que completasen sus trabajos estadísticos debía considerarlo eficaz, toda vez que, haciéndolo así, obtenían la rebaja en el tipo tributario, convirtiendo para ellos el impuesto en contribución de cuota fija, con las ventajas consiguientes, que no podían concederse á los pueblos que no hubieran cumplido debidamente con la presentación y resúmenes de las cédulas.

La discusión del proyecto de ley ofreció las dificultades que eran de prever; pero, con ligeras modificaciones, no ciertamente sustanciales, fué aprobado.

Votada, sancionada y publicada la ley, mi deber era proceder á cumplirla con la misma fe y decisión que me habían animado en los procedimientos previos; no desconocía que una innovación de la naturaleza y trascendencia que envuelve la de que me vengo ocupando había de suscitar serios embarazos para su planteamiento, ya los que nacían de los cambios de procedimiento que era preciso adoptar, ya de los trabajos que era necesario acometer y no podían es-

tar preparados de antemano, ya, en fin, por otras causas y motivos diferentes.

Desde luego había contado con tener preparados todos los elementos preliminares en el mes de Enero de 1882, y por esto fijé en el proyecto de ley la fecha de 15 de Noviembre como límite de admisión de resúmenes de cédulas, para que, á contar desde ese día la Administración fuese preparando las designaciones de la riqueza imponible por pueblos, base de las nuevas cuotas, sin perjuicio de lo que las Cortes resolviesen; pero el retraso con que se discutió el proyecto obligó á prorogar aquella fecha hasta fin de Diciembre, paralizando mes y medio más todas las operaciones preparatorias.

Con muy oportuna previsión la ley determinaba, de conformidad con el proyecto, que continuarían tributando con el 21 por 100 aquellos pueblos cuyas declaraciones, á pesar de estar ajustadas al art. 24 del reglamento de 1878, fuesen rechazadas por la Administración por ocultación notoria. Y como quiera que en las presentadas con anterioridad al proyecto había muchas en este caso; otras, en no escaso número, en que se alteraban las medidas agrarias ó se confundía la hectárea con la obrada ó fanega; ya se computaban los bienes *pro indiviso* á los que en las cédulas comprendían el total de las fincas, á la vez que otros comprendían también su parte alicuota en las mismas; ya, en fin, se confundían las fincas cuya producción era de año y vez con las de producto anual; y por otra parte, las cédulas presentadas con posterioridad al 24 de Octubre adolecían en su generalidad de los antedichos vicios, ó de otros que acreditaban no haberse preocupado los interesados ni las Juntas sino de llenar de cualquier modo una formalidad en los términos que estimaban útiles á sus intereses; de

aquí que se originasen una serie de dilaciones que impedían la marcha ordenada y metódica de la Administración, ocasionando el clamoreo, que no vacilo en calificar de injusto, de algunos pueblos porque no se les aplicaba la reforma, sin tener en cuenta que suya, exclusivamente suya era la culpa.

Los trabajos, pues, tenían que caminar con la debida parsimonia, y en la mayoría de los casos mencionados se fueron subsanando los defectos y aplicándose las ventajas de la ley, á cuyo fin se dictaron las Reales órdenes de 3 de Abril y 29 de Mayo de 1882, que establecieron las reglas para ello.

Cierto es, y no lo he ocultado, que se han cometido también errores por parte de la Administración en algunos procedimientos ; pero estos males son inevitables en asunto por su naturaleza complicado, y se ha atendido al remedio de ellos inmediatamente que han sido conocidos.

En presencia de las contrariedades que quedan expuestas, es en verdad lisonjero que la reforma se implantara y siga progresando de una manera que debe estimarse satisfactoria. En el semestre de 1.º de Enero á 30 de Junio de 1882 entraron á gozar de sus ventajas 1.269 pueblos, y en el ejercicio actual disfrutan de sus beneficios 2.752, es decir, más del doble que en el semestre anterior.

El número de pueblos que hay en la Península é Islas adyacentes se eleva á 8.778; pero debe tenerse en cuenta que de las 49 provincias, 12 de ellas no han podido comprenderse hasta ahora en los trabajos preparatorios :

Las 3 vascongadas, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que se encuentran exceptuadas por tributar á virtud de conciertos provinciales.

- 1 Navarra, que se halla tambien exceptuada por el mismo motivo que las anteriores.
- 6 Las cuatro de Galicia, Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, y las de Oviedo y León, donde el servicio no estaba aún planteado por la subdivisión de la propiedad, el sin número de foros y censos que sobre la misma pesan y otras causas que obligaron á dictar la Real orden de 7 de Noviembre de 1879, modificando algunos de los artículos del Reglamento de 10 de Diciembre de 1878 y concediendo otras facilidades que hasta de presente no han dado satisfactorio resultado.
- 2 Barcelona y Canarias; en la primera, porque, examinadas las cédulas, resultaron en su mayor parte con errores tan sustanciales que impidieron su aceptación, siendo tal la naturaleza de ellos que han dado lugar á la intervención de los tribunales para el esclarecimiento de los hechos.

12 Total á deducir de las 49 provincias.

Son, por lo tanto, 7.674 los pueblos á quienes hasta hoy puede alcanzar la reforma; de ella, como queda dicho, disfrutan, contribuyendo al 16 por 100, 2.752, esto es, más de una tercera parte de los que comprenden las 37 provincias en que la reforma ha de realizarse primeramente.

De los precitados 2.752 pueblos.

Han aceptado la riqueza designada. . . .	2.218
Han presentado reclamación de agravio. . .	534
<i>Total.</i>	<u>2.752</u>

En 1.674 pueblos ha habido un aumento de riqueza imponible de. . .	<i>Ptas.</i> 44.426.445
» 965 pueblos ha habido un aumento de riqueza imponible de. . .	» 12.885.865
<u>2.639</u> pueblos han ofrecido un aumento de riqueza imponible de. . .	» 57.312.330
En 113 pueblos ha habido una baja de riqueza imponible de. . . .	» 957.938
En los <u>2.752</u> pueblos resulta un aumento líquido de riqueza imponible de. . .	» <u>56.354.392</u>

Para terminar la exposición en cuanto se refiere al

Resultado, en verdad, lisonjero, en los primeros pasos de la reforma, y cuando en ese período disfrutaban ya de los beneficios de ella 1.269 pueblos, tributando al 16 por 100. Contestación elocuentísima para los falsos augures que pronosticaban el decrecimiento de la renta.

Por cuenta de la suma liquidada. . . .	<i>Plas.</i>	83.511.878,20
Se han recaudado en el semestre. . . .	»	80.765.543,28
Y han pasado á ejercicios cerrados. . . .	»	<u>2.746.334,92</u>

Respuesta incontestable para los que vaticinaban, ó la nulidad, ó la enorme baja en la recaudación.

Si, pues, sólo han pasado á la cuenta de ejercicios cerrados, en el semestral, pesetas 2.746.334,92, y se trata de un tributo que estaba presupuesto en los años anteriores por el duplo, toda vez que en éstos el ejercicio era anual, es evidente el aumento de recaudación obtenido en ese período de mi administración con sólo considerar lo que en aquéllos pasó á las expresadas resultas de ejercicios cerrados.

En la liquidación del ejercicio de 1875-76		
pasaron á resultas de ejercicios cerrados. <i>Plas.</i>		18.619.085,77
En el de 1876-77.	»	12.554.621,57
» 1877-78.	»	12.603.491,60
» 1878-79.	»	14.283.514,38
» 1879-80.	»	13.837.920,11

Buscando el término medio de los tres últimos años, período de mayor normalidad, correspondería proporcionalmente al ejercicio del semestre de que me ocupó 6.787.487 pesetas, y sólo han pasado á resultas de ejercicios cerrados, como queda dicho, pesetas 2.746.334,92.

No he hecho mérito del año de 1880-81, en que administré cuasi en su totalidad el segundo semestre,

porque, efecto de mi eficaz gestión, sólo pasaron á ejercicios cerrados, en el concepto de que se trata, pesetas 8.974.491,09; pero aun computada esta cifra para el término medio con la de los tres años anteriores, resultarían para el semestre 6.212.427 pesetas, cantidad siempre extraordinariamente superior á la que quedó pendiente de realización en el semestre de 1.º de Enero á 30 de Junio de 1882.

Teniendo en cuenta las contrariedades y tropiezos que lleva siempre consigo un nuevo y radical sistema, se comprenderá por la demostración precedente, no sólo el celo que la Administración desplegó, sino también la exageración con que se apreciaba la oposición que pudiera ofrecer la reforma.

Dispuesto siempre á presentar con la debida claridad y exactitud cuantos datos poseo en esta cuestión, diré que en el ejercicio corriente la suma liquidada disminuye de la presupuesta en 1.796.000 pesetas, y eso porque, en el deber de aplicar lealmente la reforma, se ha hecho extensiva á pueblos que, no teniendo defectos insubsanables en las cédulas, han ofrecido alguna baja; pero la renta recuperará para lo sucesivo, y con exceso, esa pequeña minoración, estoy seguro de ello.

Debo, sin embargo, explicar los antecedentes de esa baja, y partiendo de los datos que en su lugar correspondiente he expuesto, consignar aquí todo lo relativo á la tributación por lo que al actual ejercicio se refiere.

He explicado los aumentos y bajas que en la riqueza imponible han resultado del examen y aprobación de las cédulas en los 2.752 pueblos á quienes alcanzasen los beneficios de la reforma en el ejercicio corriente; veamos ahora las alteraciones que en la tributación han producido:

En los 1.674 pueblos en que, como queda dicho, hubo un aumento de riqueza imponible de 44.426.445 pesetas, el de la tributación fué de.				<i>Ptas.</i>	2.200.965
» 965 pueblos en que hubo un aumento de riqueza de 12.885.865 pesetas, resultó en la tributación una baja de.				<i>Ptas.</i>	3.506.099
» 113 pueblos en que la baja de riqueza fué de 957.938 pesetas, la de tributación llegó á.				<i>Ptas.</i>	491.259
				»	3.997.358
<u>2.752</u> Líquida baja en la tributación.				»	<u>1.796.393</u>

La baja de 3.506.099 pesetas en la tributación de los 965 pueblos que han tenido un aumento de pesetas 12.885.865 de riqueza imponible, consiste en que este aumento no ha sido el suficiente para compensar la diferencia entre el 21 por 100 á que antes contribuían y el 16 por 100 á que ahora contribuyen; y la baja de pesetas 491.259 en la tributación de los 113 pueblos que han tenido 957.938 pesetas de baja en la riqueza imponible, se explica por sí misma, pues la Administración, aceptando las cédulas de los pueblos, les ha reconocido una riqueza menor que la que antes representaban.

Queda expuesto que la tributación en general experimentará en el presente ejercicio una baja de pesetas 1.796.393; pero en mi deseo de no omitir explicaciones para el más perfecto conocimiento de cuanto la Administración ha practicado, he de decir que esa baja, y aun en mayor cantidad, ha sido producida en cinco pueblos, compensando la diferencia entre las pesetas 2.045.643 á que en realidad ha ascendido en

ellos, las 249.250 pesetas que han ofrecido de aumento de tributación los 2.747 pueblos restantes.

Los cinco pueblos mencionados, cuatro de ellos capitales de provincia y las razones en que la Administración se ha fundado para aceptar la baja de tributación, son los siguientes:

MADRID.

LA CAPITAL.

Que los descubrimientos de riqueza obtenidos en las cédulas declaraciones de los contribuyentes fueron comprendidos por la Comisión de evaluación en el año 1881-82 y sufrieron el gravamen del 21 por 100 entonces vigente.

Que las solicitudes presentadas pidiendo la aplicación de la reforma se fundaban en el principio legal de que todos los contribuyentes habían cumplido el artículo 24 del reglamento de 10 de Diciembre de 1878.

Que la Administración continuaba en las investigaciones de la materia imponible para cerciorarse de la verdad de las declaraciones, en aumento de la tributación.

Y por último, que la riqueza en el año 1880-81 era, en números redondos, de 40 millones de pesetas, y en el de 1881-82 se había aumentado en un millón.

ZARAGOZA.

LA CAPITAL.

Las razones expresadas respecto de Madrid son aplicables á la capital de Zaragoza para justificar la determinación de que tribute al 16 por 100.

CADIZ.

LA CAPITAL Y JEREZ DE LA FRONTERA.

Estas dos poblaciones fueron comprendidas en la reforma, porque el resultado de sus declaraciones de riqueza se hallaba en parte justificado con las comprobaciones periciales practicadas, y porque el incremento de la materia imponible ha venido reflejándose cada año en sus repartos, lo cual desvanecía, por de pronto, toda idea de ocultación notoria, y no procedía, por tanto, aplicarles el art. 5.º de la ley.

BURGOS.

Consideraciones de índole parecida tuvo en cuenta la Administración para aplicar á Burgos el art. 1.º de la ley de de 31 de Diciembre de 1881.

Resumiendo:

La baja de contribución en Madrid es de. . .	Ptas. 1.448.239
» » Zaragoza. »	69.417
» » Cádiz. »	217.946
» » Jerez. »	283.463
» » Burgos. »	26.578
<i>Suma total de las bajas. »</i>	<u>2.045.643</u>
Importan los aumentos obtenidos en las demás capitales y pueblos comprendidos en la reforma. »	<u>249.250</u>
<i>Baja líquida en la tributación, antes consignada. »</i>	<u>1.796.393</u>

La reforma está en realidad implantada con arreglo á la ley; pero para su más breve complemento, es, á mi juicio, preciso proseguir con fe y perseverancia el camino emprendido, haciendo las comprobaciones sobre el terreno y procurando se termine la clasificación de éstos y la de las cartillas evaluatorias; y á la realización de lo uno y de lo otro dedicaba toda mi atención, en la seguridad de que han de dar resultados

muy favorables para los contribuyentes y el Tesoro de consuno.

III.

¿Y qué esperanzas abrigaba la Administración sobre el progreso de la reforma hasta su terminación, á mi salida del Ministerio de Hacienda?

Mi más vivo deseo fué desde los primeros días el que se adelantase en el amillaramiento cuanto más fuera dable para ver de conseguir que en el próximo ejercicio de 1883-84 entrasen á tributar al 16 por 100 el resto de los pueblos comprendidos en las 37 provincias antes mencionadas; pero mis esfuerzos se han visto contrariados por causas diferentes.

La notoria ocultación de riqueza que existía en muchas cédulas ha obligado á la Administración á rechazarlas en virtud de la facultad que la concede la ley, teniendo necesidad en este caso, con arreglo á las disposiciones de la misma, de verificar las comprobaciones periciales sobre el terreno, procedimiento siempre dilatorio, y mucho más si se tiene en cuenta el escaso número de peritos que pueden utilizarse. Y por otra parte, cuando los pueblos no presentan todas sus cédulas, se hace preciso llenar de oficio las que falten, no encontrándose siempre personal apto y laborioso que cumpla el encargo con la rapidez y precisión que fuera de desear.

Así, pues, lo que puede esperarse, si las Administraciones aprovechan, como es de su deber, el tiempo, secundando las órdenes que con repetición tienen recibidas, es que en el próximo año económico se aumente el número de pueblos que contribuyen al 16 por 100 en una cantidad igual á la que existe al presente, lo cual dará por resultado que en 5.500 pueblos la reforma sea un hecho.

Pero es, á mi juicio, preciso además que se determine en la forma conveniente que, no obstante los repartimientos que puedan hacerse al tipo de 21 por 100 por no hallarse los pueblos en el caso de utilizar aún la reforma, se les aplicará y contribuirán al 16 por 100 en el segundo semestre cuantos llenen los requisitos de la ley, con aprobación de la Administración. De este modo aquel número podrá aumentarse brevemente, y los contribuyentes y el Tesoro tocarán los beneficios de consuno.

Debo dejar consignado que la provincia de León solicitó en 17 de Julio de 1882, esto es, corriendo ya el ejercicio actual, y por medio del Vicepresidente de la Diputación provincial, que se declarasen comprendidos en la reforma todos los pueblos de la provincia que presentaron oportunamente las declaraciones; y por Real orden de 22 de Noviembre del mismo año se dispuso que para el de 1883-84 entrasen todos aquellos que reuniesen las condiciones exigidas por la ley.

Aun cuando no es fácil asegurar hoy el número de pueblos á quienes alcanzarán los efectos de aquella disposición, es de esperar que no sea escaso si la Delegación de la provincia despliega toda la actividad procedente en el plazo que ha de mediar aún hasta la presentación de los repartimientos. No podrán ciertamente entrar todos, pues se opone á ello el que algunas de las comarcas de la provincia, especialmente las colindantes con Galicia y Asturias, se encuentran en las mismas condiciones que éstas, ya detalladas en su debido lugar.

Réstame decir que por Real orden de 22 de Noviembre de 1882 se concedió á las provincias de Galicia y Asturias, conforme con la autorización que otorgó al Ministro de Hacienda la ley de 31 de Di-

ciembre de 1881, por las condiciones especiales de la propiedad en ellas, un plazo de seis meses para la presentación de las cédulas de amillaramiento, el cual vencerá en 1.º de Junio próximo.

En vista de cuanto dejo manifestado, no será temerario asegurar que la reforma debe quedar terminada en todos los pueblos de España, y ciertamente sin gran esfuerzo, antes de comenzar el ejercicio de 1884-85; plazo que parecerá largo á algunos, pero que es en verdad mucho más breve que el que transcurrió para el completo planteamiento del sistema tributario de 1845.

IV.

He presentado á la consideración y juicio del público los antecedentes de la reforma, sus resultados en la parte que ha sido realizada, los procedimientos empleados para su prosecución, y mis esperanzas y propósitos para lo porvenir. Séame lícito ahora el intentar disipar ciertos errores en que muchos incurren al apreciar la oportunidad y consecuencias de aquélla.

Si en 1845 el ilustre hacendista D. Alejandro Mon tuvo la resolución bastante para proyectar la que llevó á cabo careciendo de estadística, de datos ciertos que sirvieran de base al nuevo tributo; si á pesar de las dificultades de momento se aclimató, y su sistema tributario, oportunamente concebido, enérgicamente implantado, vigorosamente ejecutado, ha llegado á ser la base de nuestra Hacienda, por lo que la patria le deberá eterna gratitud, y por mi parte celebro se me presente esta ocasión para rendirle el homenaje de justicia que su recuerdo merece; cuando yo contaba con elementos que él preparara, sus dignos sucesores mejoraron, y que patentizaban las desigualdades que existían en el tributo, lo perjudicados que estaban los

contribuyentes de buena fe ; cuando tenía pruebas indubitables de la ocultación ; cuando los mismos interesados la confesaban, ¿no me había de ser lícito acometer la reforma que tuve la honra de proponer á las Cortes? Sabedor de las injusticias que el sistema anterior entrañaba, ¿había de permanecer inactivo?

La oportunidad de la medida está demostrada, y voy á ocuparme de los errores en que se incurre al apreciar sus consecuencias.

Ante todo, es digno de llamar la atención el empeño que manifiestan muchos pueblos en contribuir al 21 por 100 en vez de optar por el beneficio que la ley les otorga. Para mí es, en la mayoría de los casos, la más evidente prueba de la ocultación de riqueza que en ellos existe ; aunque bien sé yo que habrá contribuyentes de buena fe que no tendrán ocultación alguna, y posible es que no falte quien se encuentre perjudicado, siendo verdaderamente lamentable que el interés de los más poderosos avasalle los suyos, pues la ley no reconoció á los individuos, sino á los pueblos, siendo otra cosa imposible por razones fáciles de comprender.

Se dirá que la resistencia nace de que la Administración les exige una riqueza superior á la que realmente tienen, lo cual es, á todas luces, completamente inexacto, pues aquélla se limita por ahora á aceptar las cédulas que se encuentren en consonancia relativa con los datos y antecedentes que posee, dignos de estima, sin llegar á depurar toda la ocultación. Si las cédulas se encuentran en otro caso, la Administración sigue los procedimientos que en todos tiempos han marcado las instrucciones para conseguir el objeto, y el derecho de exigir la comprobación pericial sobre el terreno y la reclamación de agravio la tienen siempre los pueblos.

La buena fe con que la Administración ha procedido en todos sus actos, está demostrada con el hecho de haber reconocido en muchos pueblos baja de riqueza sobre la anteriormente amillarada, según queda consignado en el lugar correspondiente.

Por falta de fundamento que tenga el error en que han incurrido ó incurren los que sostuvieron ó sostienen, afortunadamente pocos, que los contribuyentes al 16 por 100 vienen á satisfacer más cantidad que la que pagaban al 21, citando ejemplos cuya razón de ser no explican, no estará de más consagrar algunas palabras en este trabajo á la refutación de tan indefensible aserto.

Que los contribuyentes á quienes se han aplicado los preceptos de la ley de 31 de Diciembre de 1881 han obtenido ventajas positivas, ha de ser un hecho indudable para cuantos examinen atenta é imparcialmente la cuestión. El que lo es de buena fe, que en los antiguos amillaramientos tenía declarada toda su riqueza, es natural que haya consignado la misma en las actuales cédulas: pues bien, si tiene hoy como base la misma extensión tributaria, si se le computan las mismas unidades de producción y se le valoran á los mismos precios, tendrá la misma riqueza imponible que en el último repartimiento; y si en vez de pagar el 21 por 100 de ese líquido satisface solamente el 16, ¿habrá quien dude del beneficio que obtiene? El que tenía oculta una riqueza equivalente al 20 por 100 de lo que había declarado para el amillaramiento que sirvió de base al último repartimiento, aunque ahora se le aumente en 20 por 100 su riqueza, la baja del 5 en el tipo tributario representa más que el aumento en la riqueza; ¿podrá negar que obtiene ventaja, aun contribuyendo por toda su riqueza, que es lo debido? El que tenía oculta una riqueza que ex-

cediera del 31 por 100, al computarle ahora este aumento, por su propia declaración, para la designación de cuota, ha de experimentar por necesidad el correspondiente á aquel 31 por 100, y como éste representa más que la baja establecida en el tipo, se llama recargado y niega la ventaja de la reforma, pues satisface más que antes. ¿Pero puede decirse seriamente que experimenta perjuicio por contribuir con la riqueza que antes ocultaba? Si á este contribuyente se le hubiera aplicado con el rigor debido la anterior legislación, el aumento de la riqueza líquida imponible era indispensable, cobrando por ella el 21 por 100 ó el tanto á que saliese en la localidad, que en la mayoría de ellas oscilaba entre el 20,80 y el 20,99; ahora se le cobra sólo el 16, y de consiguiente, obtiene el beneficio de una rebaja de que no podría disfrutar sin la ley de 31 de Diciembre.

V.

Explicados y contestados satisfactoriamente, á mi juicio, los errores en que se incurre al apreciar la reforma, aun todavía exige el interés de mi defensa que me ocupe de las contradicciones que se me suponen y de las equivocaciones que se asegura he padecido.

Se ha pretendido encontrar una contradicción entre frases que usé en el preámbulo del proyecto de ley y los resultados que la reforma viene ofreciendo en el período transcurrido desde que empezó á plantearse. Se dice que en aquél manifestaba que de las 8.778 Juntas municipales que hay en España, deducidas las de las provincias á quienes no alcanzaba, ó que por el momento no podían comprenderse en la reforma, 6.657 habían presentado en aquella fecha las cédulas de amillaramiento, y que el Gobierno se com-

placia en consignar que, salvo algunas excepciones, los contribuyentes habían obrado con tal espontaneidad, que el Ministro que suscribía aquel proyecto afirmaba que si no habían dicho toda la verdad, podía asegurarse que en la mayoría de los casos no ofrecería ya muchos descubrimientos la confrontación parcial. Es decir, se añade, que yo creía que en brevísimo plazo podría reducirse el tipo de la contribución territorial en toda España, ó por lo menos en los 6.657 pueblos que habían presentado las cédulas de amillaramiento, al 16 por 100.

Acepto sin contradicción las premisas de ese argumento, pero no la consecuencia que se deduce, que no se encuentra consignada en frase alguna mía, y renuncio, en gracia de la brevedad, á reproducir párrafos de aquella exposición, de los que se hace caso omiso, y en los cuales se expresa claramente que los contribuyentes que no hubieran cumplido sus deberes, ó los hubiesen cumplido mal, no gozarían de los beneficios de la reforma.

Basta sólo á mi propósito dejar aquí transcrito el artículo 5.º de la ley, que dice así, de conformidad con lo que yo había propuesto :

«También continuarán tributando con el 21 por 100 aquellos pueblos cuyas declaraciones, á pesar de estar ajustadas al art. 24 del reglamento de 1878, sean rechazadas por la Administración por ocultación notoria.»

Es decir, que en el preámbulo del proyecto de ley, en éste y en la ley definitiva, se admite el principio de que, no obstante que los pueblos hubiesen cumplido al presentar sus declaraciones con todo lo preceptuado en el art. 24 del reglamento de 1878, la Administración podría rechazarlas por ocultación notoria.

¿Y podía la Administración determinar si había ó no ocultación notoria en cédulas y resúmenes en que se había partido de errores tan trascendentales como los que antes he indicado? ¿Y podía admitirlos y reconocerlos cuando conducían á lo impracticable?

Esos errores no podía conocerlos la Administración hasta que hiciera la averiguación de riqueza en vista de las cédulas, y se le formularan por los pueblos las reclamaciones oportunas; y es más, no podía ni sospechar que éstos hubiesen redactado las cédulas en su propio daño.

Se ve, pues, que el argumento de que me he ocupado carece de razón de ser, y que los procedimientos seguidos han sido los únicos que podían emplearse para llegar más ó menos pronto al fin apetecido; pues, por lo demás, es evidente que la ley reconoció que esto no se alcanzaría inmediatamente cuando en su art. 4.º decía:

«Los pueblos que sucesivamente vayan presentando y tengan aprobadas sus cédulas, entrarán á disfrutar del beneficio de esta ley en el ejercicio inmediato.»

Asimismo se ha dicho que la Administración, para proponer la rebaja del tipo tributario de 21 á 16 por 100, partió del error de suponer mayor valor al terreno y á su producción que el que en realidad tiene, y al efecto se han utilizado como argumento anuncios insertos en los *Boletines de Ventas de Bienes Nacionales*.

Tendría alguna fuerza el cargo si la Administración hubiera calculado la riqueza líquida imponible tomando como base valoraciones distintas de las que venían rigiendo; pero no habiéndose alterado las cartillas evaluatorias, notoriamente ventajosas á los contribuyentes, si los terrenos que antes se escapaban á la ac-

ción fiscal hubieran sido incluidos en el apéndice para el año 1880-81, de seguro se les hubiese valorado por los tipos vigentes, y como esto era á lo que la Administración atendía para hacer su cálculo, el error supuesto no existe, y tanto menos cuando las operaciones de los peritos en el ramo de fincas del Estado nunca pueden tomarse ni se han tomado en cuenta para los efectos de la contribución Territorial como base de ella, por las diferentes cuestiones á que siempre han dado lugar.

VI.

Doy por terminadas mis explicaciones sobre el importante asunto que me he considerado en el deber de tratar en este capítulo con cierta extensión y minuciosos detalles, esperando con la conciencia tranquila el veredicto imparcial que algún día ha de pronunciarse sobre todo cuanto he proyectado, defendido y llevado á cabo en la contribución Territorial.

De lamentar es que haya intereses de diferentes clases que se opongan á la reforma, y que en vez de ayudarla en beneficio de todos, la hayan contrariado y contraríen; pero la luz se hará, la verdad se abrirá paso, y la Historia juzgará como merezcan las respectivas actitudes que cada cual haya tenido en la empresa.

CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL

Y DE COMERCIO.

I.

Entre los impuestos en que más se dejaba sentir la necesidad de la reforma al encargarme del Ministerio de Hacienda, se hallaba sin duda alguna la contribución Industrial y de Comercio, que pudiendo y debiendo ser uno de los recursos más importantes del presupuesto, no producía ni produce aún lo debido, no obstante que tenga como base una de las principales manifestaciones de la riqueza, fundándose, como se funda, en las utilidades presumidas de la industria, el comercio, las profesiones, las artes y los oficios.

Que la reforma era necesaria, no ofrece la más ligera discusión, puesto que ya desde 1876 se proyectaba y se pidió la correspondiente autorización á las Cortes, que la concedieron tan amplia como pocas veces se ha visto por el art. 9.º de la ley de 21 de Julio de dicho año.

Razones que con exactitud no conozco, quizás las mismas dificultades que se habían opuesto á todas las reformas de este impuesto, y acaso el deseo de hacerla con pleno conocimiento del asunto, fueron tal vez

causa de que la autorización no se utilizara; pero debo consignar, en honor á la verdad, que la Administración llevaba realizados multitud de trabajos preparatorios, había coleccionado todas las reclamaciones de las diferentes clases, tenía preparada la reforma de la tarifa 3.^a, la más importante y difícil, y llegado á redactar la Dirección general del ramo un proyecto de reglamento y tarifas. Tal era el estado del asunto cuando por la dignación de S. M. me encargué de la gestión de la Hacienda.

Lícito me hubiera sido utilizar la precitada autorización, pues viva estaba la ley; pero conferida por otras Cortes y á otro Gobierno, consideré necesario solicitar una nueva del Poder legislativo. Moviíme á ello, á más de la razón indicada, el deseo de someter á la deliberación de las Cortes las bases fundamentales de la reforma, para que con su sabiduría resolviesen lo más justo y conveniente, y para que quedase limitada la libertad de acción que al Gobierno daba la concedida en 1876, pues que conocidas de todas las clases contribuyentes las nuevas bases del tributo, podrían elevar sus reclamaciones á la Representación Nacional, haciéndose de este modo la reforma con la mayor autoridad posible y salvándose cuanto fuera dable las dificultades que, como antes he dicho, surgieron siempre que se puso mano en la contribución Industrial y de Comercio.

Bien hubiera querido que la reforma propuesta hubiese sido más radical, buscando la base de las cuotas en la utilidad cierta de cada industria; pero este bello ideal de la ciencia es, al menos por ahora, de todo punto imposible de realizar, puesto que si en la contribución Territorial, donde son ó pueden ser perfectamente conocidos el capital invertido, la extensión de la riqueza tributaria, la naturaleza del cultivo y

muy aproximado el conocimiento de los gastos de producción, por no conocerse ésta con exactitud y ser los gastos variables según las circunstancias, tiene el legislador que contentarse con basar el tributo en la utilidad calculada; en la Industrial y de Comercio, donde todos los términos de la operación son inciertos, la dificultad es mucho mayor, y el legislador tiene que concretarse á buscar la base en la utilidad presumida.

Si nuestras costumbres administrativas fuesen otras, si pudiéramos confiar en la sinceridad de las declaraciones de utilidad, á éstas pudiera acudirse para que sirvieran de base á la designación de las cuotas. Pero si existen ocultaciones en la Territorial, donde la comprobación es posible, la prudencia aconseja no aceptar como base del impuesto de Subsidio las declaraciones de utilidad. En la imposibilidad de hacer una reforma radical en el sentido indicado, y en la necesidad de corregir ciertos defectos del impuesto, utilizando los trabajos ya coleccionados, examinando con el detenimiento debido la multitud de reclamaciones formuladas por las diferentes clases de contribuyentes sobre la redacción de los conceptos y alteraciones de clase, teniendo á la vista las pretensiones de algunas localidades sobre las bases de población y de varios gremios sobre la desigualdad del reparto gremial, dando la importancia debida á las indicaciones de la Administración central y provincial acerca de la deficiencia visible de la investigación y comprobación del impuesto, y buscando siempre la mayor proporcionalidad posible en el reparto del tributo, las mayores garantías para el contribuyente de buena fe, y la seguridad en la recaudación, sometí á la deliberación de las Cortes la reforma, cuyas principales bases examinaré con toda la brevedad que me sea dable.

Era evidente que con el transcurso del tiempo unas industrias habían tenido un desarrollo considerable, otras habían decrecido notablemente, y esto, á más de algunos errores en las clasificaciones que se hicieron en 1873, obligaba imperiosamente á variar las cuotas, á variar las clases, elevando la cuota de unas, rebajando la de otras.

Continuar admitiendo como única base del impuesto la población; sostener las designaciones de base hechas desde la fecha anteriormente citada, sin tener en cuenta, ya las especiales condiciones de muchas localidades, ya las ventajas por otras obtenidas con las nuevas vías de comunicación y el progresivo desarrollo de la industria, el comercio y el consumo, hubiera sido mantener la desigualdad en el tributo, y esto no era posible.

Á fin de remediar este mal sin desatender la base de población, pero no haciéndola única, se propuso que, en atención á las ventajas particulares de ciertas localidades, se tuvieran en cuenta, además del número de habitantes, las vías de comunicación que en aquéllas existiesen, la celebración de ferias y mercados que tuvieran lugar, estableciéndose por este medio mayor número de bases de población para las tarifas 1.^a y la especial de profesiones, artes y oficios, y creándose, por último, mayor número de clases, para de este modo suavizar las respectivas escalas de cuotas. Pero como estas reglas generales no podían prever la multitud de casos que se presentaran, y como las circunstancias especiales de cada pueblo pudieran llevarle á ser considerado de mejor condición que otro de igual vecindario é idénticas condiciones generales, no siendo justo que esa especialidad dejara de tenerse en cuenta para la fijación de las cuotas, puesto que por ella el comercio de la localidad obtenía mayor

lucro, y por lo tanto debía tributar más, la dificultad única podía estar en designar quién debía apreciar aquella especialidad; pero es evidente, bien meditado, que no podía encomendarse sino á la Administración, que es la más interesada en que el tributo sea justo, porque es cuando mejor se administra y más fácilmente se recauda; dando á las localidades y á las clases contribuyentes cuantos recursos eran precisos en la ley de garantía.

Existía desde 1870 una excepción del impuesto para los nuevos industriales, reforma que fué sin duda causa del retroceso que en esta contribución se notó, y que más tarde, ante los resultados que la experiencia ofrecía, quedó sólo subsistente para los contribuyentes por la tarifa 3.^a; pero considerando que esto establecía una desigualdad no en verdad justificada, y que era conveniente cortar algunos abusos que á la sombra de esa excepción se cometían, propuse su supresión.

Tenía el impuesto un defecto esencial, cual era la organización de los gremios, que creados como poderosos auxiliares de la Administración, por su manera de constituirse, por su modo de funcionar, por lo absoluto de sus resoluciones, habían venido á ser una rémora constante para la buena marcha de la administración del impuesto, dando lugar, en algunos casos bien patentizados por la Administración, y que me permití indicar en el preámbulo que precedía al proyecto de ley, á desigualdades importantes en el reparto gremial y á perjuicios evidentes para el Tesoro.

Semejante estado de cosas no debía continuar, sobre todo, ese absolutismo que al hacer el reparto ejercía el gremio, cuyos acuerdos eran inapelables, y sin que á la Administración le fuera posible evitar las in-

justicias que al amparo de esa tan amplia facultad se cometieran.

Para evitar esos inconvenientes, se propuso en el proyecto que la Administración pudiera intervenir en el nombramiento de síndicos y repartidores, y que tuviera la facultad de presidir los actos de clasificación; se dió además á los contribuyentes el recurso de agravio comparativo, pues no se concibe que donde quepa una lesión de derecho no se conceda el de su reclamación, que en este impuesto no existía en todo cuanto los gremios hacían en el reparto de las cuotas.

Había más: limitada la facultad de los repartidores á rebajar á una cuarta parte la cuota y aumentar el cuádruplo, los gremios que cumplían escrupulosamente su deber se veían en la imposibilidad de ser muchas veces justos y equitativos en el reparto, por los límites que la ley ponía al máximo y minimum de la escala de cuotas gremiales; y para corregir ese defecto se amplió la facultad al décuplo y la décima parte, haciendo así más extensa y, por lo tanto, más suave la escala, pudiendo el gremio de este modo buscar toda la proporcionalidad conveniente en el reparto de cuotas.

Esto podía hacerse, con la reforma propuesta, en donde el gremio existía; pero en las localidades donde no era posible, por no tener número bastante de contribuyentes de la misma clase, ó porque éstos no querían agremiarse, según las disposiciones de 1873 todos los contribuyentes tenían que satisfacer la cuota fija, fueran las que quisieren las utilidades que de su industria obtuviesen, dañando así al pequeño industrial, favoreciendo al grande; para que esto desapareciese, se propuso conceder á la Administración la facultad de señalar las cuotas dentro del máximo y el minimum de la escala, que nadie como la Administración

podía usar de esa facultad, y de este modo no vendría á tributar por igual cantidad el que se manejaba con un escaso capital que el que lo hiciera con uno crecido.

Por último, se sentía la necesidad de la reforma en la organización de la administración del impuesto, encomendada á funcionarios que no alcanzaban el carácter de empleados públicos, ni tenían los derechos que los demás auxiliares de la Administración, ni menos asegurada la realización de los emolumentos que legítimamente ganasen en sus trabajos de investigación y comprobación. Este mal demandaba un remedio, pues la mejora de esta renta estriba quizás más que en la elevación de cuotas en hacer que contribuyan todos los que deban hacerlo, para que la ley se aplique por igual y para que los contribuyentes de buena fe no sufran la competencia de los que se libran del tributo.

Al efecto, se propuso la creación del cuerpo de Inspectores de la contribución Industrial y de Comercio, mejor dotados que antes lo estaban, sin aumentar por esto el presupuesto de gastos, con iguales derechos que los demás empleados de la Administración, exigiéndoles idénticos requisitos que á éstos, asignándoles una considerable parte de las multas y recargos, y, sobre todo, ofreciéndoles la seguridad y la prontitud en el percibo de los emolumentos que en el ejercicio de su cargo les correspondiesen.

Éstas fueron las principales bases de la reforma que tuve la honra de someter á las Cortes, expresando claramente en el preámbulo del proyecto las razones que á ello me movían, los vicios que trataba de corregir y los medios que me proponía emplear para conseguir el fin propuesto. Y sin embargo, aun cuando la discusión fué, como siempre, completamente libre, y

no obstante el tiempo que medió desde la presentación del proyecto hasta su definitiva aprobación, ni ante el Congreso, ni ante el Senado, ni en la Prensa, ni en otras partes, se formularon reclamaciones serias contra la reforma; prueba evidente de que por todos era considerada como justa, equitativa y conveniente á los intereses de los contribuyentes y del Tesoro.

Si así no lo hubiesen creído las clases interesadas, se hubieran apresurado á utilizar el derecho de petición, hubieran elevado sus quejas á la Representación Nacional, para que las tuviera en cuenta en sus deliberaciones.

II.

Aprobado el proyecto con dos solas modificaciones, una reducir al óctuplo y octava parte el límite de la escala gremial, otra determinar que la Administración quedaba facultada para el nombramiento de la mitad de los representantes del gremio y de los reparadores; sancionada la ley, se aprobó por S. M. el reglamento provisional de la contribución, en el que la Administración utilizó la autorización por la ley concedida, en los términos que consideró convenientes, siempre sin extralimitarse en lo más mínimo, antes bien no utilizándola del todo en alguno de los puntos.

Se ampliaron las bases de población, se aumentaron las clases por lo que hacía relación á las tarifas 1.^a y especial de profesiones, artes y oficios; se fijaron las cuotas refundiendo en ellas los recargos, cosa que estaba plenamente comprendida en la autorización, puesto que concedía la facultad de elevarlas y disminuirlas; se hizo nueva clasificación en las tarifas, en consonancia con lo que la equidad aconsejaba; se alteró la redacción de algunos conceptos; se redactó

la tarifa 3.^a, alterando las bases de la liquidación del impuesto, pero sin variación apreciable en el resultado de la cuota, tomando sin alteración en este punto el trabajo de antemano preparado por los ingenieros industriales que estaban al servicio de la Dirección del ramo; se modificó la redacción de algunas de las disposiciones generales del reglamento, siempre en beneficio de los contribuyentes de buena fe; se fijaron las reglas para la constitución de los gremios, determinando las condiciones que debieran tener, tanto los representantes que el gremio designara, como los que la Administración nombrase; se marcaron los procedimientos de la investigación y comprobación y los de los recursos de agravio, señalando á la vez las atribuciones que la nueva ley daba á la Administración en todo lo que á la agremiación se refiere; en una palabra, se reglamentó la reforma para su inmediata aplicación. Y sin embargo de que el Gobierno se atuvo estrictamente á las facultades que la ley le concedía, que sus propósitos eran de todos conocidos, pues al efecto había llegado á ser hasta prolijo en la exposición de motivos y en las discusiones ante las Cortes, no obstante que ninguna reclamación seria se había formulado desde el 24 de Octubre hasta el 31 de Diciembre, en que la ley fué sancionada, á pesar de que el reglamento tenía el carácter de provisional y era público que se pensaba en la inmediata redacción del definitivo, todos recordarán, con tristeza ciertamente, la serie de dificultades que se suscitaron después, y que la prudencia y la naturaleza de este trabajo me vedan calificar como tuviera derecho á hacerlo.

El pretexto que se tomó en los primeros momentos desapareció bien pronto ante su inexactitud, y fué reemplazado por el de la exageración de las cuotas.

Inútiles fueron cuantas aclaraciones hice; de nada sirvieron comparaciones publicadas en la *Gaceta* por la Dirección de Contribuciones para la más fácil inteligencia de las nuevas tarifas, de las que resultaba plenísimamente demostrado que la inmensa mayoría de las clases, ó pagaban menos, ó satisfacían lo mismo, siendo contadas las que salían recargadas : la pasión se había apoderado de algunos ánimos, y fueron tantas y tales las dificultades que se opusieron, que al pronto pareció á algunos de imposible realización la reforma.

No faltó quien creyera que era necesario y conveniente transigir ; pero ¿qué hubiera sido del prestigio del Poder legislativo y del principio de autoridad accediéndose á las pretensiones extraoficialmente indicadas, en la forma que se hacían? Escuchar esos consejos equivaldría á renunciar á toda reforma tributaria que no se hiciera directamente de acuerdo con los contribuyentes.

En tal situación , no era dable al Gobierno seguir otra línea de conducta que la que su dignidad le aconsejaba, la de la firmeza en el mantenimiento de sus resoluciones legales; procedimiento que si siempre es conveniente, lo es aún más cuando se apela á resistencias como la que el País ha presenciado.

Felizmente, siendo la inmensa mayoría de las quejas injustificadas y la reforma conveniente á los contribuyentes y al Tesoro, la verdad se abrió paso, la calma substituyó á la pasión, y los detractores de la reforma pudieron convencerse de que la casi totalidad de las clases, ó salían beneficiadas ó sin alteración perceptible, que eran muy pocas las que resultaban recargadas en sus cuotas en cantidad de alguna importancia, y que los aumentos acordados estaban por punto general justificados, como más tarde se vió de una manera palmaria.

III.

En efecto : luego que la reforma se iba planteando; cuando las nuevas cuotas, ya liquidadas por la Administración teniendo en cuenta el reparto gremial que había servido para el primer semestre de 1881-82, llevado á cabo por el régimen anterior, se hacían efectivas y las clases todas satisfacían con más ó menos regularidad el tributo ; cuando, en una palabra, la resistencia no tenía ya el carácter de imposición, y por tanto, el prestigio del Poder legislativo y del principio de autoridad nada sufrían, á lo que contribuyeron, y no poco, algunas Sociedades que dieron en aquel entonces evidentes muestras de patriotismo y de prudencia, atender las reclamaciones que pudieran ser justas era conciliar los intereses del contribuyente y del Tesoro, y no transigir con humillación y desprestigio. Expedida también la Real orden de 6 de Febrero de 1882 concediendo el plazo de un mes para que todas las clases que se creyeran lastimadas en sus intereses, y los contribuyentes que se considerasen indebidamente recargados, formularan las reclamaciones, para ser estudiadas y tenidas en cuenta, en lo que procediese, al redactarse el reglamento definitivo, y aun cuando esto último era misión exclusiva de la Administración activa, y ni los contribuyentes ni las clases ni corporación alguna tenían derecho á intervenir en la redacción del proyecto de reglamento, como no fuera ejercitando el derecho de petición, deseoso el Gobierno por una parte de demostrar que la reforma se había llevado á cabo dentro de la justicia, de la equidad y de la conveniencia, y por otra, de que al hacerse el reglamento y las tarifas definitivas las clases contribuyentes no tuvieran

el más ligero pretexto que oponer, nombró una Comisión mixta, compuesta de elementos administrativos y contribuyentes de respetabilidad, que reuniendo los antecedentes tenidos á la vista por la Administración para proyectar la reforma y todas las reclamaciones formuladas á consecuencia de la Real orden de 6 de Febrero, procediera á la redacción de los precitados proyectos.

No creería cumplir mi deber si no hiciera constar aquí el celo y patriotismo de que dicha Comisión dió relevantes pruebas, con una asiduidad, una prudencia y una abnegación dignas de todo encomio, venciendo cuantos obstáculos se la presentaban, atendiendo las reclamaciones de justicia, desechando las improcedentes, transigiendo en lo que la dignidad de unos y otros permitía, y armonizando, en fin, cuanto era dable los intereses públicos y los privados. Llenó su cometido en términos que el Gobierno de S. M., en aras de la conciliación, y puesto que las bases de la reforma habían sido admitidas en la esencia por los contribuyentes, aceptó el proyecto, resolviendo sólo por sí lo relativo á la base de población de determinadas localidades, punto sobre el cual la Comisión no emitió juicio por creer debía dejarlo integro á la resolución del Gobierno.

Varias fueron las alteraciones que se introdujeron en el reglamento y tarifas provisionales de 31 de Diciembre, pero solamente me ocuparé de las más importantes, pues que las de detalle, como son las que se reducían á redactar de diferente modo ciertos conceptos de las tarifas, en poco ó nada alteraban el anterior precepto, y en la mayoría de los casos no tenían otro fin que aclarar la redacción para evitar dudas en lo porvenir en los expedientes de comprobación.

El primer punto de discusión, y en verdad el más

importante, fué el relativo á la refundición de los recargos en las cuotas. En las tarifas provisionales, en que pudieron fijarse éstas en la cantidad que se estimase conveniente y justa, se procuró señalar á las respectivas clases, por punto general, lo mismo que venían satisfaciendo; y como algunas pagaban á más de la cuota dos recargos de á 15 por 100 cada uno, se aumentó este 30 por 100 á las correspondientes nuevas cuotas. Es de advertir que algunas de las industrias habían sido antes exceptuadas por la instrucción de 27 de Julio de 1876 y Real orden de 31 de Julio de 1877 de uno de los precitados recargos, el que se estableciera en equivalencia del sello de ventas; pero, en mi opinion, se había ido más allá del espíritu de la ley, sobre todo, después de los términos absolutos del art. 7.º de la ley de 11 de Julio de 1877. Persuadido de que sostenía los buenos principios manteniendo íntegros los dos recargos para todos los sujetos á ellos por la ley, y puesto que la autorización concedía la facultad de señalar la cuota sin determinar límite, se adoptó la resolución antedicha.

Pretendíase por algunos que las excepciones continuaran en principio, y que en consecuencia con esta idea se fijasen las nuevas cuotas; y tras largas discusiones se llegó por fin á un acuerdo, que consistió en aumentar el 20 por 100 en vez del 30 á todas las cuotas, sobre la cantidad señalada en tal concepto en las tarifas de 1873.

La segunda cuestión que se suscitó fué la referente al nombramiento de síndicos, sosteniendo unos que debían ser de la libre elección del gremio, sin limitación alguna, sosteniendo otros que debía confirmarse lo establecido en el reglamento provisional. Parecía ser ésta la cuestión de solución más difícil, pero el patriotismo de todos condujo á términos de avenen-

cia, proponiéndose que los síndicos fueran elegidos por el gremio, presidido por la autoridad económica, entre los agremiados que en el año anterior hubiesen satisfecho, cuando menos, la cuota fija y estuviesen al corriente en el pago de la cuota, no pudiendo ser reelegidos por dos años consecutivos; y que los clasificadores fueran designados, la mitad por el gremio y elegida la otra mitad por la Administración en sorteo, siendo preciso, para que la elección fuese válida, que recayera en individuos que estuvieran al corriente en el pago de la contribución.

Fué el tercer punto de controversia la fijación del maximum y el minimum de la escala para el reparto gremial de las cuotas, observándose desde luego idéntica diversidad. Esta cuestión afectaba directamente y en primer término á los contribuyentes, porque la Administración siempre recibiría el importe íntegro del total de las cuotas de los agremiados, puesto que los defectos del anterior sistema de reparto, que podía perjudicar al Tesoro, habían desaparecido con la intervención de la Administración y el recurso de agravio, que subsistían; pero, esto no obstante, la Administración estaba interesada en hacer más extensa la escala para acercarse más á la proporcionalidad. Llegóse asimismo á un acuerdo, fijando el maximum en el cuádruplo y el minimum en la cuarta parte, pudiendo ampliarse hasta el óctuplo y la octava parte si lo pedían las dos terceras partes de los individuos agremiados.

El cuarto punto de discusión fué la extensión que debería darse á la facultad de establecer almacenes de venta por los fabricantes, sin necesidad de pagar otra cuota que la de sus fábricas por los productos de las mismas, conviniéndose que pudieran establecer un almacén en el punto que creyeran conveniente

dentro de la provincia, dando á la Administración los medios de poder comprobar en todo caso que en el almacén solamente se vendían los productos de dichas fábricas; y asimismo se vino á un acuerdo en el punto relativo á la manera de entenderse lo que se tiene por ventas al por mayor y menor, adoptándose el temperamento más conforme con la sinceridad con que deben ser interpretadas las leyes fiscales, que son de armonía entre el Estado y el individuo.

Estos fueron los principales puntos de controversia; y aun cuando mis opiniones personales no están del todo conforme con algunas de las resoluciones adoptadas, en mi propósito de la conciliación, en vista de las patrióticas transacciones hechas por los contribuyentes, teniendo en cuenta antecedentes, y puesto que en lo esencial se respetaban las bases todas de la reforma, asegurándose los intereses del Tesoro y corrigiéndose los defectos de la anterior legislación, lo que no podía conceder ni admitir en medio de la resistencia activa, lo acepté cuando en las vías no ya legales, sino aun amistosas, se solicitaba, porque en este instante transigir era conciliar y no abdicar con humillación.

Respetadas, repito, en lo esencial las bases de la reforma, los contribuyentes mismos vinieron á sancionarla, dando la Administración por su parte una prueba inequívoca del deseo que la animaba de conciliar todas las opiniones, aunque experimentasen algún perjuicio los intereses del Tesoro, el cual será indudablemente subsanado si la investigación despliega todo el celo que su cometido exige.

IV.

Planteada la reforma, restaba solamente organizar

en consonancia con la ley la administración del impuesto, crear el Cuerpo de investigadores.

No era esto fácil, en verdad, si había de hacerse con el debido cuidado, y convenía, y no poco, estudiar las circunstancias, que no eran las más favorables para su inmediata organización.

En primer lugar, reformados el reglamento y las tarifas, la prudencia aconsejaba no investigar ni comprobar sino después del tiempo preciso para que los contribuyentes voluntaria y espontáneamente se pusieran al amparo de la ley. Y siendo provisionales las tarifas y el reglamento de 31 de Diciembre, y pensándose en hacer inmediatamente el definitivo, era oportuno no violentar la investigación. Dada la situación que se había establecido por la pasión de algunos, como antes he dicho, crear el Cuerpo, impulsar vigorosamente la investigación, hubiera sido quizás dificultar la realización de la reforma.

Por estas razones detuve la creación del Cuerpo; y cuando aquellas circunstancias hubieron desaparecido, cumplí esta parte de la ley, procurando escoger el personal más idóneo, el más especial para este servicio, separando á aquellos que no respondían á los fines que me propusiera de la nueva investigación.

Seguro estoy de que siguiéndose este criterio llegará á organizarse un Cuerpo administrativo que ofrezca grandes resultados; y confío que se seguirá, porque, cualquiera que sea el que ocupe la cartera de Hacienda, ha de estar interesado en el bien de los contribuyentes y en el del Tesoro.

Aplicándose con energía los preceptos del reglamento de investigación, observándose con escrupulosidad las disposiciones del reglamento y las tarifas de la contribución de 13 de Julio último, sin vejámenes para el contribuyente, con notorios bene-

ficios para todos los de buena fe, esta contribución ofrecerá en no lejanos días los resultados que el legislador se propuso, llegando á ser uno de los más pingües ingresos del presupuesto, sin que la carga sea abrumadora ni aun pesada para los contribuyentes. Y cuando andando el tiempo y normalizada la administración del impuesto puedan hacerse todas las alteraciones parciales en las bases en que deben ser comprendidas determinadas localidades por sus especiales condiciones; cuando la Administración pueda hacer en todos los pueblos y para todas las clases en que la agremiación es imposible la designación de las cuotas á los distintos contribuyentes no agremiados, que si no pudo tener efecto inmediato ni aun para este ejercicio, podrá llevarse á cabo para el que empezará en Julio, la contribución Industrial y de Comercio será lo que debe ser, tocándose por todos los beneficios de una reforma tan injustamente combatida y que tan provechosos resultados ha de dar para los intereses del Tesoro y los de todas las clases á quienes directamente afecta.

Cumplido el deber de explicar los antecedentes y fundamentos de la reforma, que creo haber llenado con la sinceridad y franqueza que el asunto demandaba, no será inoportuno examinar sus resultados bajo otro punto de vista; el que se relaciona con el Tesoro público.

V.

Á fin de que pueda juzgarse con perfecto conocimiento de datos del resultado de las reformas, de mi gestión administrativa y del celo con que la Administración ha procedido, creo oportuno dejar consignados los créditos presupuestos y recaudaciones obte-

nidas desde el ejercicio de 1876-77 al semestral de 1.º de Enero á 30 de Junio de 1882 por el concepto de contribución Industrial y de Comercio, con las observaciones que naturalmente se desprenden de las mismas cifras.

	Créditos presupuestos y recaudaciones obtenidas.	DIFERENCIAS EN LA RECAUDACIÓN.	
		De más.	De menos.
Se presupuso en 1876-			
77.	24.000.000 »		
Se recaudó.	25.887.985,26	1.887.985,26	»
Se presupuso en 1877-			
78.	35.400.000 »		
Se recaudó.	31.249.292,36		
Se presupuso en 1878-		»	4.150.707,64
79.	37.400.000 »		
Se recaudó.	31.280.395,77	»	6.119.604,23
Se presupuso en 1879-			
80.	37.400.000 »		
Se recaudó.	30.028.676,22	»	7.371.323,78
Se presupuso en 1880-			
81.	37.400.000 »		
Se recaudó.	32.417.948,18	»	4.982.051,82
Se presupuso en el 1.º			
semestre de 1881-			
82.	18.700.000 »		
Se recaudó.	17.199.254,30	»	1.500.745,70
Se presupuso en el 2.º			
semestre de 1881-			
82.	16.500.000 »		
Se recaudó.	19.783.137,69	3.283.137,69	»

Y pasaron aún en este semestre á la cuenta de *Resultas de ejercicios cerrados*, Ptas. 1.869.773,43.

Es de notar en primer lugar, que, excepción hecha del año 1876-77, en ninguno de los siguientes hasta

el ejercicio del segundo semestre de 1882 las cantidades recaudadas llegaron ni con mucho á las presupuestas; y en segundo, que en el ejercicio semestral de 1.º de Enero á 30 de Junio, la recaudación se elevó á una suma mayor que la prevista y muy superior á las cantidades presupuestas y realizadas en ejercicios anteriores.

Con efecto, la mayor suma presupuesta corresponde á los ejercicios de 1878-79, 1879-80 y 1880-81, en los que se consignaron 37.400.000 pesetas, cuya mitad es pesetas 18.700.000, y la mayor recaudación tuvo lugar en el de 1880-81, ascendiendo á pesetas 32.417.948,18, siendo su mitad 16.208.974. Y habiendo yo recaudado en el semestre 19.783.137,69 pesetas, es evidente que he excedido en sus resultados á las previsiones de mis dignos antecesores en pesetas 1.087.137 y en la recaudación en 3.574.163.

Datos elocuentes para dejar contestada tanta injusta censura como se ha formulado contra mí, pues los contribuyentes hicieron efectivo el tributo, el Tesoro obtuvo beneficios, y la Administración, serena y tranquila, llevó á cabo la reforma en medio de las contrariedades que á cada paso se la suscitaban.

Por lo que respecta al ejercicio actual, en el que se han de sentir los efectos del nuevo reglamento y tarifas, y por lo tanto la baja del 10 por 100 hecha en el conjunto de los dos recargos de 15 por 100 que se habían englobado, que en realidad importaría 3.900.000 pesetas, el resultado será igualmente satisfactorio, pues deducido el expresado 10 por 100 de las pesetas 39.560.000 que con arreglo á lo recaudado en el semestre corresponderían al año, darían por resultado una baja de 3.956.000 pesetas, ó lo que es lo mismo, que la recaudación quedaría reducida á 35.600.000 pesetas, cantidad muy superior á todas las

recaudadas en los años precedentes, y que excede en más de dos millones de pesetas á lo presupuesto.

Mas si se considera que pasaron á la cuenta de *Resultas de ejercicios cerrados* en el semestre de 1.º de Enero á 30 de Junio de 1882, como queda consignado, pesetas 1.869.773,43 que corresponden á 3.739.546,86 en el año, todavía, deducido el 10 por 100 por las rebajas hechas en las nuevas tarifas, darán un aumento en la contribución, hoy ya fácil, de más de 3.360.000 pesetas, que unidas á las 35.600.000, elevarán aquélla á 38.960.000 pesetas, cuya suma excede también notablemente á los 37 millones presupuestos como máximun en los años antes mencionados.

Si no se desmaya en la investigación, y la Dirección general de Contribuciones, á quien más especialmente incumbe, emplea todo el celo que hasta de presente ha empleado, la reforma llegará á ser altamente provechosa para los intereses públicos al propio tiempo que para los contribuyentes.

IMPUESTO DE DERECHOS REALES.

I.

Aun cuando de todos los impuestos que constituyen nuestro sistema rentístico era éste el que se regía por preceptos más conformes con los principios de la ciencia, y aunque en las disposiciones que lo regulaban cuando ocupé el Ministerio de Hacienda quizás estaban previstos todos los casos ó la inmensa mayoría de los que pudieran someterse á la acción fiscal, observábase cierta deficiencia en algunos puntos y, sobre todo, adolecía de algunos defectos que, considerándolos importantes, me decidieron á proponer la reforma, cuyos resultados desde luego se obtuvieron, y se obtendrán mejores á medida que el tiempo pase, en beneficio del Tesoro y de los contribuyentes.

Si todos los preceptos por que el impuesto se regulaba hubieran emanado de la ley, insignificantes habrían sido las reformas que hubiesen sido propuestas, porque, en honor á la verdad, se había adelantado mucho para llegar á la perfección del impuesto; pero como la mayor parte de los preceptos emanaban de los reglamentos, muchos de Reales órdenes, ya generales, ya particulares, que establecían jurisprudencia,

y no pocos de decisiones adoptadas por el Centro directivo correspondiente, siquiera la inmensa mayoría estuviesen basadas en la justicia, ni tenían la fuerza debida para que por todos fuesen respetados, ni reunían la estabilidad propia de las disposiciones legislativas, puesto que estaban sujetos á las diversas opiniones de los que tuvieran la facultad de reglamentar, aplicar é interpretar la ley; diversidad que hacía punto menos que imposible el conocimiento perfecto de las reglas á que los contribuyentes debían atenerse, dando lugar en muchas ocasiones á que incurrieran en multas, siempre sensibles.

Cierto es que, encomendada la administración del impuesto principalmente á un cuerpo pericial, la jurisprudencia era casi uniforme; pero como ésta, si era conocida de la Administración, no podía serlo tanto del cuerpo contribuyente ni, en muchos casos, de los que tenían que intervenir por sus oficios en los actos y los contratos, urgía, en mi opinión, comprender en la ley todo aquello que es propiamente materia de ella; limitar las facultades reglamentarias, las cuales, respecto á la imposición de tributos, no deben extenderse sino á lo absolutamente indispensable; dar fijeza y estabilidad á los preceptos; y medio fácil á los contribuyentes, y sobre todo, á los que por sus oficios deben intervenir en los actos y contratos, para conocer cuáles eran sus deberes; que, de otro modo, nada de extraño tenía que faltasen á ellos, no pudiendo siempre determinarse si lo hacían voluntaria ó involuntariamente.

Éste fué el fin primordial que me propuse con la reforma, pero no el único, puesto que, de emprenderla, preciso era corregir algunos otros defectos que la experiencia había patentizado y cuya desaparición á todos interesaba.

La diversidad de tarifas que existía para las herencias y los legados no tenía en verdad razón de justicia que la abonase, pues no se comprende que en dos transmisiones de bienes en que eran iguales el transmitente y el adquirente y el documento en que se hacía constar la traslación del dominio ó del derecho real, é igual también el importe, se pagase diferente tributo según que fuese herencia ó legado, aparte de que el señalar una tarifa más alta á éstos era sin duda alguna contrariar el principio de la libertad de testar, puesto que el adquirir por legado era más costoso que adquirir por herencia.

La justicia, pues, demandaba la unidad de las tarifas, y así se propuso, haciéndola más equitativa y quitando á la vez las fracciones decimales con objeto de facilitar las operaciones de liquidación y evitar equivocaciones, que ocasionaban á veces mucho trabajo á la Administración para deshacer los errores que involuntariamente se cometían.

Con esta última modificación se ha conseguido además facilitar la estadística del impuesto, porque ofrece menos dificultades el examen de los estados que la Administración provincial remite á la central, y es dado á ésta conocer más prontamente los errores que aquélla pueda cometer.

No entrañaba menor importancia otra de las reformas propuestas, cual era la relativa á suavizar por medio de una escala proporcional el tipo de liquidación para las hipotecas que garantizan préstamos, cuestión en extremo delicada, pero que urgía resolver en beneficio del crédito territorial, y que si bien á primera vista parecía amenguar los rendimientos del Tesoro, la multiplicidad de los actos venía á aumentarlos, con evidente beneficio de los que al préstamo tienen que acudir.

Conforme en que por la constitución y extinción de un derecho real se pague el tributo, siempre consideré conveniente que fuera muy llevadero, tanto á fin de facilitar el préstamo á los que por necesidad recurren á él, como con objeto de facilitarle para los que por conveniencia acuden á este medio poderoso de desarrollar la riqueza.

Tal como al presente se encuentra el crédito territorial, siendo mayor la demanda que la oferta del numerario, el prestamista impone la ley al prestatario, y dicho se está que á éste se cargan todos los tributos que por los contratos hayan de satisfacerse.

Como en España no se acostumbran los préstamos por largo plazo, porque en la generalidad de los casos representan una necesidad, no una conveniencia, cuanto más corto fuese el plazo más gravoso era el impuesto, en términos que, de satisfacer el 1 por 100 á la constitución y el 1 por 100 á la extinción, si el préstamo era por un año, resultaba gravado con un 2 por 100 anual, que con los gastos de escritura, papel, registro y liquidación venían á hacer punto menos que imposibles los préstamos hipotecarios, dando lugar á que se hicieran escriturarios y aun simplemente quirografarios; pero como en éstos la seguridad no es tanta para el prestamista, el prestatario la pagaba con un aumento de interés, de modo que el Tesoro perdía sus derechos, al que recibía el dinero le costaba lo mismo y el que lo daba no quedaba tan garantido. Además, no era justo que pagara igual tributo aquel que obtenía el beneficio del Estado por cuatro años que el que solamente le disfrutaba por uno.

También convenía, y mucho, ir extendiendo el crédito territorial, pues que aminorando de día en día la ganancia para el numerario en las operaciones bancarias y bursátiles, abundando bastante el numerario en

las grandes capitales, haciéndose la competencia en términos que el interés disminuya, á poco más que mejore nuestro crédito, el dinero tendrá que ir á los campos, é interesa sobremanera dar vida al crédito territorial, para que los capitales que á él afluyan, encontrando desde luego la seguridad, puedan fácilmente hacer las transmisiones y no tengan por la falta de aquélla que pretender gran lucro.

Á conseguir estos fines tendí al proponer la modificación del impuesto en este punto, estableciendo una escala gradual, según la duración del préstamo, rebajando desde luego el tipo: reforma que no ha ofrecido peligro alguno para el Tesoro, y que ofrecerá, no debo dudarlo, ventajas considerables para el porvenir, tanto bajo el punto de vista financiero como bajo el económico.

Otro de los defectos que encontraba en el impuesto era el sinnúmero de excepciones que existían, preceptuadas unas por la ley, otras por los reglamentos, otras por Reales ordenes aclaratorias, y aun algunas por la jurisprudencia establecida en distintas resoluciones recaídas en casos particulares.

No diré que en algunos las circunstancias no pudieran disculpar las exenciones acordadas; pero es indudable que contrariaban en su esencia la naturaleza del impuesto, que, ó no debería existir, ó existiendo, todo acto ó contrato debe estar sujeto á sus prescripciones.

Si por el servicio que el Estado presta garantizando toda adquisición se obliga al pago del impuesto, allí donde la hay, allí donde el servicio se presta, la retribución es necesaria, no debiendo admitirse otra excepción que aquella en que el adquirente es el Estado, que no ha de pagarse á sí propio el beneficio que se presta, retribuyendo por ello á los que le auxi-

lian en las funciones administrativas. Podrán razones de equidad y aun de justicia hacer que por unas adquisiciones se pague más que por otras; pero siempre debe pagarse por todo acto ó contrato traslativo de dominio ó de derechos reales.

Esta escala debió quizás proponerse al proyectar la reforma, pero había una dificultad. Venían exceptuados muchos actos y contratos, y como siempre es duro pasar de la exención al pago, lo que interesaba era sujetarlos á todos al impuesto. De aquí el tipo insignificante, 0,10, que se señaló para todos los que estaban antes exceptuados; pero no era esto definitivo, sino transitorio, hasta tanto que, olvidada la costumbre de no pagar, la experiencia y un detenido estudio demostrasen lo que la justicia aconseje y la conveniencia demande. Siendo tan ínfimo el tipo fijado, las quejas eran imposibles, la experiencia no puede ser costosa, y en día no lejano podrán señalarse los tipos por que deban liquidarse esos actos, sin detrimento sensible de los intereses de los adquirentes y con notoria ventaja de los del Tesoro.

Por último, abrazaba la reforma otro extremo, interesante sin duda, que por circunstancias independientes de mi voluntad no ha podido llevarse á cabo.

La principal base de la administración de todo impuesto está en la liquidación. La del que ahora me ocupo está encomendada á funcionarios muy dignos, como son los Registradores de la Propiedad, pero que como no dependen directamente del Ministerio de Hacienda, la autoridad que éste ejerce sobre ellos no es bastante, y además, teniendo otra misión más importante y más reproductiva, no es extraño que la den la preferencia, tanto más cuanto que para muchos la liquidación del impuesto, en vez de ven-

tajas les proporciona perjuicios, hasta el punto de que, á excepción de una minoría, los demás constantemente estaban indicando la conveniencia de que se les dispensase del cuidado de la liquidación.

Había otra razón no menos atendible para separar la liquidación del Registro, y es la de que el funcionario que mejor puede ejercer la fiscalización en las liquidaciones, por regla general, es el Registrador de la Propiedad; y si él es el liquidador, la fiscalización desaparece poco menos que en absoluto.

Aun cuando siempre he creído y sigo creyendo en las ventajas de separar la liquidación de los registros, no pude realizar desde luego la reforma en este punto, si bien la preparaba para el año económico próximo venidero. Como debían proveerse las plazas por concurso, y la ley establecía ciertas preferencias, no era fácil crear el Cuerpo en breve tiempo ni separarse de los preceptos legales: por otra parte, como el impuesto se hallaba establecido y la administración organizada, y, en los primeros instantes, de todas las reformas económicas urgía el plantear las que más modificaciones entrañaban, á ellas di la preferencia; pero á poco me ocupé de la creación del Cuerpo de liquidadores, abriendo el concurso y formando una Junta ó Comisión que hiciese el estudio de las hojas de méritos y servicios de los reclamantes y propusiera los nombramientos que considerara convenientes y justos.

Otra razón tuve después para demorar el nombramiento de los liquidadores, fundada en consideraciones de un orden más importante.

Era ya público el propósito de llevar á cabo una nueva organización del Poder Judicial, creando tribunales por lo menos en las capitales de provincia, y preveía que acaso pudiera ser necesario tener que

atender á la defensa de ciertos intereses de la Hacienda por agentes auxiliares que no formaran parte del Ministerio público. Ante esta idea, comprendí que quizás sería conveniente utilizar todos los elementos que la Administración tenía para buscar entre ellos los medios de hacer frente á esa necesidad, y por esta consideración creí prudente suspender el nombramiento de liquidadores, tanto más, cuanto que no estaba fijada en la ley la época en que había de efectuarse la organización del Cuerpo. Y no quedando abandonado el servicio de la liquidación, daba el tiempo suficiente para aguardar y en su caso modificar la ley por medio de otra que presentara á las Cortes.

Por último, para dar un conocimiento perfecto de los aumentos sucesivos que ha tenido este impuesto desde el ejercicio de 1876-77, y pueda al propio tiempo juzgarse de los resultados de la reforma en el segundo semestre de 1881-82, me ha parecido oportuno dar término á este asunto con la presentación del siguiente cuadro.

PRODUCTOS DEL IMPUESTO DE DERECHOS REALES.

	CANTIDAD presupuesta.	CANTIDAD recaudada.
1876-77.	17.000.000	20.636.363,98
1877-78.	21.000.000	21.442.073,95
1878-79.	21.500.000	21.116.365,54
1879-80.	21.500.000	21.760.354,53
1880-81.	22.000.000	24.122.600,64
1. ^{er} semestre de 1881-82. . . .	11.000.000	13.575.468,20
2. ^o semestre de 1881-82. . . .	12.500.000	15.060.743,92

IMPUESTO DE MINAS.

I.

La Hacienda ha procurado de antiguo buscar la manera de que esta manifestación de la riqueza contribuya al Tesoro público en términos justos, equitativos y de segura realización; pero lo cierto es que existen muchas dificultades para conseguir aquel recto propósito.

Toda la legislación minera dictada desde 1825 está basada en el principio de que el subsuelo pertenece á la entidad Estado, por lo cual se estableció el sistema de otorgar, á los que así lo solicitaban, concesiones de una extensión de terreno mayor ó menor, dentro de cuyos límites pudieran extraer toda la riqueza mineral en ella contenida.

Pero como generalmente no es posible realizar la explotación de esta riqueza sin perturbar el aprovechamiento de la superficie del terreno, se impuso á los concesionarios, en el caso de no ser dueños de ella, el deber de entenderse con los propietarios de la misma respecto á la manera de indemnizarles de los perjuicios que les ocasionasen en el ejercicio de su derecho de propiedad.

Basado en el principio que queda expuesto de ser el Estado el propietario del subsuelo, el Real decreto de 4 de Julio de 1825 estableció el pago de un canon anual de superficie á las pertenencias mineras, en representación de aquel derecho y del que tenía á la reivindicación, y dispuso además el abono de un 5 por 100 del valor de los minerales beneficiados, sin deducción de gastos.

Por la ley de 11 de Abril de 1849 se sostuvo el deber de abonar el expresado canon, y asimismo por la de 6 de Julio de 1859; si bien esta última lo redujo considerablemente y bajó al 3 el 5 por 100 que se abonaba por el valor de los minerales.

Mantuvo también la ley de 24 de Junio de 1868 el pago de dicho canon; pero en vez del impuesto del 3 por 100 sobre el valor de los minerales extraídos, autorizaba para establecer sobre los productos mineros, á su exportación, un impuesto en las Aduanas que no excediese del 3 por 100 sobre su valor, sin deducción de gastos.

Inspirada, sin duda, la anterior legislación en el deseo de que la riqueza minera del País no quedara amortizada en poder de concesionarios que no quisieran ó no pudieran realizar la explotación, mantuvo el principio de la caducidad de la concesión por falta de *pueblo*, y consignó además el derecho á obtenerla en favor del que primero efectuara en debida forma la denuncia correspondiente de la que en tal caso se encontrase.

El decreto de 29 de Diciembre de 1868, animado de un espíritu liberal, y con el propósito de conseguir el desarrollo de la importantísima riqueza minera de la Península, procurando, al efecto, quitar cuantas trabas se opusieran á ello, sin prescindir del derecho de propiedad que al Estado corresponde y conservan-

do, por tanto, el canon de superficie, suprimió la caducidad por falta de *pueblo*, limitándola á la de la concesión por el no pago de una anualidad del canon; pero con el objeto de no despojar al minero del importe de los trabajos que en su respectiva pertenencia hubiera acumulado, dispuso que antes de hacerse nueva concesión se sacara hasta por tres veces á subasta, para con su importe satisfacer el débito que existiera á favor de la Hacienda, entregando el resto al primitivo concesionario. Además suprimió toda clase de impuestos, incluso el de Aduanas á la exportación, autorizado por la ley de 24 de Junio de 1868.

La ley de 24 de Julio de 1871 introdujo modificaciones respecto al canon de superficie, en términos que las piedras preciosas y las materias metalíferas de la tercera sección pagasen 10 pesetas por hectárea, y las demás de la segunda y tercera sección, el hierro, las sustancias combustibles y los escoriales, pagasen solamente cuatro pesetas por hectárea, que son los mismos tipos que aún hoy rigen.

La situación apurada del Tesoro por consecuencia de la guerra civil que afligía al País en 1873, dió lugar á que por decreto de 2 de Octubre del mismo año se ordenara el establecimiento de un gravamen de 3 por 100 sobre los productos líquidos de las minas de hierro y hulla, y de 5 por 100 sobre los productos líquidos de las minas de las demás sustancias.

Sin duda, las dificultades de la cobranza del impuesto, y la falta de cumplimiento por parte de los propietarios mineros al dar las relaciones de los productos y gastos, hizo que el importe de aquél fuera tan exiguo en los años 1874-75 y 76, que la ley de Presupuestos para 1876-77 dispuso que desde 1.º de Julio del primero de estos años quedara suprimido el im-

puesto del 3 y 5 por 100 sobre los productos líquidos de las minas, siendo sustituidos con el 1 por 100 sobre los productos brutos de las mismas. La Administración fué autorizada para arrendar la cobranza de este impuesto ; pero el contrato que al efecto llevó á cabo terminó con el abandono que de él hizo el arrendatario por las dificultades en la recaudación.

La multitud de variaciones que envolvían las antedichas leyes demuestran la dificultad que ha existido siempre para todos al legislar de una manera conveniente sobre esta materia.

Sin embargo, en vista de que el impuesto no respondía á las previsiones, y en la necesidad de aprovechar, en cuanto fuese dable, las lecciones de la experiencia, sometí á las Cortes en 24 de Octubre de 1881 un proyecto de ley que atendía á regularizar más los impuestos que venían pesando sobre la riqueza minera.

II.

El proyecto de ley de reforma lo constituía, en realidad, el siguiente artículo :

«Artículo 1.º Á contar desde 1.º de Enero próximo (1882) queda suprimido el impuesto del 1 por 100 del producto bruto de la riqueza minera, establecido por el art. 13 de la ley de Presupuestos de 21 de Julio de 1876. En su lugar se aumentan en un 50 por 100 los tipos que hoy rigen para el impuesto de *»canon de superficie* respecto á las minas que estén en exploración, y en 100 por 100 de los mismos tipos respecto á las que se hallen en productos y las que en lo sucesivo empiecen á producir.»

Las Cortes tuvieron á bien sustituirle con los dos siguientes :

«Artículo 1.º Desde 1.º de Enero próximo se aumentará en un 100 por 100 el *canon de superficie* que se paga por la concesión y aprovechamiento de las minas.

»Art. 2.º Queda suprimido el impuesto del 1 por 100 sobre el producto bruto de la riqueza minera, establecido por el art. 13 de la ley de Presupuestos de 21 de Julio de 1876.»

Segun puede observarse, por el proyecto se establecía, en compensación del 1 por 100 del producto bruto de la riqueza minera, cuyo impuesto se suprimía, el aumento de un 50 por 100 sobre el canon de superficie respecto de las minas que estuviesen en exploración, y en un duplo respecto á las que se hallasen en productos.

Varias fueron las reclamaciones que se presentaron tan luego la ley fué sancionada por S. M., publicada y puesta en vigor. En honor á la verdad, llegué á comprender que aquéllas podían tener algún fondo de justicia, pues por una parte la igualdad que se había establecido entre las minas en exploración y las que se hallasen en producto daba lugar á objeciones, y por otra, algunas minas, las de carbón por ejemplo, consideraban excesivo el tributo; así como tambien la gran diferencia de valor entre los minerales extraídos de concesiones que devengan canon de superficie igual, y por fin, el muchísimo mayor recargo que representa la igualdad de canon de superficie para aquellos minerales que constituyen grandes masas, como el hierro, la calamina, las piritas y algunos carbones, á diferencia de otros minerales que forman estrechos filones y exigen concesiones de gran extensión para obtener un regular producto.

Respecto á estas últimas, cuando ya más adelantado el ejercicio, sin que ofreciese la recaudación las

facilidades apetecidas, celebraron conmigo conferencias diferentes representantes de las Empresas, les di á entender que estudiaría más y más la cuestión y que presentaría un nuevo proyecto de ley en la siguiente legislatura, que diera, en lo que fuese razonable, satisfacción á sus quejas; pero que era condición precisa que la ley vigente fuese cumplida, apresurándose los interesados á satisfacer las cantidades que con arreglo á ella les hubiesen sido señaladas.

El resultado del ejercicio semestral de 1.º de Enero á 30 de Junio de 1882, período en el cual la ley surtía sus efectos, lo ofreció satisfactorio respecto á la liquidación del impuesto, pues se elevó á 2.067.137 pesetas, que equivalen á 4.134.275 pesetas en el año; pero no así su recaudación, que se limitó á 1.016.642,76 pesetas, pasando á la cuenta de resultados de ejercicios cerrados 1.050.494,24.

Hé aquí ahora, para que pueda formarse idea de las vicisitudes que ha experimentado la recaudación de los impuestos sobre la riqueza minera, un cuadro de la obtenida, en que se comprenden las cantidades presupuestas, las liquidadas, las recaudadas y las que pasaron á resultados de ejercicios cerrados, desde el ejercicio de 1876-77 hasta el del segundo semestre de 1881-82:

EJERCICIO.	CANTIDAD presupuesta.	CANTIDAD liquidada.	CANTIDAD recaudada.	CANTIDAD que pasó á <i>Resultas de ejercicios cerrados.</i>
1876-77.. . .	1.300.000	1.380.603,60	1.055.160,04	325.443,56
1877-78.. . .	2.000.000	1.256.328 »	1.019.912,84	236.415,16
1878-79.. . .	2.462.500	1.498.621,28	1.167.715,01	330.906,27
1879-80.. . .	2.462.500	1.665.309,72	1.335.716,42	329.593,30
1880-81.. . .	2.462.500	1.901.815,89	1.370.337,34	531.478,55
1.º semestre de 1881-82.	1.231.250	974.419,48	718.036,41	256.383,07
2.º semestre de 1881-82.	800.000	2.067.137 »	1.016.642,76	1.050.494,24

El precedente estado demuestra, en mi opinión, de una manera evidente, la falta de datos con que se han presupuesto las cantidades con que debiera contribuir la riqueza minera, y por lo tanto, la necesidad que existe de hacer un estudio detenido para la equitativa fijación del tributo.

IMPUESTO DE CÉDULAS PERSONALES.

I.

He considerado siempre este impuesto susceptible de producir rendimientos de importancia, y no creo inoportuno, al ocuparme de la reforma llevada á cabo con arreglo al proyecto presentado á las Cortes en 24 de Octubre de 1881, hacer una ligera reseña de su origen y vicisitudes.

Desde época remota vino constituyendo concepto de ingresos del presupuesto del Estado la obligacion de todo español ó extranjero residente en España de proveerse de un documento que acreditase su personalidad. Bajo el nombre de carta de seguridad unas veces y de pasaporte otras, tuvieron ambos el fin principal de que las autoridades político-administrativas pudieran obtener una noción de las condiciones de cada individuo.

La marcha progresiva de las naciones en la vida social determinó la supresión de aquellos documentos, que fueron sustituidos por las cédulas de vecindad, forma en que, aun cuando conservaron éstas las condiciones distintivas de los documentos de vigilancia y

seguridad pública, empezaron á marcar decidida tendencia á aumentar el carácter de impuesto ó tributo, y demostraban que existía el propósito de dar mayor importancia de la que hasta entónces tuvieron á los ingresos que bajo el concepto de *Vigilancia y seguridad* se comprendían en el epígrafe de *Ingresos de Gobernación* de los presupuestos generales. Esta tendencia se nota con mayor claridad en la autorización que la ley de presupuestos de 1867-68 concedía al Gobierno para establecer cédulas de vecindad de las clases y precios que juzgase conveniente, con el fin de cubrir con su producto el gasto que ocasionase la organización del servicio de vigilancia, según las prescripciones de la ley de Orden público á la sazón vigente.

Los términos de esta autorización y el objeto, sobre todo, á que habían de destinarse especialmente los productos de las cédulas, no permiten dudar de que se trataba de constituir una fuente de ingresos para acudir á un gasto del Estado; pero no habiendo tenido cumplimiento el mencionado precepto legislativo, por causas desconocidas, quedaron de hecho suprimidas las cédulas de vecindad.

Así continuaron las cosas hasta que, primero en el proyecto de Presupuestos para 1870-71, que no llegó á ser ley, y después por el Apéndice letra A de la ley del Presupuesto de ingresos de 8 de Junio de 1870, apareció creada la *Contribución sobre cédulas de empadronamiento y licencias de armas*, cuyas bases, aparte del título que ya lo expresa, dan al servicio de que se trata un carácter en que se ve desde luego que el concepto de *impuesto* prevalece sobre la condición de *documento de vigilancia*.

Con pocas alteraciones, aunque sí luchando con las dificultades é inconvenientes que ofrece en un princi-

pio toda transformación, continuó exigiéndose la contribución, modificada en sus bases por el Apéndice letra D de la ley del Presupuesto de ingresos de 26 de Diciembre de 1872, que ensanchó las de imposición, aunque conservando como una de ellas la importancia de las poblaciones, hasta que fué suprimida por el art. 7.º de la ley de Presupuestos de 6 de Agosto de 1873; si bien por decreto de 20 de Setiembre siguiente quedó en vigor la obligación de adquirir cédula todo español, como documento de vigilancia.

En el presupuesto que tuve la honra de formar en 1874, publicado por decreto de 26 de Junio de dicho año, se restableció este impuesto bajo el nombre de cédulas personales, que hoy conserva, con sujeción á las bases contenidas en el Apéndice letra B, y así ha continuado, con las modificaciones introducidas por las leyes de Presupuestos de 21 de Julio de 1876 y 11 de Julio de 1877.

II.

La desproporción de los rendimientos de este impuesto, contra lo que había derecho á esperar, y el visible decrecimiento en que se encontraban sus productos comparados con los obtenidos en los primeros años que rigieron las bases acordadas por la ley de Presupuestos para 1876-77, me hicieron comprender que la falta de equidad en la gradación de las escalas y la mala administración del impuesto eran las causas que principalmente ocasionaban tan lamentable resultado.

Ante estas consideraciones me decidí á presentar el proyecto de reforma, que llegó á ser ley, y lleva la fecha de 31 de Diciembre de 1881.

Aunque las condiciones especiales del semestre

de 1.º de Enero á 30 de Junio de 1882, que por ser segundo del año económico no es comparable en sus resultados con los de los años anteriores, pues sabido es que la recaudación por cédulas tiene principalmente lugar en el primero, presentando, como presentaré, el del año, podrá observarse el influjo favorable que la reforma ha ejercido en el impuesto.

Con efecto, las cantidades presupuestas y las recaudaciones obtenidas en los años de 1876-77 á 1881-82 se elevaron respectivamente á las cifras siguientes :

EJERCICIOS.	CANTIDAD presupuesta.	CANTIDAD recaudada.
1876-77.	10.000.000	5.407.778
1877-78.	12.000.000	5.717.060
1878-79.	10.000.000	3.198.233
1879-80.	10.000.000	2.994.176
1880-81.	7.000.000	2.955.581
1881-82.	7.000.000	3.585.876

Como se ve, aun antes de tener lugar la reforma, los resultados obtenidos en el año de 1881-82 son superiores á los alcanzados en los de 1878-79, 1879-80 y 1880-81.

Planteada aquella, aunque con los inconvenientes con que ha luchado en los primeros momentos, los cuales desaparecerán de seguro en los años venideros, no dejan de ser satisfactorios los resultados obtenidos en la recaudación, pues en los nueve primeros meses del actual ejercicio asciende á pesetas 4.900.000, en números redondos, ó sea 1.314.124 más que en todo el de 1881-82, excediendo en 1.944.419 pesetas á la de 1880-81, en 1.905.824 á la de 1879-80, y á la de 1878-79 en 1.701.797, y como la cobranza ha empezado muy tarde, por razones que explicaré, es de esperar que en lo que resta del ejercicio se cobren cantidades de importancia que hagan se aproxime en

mucho la recaudación, si no iguala, á la cantidad presupuesta.

Desde luego resulta haberse equivocado los que pronosticaron que difícilmente se llegaría á recaudar la mitad de la cantidad presupuesta, pues no sólo se ha recaudado ya mucho más de esa mitad, sino que existe la fundada esperanza que queda expresada.

Las dificultades que han originado el que la reforma no dé los frutos debidos desde los primeros momentos, merecen ser expuestas y examinadas.

III.

La obligación de hacer los Ayuntamientos padrones previos de todos los individuos sujetos á obtener cédula personal, establecida por la reforma, novedad que está ofreciendo resultados beneficiosos en los rendimientos del impuesto, presentó obstáculos para que la cobranza empezase en la época oportuna, ó sea en los primeros meses del año económico. Los Ayuntamientos, remisos siempre en la formación de los trabajos preliminares para la imposición de los tributos, fueron compelidos unas veces con excitaciones amistosas, otras por comisionados plantones, y algunos hasta con multas. En el año económico próximo este servicio se facilitará, pues formados ya unos padrones, los de los años sucesivos se pueden hacer en la mayoría de los pueblos con sólo la eliminación de los fallecidos y de los que hayan variado de vecindad y la agregación de los nuevos vecinos y de las personas que hayan adquirido condiciones para ser contribuyentes al impuesto.

Encomendada la recaudación al Banco de España, según convenio celebrado, ofreció algunos entorpecimientos, unos previos y otros por efecto de las condi-

ciones que el Banco señaló, ó mejor dicho, exigió, para hacerse cargo de este servicio.

Halláronse entre los primeros la imposibilidad material de llevar á cabo en breve término la extensión de más de 11 millones de cédulas y la entrega al Banco de los documentos de cobranza. La falta de personal en las oficinas provinciales requirió la creación en un principio de personal temporero para este trabajo; pero dando pocos resultados por falta de idoneidad ó por estar interesado en prolongar su cometido, se adoptó el sistema de autorizar la contratación á un tanto alzado el millar.

La entrega á los recaudadores tropezó con el inconveniente de que éstos, para hacerse cargo de los valores, exigieron una minuciosa comprobación con las listas cobratorias, todo lo cual reclamaba de suyo más tiempo del que hubiera sido de desear.

Además, la entrega de esta clase de documentos de cobranza no podía tener lugar de una sola vez en cada provincia, sino á medida que los Ayuntamientos remitían los padrones, y en vista de ellos se llenaban las cédulas, y como no era muy numeroso el personal de que disponía el Banco para recaudadores en los pueblos, y se hallaban estos agentes recorriendo sus distritos haciendo la cobranza de la contribución Territorial y de la Industrial y de Comercio, hasta que volvieron á las capitales á rendir cuentas no pudieron recibir las cédulas, de las cuales no todas las correspondientes á los pueblos de su demarcación estaban en situación de ser entregadas, y de ahí que el servicio experimentase retraso.

La circunstancia de haber aceptado el Banco sólo la recaudación de las cédulas que se hicieran efectivas voluntariamente, negándose á llevar á cabo la práctica de las diligencias necesarias en la vía de apremio,

según quedó consignado en la Real orden de 21 de Julio de 1882, que autorizó el convenio para efectuar este servicio, dificultó también la terminación de la cobranza, pues el Banco tiene que devolver, con las formalidades correspondientes, los documentos no hechos efectivos para que le sirvan de descargo en su cuenta, y después las oficinas provinciales han de remitir las cédulas no distribuidas á los Alcaldes para que éstos las repartan, haciendo uso del procedimiento de apremio.

Todo esto me hizo comprender la necesidad de variar los medios de cobranza, y era mi propósito utilizar la experiencia adquirida para realizarlo.

Tenía y mantengo la opinión de que debiendo ser el impuesto grandemente productivo, sólo hay que facilitar los medios de su recaudación por los procedimientos más sencillos y eficaces posibles.

Si en los primeros momentos entendí que había conveniencia en que el Banco se encargase de la cobranza, como lo hace con las demás contribuciones directas, y si la premura del tiempo así lo aconsejó, la forma en que aquél aceptó el convenio y las dificultades de ejecución que se han ofrecido después me han hecho reconocer que debían adoptarse otros medios.

Estaba, pues, resuelto á nombrar para las capitales de provincia los recaudadores necesarios, según la importancia de las poblaciones, los cuales tendrían á su cargo no sólo la cobranza, sino la formación del padrón en el distrito ó distritos de que estuviesen encargados, y á que continuaran los Ayuntamientos cobrando el impuesto en los pueblos con arreglo al padrón de sus vecinos, como antes lo verificaban.

Con este sencillo procedimiento y con la vigilancia debida de los Delegados de Hacienda, la recaudación

daría seguramente el resultado que la ley se propuso.

Las quejas que se han suscitado sobre el repartimiento de las cédulas desaparecerían, y la Administración, cumpliendo sus deberes, conseguiría realizar toda la suma á que el Tesoro público tiene derecho.

IMPUESTO DE CONSUMOS.

I.

En las diferentes veces que me he ocupado de este impuesto en los Cuerpos Colegisladores¹, tuve ocasión de recordar cómo había nacido entre nosotros, cómo se había planteado, cuáles eran á mi ver los defectos esenciales de que adolecía, y las vicisitudes, en fin, por que había pasado hasta 1874, en cuya época me cupo la satisfacción de restablecerlo; y permítaseme éste para mi honroso recuerdo, en gracia al servicio que creo haber prestado á la Hacienda de mi país, robusteciendo su presupuesto de ingresos con valiosos y saneados recursos.

He dicho también, en más de una ocasión, que ni la premura con que formé el Presupuesto para 1874-75, confeccionado en breves días, ni la situación política que la Nación atravesaba, me permitieron entonces ocuparme de las reformas que el impuesto exigía; dándome por muy satisfecho con haberlo restablecido, y dejando á mis dignos sucesores el trabajo de estudiar y llevar á cabo aquellas reformas.

Si, pues, todos los Ministros de Hacienda que me

sucedieron podían tener el deseo de perfeccionar el impuesto y la legítima aspiración de elevar sus rendimientos á la cifra de que son susceptibles, yo tenía, además de ese deseo y de esa aspiración, el compromiso moral de hacerlo, tanto por haberlo restablecido, cuanto por las opiniones que después he sostenido, siempre que de él he tratado.

Que el impuesto de Consumos es el más difícil entre todos los que forman el cuadro de nuestra tributación, no puede ser objeto de duda para nadie; porque si los demás afectan á clases más ó menos numerosas, aquél grava á todos los habitantes sin excepción, y precisamente por este carácter general y de igualdad hay que procurar que entrañe un fondo de justicia, por más que ofrezca en su realización este propósito problemas de diverso orden, de los cuales surgen cuestiones un tanto difíciles y complejas.

Cualesquiera que sean las opiniones que en la materia puedan abrigarse, siempre habrá de convenirse en que la producción y el consumo son los dos factores principales de este impuesto. Si se conociese la importancia de cada uno de ellos, y si además fuera dable deducir de estas premisas una ley que expresase con exactitud la relación que guardan entre sí en cada localidad, bien podría asegurarse que sería este tributo uno de los más aceptables y de más fácil realización. Desgraciadamente no sucede así; y aunque nadie pueda ya dudar que el impuesto de Consumos ha adquirido carta de naturaleza entre nosotros, tampoco es ménos cierto que todavía ha de pasar algún tiempo antes de que se realice la verdadera reforma que su índole demanda.

No quiere esto decir que la reforma presente obstáculos insuperables; pero la verdad es que exige trabajos minuciosos y muy prolijos, como en general lo

son todos los que se rozan con la estadística, y en particular cuando tienen por objeto conocer la producción y el consumo en cada localidad, y apreciar las diversas circunstancias que en cada una influyen en lo segundo y contribuyen á su aumento ó disminución.

Lejos de mi ánimo establecer aquí el orden de estos trabajos; pero no es dudoso que el curso de nuestras cordilleras y montañas y las cuencas de nuestros ríos principales podrían ofrecer la conveniente división de grandes zonas ó comarcas, que subdivididas después en otras menos extensas, permitiesen apreciar las circunstancias generales y las especiales de cada localidad en cuanto á la índole de las producciones propias de cada cual; entrando en seguida en la reunión, examen y estudio de los datos relacionados con la entidad de dichas producciones y con la importancia de su consumo.

Convenientemente desarrolladas estas indicaciones, podrían servir de base á la estadística, que ha de resolver el difícil y complejo problema que entraña el asunto; y es bien seguro que la Administración que realice estos trabajos habrá prestado un gran servicio al País, y por ellos merecerá una página muy honrosa en la historia de nuestra Hacienda.

II.

Expuestas muy ligeramente, una vez más, mis opiniones respecto al impuesto de que me ocupo, debo empezar por exponer cuál era su situación cuando tuve la honra de ser nombrado Ministro de Hacienda el 8 de Febrero de 1881, y debo también manifestar las razones que me impulsaron á realizar la reforma

que llevé á cabo siguiendo procedimientos distintos de los que dejo indicados.

Para esto me bastará recordar el párrafo que termina la exposición que precede al proyecto que sometí á las Cortes el 24 de Octubre de 1881, que dice así:

«Bien quisiera el Ministro que suscribe traducir
»desde luego á la práctica las teorías que á propósito
»de este impuesto ha manifestado en más de una oca-
»sión; pero cualquiera que las recuerde comprende-
»rá que no habiendo hallado preparada la Adminis-
»tración para la reforma radical que los Consumos
»exigen, ni habiendo tenido tiempo para desarrollar
»en el corto espacio que lleva al frente de la Hacien-
»da los trabajos necesarios para llegar á aquel objeto,
»tenía por el momento que renunciar á sus propósi-
»tos, y que limitar sus aspiraciones á mejorar lo
»existente dentro de las actuales condiciones del im-
»puesto.»

Debo también recordar que la reforma del impues-
to únicamente afectó á las poblaciones que no son
capitales de provincia ni puertos asimilados, pues
respecto de aquéllas y de éstos quedaron subsistentes
los tipos medios del gravamen individual que venían
establecidos.

La desigualdad que existía en los cupos de las po-
blaciones que no son capitales, exigía una reforma
que restableciese el relativo y necesario nivel en la
tributación para que presidiese la equidad en la distri-
bución del impuesto.

Reconociéronlo así mis dignos predecesores en el
Ministerio, y de ello es una prueba el art. 15 de la
ley de Presupuestos para el ejercicio de 1878-79,
cuyo criterio quedó después desarrollado en las dis-
posiciones de la circular de 20 de Agosto de 1878,

que fijó los tipos medios de gravamen por habitante para determinar los cupos según la base ó tarifa que con arreglo al número de aquéllos correspondía. El Consejo de Estado en pleno las acogió despues cómo norma al informar los expedientes sobre aumentos y bajas producidas por consecuencia de dicha circular.

No negaré que en el espíritu de esta medida administrativa preside ya el laudable deseo de que el importe de los encabezamientos de Consumos se deduzca partiendo de tipos medios individuales para evitar las desproporciones que resultaban del procedimiento arbitrario con que antes se hacía; pero declaro que no acepto la doctrina de la expresada circular, porque á mi juicio desnaturaliza de tal manera el impuesto, que le convierte en una verdadera capitación.

En efecto; la síntesis de esa circular se reducía á establecer para las seis clases de población que comprende la tarifa de Consumos igual número de tipos medios de gravamen, consistentes en 5, 6, 7, 8, 10 y 12 pesetas por habitante para fijar el cupo anual, ó sea el importe del encabezamiento de cada pueblo.

Basta fijarse en la naturaleza del impuesto para comprender que desde el momento en que las especies, base verdadera del encabezamiento, eran sustituidas por una cantidad alzada y personal, ya no existían términos hábiles para discutir respecto á la importancia de aquél con relación al consumo que procediera imputar en justicia á cada localidad.

Por otra parte, si las disposiciones de la precitada circular se hubiesen desde luego aplicado á todas las poblaciones, todavía pudiera defenderse, si no como una medida propia del impuesto de Consumos, con el cual no puede armonizarse, como una tendencia á establecer la uniformidad relativa en los cupos, y á su-

jetar á reglas fijas la deducción de éstos en vez de los procedimientos discrecionales que de antiguo venían siguiéndose. Pero no acontenció así: las disposiciones de la circular sólo se aplicaron á unos cuantos pueblos de la categoría más ínfima, dando por resultado un aumento sobre los cupos que venían satisfaciendo, variable desde el 70 al 450 por 100.

Como estos pueblos eran en reducido número, y por otra parte, su escasa importancia prestaba poca fuerza á sus quejas, de aquí que no se hubiesen producido contra la circular de que me ocupo esas ruidosas manifestaciones que, á no dudarlo, hubiera provocado de haberse generalizado. Así debo presumir que lo habrán comprendido aquellos Gobiernos cuando se limitaron á plantearla sólo como ensayo en tan corto número de pueblos.

Pero ni en materia de impuestos cabe legislar sino estableciendo procedimientos y reglas generales, ni menos es permitido aplicarlas á pequeñas localidades dejando á las de verdadera importancia en la misma situación que venían disfrutando.

La justicia y la equidad rechazan semejantes procedimientos; y de consiguiente, era de todo punto indispensable, ó llevar á efecto las disposiciones de dicha circular, ó eliminarla de la legislación, si sólo había de aplicarse á aquellos pueblos que carecían de valimiento para sostener sus reclamaciones contra una medida que la Administración podía aplicar ó no, según lo estimase conveniente.

III.

Tal era la situación del impuesto de Consumos á mi entrada en el Ministerio de Hacienda.

Existía, como dejo dicho, desde 1878 una reforma

tan trascendental como la acordada por la circular de 20 de Agosto de dicho año; pero si sus autores no se habían decidido á generalizarla, menos me correspondería á mí hacerlo, que, según antes he expuesto, ni estaba conforme con su espíritu ni con sus tendencias, ni aceptaba el criterio que desarrollaban sus disposiciones.

De esta difícil é insostenible situación en que encontré el impuesto de Consumos nació la necesidad de la reforma contenida en la ley de 31 de Diciembre de 1881.

He expuesto ya mis opiniones respecto al particular, y los procedimientos que á mi entender exige la verdadera reforma de dicho impuesto; pero necesito recordarlos aquí para repetir una vez más que aquella ley no refleja mis ideas en la materia, y que únicamente significa la aspiración á mejorar lo existente, sin otra pretensión ni otro alcance que el que permitían las circunstancias del momento, dejando para lo porvenir la realización de un pensamiento más completo, fecundo y concienzudo.

Me parece innecesario entrar en consideraciones acerca de la ley de 31 de Diciembre, porque seguramente no ha habido otra alguna ni tan comentada ni tan discutida; pero estimo oportuno establecer las diferencias esenciales que existen entre ella y las disposiciones de la circular de 1878, que condensaba la legislación vigente en la materia hasta la publicación de la expresada ley.

Con arreglo á esta circular, el importe de cada encabezamiento se determinaba por el número de habitantes y por la cantidad que á cada uno correspondía, según la clase de la tarifa asignada á la respectiva población, y en el supuesto de que ésta fuese igualmente consumidora.

La ley de 31 de Diciembre siguió otros procedimientos más armónicos con la índole del impuesto para fijar los encabezamientos, proponiéndose como fines principales los siguientes:

1.º Establecer dentro de términos equitativos y razonables, sancionados por la práctica, la cifra de las especies de consumo imputable anualmente á cada habitante como tipo medio para deducir el cupo de las mismas especies correspondiente al pueblo respectivo. La discusión versa en este caso sobre las cifras de consumo que constituyen el de las especies sujetas al impuesto en cada pueblo, siendo accidental el importe del encabezamiento, porque éste resulta de la aplicación de los derechos á la entidad de aquellas especies.

2.º Establecer reglas fijas que reemplazasen á antiguos procedimientos discrecionales para estimar la importancia de los consumos en cada localidad, rebajando del total de los habitantes una cuarta parte, á fin de compensar las diferencias por razón de sexo, edad, etc.; suavizando así el rigor de la circular de 1878, que suponía consumidora en igual escala á toda la población.

3.º Que el impuesto siga en adelante la ley de la población según las causas que puedan modificarla.

4.º Que siempre entren como factores apreciables para determinar las cifras del consumo, todas las circunstancias que más ó menos directamente influyen en el aumento ó en la disminución de aquél; estableciendo con este objeto una serie de procedimientos encaminados á perfeccionar el impuesto bajo el punto de vista de la equidad y de la justicia.

5.º Y por último, despojar al impuesto del carácter personal y directo que, desnaturalizándolo, le dió

la circular de 1878, restableciendo el que esencialmente le corresponde mientras la base de esta tributación descansa en el consumo de determinadas especies.

Convenía á mi propósito el examen de las disposiciones de la ley y circular de que vengo ocupándome, porque, después de la amplia discusión de que fué objeto el proyecto, se han afirmado mis convicciones de que los principios que informan la ley de 31 de Diciembre de 1881 han de subsistir todavía algún tiempo, por lo menos hasta que otra Administración menos agobiada de trabajos que lo fué la mía pueda realizar el estudio y el planteamiento de la reforma definitiva del impuesto de Consumos.

Paso ahora á ocuparme de la mencionada ley.

IV.

Todos los argumentos que se han aducido contra mi proyecto estriban en el aumento que resultaba en los cupos de los pueblos.

El estado adjunto, núm. 1.º, demuestra que el importe de estos cupos en las poblaciones no capitales ni puertos exceptuados, con anterioridad á la ley de 31 de Diciembre de 1881, era de 51.310.487 pesetas, y que por consecuencia de dicha ley se elevaron á 67.075.362 pesetas; produciéndose, por tanto, un alza de 15.764.875 pesetas.

Pero con arreglo á la legislación vigente hasta la ley de 31 de Diciembre, ó sea aplicando las disposiciones de la circular de 20 de Agosto de 1878 á los cupos de los pueblos no capitales, debían sufrir un aumento de 15.235.733 pesetas, según resulta del estado siguiente. (Núm. 2.)

DEMOSTRACIÓN del importe por provincias de los cupos de Consumos asignados á cación de las disposiciones de la ley de 31 de Diciembre de 1881 y parificación con ley, y gravamen total que representa el cupo y recargo auto-izados antes y los que

PROVINCIAS.	Número de habitantes sin capitales y puertos asimilados.	CUPOS POR PROVINCIAS.		DIFERENCIAS.		TANTO POR 100 QUE REPRESENTA	
		Anteriores á la ley de 31 de Diciembre de 1881.	Por virtud de la aplicación de la ley de 31 de Diciembre de 1881.	De más.	De menos.	el aumento.	la baja.
Álava. . .	»	»	»	»	»	»	»
Albacete. .	200.475	752.082 »	855.334 »	103.252 »	»	13,72	»
Alicante. .	376.239	1.588.252 88	2.211 127 56	622 874,68	»	39,27	»
Almería. .	318.213	923.979 61	1.659.317 80	735.336,19	»	79,59	»
Ávila. . .	172.664	787 710 »	614 869 71	»	172 840,29	»	21,94
Badajoz. .	404.581	1.684.281 87	2.109 985,52	425.703,65	»	25,28	»
Barcelona. .	582.665	2.747.422 78	3 826.165 52	1.078.742,74	»	39,26	»
Burgos. . .	303.333	1.367.223 40	1 217.791 04	»	149 432,36	»	10,98
Cáceres. . .	286.122	1.300.427 90	1.317.409 52	16.981,62	»	1,30	»
Cádiz. . .	348.353	2.206.257 91	2.906.083 36	699.825,45	»	31,72	»
Castellón. .	261.942	873.846 35	1.293.959 94	420.113,59	»	48,07	»
Ciudad Real	241.510	1.205.558 47	1.240.524 02	34.965,55	»	2,90	»
Córdoba. .	330.455	1.609.634 68	2.073 920,63	464.285,95	»	28,84	»
Coruña. . .	574 507	1.318.671,73	2.517.326 76	1.198.655,03	»	90,90	»
Cuenca. . .	232.047	1.002.331,47	841.024 19	»	161.307,28	»	16,09
Gerona. . .	287.952	683 429,76	1.034.960,32	351.530,56	»	51,43	»
Granada. .	400.326	1.466.000 »	2.219 935 »	753.935 »	»	51,42	»
Guadalajara.	194.646	974.553 36	724.083 54	»	250.469,82	»	25,70
Guipúzcoa. .	»	»	»	»	»	»	»
Huelva. . .	194.931	728.176 38	967.617 14	239.440,76	»	32,88	»
Huesca. . .	244.840	973.013,24	1.097.866,16	124.852,92	»	12,83	»
Jaén. . .	380.395	1.649.018,23	2.339.016 78	689 998,55	»	41,84	»
León. . .	346.122	819.207,45	1.173.640 52	354 433,07	»	43,14	»
Lerida. . .	273.694	830.721 91	953.118 35	122.396,44	»	14,73	»
Logroño. .	161.132	849.178 57	788.314 77	»	60.863,80	»	0,72
Lugo. . .	395.878	552.600 35	1.351.249 31	798.648,96	»	144,48	»
Madrid. . .	195.445	1.340.740 55	1.397.793,44	57.052 89	»	4,25	»
Malaga. . .	386.337	1.320.999 16	2.409.305 02	1.088.305,80	»	82,38	»
Murcia. . .	284.672	1.051.236 79	1.517.254,14	466.017,35	»	44,33	»
Navarra. . .	»	»	»	»	»	»	»
Orense. . .	384.623	769.045 »	1.430 745 36	661.700,36	»	86,70	»
Oviedo. . .	531.656	869.950 22	2.329.925 18	1.459.974,96	»	168 »	»
Palencia. .	165.591	891.391 »	683.026 04	»	208.294,96	»	23,37
Pontevedra. .	442.135	1.051.176 50	1.959.690,70	908.514,20	»	86,42	»
Salamanca. .	269.385	1.281.341,45	1.226.227,48	»	55.113,97	»	4,30
Santander. .	201.123	537.2 8,01	759.391,36	222.173,35	»	41,35	»
Segovia. . .	139.997	737.192 99	495.802 64	»	241.390,35	»	32,74
Sevilla. . .	365.265	1.793.017,83	2.568 445,76	775.427,93	»	43,25	»
Soria. . .	152.208	642.219 94	528.152 43	»	114.067,51	»	17,77
Tarragona. .	309.290	938.646 65	1.676.867 75	738.221,10	»	78,64	»
Teruel. . .	239.570	694.974 »	884.719,90	189.745,90	»	27,30	»
Toledo. . .	311 573	1.858.019 42	1.461 380 »	»	396.639,42	»	21,35
Valencia. . .	535 833	2.070.961,01	2 951.950 95	880.989,94	»	42,54	»
Valladolid. .	195 693	1.113.625 »	844.040 03	»	269.584,97	»	24,22
Vizcaya. . .	»	»	»	»	»	»	»
Zamora. . .	238.524	961.131 »	997 621 40	36.490,40	»	3,79	»
Zaragoza. .	316 068	1.476.747,56	1.595 410,68	116 663,12	»	8,04	»
Baleares. .	232.775	777.434,26	1.231.731,92	454.297,66	»	58,43	»
Canarias. .	267.213	239.908,60	791.239 13	551.330,53	»	230 »	»
	13.678.038	51.310.487,24	67.075.362,77	17 844.880,26	2.080.004,73	»	»

AUMENTO LÍQUIDO EN EL CUPO CORRESPONDIENTE AL TESORO. . . Ptas. 15.764.875,53

NÚM. I.

las poblaciones no capitales de provincia ni puertos asimilados por virtud de la aplicación anteriores, con los tipos de gravamen medio por habitante antes y después de dicha ahora autoriza aquella ley.

TIPO DE GRAVAMEN POR HABITANTE.		IMPORTE DE LOS CUPOS PROVINCIALES.		DIFERENCIAS.		TANTO POR 100 QUE REPRESENTA	
Por la ley de 31 de Diciembre de 1881.	Antes de dicha ley	Con el recargo de 100 por 100 vigente antes de la mencionada ley.	Con el de 70 por 100 sobre los cupos actuales.	De más.	De menos.	el aumento.	la baja.
»	»	»	»	»	»	»	»
4,27	3,75	1.504.164	1.454.067	»	50.097	»	3,33
5,87	4,22	3.176.505	3.758.917	582.412	»	18,33	»
5,21	2,90	1.847.959	2.820.840	972.881	»	52,64	»
3,56	4,56	1.575.420	1.045.277	»	530.143	»	33,65
5,21	4,16	3.368.563	3.586.976	218.413	»	6,50	»
6,56	4,71	5.494.845	6.504.482	1.009.637	»	18,38	»
4,01	4,50	2.734.447	2.070.244	»	664.203	»	23,88
4,60	4,54	2.600.855	2.231.595	»	369.260	»	13,88
8,34	6,33	4.412.515	4.940.342	527.827	»	12,55	»
4,93	3,33	1.747.693	2.199.730	452.037	»	25,86	»
5,13	4,99	2.411.117	2.108.892	»	302.225	»	12,53
6,27	4,87	3.219.269	3.525.664	306.395	»	9,52	»
4,38	2,29	2.637.343	4.279.454	1.642.111	»	62,22	»
3,62	4,31	2.004.663	1.429.741	»	574.922	»	28,66
3,59	2,37	1.366.858	1.759.432	392.574	»	28,99	»
5,54	3,66	2.932.000	3.773.889	841.889	»	28,71	»
3,72	5,01	1.949.107	1.238.941	»	710.166	»	36,84
»	»	»	»	»	»	»	»
4,96	3,73	1.456.352	1.644.948	188.596	»	12,96	»
4,48	3,97	1.946.027	1.866.372	»	79.655	»	3,10
6,14	4,33	3.298.037	3.976.328	678.291	»	20,56	»
3,40	2,36	1.638.415	1.995.188	356.773	»	21,80	»
3,48	3,03	1.661.443	1.620.300	»	41.143	»	4 »
4,89	5,27	1.698.357	1.340.134	»	358.223	»	21,09
3,41	1,39	1.105.200	2.297.123	1.191.923	»	106,90	»
7,05	6,86	2.681.481	2.376.249	»	305.232	»	11,01
6,23	3,42	2.641.998	4.095.818	1.453.820	»	55,02	»
5,32	3,69	2.102.473	2.579.331	476.858	»	22,68	»
»	»	»	»	»	»	»	»
3,72	1,99	1.538.090	2.432.268	894.178	»	58,13	»
4,38	1,63	1.739.901	3.960.874	2.220.973	»	128 »	»
4,12	5,38	1.782.642	1.161.145	»	621.497	»	35,40
4,43	2,37	2.102.353	3.331.473	1.229.120	»	58,46	»
4,55	4,75	2.562.683	2.084.585	»	478.098	»	18,65
3,77	2,67	1.074.436	1.290.964	216.528	»	20,15	»
3,54	5,49	1.474.386	842.863	»	631.523	»	42,83
7,03	4,91	3.586.035	4.366.358	780.323	»	21,75	»
3,47	4,21	1.284.439	897.858	»	386.581	»	30,97
5,43	3,03	1.877.293	2.850.675	973.382	»	51,89	»
3,68	2,90	1.389.948	1.504.022	114.074	»	8,20	»
4,69	5,96	3.716.139	2.484.346	»	1.231.793	»	33,14
5,51	3,86	4.141.922	5.018.315	876.393	»	21,13	»
4,30	5,69	2.227.250	1.434.828	»	792.422	»	35,90
»	»	»	»	»	»	»	»
4,18	4,03	1.922.262	1.695.955	»	226.307	»	14 »
5,05	4,67	2.953.495	2.712.197	»	241.298	»	8,18
5,50	3,34	1.554.868	2.093.943	539.075	»	34,66	»
2,97	0,89	479.817	1.345.076	865.259	»	181 »	»
»	»	102.621.065	114.028.019	20.001.742	8.594.788	»	»

AUMENTO LÍQUIDO EN EL CUPO CON INCLUSIÓN DE LOS RECARGOS. . . Ptas. 11.406.954

ESTADO NÚM. 2.

AUMENTOS y bajas que producía en los cupos de Consumos de los pueblos no capitales de provincia la aplicación de los tipos medios de gravamen por habitante, establecidos por la circular de 20 de Agosto de 1878.

	IMPORTE de los aumentos con arreglo á la circular de 20 de Agosto de 1878.	IMPORTE de las bajas según dicha circular.	AUMENTO líquido en cada provincia.	BAJA líquida en cada provincia.
Álava.. . . .	»	»	»	»
Albacete.. . . .	271.082	5.819	265.263	»
Alicante.. . . .	547.008	10.069	536.939	»
Almería.. . . .	911.700	26	911.674	»
Ávila.. . . .	52.075	113.020	»	60.945
Badajoz.. . . .	469.839	12.320	457.519	»
Barcelona.. . . .	650.371	134.913	515.458	»
Burgos.. . . .	183.690	246.903	»	63.213
Cáceres.. . . .	142.636	166.646	»	24.010
Cádiz.. . . .	378.420	223.465	154.955	»
Castellón.. . . .	469.416	12.949	456.467	»
Ciudad Real.. . . .	157.287	41.549	115.738	»
Córdoba.. . . .	371.860	53.938	317.922	»
Coruña.. . . .	319.843	160.145	159.698	»
Cuenca.. . . .	97.106	113.193	»	16.087
Gerona.. . . .	645.498	10.017	635.481	»
Granada.. . . .	645.067	25.723	619.344	»
Guadalajara.. . . .	52.165	228.035	»	175.870
Guipúzcoa.. . . .	»	»	»	»
Huelva.. . . .	285.681	15.316	270.365	»
Huesca.. . . .	133.538	60.803	72.735	»
Jaén.. . . .	583.981	13.182	570.799	»
León.. . . .	736.837	28.880	707.957	»
Lérida.. . . .	350.108	32.088	318.020	»
Logroño.. . . .	43.747	162.563	»	118.816
Lugo.. . . .	175.865	38.826	137.039	»
Madrid.. . . .	25.461	461.212	»	435.751
Málaga.. . . .	857.947	795	857.152	»
Murcia.. . . .	918.167	»	918.167	»
Navarra.. . . .	»	»	»	»
Orense.. . . .	119.873	114.604	5.269	»
Oviedo.. . . .	595.656	89.946	505.710	»
Palencia.. . . .	41.708	391.002	»	349.294
Pontevedra.. . . .	170.706	199.322	»	28.616
Salamanca.. . . .	73.846	212.004	»	138.158
Santander.. . . .	490.222	6.959	483.263	»
Segovia.. . . .	24.279	188.420	»	164.141
Sevilla.. . . .	416.581	57.968	358.613	»
Soria.. . . .	37.706	71.938	»	34.232
Tarragona.. . . .	668.232	10.006	658.226	»
Teruel.. . . .	347.146	15.261	331.885	»
Toledo.. . . .	22.619	409.305	»	386.686
Valencia.. . . .	727.516	18.273	709.243	»
Valladolid.. . . .	23.798	284.409	»	260.611
Vizcaya.. . . .	»	»	»	»
Zamora.. . . .	168.150	136.358	31.792	»
Zaragoza.. . . .	94.411	145.854	»	51.443
Baleares.. . . .	523.631	1.373	522.258	»
Canarias.. . . .	213.258	20.747	192.511	»
	15.235.733	4.746.144	12.797.462	2.307.873

Podrá objetarse que la precitada circular reconocía á los pueblos cuyos cupos excediesen de los que con arreglo á la misma les correspondían, el derecho á pedir la baja, y que por este concepto había de producirse una disminución de 4.746.144 pesetas por las que procediera otorgar; pero si se tiene en cuenta que era principio establecido conceder dichas bajas en el solo caso de que la población hubiese disminuido en una tercera parte de sus habitantes, se comprende que sería muy raro encontrar un pueblo en que hubiese ocurrido un descenso tan notable, y por lo tanto, que los aumentos se realizaban y las bajas no se concedían, como lo demuestra el número que de ellas fué denegado.

La ley de 31 de Diciembre, separándose del criterio de la circular de 1878, estableció procedimientos más adecuados para determinar con la exactitud posible la capacidad tributaria de cada pueblo, dada la carencia de datos para llegar al conocimiento exacto del consumo que en ellos pueda realizarse; datos que los mismos pueblos rehusan facilitar.

Así es que la importancia de los consumos de un pueblo no puede regularse exclusivamente por el número de sus habitantes, como disponía aquella circular, porque sin desconocer que ellos son un factor para determinar los cupos, é indudablemente un factor muy principal, pues nadie ignora que los consumos están en razón directa de la densidad de la población, ese factor, que no puede ni debe ser absoluto, queda desde luego modificado, según la ley de 31 de Diciembre, por la deducción de la cuarta parte de los habitantes que se elimina para compensar las diferencias del consumo. Y aun este resultado sufre después nuevas modificaciones en alza ó en baja al aplicar los tipos de las especies según la clase

de la población, y no por su número de habitantes exclusivamente, sino con relación á las circunstancias que lo aumenten ó aminoren, apreciando la situación, clima, producciones, comercio, industria y cuanto puede contribuir á ejercer influencia en el consumo.

Otra de las ventajas de esta ley consiste en que si bien produjo aumentos en los cupos de muchos pueblos, en cambio otorgó desde luego las rebajas que á otros correspondían, los cuales venían de antiguo sufriendo gravámenes excesivos y aun superiores en proporción y en tipo individual á los que tenían pueblos más importantes y hasta capitales de mayor vecindario y de mejores condiciones de consumo.

En cuanto á los tipos medios del individual, que tanto se han combatido por excesivos, bastará recordar que apenas difieren de los que para graduar el consumo por habitante en los pueblos que cubrían el cupo por repartimiento estableció la circular de 25 de Marzo de 1878, y se hallan además consignados en todas las instrucciones del impuesto.

Y todavía puede presentarse otra prueba más concluyente para demostrar que tales tipos no son exagerados, y es la que han ofrecido las provincias de Castilla, cuyos pueblos eran en general los que tenían tipos más elevados con relación á las demás provincias, y en los cuales produjo la ley de 31 de Diciembre una disminución en sus respectivos cupos. Mas como en varias provincias los tipos individuales diferían mucho de los de otras de iguales condiciones y aun de localidades vecinas, la nivelación de los cupos, aun siendo como ha sido relativa, produjo una transición algo violenta, que fué el origen de las quejas que se expusieron contra dicha ley.

V.

Para acallar aquellas quejas y para suavizar el tránsito de unos á otros cupos, se dictó la ley de 6 de Julio de 1882, que acordó una bonificación á los pueblos que habían resultado recargados en más de 40 por 100 de los anteriores por lo que respecta al segundo semestre de 1881-82, y autorizó al Ministro de Hacienda para limitar los aumentos y bajas que habían resultado, en términos que para el año económico de 1882-83 pudiera fijar los cupos que satisficiesen los pueblos que habían tenido aumento de consideración; disponiendo al propio tiempo que el Gobierno, en vista de los resultados de la aplicación de la ley de 31 de Diciembre y de las disposiciones de la de 6 de Julio siguiente, formulase, para que pudiera tener efecto en el año económico de 1883-84, el proyecto de ley en que se fijasen definitivamente las reglas á que hubiese de sujetarse el señalamiento de cupos.

A virtud de las modificaciones introducidas por dicha última ley, quedó reducido el importe total de los cupos de los pueblos no capitales ni puertos asimilados á 60.385.840 pesetas en un año, ofreciendo un aumento de 9.075.353 pesetas sobre los que satisfacían con anterioridad á la ley de 31 de Diciembre, y por tanto á 30.192.920 en el semestre, produciéndose en su consecuencia el aumento de 4.537.676,50 pesetas en dicho período; y una baja de 3.344.760 con relación á los cupos que determinó la aplicación de la ley de 31 de Diciembre de 1881 en los pueblos no capitales de provincia ni asimilados á éstas, segun detalla el estado núm. 3. Dicha cifra de aumento es bastante inferior á la que por la aplicación de la circular de 20 de Agosto de 1878 hubieran llegado á alcanzar los cupos de los pueblos no capitales.

ESTADO NÚM. 3.

COMPARACIÓN de los cupos que con arreglo á la ley de 31 de Diciembre de 1881 correspondían á los pueblos no capitales de provincia ni puertos asimilados en el segundo semestre de 1881-82, con los que les fueron fijados por virtud de la ley de 6 de Julio de 1882.

	CUPOS POR PROVINCIAS.	
	Por virtud de la aplicación de la ley de 31 de Diciembre de 1881.	Por virtud de la aplicación de la ley de 6 de Julio de 1882.
Álava.	»	»
Albacete.	427.667 »	415.045,95
Alicante.	1.105.563,78	1.000.864,22
Almería.	829.658 90	685.054,33
Ávila.	307.434,50	306.859,30
Badajoz.	1.054.992,76	1.027.366,33
Barcelona.	1.913.032,76	1.710.614,10
Burgos.	608.895,52	6 4.268,02
Cáceres.	658.704,76	040.127,65
Cádiz.	1.453.041,63	1.304.559,49
Castellón.	646.979,97	589.678,33
Ciudad Real.	620.262,01	624.219,88
Córdoba.	1.036.950,31	979.596,05
Coruña.	1.258.663,38	863.074,68
Cuenca.	420.512,09	415.332,11
Gerona.	517.480,16	432.293,03
Granada.	1.109.967,50	950.109,82
Guadalajara.	362.041,77	394.354,84
Guipúzcoa.	»	»
Huelva.	483.617,14	453.987,96
Huesca.	543.933 08	536.708,91
Jaén.	1.169.508,39	1.060.265,87
León.	586.820,26	521.984,08
Lérida.	476.559,17	450.721,63
Logroño.	394.157,38	390.211,18
Lugo.	675.624,65	483.573,42
Madrid.	698.896,72	697.148,56
Málaga.	544.152,93	973.860,04
Murcia.	758.627,07	769.749,52
Navarra.	»	»
Orense.	715.372,68	566.233,39
Oviedo.	1.164.962,59	803.097,19
Palencia.	341.513 02	335.998,79
Pontevedra.	979.845,35	782.062,71
Salamanca.	613.111,74	611.350,84
Santander.	379.695,68	329.736,02
Segovia.	247.901,32	315.801,69
Sevilla.	1.284.222 88	1.136.458,87
Soria.	264.076 21	264.519,06
Tarragona.	838.433 87	679.186,17
Teruel.	442.359 95	421.124,91
Toledo.	730.690 »	820.508,28
Valencia.	1.475.975,47	1.349.316,60
Valladolid.	422.020,01	428.856,37
Vizcaya.	»	»
Zamora.	498.810,70	479.593,71
Zaragoza.	797.705,34	778.105,05
Baleares.	615.865,96	545.317,84
Canarias.	275.665,26	264.023,76
	33.537.681,38	30.192.920,75

Para hacer uso de dicha autorización se expidió la Real orden de 15 de Julio de 1882, determinando que los aumentos que resultasen en los cupos para 1882-83, comparados con los que tenían asignados antes de la ley de 31 de Diciembre de 1881, no excediesen en ningun caso del 75 por 100 de los anteriores; que en los pueblos que hubiesen tenido una baja mayor de 30 por 100 en sus anteriores cupos, se limitase á este tanto la baja por el referido año económico; y que el aumento total de los respectivos á cada provincia no superase el 50 por 100 del cupo total de la misma antes de la ley de 31 de Diciembre de 1881.

Estas bases generales, que indudablemente respondían al espíritu que dictó la ley de 6 de Julio de 1882, han permitido que los pueblos que debían sufrir aumentos importantes, por hallarse muy beneficiados antes de la de 31 de Diciembre, vayan paulatinamente acomodándose á los cupos mayores que en justicia les corresponden y pagan otros de idénticas condiciones, en tanto que la ley que como definitiva se dicte venga á fijar las reglas á que deberá subordinarse la designación.

Abrigo la firme creencia de que al hacer uso de la expresada autorización he logrado hermanar el propósito de avanzar en la nivelación relativa de los cupos con el deseo de la ley de 6 de Julio respecto á que los aumentos que se produjesen, aunque justos, no resultasen exagerados, y me atrevo á asegurarlo así, porque de los 8.698 pueblos no capitales ni puertos asimilados, sólo han producido reclamaciones unos 250, y la mayoría son, ó de agravio comparativo, que pudo existir, dado el hecho de que los aumentos no podían exceder de un límite, ó de las poblaciones que habiendo obtenido baja mayor de 30 por 100 de sus anteriores cupos se les ha limitado á dicho tipo

la baja, y á pesar de que antes consentían el agravio mayor, hoy, que la ley les reconoce un beneficio, no se avienen á disfrutarlo sólo en parte.

La bonificación hecha por la ley de 6 de Julio, tanto en los cupos para el segundo semestre de 1881-82, como respecto al uso de la autorización para el año económico de 1882-83, dejó reducidos los de los pueblos no capitales á poco más de 60 millones de pesetas anuales; y por tanto, el aumento producido por la reforma del impuesto es menor que el que se habría realizado de haber seguido aplicando el criterio de la circular de 20 de Agosto de 1878, pues, según he dicho antes, el impuesto habría de llegar en los pueblos á 66 millones, y hoy no excede de 61.

VI.

Algo debo decir respecto á la resistencia que se anunciaba opondrían los pueblos, y de la cual se quiso sacar partido para perturbar, ya que no para anular las reformas. Sin desconocer que contra la ley de 31 de Diciembre se formularon bastantes reclamaciones, tampoco puede ocultarse que muchas obedecieron á sugerencias encaminadas á dificultar el planteamiento de las leyes económicas.

No está de más recordar, pues la justicia exige que se tenga en cuenta, ya que tanto se me ha censurado, que las reformas empezaron á conocerse en el mes de Enero de 1882, y que afectando, como afectaban, á todos los ramos de la Administración, debían retrasarse bastante tiempo las operaciones para implantarlas en cada localidad. Pues bien; si á esta circunstancia se hubiera unido aquella resistencia, tan extremada y tan ponderada, era inevitable que la realización del impuesto ofreciese una gran disminución.

Véase, sin embargo, cuáles fueron esos resultados.

El total de los valores liquidados por el impuesto, correspondientes al segundo semestre de 1881-82, comprendidas ya también las capitales de provincia y puertos asimilados y los cupos de las provincias vascongadas, y hecha en los pueblos la bonificación concedida por el art. 1.º de la ley de 6 de Julio ascendió á 41.916.371,50 pesetas. Pues bien, de esta suma se recaudó durante el período natural y su correspondiente ampliación la cifra de 40.911.074,62 pesetas; pasando á *Resultas de ejercicios cerrados* la cantidad de 1.005.296,88, diferencia tan pequeña que bien permite afirmar la completa realización del impuesto, no obstante las dificultades de todas clases suscitadas.

No faltará quien me objete que estimado por mí en el proyecto de 20 de Marzo de 1882 en 86 millones, cifra redonda, el importe anual del impuesto de Consumos para el segundo semestre de 1881-82, ó sea 43.000.000 en dicho período semestral, no se han liquidado más que 42.000.000 próximamente. Esta diferencia tiene su explicación en que no habiendo aceptado algunas capitales de provincia los cupos que les correspondían por virtud de la ley de 31 de Diciembre de 1881, no pudo exigírseles la diferencia, é ínterin se llegó al arriendo ó al encabezamiento, la administración directa por la Hacienda no ofreció resultado. Pero éste se ha obtenido después con la aplicación de la ley de 6 de Julio, según se demostrará más adelante.

Mucho se ha exagerado también la importancia de los cupos en las provincias de Galicia, y tampoco estará por demás recordar que las de Orense y Pontevedra, además de algunas otras que no pertenecen á dicha región, no sólo habían satisfecho la totalidad de sus cupos en 30 de Junio de 1882, por lo que respecta

al segundo semestre de 1881-82, sino que todavía resultaron con algún exceso de recaudación, efecto de que en los primeros meses del semestre, y antes de ser conocida la rebaja que hacía el proyecto de 20 de Marzo, que, como queda dicho, pasó á ser parte de la ley de 6 de Julio, habían ya satisfecho sus cupos completos con arreglo á la de 31 de Diciembre.

Resulta, pues, que aun en las provincias de Galicia, donde los efectos de esta ley se hicieron más sensibles, por venir disfrutando de excepciones especiales que aquélla no tuvo en cuenta, la realización de dicha ley no ofrecía los insuperables obstáculos que se le atribuyeron, porque de haber sido exactos en la medida exagerada que se hizo creer al público, era de todo punto imposible que el impuesto se hubiese recaudado con la expresada facilidad.

Y este convencimiento se evidencia todavía más si se compara el resultado definitivo que ofreció el ejercicio del segundo semestre de 1881-82 con los de otros presupuestos, á pesar de no haberse hecho en estos reformas que tanto entorpecen siempre la recaudación, y de haber tenido años de cosechas abundantes, mientras que yo tuve la contrariedad de uno de sequía.

Á pesar de dificultades tan poderosas más ó menos hábilmente explotadas en contra de mi gestión, puede ésta compararse con la de los años que seguidamente se expresan :

Cantidades que por no haberse realizado dentro del periodo natural y de ampliación de los respectivos Presupuestos han pasado á la cuenta de EJERCICIOS CERRADOS por results del impuesto de Consumos.

	Pesetas.
1875-76.	6.709.072,48
1876-77.	8.461.851,07
1877-78.	4.117.123,32
1878-79.	4.652.330,20
1879-80.	4.506.801,70
1880-81.	4.194.882,02

Y como quiera que para desvirtuar los resultados que ofreció la liquidación del ejercicio del semestre de 1.º de Enero á 30 de Junio de 1882 se ha tratado de disminuir los de la recaudación, bueno es que conste que al terminar el periodo de aquel semestre sólo pasó por results del mismo á la cuenta de *Ejercicios cerrados*, según ántes he consignado, la exigua suma de 1.005.296,88 pesetas, cantidad bastante menor que la mitad de cualquiera de las precedentes.

Este hecho, no sólo prueba el celo desplegado por la Administración, en cumplimiento de su deber, sino también que la reforma no ha ofrecido esas dificultades que tanto se han exagerado.

VII.

En cuanto á las capitales y puertos asimilados, no han ofrecido dificultades dignas de mencionarse, porque los cupos que les correspondieron con arreglo á la ley de 31 de Diciembre de 1881 fueron desde luego aceptados por la mayoría de ellas; y claro es que esto implica que aquellos no excedían de los rendimientos que con una buena administración pueden obtener.

Rehusaron, sin embargo, el encabezamiento las de Alicante, Almería, Ciudad-Real, Gerona, Granada, Huesca, Jaén, Lérida, Murcia, Sevilla, Tarragona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Palma de Mallorca y Cartagena.

Anunciado el arriendo, quedaron desde luego arrendadas las de Ciudad-Real y Sevilla desde 1.º de Julio de 1882.

En esta situación, y siendo por desgracia deficiente la administración por cuenta de la Hacienda, pues la experiencia tiene acreditado ser el peor de los medios para realizar el impuesto, se estimó más conveniente la adopción de otro que permitiera asegurar un encabezamiento ó arriendo beneficioso, economizando los gastos que aquélla ocasiona. Este medio lo ofreció el artículo 3.º de la ley de 6 de Julio de 1882 al establecer que cuando después de dos subastas consecutivas bajo el tipo del cupo de la ley de 31 de Diciembre de 1881 no hubiese remate, podría la Hacienda hacer encabezamientos ó arriendos por tipo convencional, siempre que la cifra en que se ajustáran superase la de los encabezamientos anteriores á dicha última ley.

Esta disposición dió beneficiosos resultados, permitiendo realizar el encabezamiento ó arriendo con las capitales que rehusaron el cupo, hecha excepción de Castellón y Palma de Mallorca, que no han enablado negociación alguna.

Las demás han ofrecido los resultados siguientes :

Zaragoza aceptó el cupo de la ley de 31 de Diciembre, previa una depuración de su censo con relación al casco y radio, obteniéndose un aumento sobre el anterior á dicha ley de 329.375 pesetas.

Sevilla se arrendó, como queda dicho, por 1.600.001 pesetas, ofreciendo no sólo un aumento sobre el cupo anterior de 72.843, sino que á la vez supera en mucho

mayor cantidad á la que se obtenía por la administración de la Hacienda, aparte de la economía de 269.250 pesetas anuales que importaban los gastos del personal, fielatos y resguardo.

Y en el resto de las demás capitales que no aceptaron los cupos de la ley de 31 de Diciembre y luego se encabezaron ó arrendaron con arreglo á la de 6 de Julio siguiente, se han obtenido aumentos sobre los cupos anteriores por una cifra total de 790.491 pesetas, y á la vez se han economizado en los gastos de administración, fielatos y resguardo 789.318.

En suma: el importe de los encabezamientos ó arriendos hechos en las 16 capitales que no aceptaron los cupos de la ley de 31 de Diciembre, ofrece un aumento de 1.192.709 pesetas sobre los cupos anteriores á dicha ley, y tambien una economía de gastos de 1.058.568 pesetas, cuyo resultado arroja en junto un beneficio de 2.251.277 pesetas á favor de la Hacienda.

VIII.

Réstame, por último, presentar unido el resultado definitivo que ha ofrecido la reforma del impuesto de Consumos, así en los pueblos como en las capitales.

El siguiente estado, núm. 4, expresa el importe á que en totalidad ascendió dicho impuesto en el año económico de 1880-81 y el que se obtiene en el de 1882-83, habiendo prescindido de incluir en él lo correspondiente al de 1881-82 por la subdivisión de los dos semestres que estableció la vigente ley de Presupuestos en cuanto al referido año.

ESTADO NÚM. 4.

COMPARACIÓN de los cupos de Consumos anteriores á la ley de 31 de Diciembre de 1881 con los que se han declarado vigentes en el año de 1882-83, de conformidad con la ley de 6 de Julio de 1882.

	En 1880-81.	En 1882-83.
Álava.	83.289 »	83.289 »
Albacete.	868.375 »	988.860,95
Alicante.	1.772.468,23	2.271.325,71
Almería.	1.059.881,84	1.549.290,37
Ávila.	840.349 »	720.146,39
Badajoz.	1.801.733,44	2.308.795,18
Barcelona.	5.183.556,93	6.477.719,80
Burgos.	1.695.546,40	1.577.200,48
Cáceres.	1.398.259,90	1.393.797,44
Cádiz.	3.063.800,91	3.498.011,04
Castellón.	1.014.385,17	1.215.561,58
Ciudad Real.	1.233.343,22	1.367.028,24
Córdoba.	2.049.253 »	2.497.595,50
Coruña.	1.689.548,73	2.113.063,08
Cuenca.	1.052.802,80	926.976,59
Gerona.	784.945,76	968.278,11
Granada.	1.946.000 »	2.538.721,99
Guadalajara.	1.045.630,06	906.198,44
Guipúzcoa.	140.008 »	140.008 »
Huelva.	798.798,88	1.003.644,77
Huesca.	1.043.794,24	1.165.308,52
Jaén.	1.763.858,82	2.267.364,07
León.	923.468,10	1.167.444,84
Lérida.	954.450,62	1.105.007,07
Logroño.	945.167,45	930.325,95
Lugo.	620.645,07	923.021,29
Madrid.	8.388.334,05	8.442.619,22
Málaga.	2.137.203,56	3.306.061,35
Murcia.	1.716.551,81	1.844.745,69
Cartagena.	»	450.000 »
Navarra.	»	»
Orense.	838.445 »	1.180.619,89
Oviedo.	1.179.067,22	1.520.037,82
Gijón.	»	225.494 »
Palencia.	1.220.336,08	961.290,99
Pontevedra.	1.230.712 »	1.602.324,06
Vigo.	»	128.235 »
Salamanca.	1.460.301,35	1.408.581,32
Santander.	748.709,22	1.071.205,30
Segovia.	846.131 »	788.999,41
Sevilla.	3.186.226,32	3.863.229,32
Soria.	700.694,94	604.004,49
Tarragona.	1.117.724,40	1.601.222,41
Teruel.	759.846 »	909.974,51
Toledo.	2.062.082,43	1.875.326,18
Valencia.	2.963.018,26	3.908.033,23
Valladolid.	1.701.375 »	1.506.102,93
Vizcaya.	144.167 »	144.167 »
Zamora.	1.083.254 »	1.109.295,46
Zaragoza.	1.941.838,66	2.349.719,78
Baleares.	1.357.364,22	1.084.304,14
Canarias.	316.349,60	444.458,16
	72.878.152,69	84.440.937,06

Aparece, pues, que el impuesto de Consumos, que en el año económico de 1880-81, anterior al de la reforma, produjo en totalidad la suma de 72.878.152 pesetas, asciende en el de 1882-83, siguiente á aquella, á la de 84.440.937, ofreciendo un aumento en pueblos y capitales de 11.562.785 pesetas; aumento inferior en 3.672.948 al de los 15.235.733 pesetas que se hubiera realizado sólo en los cupos de los pueblos de haberse llevado á efecto las disposiciones de la circular de 20 de Marzo de 1878.

IX.

La ley de 6 de Julio de 1882 impuso la obligación al Ministro de Hacienda de formular un proyecto de ley en el que se fijasen definitivamente las reglas á que debiera sujetarse la designación de los cupos desde el próximo ejercicio de 1883-84.

En cumplimiento de aquel deber, tenía redactado á mi salida del Ministerio la minuta de un proyecto, que con la exposición que le precede tuve la honra de entregar á mi dignísimo sucesor en el momento mismo de encargarse del departamento. Éste, conforme sin duda con el articulado de dicho proyecto, se ha servido presentarlo á la deliberación de las Cortes, lo cual es para mi satisfactorio, pues que revela la identidad de opiniones que entre nosotros existe sobre este importante punto; acompañándole, sin embargo, de un preámbulo ó exposición distinta. La variación se explica y comprende fácilmente, si se atiende á que las posiciones de uno y otro son diversas, puesto que yo me encontraba en el caso de justificar las razones que tenía para insistir en lo fundamental de la ley de 31 de Diciembre de 1881.

Hé aquí ahora la exposición y proyecto que entregué :

Á LAS CORTES.

La ley de 31 de Diciembre de 1881 reformando el impuesto de Consumos ha sido, entre todas las que desarrollaron el pensamiento económico del Gobierno, la que ha suscitado más amplia discusión, más empeñados debates; pero después de la ilustrada controversia de que ha sido objeto, ya no sería lícito dudar que, entre todos los procedimientos ensayados hasta el día en la materia, la fórmula contenida en aquella ley es la que mejor responde á los principios de equidad y de justicia sobre que deben descansar los impuestos. Enfrente de esa fórmula no se ha presentado otra alguna que mejor realizase aquellos fines, y esta consideración, y la de haber resistido victoriosamente á todas las objeciones de tan prolija discusión, bien merecen pesar en el ánimo sereno del legislador.

No cabe, pues, desconocer que el planteamiento de esta ley cambió la faz del impuesto, pues á los cupos discrecionales que hasta entonces habían venido rigiendo, sustituyeron los que eran resultado del consumo de las especies en cada localidad, mediante una serie de procedimientos encaminados todos á buscar la mayor equidad posible en la distribución del impuesto; por más que, subordinados los nuevos cupos á principios generales y á reglas fijas y taxativas, no podían hallarse en armonía con los que eran resultado de la tradición ó se habían deducido con más ó menos exactitud, según las circunstancias del momento, si bien de una manera casuística y siempre discrecional, sin responder á ningún pensamiento uniforme.

Consecuencia de esto fué que en unas provincias resultasen dichos cupos superiores y en otras inferiores á los que venían establecidos, dando lugar las quejas de las primeras á la ley de 6 de Julio de 1882, por la cual se autorizó al Ministro que tiene la honra de dirigirse á las Cortes, para establecer durante el presente año económico, y dentro de la cifra calculada á los rendimientos del impuesto, un límite, tanto respecto de los aumentos como de las bajas producidas en los cupos, con objeto de hacer menos sensible la transición, y disponiendo al mismo tiempo que el Gobierno formulase un proyecto de ley para el ejercicio siguiente de 1883-84, en el cual se fijasen definitivamente las reglas á que deberá sujetarse la designación de los cupos.

Serán, pues, los resultados de esta autorización y los de la aplicación de las disposiciones de las dos leyes de 31 de Diciembre de 1881 y de 6 de Julio siguiente, el punto de partida para el estudio de los fundamentos de la nueva ley.

Á poco que sobre aquéllas se medite, presto se echará de ver que las modificaciones que sufrió el proyecto de la de 31 de Diciembre, alterando la uniformidad de los tipos medios de consumo, dejaron fuera de las condiciones generales al crecido número de habitantes que comprenden las provincias en cuyo favor se otorgaron, por circunstancias especiales, determinadas excepciones; y de esa alteración resultaron consecuencias muy trascendentales, que directamente habían de influir en la determinación de los cupos provinciales primero y de los municipales después.

Entre todas las dificultades que puede ofrecer la distribución del impuesto de Consumos, sabido es que la mayor, la principal de todas, sin duda, consiste en

hallar el medio de relacionar los cupos de las especies con la importancia de la producción y del consumo en cada localidad, de tal manera, que este consumo pueda representarse por la cifra más aproximada posible á la que realmente se devengue.

Para establecer esta equitativa distribución, para equilibrar, mejor dicho, las grandes diferencias resultantes de las muy notables que ofrecen entre sí circunstancias tan diversas de producción y de consumo como las que existen entre nuestras provincias, se estableció en la ley de 31 de Diciembre la facultad de aumentar ó de reducir los tipos medios individuales de consumo desde el 20 al 30 por 100; pero estas cifras, que respondían y estaban calculadas en el proyecto con relación al conjunto de habitantes de todas las provincias de la Monarquía, resultaron insuficientes, y casi pudiera decirse que nulas, desde el momento que quedaron excluidas de la regla general las provincias que precisamente se diferenciaban más por la índole de sus producciones y por la entidad de sus consumos.

Cierto es que las disposiciones de la ley de 6 de Julio último, entre las cuales se halla alguna tan importante para el señalamiento de los cupos como la que amplió hasta seis las tres categorías establecidas por la de 31 de Diciembre, han venido á facilitar en gran manera el uso de la autorización para la distribución del impuesto, llevada á cabo sin perturbaciones de ninguna clase, como lo demuestra el hecho de no haber motivado más que unas 230 reclamaciones de alzada, número verdaderamente tan exiguo, tratándose de 8.741 cupos, que muy bien pudiera creerse ya resuelto el problema de los consumos. La experiencia, sin embargo, ha enseñado que todavía no pueden considerarse suficientes las disposiciones de

las dos leyes citadas para cimentar en ellas las bases definitivas del impuesto, y que hay necesidad de introducir importantes modificaciones si la nueva ley ha de responder al objeto por todos apetecido.

No cabe, en verdad, desconocer la diversidad de usos, costumbres, producciones, consumo, etc., que la naturaleza ha establecido entre nuestras provincias; diversidad que llega á ser tan notable en aquellas que ocupan determinadas regiones, que apenas si existe similitud con las demás. No han tenido otro fundamento que esta poderosa consideración las excepciones acordadas en favor de las provincias de Galicia, Asturias y Canarias; pero si es justo reconocer que tales circunstancias constituyen una verdadera excepción, tampoco puede dudarse que existen otras provincias que en mayor ó menor extensión se encuentran en idénticas condiciones que aquéllas, y otras, en fin, que aun reuniéndolas mejores, no alcanzan, sin embargo, á las más favorecidas. Cuando las excepciones en materia de tributos no responden á principios generales, presto se convierten, por legítimas que sean, en privilegios que, además de odiosos, destruyen la unidad de los impuestos, y no sería prudente llevarlas á una nueva ley definitiva de Consumos sin exponerse á provocar rivalidades y antagonismos que no tardarían en fomentar un germen de odiosidad contra el impuesto.

Para satisfacer, pues, á todos los aumentos y bajas que exige una distribución equitativa del cupo total de las especies de todos los pueblos entre las provincias, si esta delicada operación ha de responder á las grandes diferencias de localidad que entre ellas existen, hay necesidad de dar cierta extensión á la facultad de elevar ó de reducir el tipo medio de consumo por habitante, para lo cual no necesita ya la Admi-

nistración recurrir á cálculos más ó menos racionales después de haberle enseñado la experiencia que, extendida dicha facultad hasta un límite máximo de 70 por 100, permitirá, sin quebrantar la unidad del impuesto, hacer extensivos á todas las provincias que se hallen en igualdad de condiciones los beneficios que hasta ahora constituían un privilegio sólo para algunas, sin que por ello dejen éstas de obtener los que por sus circunstancias especiales deban dispensárseles. De esta manera la medida revestirá el carácter de generalidad que en justicia debe tener, y el privilegio habrá dejado de existir.

Otra dificultad se ha tocado al deducir el importe de los encabezamientos, nacida de la forma como la población se halla distribuída en algunas provincias. Regulado el derecho que grava á la especie con arreglo á las seis clases en que se considera dividida la población para los efectos del impuesto, viene á resultar un perjuicio de entidad para aquellas localidades en que se halla diseminada en lugares, aldeas, caseríos, etc., sin que ninguno de éstos llegue á constituir un conjunto ó agrupación de la importancia que las tarifas exigen. Considerada esa población diseminada por todo un distrito municipal como si formase un solo pueblo, se le aplicaba la tarifa correspondiente á la totalidad de los habitantes del distrito, y en algunos casos resultaba igual y aun superior á la por que contribuían algunas capitales.

Semejante injusticia no debía continuar, y ésta es otra de las mejoras que se introducen en este proyecto.

Solicita siempre la Administración por aliviar el peso de los tributos, fiando su prosperidad al desarrollo de las mejoras introducidas en ellos, ha creído llegado el momento de hacer algunas modificaciones

importantes en cuanto á las especies sujetas al impuesto de Consumos, que no podrán menos de redundar en notable alivio de los contribuyentes.

La ley de 31 de Diciembre de 1881 estimó en 75 litros el término medio del consumo individual de vinos de todas clases; y como esta especie, tanto por la generalidad de su consumo como por la entidad del gravamen, es, por decirlo así, la que forma el núcleo del impuesto, es también por iguales motivos la que más sensible se hace á los contribuyentes. Reconociéndolo así el Ministro que suscribe, considera equitativo reducir ese tipo medio á 60 litros, que representa la baja de una quinta parte.

Por análogas consideraciones estima también eliminar de la tarifa 1.^a, que afecta á todos los pueblos, las especies de vinagre, cerveza, sidra y chacolí, las cuales pasarán á formar parte de la 2.^a, que sólo es aplicable á poblaciones de cierta importancia.

En vista de las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y autorizado por S. M., tiene la honra de someter á la aprobación de las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY.

1.º Se declaran subsistentes los tipos medios de consumo de especies establecidos en la regla 1.^a del artículo 5.º de la ley de 31 de Diciembre de 1881 para determinar los encabezamientos que corresponden á las poblaciones no capitales de provincia y tres puertos á que la misma se refiere, hecha excepción del de vinos de todas clases, que se reducirá á 60 litros, y eliminando de dichas especies el consumo de vinagre, cerveza, sidra y chacolí, cuyas especies pasarán á formar parte de la tarifa 2.^a con los mismos tipos de gra-

vamen asignados en la 1.^a, según las respectivas bases de población.

2.º Para que la distribución del cupo total de especies de todos los pueblos entre las provincias pueda verificarse según las condiciones y circunstancias de cada una de ellas, la Administración podrá elevar ó reducir el tipo medio de consumo por habitante dentro de un límite máximo de 70 por 100 (según la naturaleza de cada especie), teniendo en cuenta las circunstancias de que hace mención la regla 3.^a del artículo 5.º de la ley de 31 de Diciembre citada.

3.º La clasificación de categorías de los pueblos de cada provincia para distribuir entre éstos el cupo de especies que haya resultado á la misma por virtud de la aplicación de las reglas de la ley mencionada y de las que contiene la presente, se verificará por los Delegados de Hacienda, estableciendo seis categorías con relación á la importancia de los consumos.

4.º Con presencia de esta clasificación y de los tipos medios que resulten en cada provincia al consumo individual de las especies, las dependencias provinciales de Hacienda aumentarán aquellos términos medios hasta un límite máximo de 20 por 100 en los pueblos comprendidos en la primera categoría, hasta el de 10 en los de la segunda y hasta el de 5 en los de la tercera. Á las poblaciones de la cuarta categoría se les computará el término medio de consumo de especies que resulte á la provincia; á los de la quinta se les disminuirá este tipo medio en un 5 por 100; y el resto de las especies, distribuido entre los habitantes de los pueblos de la sexta categoría, con deducción de la cuarta parte de éstos, dará el término medio de consumo de cada especie que corresponde como tipo individual á éstos.

5.º Para hacer aplicación de los derechos de tarifa

fijados á cada especie y obtener el importe en pesetas de cada encabezamiento, la base de población de los pueblos no capitales de provincia ni puertos asimilados á éstas se fijará por el número de habitantes que constituyan la población agrupada en que esté situada la capitalidad del municipio.

6.º Quedan subsistentes las reglas para fijar los encabezamientos de las capitales de provincia y puertos asimilados contenidas en las leyes de 31 de Diciembre de 1881 y 6 de Julio de 1882.

7.º Lo quedan asimismo las demás disposiciones de la ley de 31 de Diciembre de 1881 relativas á la designación de los cupos de las poblaciones no capitales de provincia en cuanto no se opongan á las prescripciones de la presente.

IMPUESTO EQUIVALENTE

Á LOS QUE EXISTÍAN SOBRE LA SAL.

I.

La reforma más enérgicamente combatida de cuantas en 1881 tuvo la honra de someter á la deliberación de las Cortes, atendiendo á la necesidad de acrecer el presupuesto general de ingresos del Estado, fué la que más tarde recibió legalmente la denominación de *Impuesto equivalente á los de sal*, y, por lo tanto, parece oportuno exponer aquí detalladamente las causas que la motivaron, en demostración de que, al impugnarla, se obedeció sin duda alguna, más que á consejos de la razón, á sugerencias de la pasión política.

Por la ley que declaró completamente libres la fabricación y venta de la sal, se fijó además el derecho que había de pagar la de producción extranjera á su introducción por las Aduanas y la forma en que al Estado habían de contribuir los propietarios de salinas y los vendedores del producto de las mismas; pero no se estableció impuesto alguno sobre el consumo de dicho artículo, y á nadie, por mucho que es-

perase del incremento y desarrollo que había de experimentar la industria salinera á la sombra del desestanco, podía ocultársele que, siendo materialmente imposible que aquellos reducidos arbitrios compensasen el producto líquido de la renta suprimida, que se había elevado en el año económico de 1867-68 á la importante suma de 21 millones de pesetas, la falta de otro arbitrio de mayores rendimientos no podría menos de menoscabar en un tiempo más ó menos remoto los derechos del Tesoro público.

Y en efecto, á los tres años y medio próximamente de haberse planteado el desestanco, el vacío que esta medida hiciera en el presupuesto de ingresos, poco perceptible al principio, había adquirido ya tan serias proporciones, que por momentos crecía la necesidad de evitar ó, al menos, atenuar sus perjudiciales consecuencias; y á esta necesidad, pues, acudió el presupuesto que tuve el honor de formar para el año de 1874-75, autorizado por el Presidente del Poder Ejecutivo en 26 de Junio del primero de dichos años, imponiendo á la entrada de la sal en las poblaciones un derecho uniforme de 15 céntimos de peseta por cada kilogramo, sin que pudiera ser gravado por derechos municipales ó provinciales, proponiéndome recaudar por este medio 15 millones de pesetas.

Aún no había transcurrido un año de la creación de este derecho, y ya se le juzgó excesivo por mi digno sucesor, porque representaba el precio de 30 reales vellon quintal castellano; reduciéndolo en su consecuencia á 9 céntimos de peseta cada kilogramo en la tarifa aprobada por Real decreto de 8 de Mayo de 1875; pero como además se autorizó por esta misma soberana disposición un aumento hasta igual cantidad para atender á los presupuestos provincia-

les y municipales, este nuevo tipo vino á ser, en último resultado, todavía más excesivo que aquél, pues doblando con los arbitrios que se autorizaban el importe del tributo, resultaban 18 céntimos de peseta por kilogramo en vez de los 15, cuyo tipo, al adoptar aquella resolución, se suponía exagerado.

El mismo derecho y el mismo recargo rigieron en el año económico de 1876-77, aunque autorizado éste solamente para cubrir los últimos presupuestos mencionados. Pero si no se había realizado en toda su importancia ni con la conveniente regularidad el derecho establecido en 26 de Junio de 1874, peor suerte cupo aún al de que ahora se trata, toda vez que se recaudó con tal atraso y con resultados tan opuestos á los que sin duda se esperaban, que al espirar el ejercicio del presupuesto de aquel año ascendían á una cifra muy respetable las cantidades pendientes de cobro por su cuenta en las provincias.

Este hubo de ser el motivo de sustituirlo en la ley de 11 de Julio de 1877 con dos impuestos: uno exigible á los Ayuntamientos, cuyo tipo de imposición para determinar el cupo correspondiente á cada localidad se fijó en una peseta por habitante, concediendo á las expresadas Corporaciones, como compensación del gravamen que se las imponía, el derecho de la exclusiva en la venta de la sal, derecho que podrían ejercitar directamente ó por arrendamientos, á no preferir la recaudación del impuesto á la entrada del género en las poblaciones, ó por cualquiera de los demás medios establecidos para la contribución de Consumos de las especies de comer, beber y arder; y otro de 1.500.000 pesetas, repartible entre los fabricantes de sal en proporción á lo que de ordinario expendiesen para el consumo de la Península é Islas adyacentes.

Parece indudable que al fijar estos dos impuestos se abrigaría la esperanza de recaudarlos sin dificultad alguna; pero no se pasó mucho tiempo sin ser éste modificado en su tipo de imposición, pues habiéndose autorizado á los Ayuntamientos por el art. 43 de aquella ley para gravar en beneficio de sus presupuestos el consumo de ciertos frutos coloniales hasta una cantidad igual á la que éstos pagaban por derecho transitorio de Aduanas, húbose de reconocer que esta medida podía dificultar el tráfico y libre circulación de los frutos, y se dispuso por Real orden de 24 del mismo mes de Julio de 1877, entre otras cosas, que usando el Gobierno á su vez de la facultad que en aquel mismo artículo le habia sido otorgada, realizase en las Aduanas dicho recargo municipal, compensando su importe á los Ayuntamientos con una rebaja de 25 céntimos de peseta por habitante en el impuesto de la sal.

Cumplido este mandato, la cantidad de 17 millones de pesetas en que se había calculado el gravamen quedó reducida á la de 12.900.487, repartible, como ya se ha dicho, entre todos los Ayuntamientos.

No equivalía ni con mucho este cupo al producto líquido de la renta de la sal en el mencionado año económico de 1877-78, y sin embargo de que esta circunstancia debió haber asegurado su fácil y oportuna realización, tampoco pudo hacerse efectivo á su debido tiempo, y por esto sin duda se rebajaron sus rendimientos para 1878-79 á 12.750.000 pesetas y para 1880-81 á 12.500.000, disponiéndose además en la ley de Presupuestos del primero de estos dos años económicos que los atrasos de dicho tributo, correspondientes á 1877-78, se cobrasen de los recursos é ingresos municipales que también correspondiesen al mismo año, no obstante lo cual todavía lucen en las

cuentas de Rentas públicas de las provincias cuantiosos débitos que la Administración persigue por los medios coercitivos que establecen las instrucciones vigentes.

Estos resultados demostraban hasta la evidencia que mientras el impuesto en cuestión fuera exigido á los Ayuntamientos, nunca tendría el éxito satisfactorio á que justamente se aspiraba; y si á esto se agrega que á pesar de ser libres la fabricación y el comercio de la sal, el Estado tenía derecho, con relación á estos antecedentes, y por más que por alguien haya sido impugnado este principio científico, al producto líquido de 23.381.000 pesetas que, según el censo de población de 1877, hubiera ofrecido á existir en el año de 1881 el estanco, no debe causar extrañeza que se pensara en obtener de alguna manera una suma equivalente.

Objeto tan interesante y esencial podía hasta cierto punto conseguirse por cualquiera de estos dos medios: restableciendo el estanco de la sal, ó gravando la que se destinase á usos industriales.

Pero como el estanco, á cuyo restablecimiento en otra ocasión se había ya renunciado por ser insostenible en el terreno de los buenos principios económicos, no había de dar inmediatamente los pingües productos de otro tiempo, que eran los que con urgencia reclamaba la necesidad de nivelar el presupuesto; había de ser mal recibido; y sobre estos inconvenientes, de suyo graves, exigiría, por último, cuantiosos desembolsos en la expropiación de las salinas que fueron de la Hacienda pública y se enajenaron por efecto de la ley del desestanco y de las que posteriormente se hubieran descubierto y estuviesen en explotación; y como el gravamen sobre la sal que en sus manipulaciones empleasen las industrias, además de ser por

un lado sumamente escaso en rendimientos, razón por la cual nunca podría llenar aquel objeto, restringiría por otro el desarrollo de las mismas industrias, imposibilitándolas para sacar sus productos al mercado en competencia con sus similares extranjeros, ante estas decisivas consideraciones fueron ambos medios abandonados.

Era, pues, forzoso recurrir á otro que, siendo justo y equitativo, pudiera conducir al término deseado, realizando al mismo tiempo el principio general de que cada uno contribuya al sostenimiento de las cargas públicas en proporción á su riqueza.

En circunstancias normales, este otro medio habría podido ser un impuesto indirecto, pues sabido es que los de esta forma, si se plantean y administran bien, reúnen á sus importantes y seguros rendimientos la inestimable cualidad de ser pagados sin violencia y según las facultades de cada contribuyente; pero en nuestro país no han llegado todavía estos impuestos al grado de perfección que se requiere para hacerlos estables y firmes en sus rendimientos, lo cual no debe atribuirse á impericia ó indiferencia de la Administración, la que, por el contrario, hizo siempre cuanto pudo para perfeccionarlos, sino á la perturbación de tiempos todavía no lejanos, que, ó hicieron estériles las reformas planteadas, ó impidieron que se iniciaran otras nuevas; y habida consideración, tanto á estos antecedentes cuanto al éxito poco lisonjero que tuvieron los arbitrios creados en 26 de Junio de 1874 y 8 de Mayo de 1875, desistí de dar al impuesto que proyectaba aquel carácter. Y de aquí que fuese absolutamente preciso apelar á la forma directa, acudiendo á la riqueza.

II.

Cierto que sólo en determinados momentos hay un perfecto derecho á buscar en la riqueza recursos extraordinarios; pero justamente en uno de ellos nos hallábamos en la época á que me refiero, segun queda explicado en otros capítulos.

He aquí la razón que me decidió á formular el proyecto de un impuesto con el título de *Derecho por consumo de sal*, impuesto que á mi juicio no podía de ningún modo considerarse sino como una mera transformación de los que regían sobre la fabricación y consumo de la misma especie.

Pero considerando sin duda que el impuesto en proyecto venía á sustituir á estos que quedan indicados, las Cortes, en su alta sabiduría, estimaron más propio denominarlo *Impuesto equivalente á los de sal*, é introdujeron al mismo tiempo en algunas de sus bases esenciales varias modificaciones de reconocida utilidad y conveniencia, con las cuales fué definitivamente aprobado el proyecto y convertido en ley, que lleva la fecha de 31 de Diciembre de 1881.

Una de las modificaciones consistió en fijar para los contribuyentes por inmuebles, cultivo y ganadería de los pueblos que hubiesen presentado sus cédulas de declaraciones de riqueza en consonancia con lo prescrito en el artículo 24 del reglamento dictado en 10 de Diciembre de 1878 para la rectificación de los amillaramientos existentes, y hubiesen sido aceptadas por la Administración, el tipo de 1,80 por 100 sobre el producto líquido imponible de sus bienes, dejando en vigor el de 2,40 por 100 para los de los pueblos que no hubiesen cumplido con aquel precepto; y ocioso es decir que esta modificación fué, como no podía

menos de ser, altamente justa, por cuanto, correspondiendo aquellos tipos á los de 15 y 20 por 100 fijados como cuota para el Tesoro en la ley de la contribución Territorial de 31 de Diciembre de 1881, no resultaría de aquel modo falseada la proporcionalidad del tributo para los contribuyentes de buena fe que hubiesen declarado y declarasen en lo sucesivo mayor riqueza.

El párrafo del proyecto, preceptivo de que los contribuyentes que lo fuesen por dos ó por los tres conceptos de territorial, industrial é inquilinato, pagarían únicamente la cuota superior que por cualquiera de ellos les correspondiese, fué también modificado añadiendo á su final las palabras «en cada provincia», y esta adición aumentó, sin alterar la naturaleza del impuesto, la facilidad de hacerlo efectivo en justa proporción, lo mismo de los contribuyentes que tuviesen concentrada su propiedad en una provincia, que de los que la tuviesen repartida en varias.

La última modificación, aparte otras secundarias, se redujo á exceptuar del pago del impuesto á los que no tuviesen vecindad ni residencia fija en cada término municipal, calificados de transeuntes por el párrafo 3.º, artículo 12, capítulo II, título I de la ley Municipal vigente; pero mal comprendido el alcance de esta excepción por los obligados á repartir el tributo, se hizo necesario fijarlo en los términos que luego se dirán.

No obstante estas modificaciones, las censuras que se hicieron del nuevo impuesto fueron muchas y diferentes entre sí. Pero ni su forma pudo ser otra, según queda demostrado, si había de realizarse el propósito de reforzar con éxito seguro los ingresos del Tesoro; ni la propiedad resulta gravada, con relación á lo que lo sería caso de existir el estanco de la sal, más que

en unos 13 céntimos de peseta por 100, y no en la cuantía que se supuso sin tener presente la circunstancia, digna por cierto de ser tomada en consideración, de que en la inmensa mayoría de los pueblos repartían los Ayuntamientos el anterior impuesto sólo entre los contribuyentes por inmuebles, cultivo y ganadería; ni se estimó, en fin, oportuno designar al de que se trata una aplicación general, sin eximir de su pago á las clases menesterosas, porque este sistema hubiera quebrantado con muchos y muy importantes fallidos la integridad del producto que del mismo impuesto se esperaba.

Por otra parte, lo que se hizo para llevar á cabo su derrama fué buscar la base de la contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería, la de la Industrial y de Comercio y la del precio de los alquileres de fincas no destinadas á la industria, sin que por lo que toca á esta última base hubiera motivo para suponer, como equivocadamente se supuso, que era el principio de una contribución de inquilinatos. De modo que el impuesto no recae exclusivamente sobre la propiedad territorial, sino que asimismo se reparte sobre las otras dos bases establecidas; de donde resulta que hay propietarios que, en vez de contribuir por aquel concepto, pagan por razón de los alquileres de las habitaciones que ocupan ó por razón de la industria que ejercen, y esto destruye el argumento que con más intención que justicia se hizo del enorme gravamen que en su producto líquido imponible iban á sufrir las riquezas rústica, urbana y pecuaria.

Además, estando fuera de toda duda que el Estado tiene derecho á arbitrar recursos por cualquier medio y en cualquiera forma cuando por la fuerza de las circunstancias desaparece un tributo, como desapareció la renta de la sal, y necesita un ingreso equi-

valente para atender á sus gastos, claro es que al usar de este derecho acudiendo á la riqueza en sus varias manifestaciones, lo hizo legítimamente y con tanta más razon, cuanto que habiendo sido la que más beneficios recibiera del desestanco, debía suponerse la más interesada que nadie en coadyuvar al noble propósito que motivara el nuevo impuesto.

Por último, si para tener condiciones de estricta justicia deben crearse generalmente los impuestos cuando sean de todo punto necesarios para subvenir á las verdaderas y perentorias obligaciones del Estado, y han de recaer sobre el producto líquido de los bienes raíces ó sobre utilidades conocidas, con tipos de imposición relativamente módicos y con igualdad proporcional en su repartimiento, siendo á la par fácil y poco costosa su cobranza, estas condiciones distinguen precisamente al *Impuesto equivalente á los de sal.*

III.

Veamos ahora si este impuesto ha respondido al propósito con que fué creado.

Elevado á ley, como queda dicho, en 31 de Diciembre de 1881, no debe ocultarse, en prueba de imparcialidad, que su planteamiento tropezó al principio con dificultades, originadas unas de la errónea inteligencia que á las disposiciones reglamentarias dictadas con aquel fin daban las Administraciones de Propiedades é Impuestos, y otras de la apatía y negligencia de los Municipios en cumplir los deberes que aquellas mismas disposiciones les imponían, hasta el extremo de que, á juzgar por su tardanza en formar los padrones de los individuos sujetos al pago del impuesto, y por los errores que cometieron en su repartimiento,

no hubiese sido aventurado presumir si se habrían propuesto hacerlo, si no odioso, al menos ineficaz en sus rendimientos.

La exención establecida en favor de los individuos calificados de transeuntes por la ley Municipal, dió motivo á que en algunas provincias se dudase si comprendía á los hacendados que, no siendo vecinos de un pueblo, tuviesen en él propiedad; y esta duda fué una de aquellas dificultades que se opusieron al planteamiento inmediato del impuesto, hasta que por Real orden de 14 de Mayo de 1882, expedida de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado en pleno, que á su vez estuvo de acuerdo con lo que antes informaron en el mismo sentido la Dirección general de Impuestos, la de lo Contencioso é Intervención general de la Administración del Estado, se declaró que dicha exención no comprendía en manera alguna á los hacendados forasteros, los cuales deberían satisfacer sus cuotas con arreglo á lo dispuesto en el artículo 3.º de la ley de creación del impuesto de 31 de Diciembre de 1881, y que sólo alcanzaba á los extranjeros no domiciliados y militares en activo servicio respecto á la cuota que pudiera corresponderles por inquilinato, pero no en cuanto á la contribución Territorial ó Industrial si fuesen propietarios ó ejerciesen alguna industria.

Finalmente, otra de las dificultades indicadas tuvo origen en la precipitación con que por necesidad se hicieron las operaciones preliminares á la cobranza del impuesto. Á causa de las inexactitudes cometidas por las corporaciones municipales en los padrones y listas cobratorias, fué materialmente imposible verificar en la mayor parte de las provincias la acumulación y comprobación de cuotas que determina el artículo 14 del respectivo reglamento, dando esto

lugar á que muchos contribuyentes que no debían pagar sino por un concepto, figurasen en los tres sobre que el impuesto gira y se expidiese contra ellos igual número de recibos. No afectaba á la esencia del tributo esta dificultad puramente administrativa; pero con objeto de evitar perjuicios y molestias á los contribuyentes, se dispuso por Real orden de 28 de Junio de 1882, entre otras cosas, que se cumpliese lo prevenido en los artículos 8.º y siguientes del reglamento de 31 de Diciembre de 1881, para que á cada contribuyente no se le exigiese sino el importe del impuesto por el concepto más elevado; encargándose á la Recaudación que procurase siempre unirlos recibos de un mismo contribuyente á fin de exigirle tan sólo el mayor, y que al que hubiere satisfecho el impuesto por un concepto y después se viese que debía satisfacerlo por otro, á causa de ser mayor la cantidad que por él debía pagar, se le admitiese en pago el importe del recibo que obrase en su poder y que devolvería, abonando únicamente la diferencia.

Vencidas en gran parte aquellas dificultades por los medios que quedan expuestos y también por el concurso material prestado por la Inspección general de la Hacienda pública en algunas provincias, pues justo es decir que al celo y cooperación de este Centro se debió muy principalmente el éxito satisfactorio obtenido, la liquidación del impuesto de que se trata ofreció en el segundo semestre de 1881-82 la suma de 11.170.756,09 pesetas, ingresando efectivamente en el Tesoro 9.393.822,29 y pasando al concepto de *Resultas de ejercicios cerrados* las 1.776.933,80 restantes; cuyo resultado demuestra hasta la evidencia que tan luego como quede establecido en la forma que determina el reglamento aprobado para su administración y cobranza, producirá, cuando menos, este

impuesto la suma de 21 millones de pesetas, con que figura en el presupuesto general de ingresos del Estado.

El partido que se ha intentado sacar de algunos errores cometidos en la extensión de los recibos, limitadísimos sin duda alguna, nada dicen contra el impuesto en sí y tampoco las quejas que se formulan respecto á la cobranza; pero aparte de las disposiciones adoptadas para su remedio y que quedan expuestas, debo manifestar que entraba en mi propósito, entre otras medidas de detalle, la formación de un padrón administrativo en las capitales de provincia que supliera la deficiencia de los que la Administración ha utilizado en lo relativo á inquilinatos. Por este medio, sin la premura de tiempo que pesó sobre la Administración en el primer semestre, y desplegando ésta todo el celo debido para cuidar de que los recibos se extiendan con prolija exactitud y que la Recaudación cumpla exactamente sus deberes, quedarán remediados esos lunares con que se ha pretendido afear una reforma altamente beneficiosa.

He consignado los antecedentes de la reforma en lo relativo á este impuesto y las dificultades que ofreció su planteamiento, afortunadamente en breve dominadas. Quedan, en mi opinión, demostrados la justicia del tributo y lo razonable de sus bases, la falta de sólido fundamento en la apasionada oposición que se le ha hecho y la facilidad con que pueden ser corregidas las faltas administrativas que en su exacción se han notado y puedan aún notarse.

Réstame sólo exponer los resultados que el impuesto ha ofrecido para el Tesoro, y su comparación con los de los años precedentes; y de esta manera quedará probado que la decantada resistencia que se suponía para el pago ha estado más bien en la imagina-

ción de mis impugnadores que en la realidad de los hechos.

	Crédito presupuesto y recaudación obtenida.	DIFERENCIA EN LA RECAUDACIÓN.	
		De más.	De menos.
Ejercicio de 1877-78.			
Se presupuso.	18.500.000 »		
Se recaudó.	10.777.468,81		
		»	7.722.531,19
Ejercicio de 1878-79.			
Se presupuso.	12.750.000 »		
Se recaudó.	10.570.592,94		
		»	2.179.407,06
Ejercicio de 1879-80.			
Se presupuso.	12.750.000 »		
Se recaudó.	10.699.161,14		
		»	2.050.838,86
Ejercicio de 1880-81.			
Se presupuso.	12.500.000 »		
Se recaudó.	10.807.003,45		
		»	1.692.996,55
Ejercicio del primer se- mestre de 1881-82.			
(1.º de Julio á 31 de Diciembre de 1881).			
Se presupuso.	6.250.000 »		
Se recaudó.	5.618.504 »		
		»	631.496 »
Ejercicio del segundo semestre de 1881-82.			
(1.º de Enero á 30 de Junio de 1882).			
Se presupuso.	10.500.000 »		
Se recaudó.	9.393.822,29		
		»	1.106.177,71

En el presupuesto de 1876-77 aparece englobado el impuesto sobre la sal con el de consumos y cereales, por cuya razón no figura en el estado precedente.

Como se ve, la recaudación del segundo semestre de 1881-82, ejercicio de 1.º de Enero á 30 de Junio,

ascendiendo á pesetas 9.393.822,29, corresponde á pesetas 18.787.644,58 en un año, y, por lo tanto, presenta una suma que excede sobre las recaudadas en los ejercicios anteriores en pesetas 8.000.000 y á la mayor presupuesta en ellos en 6.000.000 de pesetas.

La importancia del impuesto queda acreditada, la facilidad de su recaudación lo está igualmente con la cuantía de la obtenida, y todo, en fin, demuestra que no me he visto defraudado ni en las esperanzas que abrigaba, ni en las seguridades de éxito que repetidamente ofrecí.

No he de concluir sin manifestar una opinión que abrigo respecto á modificaciones que se aconsejan en este tributo. Según se desprende de lo que dejo expuesto, únicamente procede en mi juicio corregir los pequeños defectos administrativos indicados, respetando sus bases esenciales; pues los que sostienen que habría conveniencia en que solo gravase á la propiedad y á la industria paréceme que sostienen un error. Al prescindir del inquilinato, dejaría de contribuir una riqueza que no tiene otra manifestación, renunciándose por otra parte al perfecto conocimiento de antecedentes que pueden convenir á la Administración, no sólo en lo presente sino en lo porvenir.

IMPUESTO SOBRE SUELDOS

Y ASIGNACIONES.

No obstante haberme ocupado de este tributo al tratar de los *Presupuestos*, considero oportuno hacer algunas indicaciones respecto á sus antecedentes, y ampliar los razonamientos que entonces aduje sobre la justicia y conveniencia de la reforma que tuve el honor de presentar á las Cortes y éstas aprobaron.

No voy, sin embargo, á discutir sobre la conveniencia ó inconveniencia del impuesto, del cual, á la verdad, no soy en absoluto partidario. Si el Estado considera que están remunerados en demasía los que perciben sueldos del Tesoro público, debe disminuirles sus haberes ; pero si estima, por el contrario, que son relativamente pequeños é insuficientes, ¿por qué razón se los amengua por medio de un tributo?

Examinando la cuestión bajo este punto de vista, estoy lejos de ser partidario de un impuesto que no creo se funde en principios de justicia ni de buena administración. Comprendo que en tiempos azarosos para el Tesoro ; en tiempos de guerras que exijan crecidos gastos, aminorándose los ingresos por iguales

causas, se imponga y se acrezca, por la misma razón que, en épocas por fortuna ya lejanas, dejaban de pagarse dos, tres ó más mensualidades á los funcionarios públicos y clases pensionadas con derechos pasivos; pero no se explica satisfactoriamente el procedimiento en épocas de paz y de normal administración.

Sin embargo, comprendo la fuerza de las circunstancias, hasta el punto de que, no obstante mis opiniones, mantuve en el año de 1874 el principio, pero reduciendo su aplicación á límites, aunque elevados, defendibles ante las necesidades de la guerra y la situación del Tesoro.

Voy, pues, sólo á cumplir mi propósito, exponiendo algunas consideraciones sobre la naturaleza y forma del impuesto, tal como existía al ser reformado por la ley de 31 de Diciembre de 1881, en justificación del procedimiento que tuve el honor de proponer á las Cortes.

El art. 3.º de la ley de Presupuestos de 1867-68 aprobó las bases, adjuntas á la misma, para establecer una imposición de 5 por 100 sobre todas las rentas, sueldos y asignaciones que se devengaran desde 1.º de Julio de 1867 y debieran satisfacerse de fondos del Estado, provinciales ó municipales, expresando que el Clero, cuyas asignaciones están determinadas y garantidas por convenciones solemnes con la Santa Sede, fuera invitado á someter aquéllas voluntariamente al impuesto de 5 por 100 señalado á las demás clases del Estado. El ingreso que este nuevo recurso había de producir se calculaba en 7.250.000 escudos, ó sean 18.125.000 pesetas.

Con la denominación de transitorio, fué comprendido este impuesto entre las contribuciones directas en el presupuesto de 1868-69, fijándose el importe de

este ingreso en la misma cantidad que en el año anterior.

En el de 1869-70 se redujo el ingreso presupuesto á 7.000.000 de escudos, ó sean 17.500.000 pesetas, habiéndose determinado por el art. 6.º de la ley de 1.º de Julio de 1869 que no se impusiera el 5 por 100 sobre la renta producida por los bonos del Tesoro y que las Sociedades mineras no estaban comprendidas en el impuesto.

Por el art. 5.º del decreto-ley de 8 de Junio de 1870, se fijó en el 5 por 100 el impuesto transitorio sobre la renta, y *sobre los sueldos* y asignaciones del Estado *en el 10 por 100*, calculándose para el año económico de 1870-71 en 16.500.000 pesetas el ingreso por el impuesto sobre sueldos y asignaciones del Estado y cargas de justicia, en 3.000.000 el descuento de 10 por 100 en el personal de obligaciones eclesiásticas y en 300.000 pesetas el impuesto de 2,50, establecido por la misma disposición en su citado artículo sobre los sueldos y asignaciones de los empleados dependientes de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, cuando llegaren ó excedieren de 1.500 pesetas anuales. Estos conceptos estaban comprendidos en el presupuesto del expresado año económico entre las contribuciones transitorias, y arrojaban un total de ingresos de 19.800.000 pesetas.

El decreto de 28 de Setiembre de 1871 modificó lo establecido por la disposición anteriormente citada, ordenando que la rebaja producida en los haberes y asignaciones de las clases dependientes del Estado por el impuesto sobre sueldos y rentas, se haría efectiva desde 1.º de Octubre inmediato en la proporción siguiente : 12 por 100 en los sueldos y asignaciones que no excedieran de 2.000 pesetas, 15 por 100 en las que importasen desde 2.001 á 10.000 y 20 por 100

en todas las que excedieran de dicha cantidad de 10.000 pesetas. Exceptuáronse las clases pertenecientes á los cuerpos é institutos armados, hasta Coronel inclusive, las cuales sólo experimentarían el descuento de 10 por 100.

El art. 4.º de la ley de 26 de Diciembre de 1872 previno que el impuesto transitorio sobre sueldos, haberes, premios y asignaciones del Estado, de la provincia y del municipio, se exigiría con arreglo al decreto ya citado de 28 de Setiembre de 1871; y comprendidos entre las contribuciones transitorias figuraban estos conceptos de ingreso en el presupuesto de 1872-73 con la importancia siguiente :

Impuesto sobre sueldos y asignaciones del		
Estado.	Plas.	21.000.000
Impuesto sobre sueldos de los empleados		
provinciales y municipales.	»	4.000.000
<i>Total de cantidades presupuestas.</i>	»	<u>25.000.000</u>

La fuerza de las circunstancias me obligó, contra mis convicciones, según dejo dicho, á mantener en el presupuesto para el año de 1874-75, que tuve la honra de formar, este impuesto, que, después de rectificados los cálculos, comprendí en las contribuciones directas, en los términos siguientes :

Impuesto sobre sueldos y asignaciones del		
Estado.	Plas.	18.000.000
Novena parte de aumento sobre el mismo		
por impuesto extraordinario de guerra.	»	2.000.000
Impuesto sobre sueldos de empleados pro-		
vinciales y municipales.	»	2.000.000
Novena parte de aumento sobre el mismo		
por impuesto extraordinario de guerra.	»	222.000
<i>Total de cantidades presupuestas.</i>	»	<u>22.222.000</u>

Este impuesto sufrió una importante modificación por la ley de Presupuestos para el año económico de

1876-77, consignándose en el art. 8.º de la misma lo que sigue :

»El impuesto sobre sueldos, rentas y asignaciones del Estado, se cobrará con arreglo á la siguiente escala :

»Los individuos de las clases activas, civiles y militares, incluso los de la Casa Real y Ministerio de Ultramar, contribuirán :

»Hasta 1.500 pesetas inclusive, con el 10 por 100.

»Desde 1.501 hasta 10.000 inclusive, con el 15 por 100.

»Desde 10.001 en adelante, con el 25 por 100.

»Los individuos de las clases militares que sirvan en los diversos cuerpos é institutos armados del Ejército, los de reemplazo y los cuadros de reservas, continuarán satisfaciendo el impuesto que en la actualidad rige.

»Se asimila á los cuerpos armados, para los efectos de este artículo, á los inválidos retirados como inutilizados en campaña y á los que cobren pensiones de cruces por heridas ó inutilidad declarada, cuyos haberes excedan de 1.000 pesetas, pues en otro caso no sufrirán descuento alguno como impuesto sobre sueldos y asignaciones del Estado.

»Las clases pasivas, en general, contribuirán todas con el 25 por 100.

»Queda autorizado el Gobierno para igualar el descuento de las clases pasivas con el de las activas, desde el momento en que por economías efectivas, realizadas en el presupuesto de gastos, se compense la disminución que producirá en el de ingresos la igualación del descuento de las referidas clases.

»Mediante las formalidades que correspondan, se obtendrá del Clero un donativo de la cuarta parte de sus asignaciones personales.»

Los ingresos presupuestos por estos conceptos, fueron los siguientes :

Impuesto sobre los sueldos y asignaciones del Estado.	Ptas.	30.000.000
Donativo del Clero y Monjas.	»	7.500.000
Impuesto sobre los sueldos de los empleados provinciales y municipales, con el recargo de guerra.	»	1.600.000
<i>Total de cantidades presupuestas.</i>	<i>»</i>	<u>39.100.000</u>

La ley de Presupuestos para 1877-78 no introdujo más alteración en lo establecido anteriormente, que la de determinar en su artículo 17 que los jefes, oficiales, clases é individuos del cuerpo armado de Orden público estuvieran sujetos al mismo descuento que sufrían los demás institutos armados del Ejército en servicio activo.

Los ingresos por el impuesto sobre sueldos y asignaciones del Estado fueron presupuestos en.	Ptas.	27.000.000
Por donativo del Clero y Monjas.	»	7.500.000
Por el impuesto sobre los sueldos de los empleados provinciales y municipales.	»	1.600.000
<i>Total de cantidades presupuestas.</i>	<i>»</i>	<u>36.100.000</u>

Ninguna variación hizo la ley de 17 de Mayo de 1878, aprobatoria de los presupuestos para 1878-79, en cuyos ingresos y entre los valores á cargo de la Dirección general de Impuestos, se contaban :

Por el impuesto sobre sueldos y asignaciones del Estado.	Ptas.	28.000.000
Por donativo del Clero y Monjas.	»	7.500.000
Por impuesto sobre sueldos de empleados provinciales y municipales.	»	2.900.000
<i>Total de cantidades presupuestas.</i>	<i>»</i>	<u>37.700.000</u>

En el presupuesto de ingresos para el año econó-

mico de 1880-81 figuraban entre los valores á cargo de la Dirección general de Impuestos :

Impuesto sobre sueldos y asignaciones del		
Estado.	Ptas.	30.000.000
Donativo del Clero y Monjas.	»	7.500.000
Impuesto sobre los sueldos de los empleados		
provinciales y municipales.	»	2.400.000
		<u>39.900.000</u>

Para el primer semestre de 1881-82 se fijó la mitad de cada una de estas cantidades como ingreso por su concepto respectivo, según procedía, toda vez que el presupuesto del semestre era el mismo que el del año económico anterior, aunque reducido á un período de seis meses.

De conformidad con la ley de 31 de Diciembre de 1881, que había de tener cumplimiento desde 1.º de Enero siguiente, se establecieron en el presupuesto para el segundo semestre de 1881-82 los ingresos por los conceptos de que se trata, en los términos que siguen :

Impuesto sobre sueldos y asignaciones del		
Estado.	Ptas.	9.000.000
Donativo del Clero y Monjas.	»	1.500.000
Impuesto sobre los sueldos de los empleados		
provinciales y municipales.	»	900.000
		<u>11.400.000</u>

Y finalmente, en el duplo de cada una de estas cantidades por su concepto respectivo, se señalaron los ingresos en el presupuesto para el año económico corriente.

Me he detenido en la exposición de los datos que preceden, para que de ellos aparezcan los hechos que me he propuesto queden consignados:

1.º Que el impuesto, establecido con carácter transitorio y en límites moderados, tomó el de progresivo

y una mayor importancia en el tributo desde el año de 1871.

2.º Que conservando el mismo carácter progresivo, subió á crecidos límites en 1876-77.

Aparte de los inconvenientes que entraña todo impuesto progresivo, si el de que vengo tratando hubiera tenido mayor proporcionalidad y se encerrara en moderados términos, podía ser, ya que no justificado, disculpado al menos en momentos críticos para la Hacienda pública, y no habría levantado contra sí tantas y tan legítimas reclamaciones.

En efecto, á las clases activas estaba fijado un tipo que oscilaba desde el 10 al 25 por 100, según la importancia de sus haberes, siendo muy pocos los que quedaban sujetos al más elevado. Dentro de unas mismas clases las había que no tributaban más que al 10 por 100, fuera el que fuese el haber que disfrutaran; y mientras esto acontecía con la clase activa, la pasiva, el clero, las monjas, tributaban al 25 por 100, tipo á que no llegaba impuesto alguno.

¿Qué razon de justicia abonaba que á la desgraciada viuda, á la huérfana desvalida, á quienes el Estado tenía asignada una corta pensión como recompensa de los servicios prestados por su esposo ó su padre; al modesto párroco que disfrutaba un pequeño haber, en justa compensación solemnemente convenida, se les exigiera ó demandara el 25 por 100 de sus haberes, y solamente pagaran el 20 por 100 los funcionarios activos que disfrutaban 10.000 pesetas de sueldo anual, y el 10 por 100 algunos de éstos que percibían sueldos aún más crecidos?

Y á la vez que no abonaba á este impuesto razón alguna de justicia, tenía contra sí otras de conveniencia muy atendibles.

Reconocida es la necesidad, por todos los que de

Administración se ocupan, de que los funcionarios públicos estén bien retribuidos, pues ante sueldos mezquinos, es lo general, y por sí solo se explica, que la inteligencia, la laboriosidad y la probidad, aunadas en un individuo, busquen en otra parte la merecida remuneración. Pues bien; siendo así que en España, por circunstancias diversas, la Hacienda pública sostiene un personal numeroso y no muy bien retribuido, al disminuirle sus haberes con un impuesto, se le coloca en condiciones de que busque, mediante su actividad y su trabajo, lo que todavía necesite para la completa satisfacción de sus necesidades; y hay por otra parte peligro de que la reducción de los sueldos, unida á la inseguridad en los destinos, ocasionen á la Administración y al Tesoro perjuicios que no basten á compensar los ingresos de un impuesto, el cual seduce á primera vista por la facilidad que presenta para ser recaudado.

Pero la reforma no era y no podía ser combatida en el fondo, sino en cuanto á la oportunidad de llevarla á cabo y á la importancia de la disminución del recurso que por medio de este impuesto se obtenía.

En verdad que si para hacer la reducción hubiese sido preciso dejar indotado el presupuesto, hubiera meditado mucho antes de presentar á las Cortes el proyecto de ley, aunque sin abandonar en un todo la reforma, siquiera limitándola al tipo único, suficiente para obtener la cantidad absolutamente precisa; pero ofreciendo en su conjunto el plan económico que sometí á la aprobación de los Cuerpos colegisladores medios para hacer lo que estimaba justo, no dudé en proponerlo, siendo aceptado con aplauso, no sólo porque reparaba una injusticia y mejoraba á clases dignas por todos conceptos de consideración, sino por cuanto favorecía directamente á la industria y al comercio,

adonde desde luego va á parar el mayor haber que disfruten los funcionarios públicos, el clero y las clases pasivas.

Lo único que tuve que tomar en cuenta fué que el tipo elegido guardase armonía con el de los impuestos que pudieran considerarse más similares. Sin duda el que más se parece al de que se trata es la contribución Industrial, respecto á la que, como dije al ocuparme de ella, fuera de desear que la Administración poseyera el conocimiento exacto de las utilidades de los contribuyentes, como lo tiene en el impuesto sobre sueldos y asignaciones, porque en tal caso estaria basada en fundamentos de la más estricta justicia.

Respecto á dicha contribución, cuando las utilidades son determinadamente conocidas, como ocurre con las Sociedades de crédito, el tipo tributario es el de 10 por 100, y éste fué el escogido para el impuesto, con tanta más razón, cuanto que era posible adoptarlo sin detrimento para la nivelación del presupuesto ni perjuicio para las obligaciones del Estado.

Hay todavía quien lamenta que la reforma se haya llevado á cabo. Respeto este parecer, pero abrigo la convicción de haber obrado con rectitud, y confío que llegarán á reconocerlo así aun los que más han censurado aquella medida. Y andando el tiempo, es de desear que las circunstancias de nuestra Hacienda mejoren, para que desaparezca el impuesto sobre sueldos y asignaciones del Estado; y acaso se aumenten los haberes de la clase activa, cuando simplificaciones en el organismo administrativo permitan hacer reducciones en el personal.

He creído deber dar todas las explicaciones que quedan expuestas, en justa defensa de un acto que ha merecido las mayores censuras por parte de mis opositores.

ADUANAS.

Todo lo referente al ramo de Aduanas exige de mi parte detenida explicación, no sólo por la importancia del asunto, sino también porque han sido múltiples las cuestiones á que he tenido que atender.

Procuraré, sin embargo, concretar los hechos cuanto sea posible para no dar á este trabajo más extensión que la absolutamente precisa.

Al hacerme cargo del Ministerio de Hacienda encontré la renta de Aduanas en una situación tal de prosperidad y desarrollo, que, no por ser prevista y esperada hacia mucho tiempo, era menos lisonjera.

La recaudación alcanzaba cifras hasta entonces desconocidas; resultado no sólo debido á la paz y bienestar del País y á la reforma arancelaria de 1869, que sólo desde 1876 pudo hacer sentir sus efectos de un modo normal, sino también á una severa gestión administrativa que había reducido el contrabando y la defraudación á muy estrechos límites.

Hé aquí el estado que lo demuestra:

ESTADO NÚM. I.

RECAUDACIÓN DE LA RENTA DE ADUANAS.

	PRESUPUESTOS.	RECAUDACIÓN obtenida.	AUMENTO SOBRE EL PRESUPUESTO.		AUMENTO SOBRE LA RECAUDACIÓN ANTERIOR.		BAJA SOBRE EL PRESUPUESTO.		BAJA SOBRE LA RECAUDACIÓN.	
			Efectivo.	o/o.	Efectivo.	o/o.	Efectiva.	o/o.	Efectiva.	o/o.
Año 1876-77.	73.500.000	(c) 83.475.875	9.975.875	13,57	(f) 11.792.656	16,45	»	»	»	»
Id. 1877-78.	108.745.000	(c) 88.672.900	»	»	5.197.025	6,22	20.072.100	18,45	»	»
Id. 1878-79.	100.062.000	(d) 106.614.390	6.552.390	6,54	17.941.490	20,23	»	»	»	»
Id. 1879-80.	100.062.000	(d) 112.123.929	(e) 12.061.929	12,05	5.509.539	5,16	»	»	»	»
Id. 1880-81.	117.900.076	(a) 115.771.388	»	»	3.647.459	3,15	2.128.688	1,80	»	»
2.º semestre de 1881.	(a) 58.707.167	(a) 58.787.036	79.871	0,13	869.228	1,48	»	»	»	»
1.º semestre de 1882.	57.782.687	(a) 63.385.532	5.602.845	9,69	4.804.781	7,58	»	»	»	»
2.º semestre de 1882.	(b) 57.729.000	(a) 72.217.887	14.488.887	25,09	8.842.873	12,24	»	»	»	»

(a) Estas cifras son las que constan en el proyecto de ley y en los balances provisionales presentados á las Cortes por el Sr. Ministro de Hacienda en 12 de Marzo de 1883.

(b) Esta cifra es la mitad de la presupuesta para el año económico de 1882-83 según la ley de 31 de Diciembre de 1881.

(c) Estas cifras son las que constan en la Dirección general de Aduanas.

(d) Estas cifras están tomadas de los balances provisionales hechos por la Intervención general del Estado.

(e) En el proyecto de ley de Presupuestos para 1879-80 se fijaban como ingresos de Aduanas 114.062.000 pesetas; pero en dicho ejercicio rigió el presupuesto de 1878-79 por Real decreto de 26 de Julio de 1879. Si se hubiera aprobado el proyecto resultaría una baja de 1.938.071 pesetas.

(f) La recaudación en el año económico de 1875-76 fué de 71.683.219 pesetas.

Difícil parecía arbitrar nuevos medios que determinaran un mayor incremento de la renta; pero examinando con atención y cuidado la situación de ella, se descubrían problemas que era de todo punto necesario y urgente resolver.

Destacaba en primer término el cumplimiento de la ley de Aranceles de 1869. Su base 5.^a, que dispone se hagan bajas graduales de los derechos de Arancel en determinados períodos, había quedado en suspenso por Real decreto de 17 de Junio de 1875, que adquirió fuerza de ley en virtud de la de 17 de Julio de 1876, y esta suspensión indefinida implicaba un estado de duda y vacilación que no podía subsistir.

Por otra parte, la urgencia de la reforma del Arancel de Aduanas se consideraba tan evidente, que para contrarestar en parte los efectos de la suspensión, la ley de Presupuestos de 1877-78 dispuso se hiciera una revisión de los valores y clasificaciones de las mercaderías, con el fin de reducir los derechos de éstas para aliviar á los contribuyentes y aumentar los ingresos de las Aduanas. Esta medida dió origen á quejas por parte de los fabricantes de tejidos de lana y motivó la apertura de una información oral y escrita que estaba en disposición de terminarse en Febrero de 1881.

El estado de las relaciones comerciales con las provincias españolas de Ultramar exigía también una solución conveniente y definitiva para la ansiada asimilación con la Metrópoli. Las soluciones que hasta 1881 se habían dado no satisfacieron á la opinión pública, y la última adoptada, que era la rebaja de los derechos de los azúcares, se había llevado á cabo en condiciones tales, que el comercio peninsular y el antillano la consideraron como ineficaz.

Por último, debía cumplirse el compromiso adquirido con Francia en virtud del convenio de 1877 y ne-

gociar un tratado de comercio ó renunciar al beneficio del trato de la nación más favorecida en la vecina república, trato que había contribuido, desde 1878, á desarrollar considerablemente nuestro comercio de exportación.

Estas cuestiones y otras que su desenvolvimiento y resolución originaron, dieron lugar y motivo á las importantes reformas que ha experimentado la renta de Aduanas en el bienio de 1881 y 1882, y hubiera producido algunas otras, que estaban en vías de terminarse, cuando cesé en el cargo que S. M. se había dignado confiarme.

Siguiendo el orden cronológico de las reformas llevadas á cabo, examinaré cada una de ellas.

I.

INFORMACIÓN LANERA.

Por consecuencia de la rectificación de los valores y clasificaciones del Arancel de Aduanas, que tuvo lugar en cumplimiento de lo prevenido en el art. 31 de la ley de Presupuestos de 11 de Julio de 1877, algunos fabricantes de tejidos de lana creyeron lastimados sus intereses con el cambio de clasificaciones y con la rebaja de los valores oficiales de los tejidos comprendidos en el grupo 3.º de la clase 6.ª del Arancel; en cuyas clasificaciones y valoraciones sospecharon errores que consideraban indispensable corregir.

Con el fin de depurar la exactitud de tales aseveraciones, se autorizó al Gobierno por el art. 29 de la ley de Presupuestos de 1878-79 para abrir una información administrativa oyendo á los representantes de la industria lanera, á los del comercio y á cuantas personas quisieran ilustrar el asunto, lo mismo que á la Junta consultiva de Aranceles y Valoraciones, con

objeto de rectificar, si hubiera motivos para ello, las clasificaciones y valoraciones de los tejidos de lana, fijándoles el derecho específico que les correspondiera con arreglo á la base 7.^a de la ley de Aranceles de 1.^o de Julio de 1869.

Por Real decreto de 8 de Setiembre de 1878 se había creado una Comisión especial para realizar la información antes mencionada: ésta se había llevado á cabo con un esmero y una escrupulosidad de que no aparece otro ejemplo en nuestra historia económica; la expectación pública se había fijado con interés y constancia en la marcha de la información, y sobre todo, en los resultados de las muchas y solemnes sesiones que la Junta consultiva de Aranceles había dedicado al examen de esta cuestión importantísima, y la opinión estaba decididamente formada.

Resultaba de la información, de una manera concluyente, que la revisión del Arancel realizada en 1877 no había ocasionado perjuicio alguno á la industria de los tejidos de lana, ni á sus similares; que las clasificaciones estaban ajustadas á los preceptos de la ley, aunque eran susceptibles de una reforma más conveniente, y que las valoraciones oficiales aparecían muy elevadas, lo cual obedecía á la tendencia de proteger á la industria lanera nacional.

Fundado en las conclusiones que de la información resultaban, pude haber aconsejado á S. M. la reforma del Arancel en la parte referente á los tejidos de lana; pero dejé de hacerlo inspirándome en los sentimientos de prudencia y circunspección que no deben olvidarse en estas cuestiones; teniendo también en cuenta que en las negociaciones que iban á entablarse para la celebración del tratado de comercio con Francia los negociadores franceses habían de recabar bajas en los derechos de los tejidos de lana, y era indispen-

sable conservar á los negociadores españoles un margen para hacer concesiones, y considerando, por último, que debiendo proponerse á las Cortes en un breve plazo la reforma general del Arancel, no era oportuno realizar una parcial del mismo. Este espíritu informó el Real decreto de 7 de Julio de 1881, en virtud del cual se declaró terminada la información lanera y se acordó que no se hicieran innovaciones en las clasificaciones y valores de los tejidos de lana hasta que las Cortes resolviesen lo conveniente.

II.

TRATADO DE COMERCIO CON FRANCIA.

Con arreglo al art. 10 del convenio especial de comercio firmado en París el 8 de Diciembre de 1877, España y Francia se habían obligado á negociar un tratado de comercio y navegación dentro del plazo de dos años, á contar desde la fecha del canje de las ratificaciones de aquel convenio.

Éste espiraba el día 30 de Marzo de 1880, y el Gobierno español, que deseaba que dicho pacto continuara vigente, sólo consiguió en 28 de Enero de 1880 una declaración prorogándole por un plazo de seis meses desde que aquél se denunciara. El Gobierno francés hizo esta denuncia el 8 de Mayo de 1881, y por lo tanto, urgía entablar las negociaciones.

El Gobierno no podía permanecer inactivo ante este hecho, y como el tratado de comercio que iba á celebrarse estaba íntimamente enlazado con el desarrollo de la industria y del comercio y con los rendimientos de las Aduanas, hube de abordar esta grave cuestión ante el Consejo de Ministros y proponer á mis compañeros las bases sobre las que, á mi juicio, debían fundarse las negociaciones.

Estas comprendían, como puntos más capitales, la conservación de los derechos y franquicias de que los productos españoles gozaban en Francia en virtud de los convenios de 18 de Junio de 1865 y 8 de Diciembre de 1877; la estipulación de mayores rebajas para los principales artículos de nuestra exportación y la consolidación de estas concesiones por medio de tarifas anejas al nuevo tratado, como garantía de la corriente comercial que se trataba de desarrollar; y por último, la fijación de un plazo bastante largo para la duración del tratado, á fin de que la producción nacional pudiera aprovecharse de sus beneficios.

Propuse al Consejo también, que los límites dentro de los cuales convenía encerrar las concesiones que España debía hacer fueran los derechos reducidos resultantes de la primera rebaja presupuesta por la base 5.^a, si bien no se me ocultaba que la marcha de las negociaciones podría hacer necesaria alguna otra concesión que sería examinada y discutida en su tiempo para resolver lo conveniente.

El Consejo de Ministros aprobó unánimemente estas bases, y la iniciativa que por efecto de las circunstancias he tomado en este asunto me obligó á conservar una parte muy activa en las negociaciones, por más que éstas se llevaran oficialmente, como correspondía, por el Sr. Ministro de Estado, con el celo que le distingue.

Felizmente, la persona designada por el Gobierno, á propuesta mía, para presidir la Comisión española que debía trasladarse á París con objeto de seguir las negociaciones, reunía á las relevantes prendas que la adornan, la circunstancia de ilustración é inteligencia especial en esta materia y la de haber sido Presidente de la Comisión que en 1877 había negociado el convenio de comercio con Francia.

En consonancia con el acuerdo del Consejo de Ministros, las instrucciones que de mí recibió el Presidente de la Comisión fueron las siguientes:

1.º Obtener las mayores rebajas posibles en los artículos de producción española que se importan á Francia, sobre todo en los vinos, frutas y legumbres y otros productos agrícolas, á cambio de los derechos reducidos que habían de resultar de la aplicación de la base 5.ª á los artículos de producción francesa.

2.º Consolidar los derechos reducidos que Francia aceptara para los productos españoles, por medio de tarifas anejas al tratado que iba á celebrarse.

3.º Estipular un plazo de duración del tratado bastante largo, para que la producción española pudiera desarrollarse con holgura y gozar de sus beneficios.

Y 4.º Incluir en el tratado las cláusulas necesarias para garantizar completamente el trato de la nación más favorecida, no sólo para las mercaderías, sino también para los españoles que se dedican en Francia al ejercicio de la industria y del comercio, sirviendo en esto de norma las estipulaciones del tratado celebrado con Austria-Hungría en 3 de Junio de 1880.

Las negociaciones iniciadas en París el 12 de Agosto de 1881 no terminaron hasta el 6 de Febrero de 1882, siendo la causa de su larga duración, no sólo los tres cambios de Ministerio ocurridos en Francia durante aquel periodo, sino la inflexible decisión del Gobierno español y de sus Comisarios de no conceder á Francia más que las rebajas que resultaban de la aplicación de la base 5.ª y obtener de ella un derecho para los vinos, tal, que favoreciese nuestra exportación más de lo que venia siéndolo.

Esto se consiguió, puesto que tanto Portugal como

Italia aceptaron un derecho de 3 francos por hectólitro de vino, mientras que España obtuvo el derecho de 2 francos por la misma unidad de medida.

Pero este triunfo no se alcanzó sino después de rudas peleas, pues los negociadores franceses que rechazaban por insignificantes las concesiones que España les hacía, pedían, no ya para conceder los 2 francos á los vinos, sino los 3 aceptados por Italia, muy considerables rebajas en los tejidos de lana, en los de seda, en algunos otros artículos, y la supresión de los derechos de exportación para las galenas y para los plomos y litargirios argentíferos, alegando, y en la mayoría de los casos con razón, que las rebajas que se les ofrecían en muchos productos no proporcionaban ventaja alguna al comercio frances.

Por mi parte, no tenía interés en sostener los derechos de exportación de las galenas y de los plomos y litargirios argentíferos.

Estos derechos, más que garantía de una industria, significaban un monopolio para determinados fabricantes.

Tampoco había dificultad en acceder á la rebaja de los tejidos de seda, tanto por la vitalidad que tiene esta industria en nuestro país, públicamente demostrada en las Cortes durante la discusión del tratado de comercio, como porque estos tejidos no están tarifados en el Arancel en derechos extraordinarios, y por lo tanto, no les eran aplicables las rebajas de la base 5.^a Además, el derecho excesivo de estas telas era un aliciente constante á la defraudación, y la baja debía redundar en beneficio del comercio de buena fe.

En cambio, estaba yo decidido á no hacer concesiones en los tejidos de lana, y así se consiguió, pues carece en realidad de importancia la de 3 céntimos de peseta en kilogramo de paños, y la continuación

del derecho que satisfacían los demás tejidos de lana pura, prescindiendo del aumento de 18 céntimos de peseta que suponía la aplicación de la base 5.^a

De las 301 partidas que comprende el Arancel español, sólo en 15 se hicieron concesiones superiores á la base 5.^a, y son las que especifica el siguiente estado núm. 2.

Al ocuparme del tratado de comercio con Francia, un deber de justicia me obliga á consignar que el Excmo. Sr. Duque de Fernan Nuñez, Embajador de España en París, prestó la cooperación más eficaz, en momentos determinados, al éxito de las negociaciones.

No es posible, por la falta de estadísticas, examinar en todas sus fases los efectos del tratado en el comercio con Francia. Sólo como indicio presento el estado núm. 3, que es un resumen de los *Documents statistiques reunis par l'Administration des Douanes de France*, que se publica mensualmente, y en algunos casos, no en todos, da á conocer los países de procedencia ó destino de las mercaderías.

Resulta de los datos que arroja dicho cuadro, que la importación de mercaderías de Francia ha permanecido estacionaria en su conjunto desde que se puso en vigor el tratado, siendo de notar que la importación de hilados y tejidos de lana ha disminuído á pesar de los temores que abrigaban algunas personas de que la industria lanera salía inmensamente perjudicada con el tratado de comercio. La importación de los tejidos de seda ha tenido un ligerísimo aumento, compensado con una baja mayor en la pasamanería de esta fibra; y por último, la porcelana se presenta también en baja, á pesar de los pronósticos que en sentido contrario hacían los fabricantes de productos cerámicos.

ESTADO NÚM. 2.

CUADRO de las rebajas en los derechos arancelarios superiores
á las presupuestas con la aplicación de la base 5.^a

		DERECHOS DE	
		2. ^a columna del Arancel.	Tratado con Francia.
Zinc en objetos manufacturados, aunque estén barnizados. . .	100 kil. ^s	23,75	23,69
Tejidos llanos de yute, abacá, pita ú otras fibras vegetales, tengan ó no mezcla de algodón.	Kilog. ^o	0,45	0,25
Paños y todos los demás tejidos del ramo de pañería, de lana pura, borra de lana, pelo ó mezcla de estas materias. . .	Id.	4,33	4,30
Todos los demás tejidos de lana pura, borra de lana, pelo ó mezcla de estas materias. . .	Id.	3,68	3,50
Tejidos de seda llanos ó cruzados.	Id.	14,40	10
Terciopelos y felpas de seda. . .	Id.	21,90	12
Tejidos de filoseda, borra ó es- carzo de seda, los de seda cru- da y los de borra con mezcla de seda.	Id.	6,90	5
Tules, encajes y puntillas de seda ó borra de seda.	Id.	20,40	7
Tejidos de punto de seda ó borra de seda.	Id.	13,30	10
Vinos espumosos.	Hectol. ^o	75,85	5
Vinos de las demás clases. . . .	Id.	21,67	2
Aderezos y adornos de todas cla- ses, excepto los de oro y plata.	Kilog. ^o	9,17	6
Botones de todas clases, excepto los de oro y plata.	Id.	0,92	0,50

ESTAD

Artículos de origen español que figuran en los cuadros mensuales de
Aduanas de

IMPORTACIÓN

ARTÍCULOS.	UNIDAD.
Pieles sin curtir, de cabrito.	Kilogramo.
Lanas sucias ó simplemente lavadas.	Id.
Seda, borras, en masas.	Id.
Huesos y pezuñas.	Id.
Frutas frescas de mesa.—Naranjas, etc.	Id.
Idem secas de íd.—Pasas, etc.	Id.
Idem íd. íd.—Almendras y otros frutos oleaginosos.	Id.
Aceite de olivas.	Id.
Corcho en panes.	Id.
Azafrán.	Id.
Hierro (mineral de).	Tonelada.
Cobre de primera fusión.	Kilogramo.
Plomo (mineral de).	Id.
Idem en lingotes, etc.	Id.
Manganeso.	Id.
Cochinilla.	Id.
Vino ordinario en pipas.	Hectólitro.
Idem generoso en íd.	Id.
Plata (moneda de).	Hectogramo.

NÚM. 3.

Comercio exterior de Francia que publica la Dirección general de dicha nación.

EN FRANCIA.

4 PRIMEROS MESES DE		8 MESES RESTANTES DE		12 MESES DE	
1881.	1882.	1881.	1882.	1881.	1882.
94.400	55.100	114.376	112.675	208.776	167.775
314.600	173.200	1.949.220	1.007.549	2.263.820	1.180.749
11.200	18.000	53.050	42.772	64.250	60.772
551.398	791.347	982.791	2.753.183	1.534.189	3.544.530
15.413.500	25.597.500	22.855.600	26.386.300	38.269.100	51.983.800
1.175.200	717.500	3.705.700	3.643.600	4.880.900	4.361.100
1.913.200	3.239.600	434.780	4.682.400	6.261.000	7.922.000
2.506.728	1.870.303	3.611.550	2.416.946	6.118.278	4.287.249
227.306	284.155	703.938	622.770	931.244	906.925
19.115	23.200	48.119	52.929	67.234	76.129
126.807	132.677	309.281	355.736	439.088	488.413
»	15.284	1.685	10.004	1.685	25.288
1.294.500	621.031	2.274.346	1.964.028	2.588.846	2.585.059
11.185.843	14.791.747	22.390.686	30.562.865	33.576.529	45.354.612
3.729.955	8.586.378	4.140.543	6.928.580	7.870.498	15.514.958
355.200	252.241	444.682	340.236	799.882	592.477
2.181.096	2.083.822	3.557.019	4.166.323	5.738.115	6.250.145
29.846	37.805	64.212	72.522	94.058	110.327
8.265	35.650	88.571	22.087	96.836	57.737

ARTÍCULOS.	UNIDAD.
Ganado mular..	Uno.
Id. lanar.	Id.
Id. de cerda.	Id.
Caza y aves..	Kilogramo.
Lana sucia ó simplemente lavada.	Id.
Seda cruda.	Id.
Grasas.—Sebo en bruto y manteca de cerdo.	Id.
Féculas indígenas.	Id.
Gomas puras exóticas.	Id.
Maderas de construcción aserradas.	Tonelada.
Algodón en rama.	Kilogramo.
Oro y platino batidos en hojas.	Hectogramo.
Cobre batido ó laminado.	Kilogramo.
Acido esteárico en masas.	Id.
Cloruro de cal.	Id.
Sulfato de quinina.	Id.
Productos químicos no expresados.	Id.
Porcelana decorada.	Id.
Hilaza cruda de lino y cáñamo.	Id.
Tejidos de seda pura, lisos.	Id.
Pasamanería de seda con mezcla.	Id.
Tejidos de lana.—Merinos.. . . .	Id.
Idem del ramo de pañería.	Id.
Idem varios.. . . .	Id.
Chales brochados.. . . .	Id.
Tejidos de lana con mezcla.	Id.
Idem de algodón estampados.. . . .	Id.
Idem de id. con mezcla.. . . .	Id.
Papel de escribir.	Id.
Idem varios.. . . .	Id.
Bisutería de oro ó platino.	Hectogramo.
Cuchillería.	Kilogramo.
Objetos de fantasía.	Id.
Plata en monedas.	Hectogramo.

RTACIÓN.

4 PRIMEROS MESES DE		8 MESES RESTANTES DE		12 MESES DE	
1881.	1882.	1881.	1882.	1881.	1882.
3.296	2.222	10.601	6.006	13.897	8.228
989	828	3.023	1.539	4.012	2.367
792	2.740	1.994	3.245	2.786	5.985
372.689	515.526	1.602.126	1.839.890	1.974.815	2.355.416
300.259	310.615	705.412	685.118	1.005.671	995.733
57.811	40.203	62.371	66.301	120.182	106.504
1.116.951	602.733	1.087.337	1.180.517	2.204.288	1.783.250
208.273	33.491	59.999	132.746	268.272	166.237
148.967	73.922	346.284	399.156	495.251	473.078
15.455	6.794	17.985	16.268	33.440	23.062
1.652.654	3.121.125	5.400.160	5.089.259	7.052.814	8.210.384
»	140	220	86	220	226
23.700	15.600	132.830	104.149	156.530	119.749
33.620	58.590	72.755	86.653	106.375	145.243
660.290	587.670	1.313.451	1.209.343	1.973.741	1.797.013
493	770	2.137	1.346	2.630	2.116
14.960	150.110	161.181	113.555	176.141	263.665
17.689	28.100	80.316	73.700	98.005	101.800
31.636	240.800	676.179	438.100	707.815	678.900
15.790	10.907	25.287	27.309	41.077	38.216
3.455	3.593	17.167	13.438	20.622	16.941
48.639	66.556	115.076	108.201	163.715	174.757
169.425	257.167	552.940	623.735	722.365	880.902
121.391	131.462	340.586	331.870	461.977	463.332
8.057	11.773	63.589	41.820	71.646	53.593
194.802	151.100	427.913	368.389	622.715	519.489
46.829	112.300	351.803	245.320	398.632	357.620
45.707	67.600	161.521	185.249	207.228	252.849
5.793	10.880	25.453	22.392	31.246	33.272
151.377	210.147	441.065	429.035	592.442	639.182
1.523	4.102	9.208	7.505	10.731	11.607
21.600	30.620	73.640	88.666	95.240	119.286
47.800	176.300	230.153	444.207	277.953	620.507
14.290	950	63.242	1.898	77.443	2.848

En la exportación de mercaderías españolas á Francia aparecen aumentos de mucha consideración en determinados artículos. Descuellan en primer término el de los vinos, siendo digno de especial mención que en 1882 se haya acrecentado el consumo de los españoles en Francia, á la vez que ha disminuído el de todos los demás países. (Estado núm. 4.) También han aumentado de una manera notabilísima las exportaciones de frutas frescas y secas, á excepción de las pasas, que han tenido una ligera baja desde la fecha en que se puso en vigor el tratado hasta 31 de Diciembre último.

Ha subido también la exportación del plomo en galápagos, disminuyendo la de las galenas, á pesar de los temores que infundadamente se abrigan de que la supresión de los derechos de exportación de dichos minerales había de perjudicar á la industria del laboreo del plomo.

A priori podía esperarse que el tratado de comercio con Francia sería muy beneficioso para la producción nacional y no inferiría agravio á las industrias que se manifestaron lastimadas.

Los hechos han venido á demostrar estas previsiones, y aunque el plazo transcurrido no es suficiente para hacer una demostración completa de las ventajas que el tratado ha producido, los datos estadísticos que hasta ahora se conocen comprueban que aquella esperanza adquiere el carácter de realidad y certeza.

ESTADO NÚM. 4.

IMPORTACIÓN Y CONSUMO DE VINOS EN FRANCIA

durante los doce meses de 1882, 1881 y 1880 (1).

	IMPORTACIÓN.			CONSUMO.		
	1882.	1881.	1880.	1882.	1881.	1880.
Vino ordinario en { <i>España</i> Hectólit. ^s Italia. » pipas. » Otros países. »	6,250.145 844.816 470.258	5,738 115 1,604.304 553.025	5,049.149 1,670.002 487.768	6,126.930 740.730 510.888	5,632.164 1,531.250 536.951	5,036.945 1,582.377 473.946
TOTALES. »	7,565.219	7,895.444	7,206.919	7,378.548	7,700.365	7,093.268
Vino generoso en { Inglaterra. » <i>España</i> » pipas. » Otros países. »	7,490 110.327 49,064	8,146 94,058 48,576	8,230 80,576 48,359	7,428 103,352 41,848	8,060 84,995 40,826	7,543 75,043 41,299
TOTALES. »	166,881	150,780	136,165	152,628	133,881	123,885

(1) Este cuadro está copiado de los documentos estadísticos oficiales franceses. El valor oficial de los vinos en Francia es de : 42 pesetas el hectólitro en 1880 y 45 en 1881 el vino común, y 125 y 130 pesetas respectivamente el generoso.

III.

ALZAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA BASE 5.^a DE LA LEY DE ARANCELES.

Las bases para la reforma del Arancel de Aduanas, comprendidas en la ley del presupuesto de ingresos de 1869, disponen que los derechos de Aduanas son meramente fiscales y no deben exceder del 15 por 100 del valor de las mercancías; pero como el sistema arancelario á que substituyó el de 1869 era esencialmente protector de determinadas industrias, para realizar la necesaria transición de uno á otro sistema se admitieron en el nuevo Arancel unos recargos, con el nombre de *derechos extraordinarios*, que elevaban el de las mercancías hasta entonces prohibidas ó fuertemente castigadas, al tipo máximo de 25 por 100.

En virtud de la base 5.^a de la reforma, estos recargos debían quedar abolidos en un plazo de doce años, esto es, el 1.º de Julio de 1881, y la reducción de los derechos extraordinarios á fiscales debía hacerse á partir de 1.º de Julio de 1875, realizándose por terceras partes: la primera, en la expresada fecha; la segunda, en el mismo día de 1878, y la tercera y última, en igual fecha de 1881.

La guerra civil que afligía al País fué causa de que el Gobierno que en 1875 administraba los intereses públicos suspendiera la primera rebaja de los derechos extraordinarios hasta tanto que la paz ejerciera su benéfica influencia sobre la riqueza nacional.

En el expediente instruido para depurar la conveniencia de esta suspensión, y á pesar de que el Consejo de Estado en pleno no encontró en él los antecedentes suficientes para emitir dictámen, el Consejo

de Ministros estimó que procedía aplazar la rebaja por un período que no debía exceder de dos años, contados desde que concluyera la guerra civil, sin perjuicio de lo que en la materia resolvieran las Cortes, á las que debía darse cuenta de las medidas que se adoptaran.

Estas medidas sólo fueron el Real decreto de 17 de Junio de 1875, y sin duda alguna entre esta fecha y la del acuerdo antes citado, que tuvo lugar el 12 de Mayo del mismo año, debieron mediar algunos hechos que no constan en documento oficial, pero que, por lo visto, fueron bastante poderosos para que se variara un tanto la resolución tomada, puesto que en el Real decreto no se fijó plazo á la duración de la suspensión, y al dar cuenta á las Cortes de lo acordado, sólo se sometió la medida á la aprobación de las mismas, en unión de otras varias que se declararon leyes del Reino en 17 de Julio de 1876.

Pero no sólo transcurrieron dos años desde la pacificación del País sin que los Gobiernos que se sucedieron expusieran á las Cortes lo que convenía hacer en materia arancelaria, sino que al encargarme del Ministerio de Hacienda ningún estudio encontré preparado á fin de que de él resultara la conveniencia ó inconveniencia de poner en vigor la base 5.^a ó de abrogarla definitivamente.

No era justo ni legal que continuara semejante estado de cosas, que perjudicaba al comercio, á la industria y á la agricultura, creándoles una situación ambigua, irregular é insostenible.

Después de maduro examen me creí en el deber de plantear la cuestión en el Consejo de Ministros, y autorizado por su acuerdo unánime, expuse la situación ante las Cortes, proponiendo á su sabiduría que hicieran desaparecer las trabas que se oponían al des-

envolvimiento de la ley arancelaria de 1869, abrogando la ley de 17 de Julio de 1876.

En la exposición de motivos del proyecto de ley de 24 de Octubre de 1881, tuve el honor de demostrar ante las Cortes que la ley de Aranceles de 1869 había sido beneficiosa y útil, bajo el triple punto de vista de la industria, del comercio y de la tributación, ó lo que es lo mismo, que á su sombra habían crecido la agricultura y la fabricación; el comercio, tanto de importación como de exportación, había aumentado de un modo muy notable, y la renta de Aduanas había rendido productos crecidísimos.

Llamé también la atención acerca de un inconveniente que ofrece la ley arancelaria de 1869.

El principio de amplia libertad comercial en que se inspiró la reforma fué causa de que las grandes reducciones de derechos que al plantearla se hicieron se concedieran á todos los países, sin distinción alguna, y por consiguiente, los productos y manufacturas extranjeros entraran en España con mayores facilidades, sin conseguir que las demás naciones redujeran los derechos, en muchos casos considerables, á que estaban sujetos los productos y manufacturas españoles.

Era, pues, necesario que la nueva rebaja de derechos no resultara igualmente estéril en este punto, y al efecto propuse el restablecimiento de la base 5.^a con las dos siguientes limitaciones:

Se reservaba el Gobierno, en primer término, la fecha en que debía plantearse la reforma, porque no era, en verdad, procedente ponerla en práctica antes de la terminación del tratado de comercio con Francia.

La segunda reserva que se hacía en el proyecto de 24 de Octubre de 1881 era la de no aplicar las reduc-

ciones de derechos que resultaran de la rectificación del Arancel de Aduanas á las mercaderías que sean producto ó procedan de las naciones que no tengan en vigor tratados ó convenios de comercio con España.

Esta restricción tenía su precedente. En el art. 31 de la ley de Presupuestos de 1877-78 se dispuso la rectificación de los valores y clasificaciones del Arancel, y por el art. 35 de la misma ley se autorizó al Gobierno para no aplicar las reducciones de derechos que de aquella rectificación pudieran resultar, sino á las naciones que otorgasen á España el trato de la nación más favorecida.

El Gobierno usó de dicha autorización, y por Real decreto de 17 de Julio de 1877, S. M. dispuso que los derechos reducidos que aparecían en el nuevo Arancel, sólo se aplicaran á los productos y procedencias de las naciones que nos concedían dicho trato, en virtud de un convenio de comercio.

Esta medida acertada dió resultados inmediatos. Francia, que hasta entonces había conservado para los productos españoles los altos derechos y las prohibiciones de su Arancel general, se apresuró á concluir el convenio de 8 de Diciembre de 1877, en virtud del cual nos aplicó los derechos de las naciones convenidas.

Por lo tanto, me propuse que una materia tan ardua y delicada no quedara sujeta á la resolución del poder administrativo, pues esto lo consideraba ocasionado á inconvenientes graves. Hé aquí la razón de que en el proyecto de ley de restablecimiento de la base 5.^a se consignase la medida que el Gobierno había aplicado al poner en práctica el arancel de 1877. De esta manera, sólo las Cortes, como es justo, pueden modificar la aplicación de los derechos del Aran-

cel, y el país productor y contribuyente tendrá los medios de hacer pesar su opinión en este asunto ante el Parlamento, cuando crea lesionados sus intereses ó expuestos á algún quebranto.

Había que mantener esta arma de defensa, porque la necesidad de concluir nuevos tratados de comercio era evidente. Algunas naciones con las cuales nos ligaban tratados, prevaleciéndose de que éstos no tenían tarifas anejas, habían subido los derechos de sus Aranceles en términos de que sólo á los productos españoles perjudicaban, y era necesario, ó abrimos de nuevo aquellos mercados, ó dirigir nuestro comercio de importación hacia otros en que nos encontráramos favorecidos.

Durante la discusión del proyecto de ley de restablecimiento de la base 5.^a surgieron graves dificultades, debidas ya á causas políticas, ya á infundadas alarmas, que la práctica va desvaneciendo, por parte de algunos fabricantes.

Hubo vacilaciones en unos, recelos en otros, dudas en los más; mi convicción y firmeza no eran bastantes para tranquilizar los ánimos; la aprobación del proyecto se dilataba y la incertidumbre cundía en el País. Era necesario salir de esa situación angustiosa, conciliando en lo posible todas las voluntades; por esto, cediendo á consideraciones políticas y de conveniencia dentro del Gabinete de que formaba parte, acepté una modificación en el proyecto de ley de restablecimiento de la base 5.^a, más de forma que de esencia, porque aceptando esta modificación se conseguían tres cosas capitales :

1.^a, realizar la primera rebaja de los derechos del Arancel llamados extraordinarios ; 2.^a, fijar definitivamente la fecha en que estos derechos han de quedar reducidos á derechos meramente fiscales, y 3.^a, ligar

las reducciones del Arancel con la celebración de los tratados de comercio y, sobre todo, con la fecha de la terminación del celebrado con Francia, y preparar, como es consiguiente, el camino á nuevas reducciones en el Arancel francés que faciliten la salida de nuestros productos y manufacturas.

Las dos rebajas que según el proyecto primitivo debían realizarse en 1885 y 1888, se llevarán á cabo en 1887 y 1892. Á la primera debe preceder una información que determine si es conveniente, y aun cuando el resultado sea afirmativo, no deberá llevarse á cabo más que en el caso de que alcancen un éxito satisfactorio las negociaciones que se entablen con otros países para obtener concesiones en sus Aranceles.

Esta limitación no es un grave obstáculo para el desarrollo de la ley de Aranceles, porque si se suspendiera la segunda rebaja, llegada la fecha de realizar la tercera, deberán practicarse las dos. Además, abrigo la seguridad de que la información dará un resultado satisfactorio, y como no puede ponerse en duda que las negociaciones para los nuevos tratados se llevarán con el pulso y la medida que exige esta clase de negociaciones, opino fundadamente que las limitaciones puestas en la ley no entorpecerán la aplicación de la segunda rebaja del Arancel y habrán servido para el objeto con que se establecieron, que no fué otro que el de aquietar los ánimos y dar seguridades á los que no tenían la suficiente confianza en la aptitud, inteligencia y energía de nuestra industria manufacturera, con las cuales he contado al emprender las reformas que he realizado.

Terminada la discusión de la ley y sancionada por S. M. en 6 de Julio de 1882, procedía reformar el Arancel con arreglo á ella y con la anticipación su-

ficiente para que el comercio y las Aduanas pudieran conocer las variaciones introducidas en la nueva tarifa, antes de que ésta principiara á aplicarse.

La reforma se había estudiado minuciosamente en la Dirección general de Aduanas, antes y durante la discusión del proyecto por las Cortes; así es que, sometido el trabajo á la Junta de Aranceles y Valoraciones, que se había organizado del modo y por las causas que más adelante se expresarán, pudo discutirse ampliamente en las solemnes sesiones que dedicó á este asunto, y en 25 de Julio se publicó el nuevo Arancel en la *Gaceta de Madrid*, siendo un signo inequívoco del esmero con que está formado, que su aplicación no ha producido reclamaciones ni dificultades en las Aduanas y que el número de expedientes que por la nueva tarifa se han originado es muy reducido, sobre todo si se le compara con el á que ha dado lugar toda reforma arancelaria.

En el mismo seno de la Junta, y á pesar de las diversas tendencias económicas de sus vocales, sólo dos puntos fueron motivo de especial discusión, y únicamente en uno el acuerdo dejó de ser unánime.

Son estos puntos de controversia la reglamentación de los certificados de origen y la reducción de los derechos de los artículos llamados de renta.

La necesidad impuesta por la ley y aconsejada por la experiencia, de no aplicar los derechos arancelarios reducidos á los productos y procedencias de aquellas naciones que no gozan del trato arancelario de las más favorecidas, implica la necesidad de dar á las Aduanas las reglas necesarias para decidir cuándo deben cobrar á una mercancía los derechos de la 1.^a ó de la 2.^a columna del Arancel. Sin estas reglas, el régimen arancelario vigente sería completamente ilusorio, y las mercaderías de las naciones no convenidas

gozarían de la reducción de los derechos siempre que vinieran de tránsito ó se trasbordaran en los puertos de las naciones convenidas.

Para evitar este hecho, que constituiría una infracción de la ley de Aranceles, no aparecía más garantía que exigir á los importadores acreditasen el origen de sus mercancías por medio de un documento expedido por el fabricante ó su representante legítimo, y visado por la Autoridad local y por el Cónsul para la legalización de las firmas.

Tal formalidad es una traba para el comercio, y si bien es necesaria en algunos casos, puede prescindirse de ella para muchos artículos.

La Junta de Aranceles hizo un estudio minucioso del Arancel, y en su consecuencia pudo proponer la limitación de los certificados de origen á la tercera parte de los artículos que aquél comprende. Algunas otras medidas beneficiosas adopté para hacer menos sensible la traba de los certificados de origen, y me proponía llevar á cabo, á medida que la necesidad se hiciera sentir, todas las que hubieran sido posibles, conservando el principio cardinal de no otorgar igual trato á las naciones que nos favorecen que á las que nos perjudican por su régimen aduanero.

La reducción de los derechos de los *artículos de renta* fué objeto de un debate más solemne, y el acuerdo sólo se tomó por una mayoría de 16 votos contra cinco, que, sin oponerse á ella, estimaron que no se tenían suficientes elementos de juicio para aconsejarla.

Sostienen algunos que esta reducción puede ejercer una influencia marcada en los ingresos de las aduanas y, por consiguiente, conviene examinar ampliamente esta cuestión en sus orígenes y en sus probables efectos.

La base 4.^a de la ley de Aranceles de 1869 determina que «pagarán derechos hasta 30 por 100 las mercaderías gravadas hasta ahora con un derecho protector. »Los podrán pagar hasta 35 por 100, aquellos artículos, entre los hoy prohibidos, que determinadamente se especifiquen, y los que, por lo elevado de su precio ó por ser su consumo general, aunque no de necesidad absoluta, puedan soportar semejante recargo.»

La base 5.^a dispuso que los derechos *extraordinarios* fuesen inalterables durante seis años, y que pasado dicho plazo principiarian á reducirse gradualmente hasta llegar al 15 por 100 al duodécimo año, añadiendo, que la forma de la reducción para cada artículo se determinaría en el pormenor del Arancel.

No se hizo excepción para ningún artículo.

Para apreciar el espíritu que dominaba en 1869, conviene recordar que al presentar estas bases á las Cortes, el Ministro de Hacienda se separó de lo que había acordado la Junta de Aranceles acerca de los artículos de renta. El proyecto de bases de la Junta era mucho menos liberal en este punto que el del Ministro, pues decía, al hablar de la reducción de los derechos extraordinarios :

Base 4.^a «El plazo de doce años (para las reducciones) podrá prolongarse en aquellos artículos que pagan, por razón fiscal, derechos superiores al 10 por 100 (era el límite que la Junta proponía para los derechos fiscales), y son de los que mayores rendimientos producen al Tesoro, como el azúcar, bacalao y cacao.»

Es decir, que, á sabiendas, el Ministro se apartó en este punto de lo propuesto por la Junta, y las Cortes aprobaron el proyecto tal como el Ministro lo había presentado.

A pesar de este precepto terminante, en el decreto de 12 de Julio de 1869, en virtud del cual se aprobó el Arancel nuevamente formado, se dispone lo que sigue:

Artículo 4.º «Los derechos que excediendo del 15 por 100 no lleguen al 20, se reducirán al 15 el día 1.º de Julio de 1875.

»*Los demás derechos extraordinarios*, desde el 20 por 100 inclusive en adelante, se irán reduciendo hasta el 15 por 100 por rebajas de terceras partes, haciéndose la primera el citado día 1.º de Julio de 1875, la segunda el 1.º de Julio de 1878, y la tercera y última el 1.º de Julio de 1881.

»Los derechos señalados al resto de las partidas, y que son ya hoy iguales ó inferiores al 15 por 100, *ó corresponden á aquellos artículos que pueden soportar el recargo que hoy se les impone por lo elevado de su precio ó por lo general de su consumo*, con arreglo á la base 4.ª, *sufrirán ó no reducción llegado aquel plazo, según entonces aconseje la conveniencia*. Las partidas correspondientes á cada uno de estos grupos llevarán en el Arancel señales que les distinguan.»

Estas señales fueron: la letra *a* para las partidas que debían reducirse al 15 por 100 en 1.º de Julio de 1875; la letra *b* para las que debían reducirse por terceras partes, y un asterisco para las mercaderías tarifadas con derechos de balanza.

Todas las demás partidas que no tienen señal ninguna, ya se hallen gravadas con derechos extraordinarios ó fiscales, son las que pueden sufrir ó no reducción desde 1.º de Julio de 1875, según entonces aconseje la conveniencia.

Nótese primero que el decreto se separa del texto de la ley: en ella no se exceptúa de la reducción nin-

guna mercancía tarifada con derechos extraordinarios, y sólo se deja al Gobierno la facultad de marcar la forma y modo como esta reducción deba hacerse, al paso que en el decreto se proponen excepciones de la reducción misma.

Nótese también que entre los párrafos segundo y tercero del artículo 4.º del decreto hay contradicciones, puesto que el segundo establece que los demás derechos extraordinarios, desde el 20 por 100, sufrirán rebajas, y el artículo 3.º dice que los artículos de renta podrán ó no sufrirlas según aconseje la conveniencia.

Nótese, por último, que la redacción de la regla 3.ª no usa la expresión *derechos extraordinarios*, sino que emplea un giro algo confuso, y que la excepción terminante y precisa sólo aparece en las advertencias del Arancel.

Dedúcese de todo esto, que la Administración, inspirándose más en el deseo de mantener la recaudación que en el espíritu de la ley, se separó un tanto de ésta, y las bases para la reforma del Arancel y el decreto aprobatorio del mismo no conservaron la necesaria y debida armonía.

Esta falta de concordancia produjo reclamaciones inmediatamente después de realizada la reforma, y motivó que en el proyecto de ley del presupuesto de ingresos para el año económico de 1871-72, presentado á las Cortes en 16 de Mayo de 1871, y que no llegó á aprobarse, se propusiera la anulación de la regla 3.ª del artículo 4.º del decreto de 12 de Julio de 1869, y que, en su consecuencia, se redujeran al tipo del 15 por 100 todos los derechos superiores al mismo, en los plazos y en la forma que debían hacerse todas las reducciones de los derechos arancelarios.

Inspirándome en el texto terminante de la ley y en

estos antecedentes, me creí en el caso de no hacer mención especial de este particular al proponer el restablecimiento de la base 5.^a, y la Dirección general de Aduanas, al redactar el proyecto de Arancel, rebajó los derechos de todos los artículos que los tienen extraordinarios.

Laudable y honrosa era la conducta de los vocales de la Junta de Aranceles que se fijaron en esta cuestión, y no creyendo tener elementos suficientes de juicio para decidirse acerca de ella, estimaron que debía dejarse su resolución á la apreciación discrecional del Gobierno; pero igualmente laudable, y á mi entender más acertado, fué el acuerdo de la mayoría de la Junta, que reconociendo la divergencia que existe entre las bases del Arancel y el decreto de 12 de Julio de 1869, estimó que, aun en el caso de ponerse en duda que con arreglo á las primeras fuese procedente la rebaja, usando de la facultad discrecional que el decreto establece, era conveniente y útil llevar á cabo la reducción de derechos que presuponia la aplicación inmediata de la base 5.^a

A las razones de derecho que se han expuesto hay que añadir las que resultan del examen de los artículos que el Arancel considera como de renta. El estado adjunto, núm. 5, los detalla, expresando al propio tiempo los rendimientos que han producido por derechos de Arancel durante el año de 1880, al cual corresponde la última estadística publicada, y que eran los datos más recientes que la Junta de Aranceles pudo examinar al emitir su dictamen.

PRODUCTOS DE LOS ARTÍCULOS LLAMADO

PARTIDAS.	ARTÍCULOS.
20	Oro, plata y platino labrados.
83	Cloruro de sodio.
221	Coches y berlinas de cuatro asientos y las carretelas de dos ta- bлерos, con avances, capotas ó sin ellas, nuevos, usados ó compuestos.
222	Berlinas de dos asientos, los ómnibus de más de quince asien- tos y las diligencias.
223	Carruajes no expresados en las clases anteriores.
224	Id. para viajeros en ferrocarriles y tranvías.
225	Los demás vehículos para ferrocarriles.
226	Carros de transporte y carretillas.
231	Aves vivas y muertas.
236	Bacalao y pez palo.
249	Azúcar.. . . . { Extranjero. Provincias españolas.
250	Cacao Caracas. { Extranjero. Provincias españolas.
251	Id. Guayaquil. { Extranjero. Provincias españolas.
252	Café.. . . . { Extranjero. Provincias españolas.
253	Canela de Ceilán y sus semejantes.
254	Id. de las demás clases.. . . .
255	Clavo de especia.
256	Pimienta.. . . .
257	Té.
259	Aguardiente. { Extranjero. Provincias españolas.
256	Licores.
266	Conservas alimenticias.

OTUM. 5.

DE RENTA DURANTE EL AÑO DE 1880.

UNIDAD.	CANTIDADES.		DERECHOS DE ARANCEL.	
centogramos.		14.226		28.452
100 kilog. ^s		3.070.275		23.064
Uno.		23		21.275
Id.		50		35.450
Id.		65		20.313
Id.		14		21.000
Id.		318		238.500
100 kilog. ^s		187.863		18.786
Kilogramos.		1.086.778		336.900
100 kilog. ^s		44.334.538		7.758.544
Id.	6.933.263	28.476.608	2.139.420	4.805.847
Id.	21.543.345		2.666.427	
Id.	219.795	1.806.675	199.894	1.596.630
Id.	1.586.880		1.396.736	
Id.	1.941.913	6.664.566	1.087.471	3.460.454
Id.	4.722.653		2.372.983	
Id.	650.839	3.108.489	325.420	886.617
Id.	2.457.650		561.197	
Kilogramos.		209.792		262.240
Id.		155.486		91.355
Id.		95.423		66.796
Id.		470.793		145.945
Id.		108.851		141.603
Hectólitro.	493.804	557.312	9.876.080	10.590.545
Id.	63.508		714.465	
Litro.		65.642		65.642
Kilogramos.		123.040		119.151
<i>Pesetas.</i>				30.735.109

De los 30.735.109 pesetas que produjeron en 1880 los veintidos artículos de renta, 28.212.020 pesetas corresponden al bacalao, azúcar, cacao y aguardiente; los diez y ocho artículos restantes no dieron en conjunto más que 2.523.089 pesetas, y de ellos hay siete que no han llegado á producir 36.000 pesetas, y tres que no han alcanzado la cifra de 100.000 pesetas cada uno. Basta citar estas cifras para que aparezca la sinrazón con que ha pretendido hacerse una excepción en contra de estos artículos y presentarlos como el fundamento principal de los ingresos de las Aduanas.

Respecto á los otros cuatro artículos, cuyos rendimientos son efectivamente considerables, había razones de fuerza para comprenderlos en la baja.

Por orden de importancia, figura en primer término el aguardiente, que produjo 10.590.545 pesetas por derechos de Arancel.

Dos clases de aguardientes son los que se importan en España; el de las provincias españolas ultramarinas y el extranjero. Los derechos del primero se fijaron en virtud de la ley especial de relaciones comerciales con las provincias ultramarinas, que responde á necesidades más altas y respetables que las fiscales, y estaban, por consiguiente, fuera de los preceptos de la base 5.^a En cuanto al aguardiente extranjero, la baja de los derechos, que es de $3 \frac{1}{3}$ por 100 del valor del producto, ha de influir en el aumento de la importación de un artículo que se consume en España cada día más, en sustitución del aguardiente de vino, cuya producción ha disminuído, con ventaja de la industria agrícola, que encuentra más beneficio vendiendo el vino que empleándole en la destilación.

La importación del aguardiente, no sólo en todo el año de 1882, sino también en el segundo semestre del

mismo, aisladamente considerado, y durante el cual se han aplicado los derechos reducidos, ha superado á la de los mismos periodos del quinquenio de 1877 á 1881.

Sigue el bacalao con 7.758.544 pesetas. La baja en el derecho típico de este artículo es de $6\frac{1}{3}$ por 100. Es, no sólo de ley, sino de justicia, que se realice. Cuando se rebajan todos los artículos; cuando se pide la baja de las sustancias alimenticias para favorecer á las clases menesterosas, no podía negárseles esta compensación. La importación del bacalao, que había decrecido en el primer semestre de 1882, con relación á los mismos semestres del trienio anterior, ha aumentado en el segundo semestre, á pesar de la carestía del artículo en los países productores, por la escasez de la cosecha última.

Viene después el azúcar con 4.805.847 pesetas. Esta cantidad es la suma de los derechos pagados por el azúcar antillano y filipino y por el extranjero. Los derechos de las dos primeras importan cerca de tres millones de pesetas; los del azúcar extranjero, algo más de dos millones.

Es aplicable al azúcar de las provincias españolas la misma observación que al aguardiente de igual procedencia, y en cuanto al azúcar extranjero, la baja es como en el bacalao de $6\frac{1}{3}$ por 100 del valor del artículo. La importación del azúcar, tanto en el segundo semestre del año de 1882, como en todo este año, supera á la de iguales periodos del quinquenio de 1877 á 1881.

Los cacao produjeron á las Aduanas en 1880 un ingreso excepcional, pues se elevó á 5.057.084 pesetas, de los cuales 1.596.630 pesetas corresponden al Caracas y 3.460.454 al Guayaquil. Este artículo ha sufrido una baja de $6\frac{1}{3}$ por 100; esto es, que en lugar

de 35 por 100 pagará $28 \frac{2}{3}$, además de un fuerte recargo por impuesto transitorio y municipal. Se trata de un artículo de gran consumo en España, y la disminución del derecho ha de producir la mejora del chocolate, ya que no abarate su precio, siendo, por lo tanto, esta baja de gran conveniencia.

No es posible realizar completamente el examen de los efectos de la reforma con los datos referentes á los seis meses de haberse aquélla llevado á cabo. Los efectos de la baja de los derechos no se hacen sentir inmediatamente, sobre todo cuando acontece, como ha sucedido el año próximo pasado, que la pérdida de las cosechas en muchas provincias de España, ha perturbado la marcha del comercio.

Sin embargo, se produce la convicción de que la reforma es beneficiosa para los intereses materiales del País, al examinar el estado de los principales artículos importados en el segundo semestre del año de 1882, comparado con igual semestre de los años anteriores. Este estado, que es adjunto y lleva el número 6, se halla dividido, para la mayor facilidad en su estudio, en tres secciones: una para las primeras materias y los útiles empleados en la industria, otra para los productos elaborados, y la tercera para las sustancias alimenticias.

En las primeras materias, aparece que ha aumentado la importación del carbón de piedra, algodón en rama y seda en rama; los cueros presentan una ligera baja; la maquinaria, las embarcaciones, los hierros y las herramientas, los productos químicos y las maderas se hallan en progreso.

Respecto á los productos elaborados, el aumento aparece en todas las partidas, aunque sin ser muy considerable, excepto en la perfumería, los tejidos de hilo y los con mezcla, durante todo el año de 1882,

comparado con los anteriores; pero si se observa la importación del segundo semestre de este año, se notan bajas importantes, principalmente en los hilados de algodón y en la pasamanería, entre las cifras de dicho semestre y las del correspondiente de 1881.

Aunque á primera vista parecen constituir una excepción los tejidos de lana, ha de tenerse en cuenta que la distinta clasificación arancelaria de estos tejidos en el Arancel de 1882 y el de 1877 hace aparecer como tejidos de lana, artículos que antes se aforaban en las Aduanas como tejidos de hilo ó como tejidos de lana con mezcla, y por consiguiente, para hacer la comparación hay que reunir los tres grupos de tejidos.

El fenómeno de la disminución de las importaciones en el segundo semestre de 1882, se explica por el malestar de algunas provincias; pero demuestra que la reforma arancelaria no ha influido de una manera tal en el comercio de importación que los productos extranjeros sustituyan y suplantén á los similares del País en los mercados nacionales.

Vendrá el aumento cuando cesen las causas aflictivas que hoy pesan sobre los mercados; pero el aumento significará el acrecentamiento del consumo y la disminución de las introducciones ilícitas, y no la perturbación, y mucho menos la ruina de la industria nacional.

En las sustancias alimenticias se presenta el aumento que antes se ha señalado en el bacalao, azúcar, aguardiente y cacao; lo tienen también el vino y la canela, pero no el café.

ESTADO NÚM. 6.

PRIMERA PARTE.

IMPORTACIÓN DE PRIMERAS MATERIAS Y OTROS ARTÍCULOS PARA LA INDUSTRIA.

	UNIDAD.	1877.	1878.	1879.	1880.	1881.	1882.
CARBONES.	Primer semestre. .	422.408	360.207	437.969	460.095	482.373	580.686
	Segundo semestre. .	343.377	389.806	333.171	421.702	500.085	527.395
	Año.	765.785	750.013	771.140	882.607	982.458	1.108.081
ACERO.	Primer semestre. .	1.895.753	368.546	1.575.124	67.058	268.438	1.419.645
	Segundo semestre. .	6.169.180	4.618.001	4.603.275	4.075.314	895.441	9.779
	Año.	8.064.933	4.986.547	6.238.399	4.142.372	1.163.879	1.429.424
HIERRO Y HERRA- MIENTAS.	Primer semestre. .	30.257.582	31.348.639	37.439.246	40.020.641	58.867.968	56.352.770
	Segundo semestre. .	19.558.153	23.004.435	38.979.902	40.687.848	54.101.686	56.955.571
	Año.	49.815.735	54.353.074	76.419.148	80.708.489	112.969.654	113.318.341
HOJA DE LATA.	Primer semestre. .	1.153.709	1.308.103	914.965	561.971	2.244.885	1.727.706
	Segundo semestre. .	1.126.018	1.027.712	933.588	1.517.442	1.226.285	1.609.397
	Año.	2.279.727	2.335.815	1.848.553	2.079.413	3.471.170	3.337.103
COBRE Y LATÓN.	Primer semestre. .	354.470	314.829	390.279	386.464	351.652	354.097
	Segundo semestre. .	216.438	216.613	260.692	298.848	292.007	475.179
	Año.	570.908	531.442	650.971	685.312	643.659	829.276
ALAMBRE DE HIE- RRO.	Primer semestre. .	2.193.548	3.190.553	2.608.787	3.466.899	3.007.821	3.221.395
	Segundo semestre. .	2.222.791	1.638.779	2.738.301	2.873.975	2.921.463	3.800.739
	Año.	4.416.339	4.829.332	5.347.088	6.340.874	5.929.284	7.022.134
PALOS TINTÓREOS Y CORTEZAS CUR- TIENTES.	Primer semestre. .	2.443.473	3.190.553	2.117.027	1.318.387	3.078.310	2.561.375
	Segundo semestre. .	2.084.016	856.047	1.240.006	1.034.267	1.782.107	1.304.525
	Año.	4.527.489	4.046.600	3.357.033	2.352.654	4.860.417	3.865.900
PRODUCTOS DE VE- GETAL.	Primer semestre. .	4.527.489	4.046.600	3.357.033	2.352.654	4.860.417	3.865.900
	Segundo semestre. .	4.527.489	4.046.600	3.357.033	2.352.654	4.860.417	3.865.900
	Año.	9.054.978	8.093.200	6.714.066	4.705.308	9.720.834	7.731.800

TIENES.	450	1.537.489	1.085.993	777.004	7.659.661	850.696	899.254
PRODUCTOS DE VE- GETALES PARA LA INDUSTRIA.	»	848.923	654.073	805.536	1.005.659	1.035.227	955.425
»	»	1.523.776	1.259.796	1.382.600	1.665.007	1.894.323	1.854.679
»	»	1.752.095	1.559.097	1.664.792	2.002.085	2.452.425	2.253.333
»	»	1.586.399	1.734.055	1.826.492	2.597.725	2.263.593	2.455.697
»	»	3.338.494	3.293.152	3.491.284	4.599.810	4.715.028	4.709.030
COLORES.	»	17.282.030	15.115.612	18.940.001	18.992.409	26.520.260	28.449.171
»	»	13.999.598	16.475.031	16.181.698	23.762.572	18.285.353	18.576.863
»	»	31.281.628	31.591.243	35.121.699	42.754.981	44.805.513	47.026.034
»	»	23.590.717	26.053.715	28.786.149	31.633.153	27.079.208	26.434.899
»	»	10.272.147	9.897.529	7.960.162	13.144.621	18.004.331	19.914.529
»	»	33.962.864	35.951.244	36.746.311	44.777.774	45.083.539	46.349.428
»	»	1.268.243	1.100.573	971.292	627.869	1.186.441	1.137.815
»	»	558.478	629.092	614.523	580.769	937.556	835.390
»	»	1.826.721	1.729.665	1.585.815	1.208.638	2.123.997	1.973.205
»	»	59.954	71.131	73.292	72.609	83.524	80.433
»	»	72.201	74.033	54.309	85.184	81.648	98.550
»	»	132.215	145.764	127.601	157.883	165.172	184.983
»	»	95.396	103.202	81.432	95.825	122.199	161.000
»	»	193.926	206.552	194.193	201.714	302.037	301.969
»	»	289.322	309.754	275.625	397.539	424.236	462.969
»	»	3.259.214	3.976.181	4.257.676	2.576.978	4.599.645	3.976.162
»	»	3.181.080	3.688.335	3.426.196	3.555.902	3.721.659	2.934.971
»	»	6.440.294	7.664.516	7.683.872	6.132.880	8.321.304	6.911.133
»	»	6.827.594	5.418.436	5.962.095	9.332.744	9.968.581	12.446.160
»	»	7.707.612	4.895.799	7.592.565	11.426.338	12.408.705	13.365.260
»	»	14.595.206	10.314.205	13.554.658	20.759.082	22.377.286	25.811.420
»	»	5.179	2.855	1.239	5.054	7.156	12.157
»	»	2.505	369	412	8.826	2.544	16.975
»	»	7.744	3.224	1.651	13.880	9.700	39.132

Met.^o cúb.^o

Kilogram.

T.^a de arq.^o

SEGUNDA PARTE.

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS.

	UNIDAD.	1877.	1878.	1879.	1880.	1881.	1882.
CRISTAL Y VIDRIO.	Primer semestre.	1.397.492	1.622.519	2.206.080	1.834.882	2.060.720	2.445.233
	Segundo semestre.	1.273.663	1.424.185	1.687.853	1.088.482	2.116.703	2.272.265
	Año.	2.671.155	3.046.704	3.893.933	3.923.364	4.177.423	4.717.498
PERFUMERÍA.	Primer semestre.	63.953	53.295	71.543	63.225	71.408	68.391
	Segundo semestre.	58.494	67.710	61.262	76.683	71.838	71.660
	Año.	122.447	121.005	132.805	139.908	143.246	140.051
MUEBLES Y ARTEFACTOS DE MADERA.	Primer semestre.	604.166	668.298	753.134	804.483	1.053.189	1.232.929
	Segundo semestre.	564.470	762.779	772.543	981.311	967.570	1.190.727
	Año.	1.168.636	1.431.077	1.525.677	1.785.794	2.020.759	2.423.656
HILADOS DE ALGODÓN.	Primer semestre.	120.234	132.456	117.392	129.383	124.479	145.877
	Segundo semestre.	137.366	134.005	86.449	137.423	154.457	134.813
	Año.	257.600	266.461	203.841	266.806	278.936	280.690
HILAZA DE LINO.	Primer semestre.	2.927.218	2.814.071	1.842.405	2.028.022	2.396.718	2.357.068
	Segundo semestre.	2.041.074	2.198.636	1.872.607	2.039.865	2.069.593	2.250.650
	Año.	4.968.292	5.012.707	3.715.012	4.067.887	4.466.311	4.607.718
			462.167	437.582	466.404	541.481	525.600

TEJIDOS DE ALGODÓN.	Segundo semestre.	Año.	4.067.881	4.602.712	4.663.111	541.481	325.600
		Año.	1.202.965	1.210.492	1.149.143	1.110.212	1.236.857
TEJIDOS DE HILO.	Primer semestre.	Segundo semestre.	234.003	232.427	242.943	272.103	237.952
			315.339	380.671	344.768	362.842	391.766
TEJIDOS DE LANA.	Primer semestre.	Segundo semestre.	549.342	613.098	587.711	634.945	629.718
			541.514	663.434	654.256	675.406	843.508
TEJIDOS DE SEDA.	Primer semestre.	Segundo semestre.	979.366	1.170.071	1.155.845	1.143.108	1.388.866
			1.520.880	1.833.445	1.810.101	1.818.514	2.232.374
TEJIDOS DE SEDA.	Primer semestre.	Segundo semestre.	30.538	32.951	40.450	36.927	56.017
			34.241	57.729	36.173	44.301	49.346
TEJIDOS CON MEZCLA.	Primer semestre.	Segundo semestre.	64.779	90.680	76.623	81.228	105.363
			46.298	61.136	75.852	79.458	101.008
PAPEL.	Primer semestre.	Segundo semestre.	196.203	200.715	235.789	292.729	112.499
			242.501	261.851	311.641	372.187	213.507
BOTONES.	Primer semestre.	Segundo semestre.	2.543.861	2.129.087	2.596.002	2.138.351	2.417.896
			2.116.929	1.774.248	1.914.791	2.041.166	2.645.259
PASAMANERÍA.	Primer semestre.	Segundo semestre.	4.660.790	3.903.335	4.510.793	4.179.517	5.063.155
			139.531	127.631	125.605	116.365	157.443
PASAMANERÍA.	Primer semestre.	Segundo semestre.	90.875	115.661	87.764	125.850	140.568
			230.406	243.292	213.369	242.215	298.011
PASAMANERÍA.	Primer semestre.	Segundo semestre.	56.397	89.426	78.890	108.138	124.374
			87.777	100.415	103.175	100.490	121.405
PASAMANERÍA.	Primer semestre.	Segundo semestre.	144.174	189.841	182.065	209.628	245.789

TERCERA PARTE.

IMPORTACIÓN DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS.

		UNIDAD.	1877.	1878.	1879.	1880.	1881.	1882.
TRIGO.....	Primer semestre.	Kilogram.	8.937.246	14.526.356	83.986.890	22.913.089	2.589.528	77.423.555
	Segundo semestre.	»	265.933	45.666.480	36.545.095	6.998.074	17.592.701	198.086.496
	Año.	»	9.203.179	60.192.836	120.531.985	29.911.163	20.182.229	275.510.051
HARINA DE TRIGO..	Primer semestre.	»	3.013.720	1.189.780	10.114.226	3.092.927	581.671	3.355.507
	Segundo semestre.	»	1.125.977	2.856.624	8.012.271	947.518	970.712	14.125.061
	Año.	»	4.159.697	4.046.404	18.126.497	4.040.445	1.552.383	17.480.568
LOS DEMÁS CEREAL- ES.	Primer semestre.	»	8.815.573	3.452.498	31.794.915	56.337.665	2.780.711	17.129.040
	Segundo semestre.	»	1.369.385	18.184.360	43.148.197	30.567.254	3.949.778	81.007.580
	Año.	»	10.184.958	21.636.858	74.943.112	86.904.919	6.730.489	98.136.620
BACALAO.....	Primer semestre.	»	12.148.752	14.132.068	16.651.560	19.915.508	20.636.179	16.915.958
	Segundo semestre.	»	20.789.982	21.191.686	21.949.017	24.419.030	22.462.923	24.520.841
	Año.	»	32.938.734	35.323.754	38.600.577	44.334.538	43.099.102	41.436.799
Primer s.		»	44.740.15					

AZÚCAR.	Primer s.	16.247.017	18.867.718	16.819.827	16.207.857	16.325.439	19.726.079
	Segundo semestre.						
	Año.	30.993.168	29.770.884	33.344.675	28.476.608	33.919.534	35.015.756
CACAO.	Primer semestre. .	3.796.502	2.114.628	2.495.377	2.960.761	2.552.811	3.205.729
	Segundo semestre.	2.593.962	3.209.600	3.441.793	5.510.480	2.949.228	3.662.430
	Año.	6.390.464	5.324.228	5.937.170	8.471.241	5.502.039	6.868.159
CAFÉ.	Primer semestre. .	1.239.494	1.215.712	2.154.914	1.565.703	2.669.662	1.734.084
	Segundo semestre.	1.043.476	1.644.711	1.504.993	1.542.786	1.605.068	1.533.399
	Año.	2.282.970	2.860.423	3.659.907	3.108.489	4.274.730	3.267.483
CANELA.	Primer semestre. .	141.672	127.111	149.278	160.703	152.084	163.861
	Segundo semestre.	141.576	181.053	138.173	204.575	172.921	224.752
	Año.	283.248	308.164	287.451	365.278	325.005	388.613
AGUARDIENTE.	Primer semestre. .	157.489	27.058	168.587	296.113	298.550	304.034
	Segundo semestre.	41.500	116.890	172.180	261.199	256.318	272.802
	Año.	198.989	143.948	340.767	557.312	554.868	576.836
VINO.	Primer semestre. .	1.787	1.822	2.740	2.832	3.395	4.124
	Segundo semestre.	1.557	2.910	2.594	3.829	3.388	4.635
	Año.	3.344	4.732	5.334	6.661	6.783	8.759

El gran incremento de la importación de trigo, harina de trigo y otros cereales, debido á la pérdida de las cosechas, lejos de ser un bien, debe considerarse como un acontecimiento deplorable y accidental que ha influido desfavorablemente, perturbando y restringiendo la marcha de nuestro comercio exterior.

Sin esta causa fatal, otras serían las cifras y más lisonjeros los resultados de la reforma; pero el estudio detenido de lo que queda expuesto y el del estado núm. 6, hace presagiar un porvenir más lisonjero.

IV.

RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA PENÍNSULA Y LAS PROVINCIAS DE ULTRAMAR.

Entre las cuestiones que exigían una solución radical y urgente, cuando me encargué del Ministerio de Hacienda, descollaba la de las relaciones comerciales entre la Península y las provincias de Ultramar, reforma que era necesaria para completar los progresos que se hallaban en vías de realización en el régimen social y político de nuestras Antillas.

El deseo de establecer la libertad de comercio entre estas provincias y las de la Península era una aspiración nacional, sólo contrariada por dos causas á primera vista muy poderosas: la necesidad de sostener los ingresos de las Aduanas, y el temor de inferir agravio á la producción azucarera peninsular.

Examinada la parte que en la recaudación de Aduanas correspondía á los productos de las Antillas y Filipinas, resultaba que no era de una entidad tal que no pudiera acometerse alguna reducción.

La cantidad que el Erario ha perdido por derechos de importación de los productos de las provincias

españolas ultramarinas, representa un tanto por ciento bastante reducido en la totalidad de los derechos de importación, tanto por ciento que venía en disminución constante desde 1860 á 1880, en cuyo último año no llegó al cinco y medio por ciento del importe total de los derechos de Arancel.

Investigando cuáles eran los productos de las provincias ultramarinas que rendían estos ingresos, resultaba que, á excepción del tabaco, que mientras subsista el estanco no puede ser considerado como artículo de comercio, sólo el azúcar, café, aguardiente y cacao producían ingresos de importancia, siendo insignificantes los de todos los demás géneros.

Los derechos del azúcar, que representaban, por sí solos, la parte principal de los ingresos, se habían reducido sucesivamente por las leyes de Presupuestos de 1878-79 y 1880-81, en términos que los azúcares comunes, hasta el número 14 de la escala holandesa, sólo pagaban 8,75 pesetas por 100 kilogramos, y los de superior graduación un derecho doble.

Esta modificación, tan conveniente bajo el punto de vista político, debía acarrear y acarrió una baja en los ingresos del azúcar. Además produjo dudas y confusiones en los despachos, porque la Administración estableció el análisis sacarimétrico para distinguir los azúcares superiores é inferiores al núm. 14 de la escala holandesa. Aquel método científico, no conocido suficientemente en el comercio español, fué motivo de reiteradas quejas, y era de necesidad hacerlo desaparecer.

Debo declarar con franqueza, que yo profesaba en este punto ideas más expansivas de las que han prevalecido al aprobarse la ley. Me proponía hacer desaparecer, en absoluto, los derechos diferenciales entre los azúcares superiores é inferiores al núm. 14 de la

escala holandesa, fijando por de pronto á todas las clases el derecho que satisfacían los más baratos, reduciendo este derecho á la mitad en 1.º de Enero de 1885 y aboliéndolo completamente en 1.º de Enero de 1888. Este era el espíritu del proyecto de ley que presenté á las Cortes en 24 de Octubre de 1881, reformando las relaciones comerciales entre la Península y las provincias ultramarinas.

La Comisión de las Cortes que entendió en el examen de este proyecto, inspirándose en los más patrióticos sentimientos, creyó prudente oír, antes de dar dictamen, á todos los interesados en el mismo, esto es, á los productores de azúcar peninsular, á los comerciantes en géneros coloniales y á los representantes de la industria cubana y puertorriqueña. Conviniéron todos en una modificación que, haciendo menos rápido el tránsito del sistema arancelario entonces vigente á la libertad completa de comercio, armonizara todos los intereses. Al efecto propusieron: 1.º, la conservación de derechos diferentes para los azúcares inferiores y para los superiores al núm. 14 de la escala holandesa, haciendo esta distinción en los despachos de las Aduanas, por la comprobación del color; y 2.º, que las rebajas de los derechos se hagan por décimas partes, de modo que sólo se llegue á la libertad en el año de 1892.

No era éste el sistema que yo me proponía seguir; pero creí oportuno aceptarlo, porque conducía al mismo resultado, y por no ser causa de dificultades que hubieran acaso aplazado de una manera indefinida la realización de un deseo general en el País.

Aunque con las medidas adoptadas parecía definitivamente terminada la lucha de los intereses de la industria azucarera peninsular y antillana, todavía el Gobierno tuvo que intervenir nuevamente, con moti-

vo de una cuestión, al parecer de detalle, pero que en el fondo implicaba notable importancia.

Según la ley, sólo el azúcar, aguardiente, cacao, chocolate y café deben satisfacer derechos cuando procedan de las provincias y posesiones españolas ultramarinas; los demás artículos son libres de derechos.

A pesar de esto, habiéndose introducido por la aduana de Palma de Mallorca miel de cañas concentrada, esto es, un residuo de la elaboración del azúcar, que por los procedimientos imperfectos de fabricación que se siguen en las Antillas contiene cierta cantidad de azúcar, aquella Aduana pretendió exigirle los derechos del azúcar inferior al número 14 de la escala holandesa.

Pasado el expediente á la Junta de Aranceles, la Comisión nombrada para informar acerca de este asunto no pudo tomar acuerdo unánime, opinando la mayoría que el producto era una mezcla de miel y azúcar, que la primera era libre según la ley, y el segundo debía pagar derechos de arancel; pero no indicó los medios de averiguar la cantidad real de azúcar que existía unido á la melaza.

La minoría de la Comisión sostuvo que todo el producto era verdadera miel, aunque tuviera un sedimento de azúcar, y que con arreglo á la ley es libre de derechos de Arancel.

La minoría hizo además la salvedad de que el azúcar que se extraiga de la miel en cuestión, debe pagar los impuestos transitorio y municipal, del mismo modo que los satisface el azúcar elaborado con el jugo de las cañas dulces que se cultivan en la Península.

La Junta aceptó la opinión de la minoría por 20 votos contra 9, y quedó reconocido en la discusión: 1.º, que con arreglo á la ley, las mieles de todas clases son

libres; 2.º, que el producto presentado al despacho en Palma es una verdadera miel, pues responde perfectamente á la definición que da de las mieles la nota 41 del Arancel; 3.º, que desde 1879 se importan por Palma de Mallorca mieles concentradas para extraer de ellas el azúcar que contienen, de cuyo hecho tiene conocimiento la Dirección de Aduanas desde entonces; 4.º, que dicho Centro informó en 1879 que para facilitar el comercio con las Antillas debían declararse libres algunos artículos, entre otros las *mieles*, estimando que de este modo se protegería la producción nacional; 5.º, que sosteniendo en 1879 la Dirección general de Aduanas que no podían bajarse los derechos de los azúcares que entonces pagaban 17 pesetas 50 céntimos los 100 kilogramos, y sabiendo que se importaban mieles concentradas que sólo abonaban dos pesetas 80 céntimos, no temió el fraude que pudiera hacerse importando mieles ricas en azúcar, fraude que se eleva á 14,70 pesetas los 100 kilogramos; 6.º, que este fraude es mucho menos de temer ahora que el azúcar inferior al núm. 14 sólo paga 5,50 pesetas los 100 kilogramos, derecho reducible de año en año, pues aunque las mieles sean libres, el beneficio para los importadores es mucho menor que en 1879; 7.º, que la declaración de que las mieles son libres responde perfectamente al espíritu de la ley, que desea poner en iguales condiciones fiscales los productos antillanos y los peninsulares, y da á los fabricantes de azúcar peninsular la facultad de poder trabajar durante todo el año, puesto que cuando acaben de elaborar el jugo de la caña que se cultiva en el país, podrán continuar el trabajo extrayendo de las mieles el azúcar que contiene; y 8.º, que la importación de las mieles en la Península con libertad de derechos es una de las franquicias que con más insisten-

cia han pedido los cubanos y puertorriqueños como medio de fomentar la producción azucarera de aquellas islas.

En presencia de tales consideraciones, me conformé con el dictamen de la Junta de Aranceles, y por Real orden de 2 de Diciembre de 1882 S. M. dispuso que en estricto cumplimiento de la ley de 30 de Junio del mismo año, las mieles de caña, producto y procedentes de las provincias de Ultramar, son libres de derechos de Aduanas á su importación en la Península, y que los azúcares que se obtengan con dichas mieles deben pagar los derechos transitorio y municipal que se cobrarán de los fabricantes, en la forma más conveniente.

V.

REORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DE ARANCELES Y VALORACIONES.

La Junta de Aranceles formaba parte, como cuerpo consultivo, de la Dirección general de Aduanas, y este carácter de dependencia había hecho suponer, infundadamente por cierto, que sus informes se subordinaban á las tendencias de aquel Centro.

La reorganización de la Junta responde, por consiguiente, al deseo de que ésta obre con una independencia absoluta en la fijación de las valoraciones y en la reunión de los datos necesarios para realizar este trabajo, á fin de que no pueda sospecharse nunca que la Administración influye en el asunto con un fin determinado.

Ha tenido también otro objeto; ampliar las facultades de la Junta á fin de que pueda reunir por sí misma los antecedentes relativos á los Aranceles de los demás países, y tener preparados los estudios necesarios

al proceder, en cumplimiento de la ley de 6 de Julio de 1882, á abrir nuevas negociaciones para ampliar los tratados de comercio que nos ligan con otras potencias. Estos antecedentes permitirán también á la Junta conocer la modificación de las ideas en materia arancelaria, y por consiguiente, los informes de esta corporación señalarán al Gobierno las reformas que convenga emprender con objeto de fomentar los intereses nacionales.

Por último, la Junta ha asumido la misión de dar á conocer al comercio, por medio de la publicación de las Memorias comerciales y otros documentos, aquellas noticias que son de difícil adquisición, y cuyo conocimiento pueda convenir en las transacciones con el Extranjero.

La imparcialidad más absoluta presidió en la reorganización de la Junta; no hubo el deseo ni la tendencia de que predominasen ideales económicos determinados, sino el de que, de la discusión amplia y sosegada de las cuestiones, salgan las resoluciones más convenientes para los intereses generales del País; por esto en la nueva corporación figuran hombres de todas las tendencias económicas y de todos los partidos, no siendo mayor el número de sus vocales para que sea más fácil y expedito el despacho de los negocios.

En el corto tiempo que media desde su reorganización, la Junta ha dado relevantes pruebas del celo y actividad que anima á todos sus vocales. Basta recordar, en corroboración de lo que afirmo, la solemnidad y elevación de miras con que se discutieron en su seno la reforma del Arancel, de que antes se ha hecho mérito; la de la importación de las mieles de Cuba y Puerto Rico, y la formación del Reglamento de la misma Junta, aprobado por Real orden de 24 de

Noviembre de 1882, según el cual las discusiones podrán adquirir toda la amplitud necesaria para el esclarecimiento perfecto de los asuntos, y las minorías tendrán el derecho de presentar enmiendas y adiciones á los dictámenes que se discutan, sistema no autorizado por los anteriores reglamentos.

Por último, la Junta ha adoptado las medidas más acertadas para realizar el fin de su instituto; la fijación de los valores oficiales revestirá un carácter de exactitud incontrovertible, y los datos y noticias que la Junta ha de reunir sobre legislación arancelaria extranjera y sobre el comercio internacional, no sólo podrán ser estudiados por sus vocales, sino que también serán conocidos del público, comprendiéndose, lo que de más sustancial tengan, en las Memorias comerciales que la Junta da á luz por entregas quincenales que se reparten profusamente entre la prensa, las corporaciones y las personas que se dedican á estudios económicos.

VI.

RENDIMIENTOS DE LAS ADUANAS.

Todas las medidas expuestas, todos los esfuerzos hechos para fomentar el desarrollo de la industria del País y el comercio internacional, necesitan un corolario indispensable, y es que hayan podido llevarse á cabo sin detrimento inmediato de los ingresos de las Aduanas y con la esperanza de acrecentarlos, por el desenvolvimiento natural de la riqueza.

Tengo la satisfacción de poder afirmar que también se ha conseguido este fin. Los ingresos de las aduanas están en alza con relación á los años anteriores, á pesar de las bajas de los derechos que suponía la aplicación de la base 5.^a y la ley de relaciones con las provincias de Ultramar.

Ocioso es que recuerde que la ley de las relaciones comerciales con las provincias y posesiones españolas de Ultramar tiene como exclusivo objeto desarrollar el comercio con aquéllas y de ninguna manera aumentar los ingresos del Tesoro, antes por el contrario, éstos han de sufrir un quebranto, con la baja de los derechos primero y la libertad completa más tarde. Es un sacrificio pecuniario que el Tesoro hace en aras de intereses sociales elevados y patrióticos.

Un hecho deplorable ha venido á perturbar la marcha del comercio durante el año de 1882, y á detener el natural y previsto incremento que la rebaja de los Aranceles debía imprimirle. La pérdida de las cosechas en muchas provincias, y principalmente en las de Andalucía, ha obligado á acudir el extranjero en demanda de los cereales y harinas que nuestro suelo no ha producido. El gasto que esta necesidad ha ocasionado es de muchísima entidad y puede calcularse en más de 117 millones de pesetas, como demuestra el siguiente cuadro:

Cuadro de las cantidades, valores y derechos de los cereales y sus harinas, importados en los dos semestres del año 1882.

		Cantidades. Kilogramos.	Valores oficiales. (1)	Derechos. (2)	TOTAL.
1.º semestre de 1882..	Trigo.	77.423.555	20.904.359	4.505.753	25.410.112
	Harina de tri-				
	go.	3.355.507	1.342.202	292.935	1.635.147
	Otros cereales.	17.129.040	2.740.646	548.129	3.288.775
2.º semestre de 1882..	Trigo.	198.086.496	53.483.353	11.399.329	64.882.682
	Harina de tri-				
	go.	14.125.061	5.650.024	1.178.003	6.828.027
	Otros cereales.	81.007.580	12.961.212	2.534.091	15.495.303
TOTALES.. . . .		391.127.239	94.627.796	20.458.240	117.540.046

(1) Se toman para el cálculo los últimos valores oficiales dados por la Junta de Aranceles y Valoraciones, que son: trigo, 27 pesetas los 100 kilogramos; harina de trigo, 40 pesetas los 100 kilogramos; los demás cereales, 16 pesetas los 100 kilogramos.

(2) Las cantidades que comprende esta casilla para el trigo y la harina, son la suma de los derechos de arancel y transitorio.

Este desembolso enorme, que presupone un mayor quebranto por la pérdida de jornales en las clases menesterosas y una limitación de su bienestar en las acomodadas, ha debido influir necesariamente, y de hecho ha influido, en los ingresos de las Aduanas.

No es extraño, pues, que algunos, teniendo en cuenta esta situación afflictiva del País, pretendan que, sin los derechos de los cereales, los rendimientos de las Aduanas han disminuido, y por lo tanto, que la reforma del Arancel ha sido perjudicial para el Tesoro.

El examen imparcial de los hechos demuestra lo contrario. Voy á exponerlos. Para la más fácil inteligencia, se resume en el cuadro siguiente la recaudación total de las Aduanas en los semestres de los años económicos de 1877-78 al actual, las cantidades que han producido los cereales y la recaudación líquida que resulta, deducidas éstas.

Recaudación de las Aduanas en los semestres que se expresan, con deducción de las cantidades cobradas por cereales y sus harinas.

		Recaudación total.	Cereales.	Líquido.
1877-78. . .	Julio á Diciembre de 1877.	44.162.417	146.809	44.015.608
	Enero á Junio de 1878. . .	44.510.483	850.871	43.659.612
1878-79. . .	Julio á Diciembre de 1878.	52.516.305	3.702.976	48.813.329
	Enero á Junio de 1879. . .	54.098.085	6.787.453	47.310.632
1879-80. . .	Julio á Diciembre de 1879.	54.877.794	4.208.112	50.669.682
	Enero á Junio de 1880. . .	57.246.135	3.364.625	53.881.510
1880-81. . .	Julio á Diciembre de 1880.	57.287.102	1.502.893	55.784.309
	Enero á Junio de 1881. . .	58.484.286	297.830	58.186.456
1881-82. . .	Julio á Diciembre de 1881.	58.787.038	1.232.032	57.555.006
	Enero á Junio de 1882. . .	63.385.532	5.346.817	58.038.715
	Julio á Diciembre de 1882.	72.739.064	15.111.423	57.627.641

Dedúcese del cuadro anterior que la recaudación total de las Aduanas en los primeros semestres de los años económicos de 1879-80 á 1881-82 es menor que la de los segundos semestres de dichos años, y fundándose en este hecho, puede prudentemente espe-

rarse que la recaudación en el semestre que atravesamos ha de ser más alta que la realizada en los meses de Julio á Diciembre de 1882.

Las cantidades que por cereales se han recaudado en cada uno de los semestres que se comparan es excesivamente variable; fué sólo de 146.809 pesetas en el primer semestre del año económico de 1877-78 y ha excedido de 15 millones de pesetas en igual período del año actual.

Pero á pesar de esta importación, la mayor que se ha realizado de cereales, mediante el pago de derechos de Arancel, los ingresos de las Aduanas son superiores á los del semestre correspondiente de 1881-82, en que la importación de cereales produjo sólo pesetas 1.232.032, y ésta á su vez fué superior al semestre correspondiente de 1880-81 en que la importación de cereales fué casi igual á la de 1881-82.

Dicen estos hechos, á juicio mío, que á pesar de la mala cosecha, los ingresos de las Aduanas están en progreso, y si éste se manifiesta cuando una causa de detención ha venido á contrariarlos, el día que esta causa desaparezca, los rendimientos de la renta tomarán el mayor vuelo que ha de imprimirles el desarrollo del comercio, determinado por la baja de los Aranceles.

Y que la aplicación de la base 5.^a ha influido en el mantenimiento de los ingresos de las Aduanas no cabe tampoco dudarlo. El cuadro antes copiado indica que en el segundo semestre de 1881-82, y deducido el producto de los cereales, los ingresos de las Aduanas se habían paralizado, ya que no disminuido, con relación al período equivalente del año económico anterior; es decir, que sin las mayores facilidades dadas al comercio, es posible que al malestar de las clases agrícolas se hubiera unido una paralización

en las transacciones mercantiles, y como consecuencia, una baja en los ingresos de la renta.

Y no se diga, por otra parte, que, sin el aumento de recaudación debida á los cereales, los ingresos de las Aduanas hubieran decrecido, causando un déficit en el presupuesto.

Si por razón del mal año agrícola, nuestras Aduanas han recibido cantidades extraordinarias de cereales, el gasto que el País ha hecho para adquirirlas se ha restado de las sumas que se hubieran empleado en la adquisición de otros artículos, cuya importación ha permanecido estacionaria; porque los consumidores, lejos de disponer de las cantidades necesarias para adquirirlas, se han visto en la necesidad de emplear sus ahorros en la alimentación.

Por este hecho se ha verificado, en el caso de que se trata, que dirigiéndose preferentemente el tráfico á llenar el gran vacío de cereales que existía en el País, los cuantiosos recursos distraídos á este objeto por una parte, y la reducción del consumo por otra, han detenido el mayor incremento que evidentemente habría tomado la importación en general.

Resulta, pues, como corolario forzoso de este razonamiento, que la mayor recaudación en las Aduanas, producida por la pérdida de la cosecha de cereales, constituye una verdadera compensación á la menor importación de otros efectos, debida á la misma causa, y que pueden sumarse como ingresos naturales una gran parte de los que he restado como extraordinarios.

VII.

REFORMAS EN PROYECTO.

Las reformas que se han llevado á cabo en Aduanas necesitan varios complementos indispensables

para que dicha renta adquiriera el estado de prosperidad á que está llamada, y llene su doble misión, que es procurar pingües rendimientos al Erario y armonizar los intereses del comercio y de la producción nacional.

La rebaja de los derechos de algunas mercaderías que la industria manufacturera requiere para su trabajo, es la más importante de estas reformas, y éste era el objeto del proyecto de ley sometido á la deliberación de las Cortes en 22 de Junio de 1882.

Con motivo del tratado de comercio con Francia, una de las industrias á que aquél afectaba principalmente, la de tejidos de seda, acudió á las Cortes pidiendo, como compensación del perjuicio que pudiera inferirle, la reducción de los derechos de las sedas en rama, y en este sentido se formuló en el Congreso una proposición de ley.

Al ser ésta tomada en consideración, manifesté que no debía considerarse una cuestión aislada la rebaja de los derechos de la seda en rama, sino que á mi juicio se aproximaba el momento en que era necesario adoptar alguna resolución sobre las primeras materias que sirven de base y de elemento á nuestra industria. Expuse también que me ocupaba de este particular, indicando mi propósito de someter á las Cortes algunas medidas sobre primeras materias, que tenía en estudio. Dos meses después, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, presenté el proyecto de ley, que pasó á la misma Comisión que entendía en la rebaja de los derechos de la seda.

Este proyecto es la compensación que la justicia y la equidad aconsejan otorgar á las industrias manufactureras, para las cuales la protección arancelaria ha disminuído, con las reducciones de derechos realizadas por el tratado de comercio con Francia y al aplicarse la base 5.^a del Arancel.

El proyecto de reducción de los derechos de las primeras materias tiene además otro objeto, que es armonizar los principios de la ley arancelaria de 1869 con las necesidades de la industria.

Esta ley, cuya tendencia es llegar á una tarifa puramente fiscal, con derechos que para todas las mercancías no excedan del 15 por 100, no tuvo en cuenta la situación desventajosa que se crearía á la industria nacional el día en que, llegando á dicho tipo los derechos de los productos elaborados, se encontraran recargadas las materias primeras con las cuales se fabrican ó que intervienen útilmente en su elaboración, tanto más cuanto que estas materias resultarían en algunos casos más gravadas por las mermas que sufren la mayor parte de ellas en las operaciones industriales.

Para que la reforma arancelaria produzca los fecundos resultados que de ella se esperan fundadamente, es preciso dar á la industria aquellas necesarias compensaciones que asimilen sus condiciones de producción á las de las industrias extranjeras.

Por esto, en el proyecto de ley de reducción de los derechos de las primeras materias, figura en primer término el carbón de piedra, elemento necesario para todas las industrias, excesivamente recargado en su coste por los fletes y gastos de descarga en los puertos y por un derecho arancelario que se dobló, sin causa justificada, por la ley de 11 de Julio de 1877. Para este artículo me limité á proponer á las Cortes el restablecimiento del derecho fijado en el Arancel de 1869.

La baja de los derechos de las lanas de todas clases y de las sedas es una compensación necesaria de las que han experimentado los tejidos de estas materias. Esta baja debe ser precursora de la libertad completa

de dichas fibras, á fin de que los fabricantes españoles tengan completamente expeditos los medios de competir con los productos similares extranjeros, no ya en el mercado nacional, sino también en los de otros países.

La reducción de los derechos de las lanas puede creerse, si la cuestión se examina superficialmente, que afecta á la ganadería española: un examen más detenido indica lo contrario.

Rebajados los derechos de los tejidos de lana para facilitar el comercio internacional, abrir anchos mercados á nuestros productos agrícolas y extirpar el contrabando, difícil de perseguir cuando el lucro que produce es considerable; si los fabricantes españoles no pudieran reducir los precios de las telas que elaboran, las extranjeras sustituirían á aquéllas en los mercados nacionales, la producción disminuiría y con ella el consumo de las lanas, y nuestros ganaderos se verían obligados á vender en el extranjero este artículo, y además del recargo que el transporte les produciría, tendrían que luchar con las lanas de todos los demás países productores sin el amparo de los derechos arancelarios, que, sea cual fuere su cuantía, constituyen siempre una protección.

La reducción de los derechos de los aceites de uso industrial reconoce por causa el fomento de la industria jabonera, injustamente perjudicada con los derechos prohibitivos de dichos aceites, que son los que se emplean preferentemente en la fabricación del jabón.

Estos derechos tan elevados se establecieron por la ley de Presupuestos de 1877-78, con objeto de evitar la falsificación de los aceites de oliva con los de algodón. Pesan igualmente sobre todos los demás aceites industriales, incluso los secantes, que nunca pueden

mezclarse ni confundirse con el de oliva. Á mi juicio, no se ha alcanzado el fin propuesto al imponer tales gravámenes, porque siendo la fabricación de aceites de semillas una industria fácil de establecer, los derechos altos crean en favor de ésta una protección que no está en armonía con la ley de Aranceles vigente.

La industria olivarera se ha desarrollado sin la protección que hoy reclama; el aceite español afluye á los mercados extranjeros en tanta cantidad cuanta puede producirse; al celebrarse tratados de comercio se ha cuidado de alcanzar derechos reducidos para los aceites, y por último, los cosecheros de este producto se han beneficiado de las grandes reducciones de los derechos arancelarios realizadas desde 1862: justo es armonizar la protección que el Estado dispensa á esta industria con la que alcanzan los demás, á fin de que no haya intereses lastimados.

Cierto es que el estado afflictivo de Andalucía exige cierta prudencia y mesura en la adopción de medidas que pueden afectar á uno de sus principales elementos de riqueza; pero el malestar de aquellas provincias es transitorio, y entiendo que un aplazamiento en la reducción de los derechos de los aceites sería suficiente para conciliar todos los intereses, sin renunciar á llevar á cabo la reducción en el plazo, relativamente corto, que ha de transcurrir para el alivio de los males que ha originado la pérdida de las cosechas en el año próximo pasado.

La reforma más importante, después de la proyectada reducción de los derechos de las primeras materias, era la renovación de los tratados de comercio que nos ligaban con las naciones extranjeras.

Casi todos estos tratados se habían celebrado con posterioridad á la reforma arancelaria de 1869 y se habían inspirado en el deseo de obtener de los países

extranjeros el trato de las naciones más favorecidas, conservando la facultad de alterar nuestro Arancel según la ley y la conveniencia nacional exigiera.

Este sistema envolvía un inconveniente grave, y es que las naciones con las que concluyó España sus tratados conservaron una idéntica libertad, algunas hicieron uso de ella, y elevaron los derechos de los productos españoles, sin reclamación posible por nuestra parte.

El sistema de tarifas anejas á los tratados se imponía, pues, como una garantía necesaria para nuestro comercio de exportación.

Con objeto de alcanzar esta garantía y obtener reducciones de derechos para los productos españoles, propuse al Consejo de Ministros, y éste aceptó, la denuncia de los tratados de comercio, que se llevó á cabo en Octubre de 1881.

Surgieron algunas dificultades respecto á la manera de abrir las negociaciones para la celebración de los nuevos tratados, por lo cual aquéllas no pudieron quedar terminadas en el plazo de un año desde la fecha de la denuncia.

Á algunas naciones hubo que aplicarles la primera columna del Arancel; á otras pudo concedérseles una primera próroga de dos meses en 10 de Octubre último, y otra segunda que ha durado hasta el 15 de Marzo de este año.

Sólo me conformé con esta última próroga, por deferir á los deseos del Gabinete de que formaba parte.

No me cumple hablar más de estos particulares, por la índole especial y reservada de los mismos.

Réstame ahora, para terminar la reseña de todo lo relativo al ramo de Aduanas, hacer algunas indicaciones sobre las reformas administrativas que, como

complemento de las económicas, juzgué necesario realizar, y han quedado en vías de ejecución en el respectivo Centro. Eran éstas, la reforma de las Ordenanzas, la de la Estadística y la del Reglamento del personal.

Las Ordenanzas de Aduanas, dictadas en 1870 para la administración de esta renta, han sido rectificadas parcialmente en algunos puntos y exigen notables alteraciones en un sentido expansivo, si han de ponerse en armonía con el espíritu liberal de las últimas leyes arancelarias.

El nuevo Código, pues, habría respondido á los principios que han informado á éstas. Se hubieran simplificado los despachos en las Aduanas; moderado la penalidad en muchos casos, suprimiéndola en otros; ensanchado sus gradaciones para hacerla más equitativa; limitado las operaciones de fiscalización á las más esenciales, aunque hubiera de conservarse cierta clase de garantías de que es imposible desprenderse. En resumen: se habría suavizado esta reglamentación, acomodándola á las nuevas necesidades y modo de ser del tráfico, con el fin de facilitar sus operaciones, libertándolas de todas las trabas que fuera posible, sin detrimento de la renta.

La reforma de las Ordenanzas estaba en estudio á mi salida del Ministerio, y es de presumir que, si aquél se ha continuado, inspirándose en los principios liberales de las leyes arancelarias, dentro de poco tiempo alcance el comercio las mayores facilidades que desde hace tiempo reclama y que la legislación aduanera actual cercena en muchos casos.

Á mi entrada en el Ministerio, las estadísticas anuales del comercio exterior venían publicándose con retraso. Debido á las medidas que adopté, la de 1880 se preparó en un año y medio, y la de 1881 po-

drá estar publicada antes de este plazo, pues á mi salida del Ministerio se encontraba ya muy adelantada.

De todas maneras, la Estadística requería una reforma urgente. Era mi propósito que este servicio correspondiera á sus importantes fines, no ya sólo en lo que se refiere á la rigurosa verdad de las cifras de nuestra importación, exportación y cabotaje, sino á su mejor ordenamiento, para formar con toda exactitud nuestras cuentas comerciales con cada país, y para obtener el más exacto conocimiento de la navegación.

Los trabajos preparatorios de esta reforma se hallaban muy adelantados en la Dirección general de Aduanas á mi salida del Ministerio.

Dejé también en estudio el Reglamento por que se rige el personal de Aduanas, que necesitaba igualmente reformarse. Era mi propósito restablecer en los ascensos el sistema de concursos, sujetándolos á reglas estrechas que garantizasen su otorgamiento sólo al mérito relevante y á los servicios extraordinarios, en términos de que á los primeros grados del escalafón de Aduanas sólo tengan acceso los empleados más aptos é inteligentes del Cuerpo, hermanando de este modo el respeto á los derechos adquiridos con el interés del servicio público.

El celoso Director general de Aduanas llevaba muy adelantado el proyecto del nuevo Reglamento y me daba oportunamente cuenta de sus propósitos, secundando las indicaciones que yo le tenía hechas.

VIII.

Mi gestión administrativa respecto á la renta de Aduanas ha producido reformas importantes que yo espero influyan poderosamente en el bienestar

del País; la ley de relaciones comerciales con las provincias de Ultramar ha destruído una barrera que se oponía al desarrollo de los intereses comunes de todas las provincias españolas; la aplicación de la base 5.^a ha restablecido el imperio de la ley arancelaria y marcado los límites dentro de los cuales se desarrollará y crecerá la industria nacional; la celebración del tratado de comercio con Francia ha abierto un ancho mercado á importantes productos de nuestro suelo y ha dado además la norma de lo que debe hacerse en los que sucesivamente se verifiquen; y he dejado, por último, iniciadas las medidas complementarias de estas reformas, de que ha de reportar en su día beneficios el comercio y el servicio.

RENTAS ESTANCADAS.

Tres proyectos de ley tuve la honra de presentar á las Cortes en 24 de Octubre de 1881 relativos á las Rentas Estancadas :

1.º Introduciendo algunas reformas en la renta de Tabacos.

2.º Disponiendo que desde 1.º de Enero de 1882 rigiese provisionalmente como ley un proyecto de reforma, que acompañaba, de la renta del Sello y Timbre del Estado.

3.º Suprimiendo las rifas de carácter permanente.

Con modificaciones de un orden secundario, y que en nada afectaban á mis propuestas, las Cortes tuvieron á bien aprobarlos.

Estoy, pues, en el deber de dar cuenta detallada, aunque sucinta, de lo practicado en dichos tres ramos, que son elementos importantes del presupuesto de ingresos ; de los resultados obtenidos, y de mis planes ulteriores.

I.

RENTA DE TABACOS.

Ya desde 1874, en que tuve la honra de desempeñar el Ministerio de Hacienda, me preocupó la situa-

ción de esta renta, llamada á ser abundante venero de recursos para el Tesoro ; pero el estado de las cosas públicas no permitía intentar las reformas que podía en principio considerar convenientes, como tampoco regularizar el suministro y abastecimiento de tabacos, siendo muchas las provincias en que era imposible verificarlo, por consecuencia de la guerra civil, sin riesgo de que, como aconteció varias veces, cayeran los surtidos en poder de los enemigos, con grande perjuicio de los intereses del Estado.

Consideré preciso, sin embargo, no dilatar por más tiempo una importante reforma iniciada cuatro años antes, pero no ejecutada por causas diferentes; la derogación del Real decreto de 20 de Abril de 1866, que autorizó la introducción y venta libre de los tabacos de Cuba y Puerto Rico, dejando restablecido por este medio el estanco absoluto del tabaco. Esta disposición fué acordada por el Sr. Presidente del Poder Ejecutivo en 26 de Junio de 1874, á propuesta mía, y se realizó venciendo felizmente y sin perjuicio de ningún interés las resistencias que al principio se iniciaron. Las ventajas que para el Tesoro se siguieron son bien conocidas de cuantos dedican su atención á estos asuntos.

Al encargarme nuevamente del Ministerio de Hacienda, tuve ocasión de conocer que la reforma de la renta había sido estudiada con mucha inteligencia por una Comisión nombrada al efecto en 1876, y que propuso acertadas resoluciones, pero que éstas no habían sido acordadas en lo principal, si bien sobre puntos de importancia relativamente secundaria se promovieron expedientes. No es de extrañar que así sucediera, pues cuanto se refiere á la elaboración y administración de este producto estancado reclama muy detenido examen, convencimiento de la bondad de

la medida que haya de adoptarse y la previsión de todo lo necesario para asegurar el éxito, satisfaciendo las exigencias del consumo y garantizando mayores rendimientos. Mis propósitos tenían que sujetarse á estas ideas, y á realizarlas en cuanto fuera dable he consagrado toda mi eficacia.

El estado en que se encontraba este ramo en Febrero de 1881 no era favorable, según las autorizadas noticias que recibía, para acometer sin dificultades ni peligros la reforma que la razón y la experiencia aconsejaban. Para apreciar, pues, aquel estado con la debida exactitud, ordené á la Dirección general del ramo redactara una Memoria, que en efecto me presentó en 1.º de Marzo de dicho año, y su estudio me dió á conocer las siguientes conclusiones :

1.ª Que la cantidad de ciento seis y medio millones de pesetas, producto integro obtenido en la renta durante el ejercicio de 1879-80, aunque sostenía el progresivo aumento que se notaba desde que por fortuna cesaron las afflictivas circunstancias en que la Nación se había encontrado y demostraba el celo con que se procuraba fomentarla, estaba lejos de representar la verdadera importancia del consumo.

2.ª Que para satisfacer las necesidades de éste, faltaban los repuestos de primeras materias y de productos elaborados, condición indispensable si habían de cumplirse las disposiciones reglamentarias y los deberes que el carácter de proveedor exclusivo impone á la Hacienda.

3.ª Que aun llevando al último límite la elaboración, los productos de ésta no eran suficientes para cubrir la demanda, quedando desatendido en parte el consumo, que la industria fraudulenta se apresuraba á satisfacer, no habiendo, por tanto, posibilidad de elevar los rendimientos á la altura correspondiente.

4.^a Que los procedimientos industriales resultaban costosos é insuficientes y que los elementos mecánicos con que se contaba se hallaban en mal estado.

Pude á la vez conocer, por informes y datos que se me dieron, que los edificios de las fábricas, además de no encontrarse en buen estado, carecían de condiciones higiénicas y no tenían las necesarias para efectuar con desahogo las operaciones de las labores.

El examen de la precitada Memoria me hizo reconocer, por último, lo temerario que sería acometer desde luego cualquiera reforma esencial que llevase consigo alteración de sistema y procedimientos, sin cuidarse antes de asegurar los surtidos para que el público no sufriese, siquiera por breve término, faltas que redundarían también en perjuicio del Tesoro.

Para dar solución á la primera cuestión, ó sea la de productos, se hacía necesario comenzar por resolver la segunda, primordial en este caso, aplazando cualquiera otra, por necesaria y urgente que pareciera.

Esta prioridad se hallaba tanto más justificada cuanto que la existencia de primeras materias en las fábricas apenas alcanzaría para elaborar hasta el mes de Agosto de aquel año, sin que se hubieran hasta entonces contratado nuevos suministros, salvo una y poco importante excepción; presentándose, por consiguiente, el natural temor de que, en el caso de no efectuarse los contratos en breve período, y por lo tanto, no tener lugar la entrega de los tabacos en rama en las fábricas antes de terminar Julio, llegaran á ocasionarse graves conflictos.

Forzoso era acudir á esta necesidad, y con efecto, lo hice. La Comisión de reformas había propuesto que se formulara un pliego general de condiciones al que, sin perjuicio de los particulares de cada suministro, se sujetaran todos los contratos; mejora muy conve-

niente en evitación de dificultades y abusos antes advertidos, que había sido sometida al previo estudio de los Centros administrativos, y que quedó autorizada por Real orden de 5 de Abril de 1881, circulándose con profusión en España y en los mercados de tabaco el mencionado pliego de condiciones que ha regido y rige, con ventaja notoria de la Administración.

Anunciadas las subastas y celebrados los contratos, se logró por este medio que el suministro de las fábricas quedara atendido y que en el segundo semestre de aquel año se encontrasen los citados establecimientos abastecidos de las primeras materias.

La mayor dificultad se hallaba, por lo tanto, vencida, y asegurados además los suministros en virtud de los nuevos contratos, efectuados con positivas ventajas en los precios, á pesar de la alza considerable que tuvieron los de los tabacos en rama en los centros de contratación.

Indispensables son siempre en los almacenes de las fábricas, en los provinciales y en los de partido los repuestos de tabacos elaborados: en ello gana el consumidor, por la mayor bondad que adquiere el género no en regándose al consumo inmediatamente después de su elaboración, y la Hacienda, porque los surtidos permiten satisfacer las exigencias de la demanda, con beneficio de sus intereses. Semejantes depósitos no se improvisan, sin embargo, pues una vez obtenidos los indispensables de las primeras materias, han de formarse aquéllos con la suma de labores que exceda á la demanda inmediata; remanente que no resulta en la proporción debida, toda vez que elevándose como se ha elevado el consumo, y contenida en parte la introducción del contrabando, cuanto se elabora se vende con una brevedad que impide la formación de los precitados depósitos.

En presencia de estas observaciones, la lógica me llevaba á procurar el aumento de la producción; pero si reconocía la conveniencia de hacerlo así, encontraba dificultades para realizarlo, pues, según dejo expuesto, aun forzando todo lo posible la elaboración de las fábricas, apenas si se cubre el servicio, y esto con más ó menos contrariedades y gastos.

Tal situación está creada por la falta de los elementos indispensables para alcanzar una mayor producción, hoy absolutamente precisa.

De extrañar es que cuando los productos de la renta vienen sucesivamente creciendo, no se haya ocupado la Administración de plantear un sistema que respondiese á ese mismo desarrollo, ampliando los centros de elaboración y dotándolos de los elementos mecánicos necesarios, que los adelantos modernos recomiendan, para impulsar discreta y científicamente la fabricación.

Poco ó nada estaba hecho en este sentido, aunque es de creer se habrá pensado en la conveniencia de resolver tales cuestiones; pero ante la dificultad de decidir cuál fuera el sistema más acertado que debiera emplearse, hubieron de nacer los aplazamientos. De aquí que al avanzar un paso, al acordar alguna compra, al determinar la reforma de los elementos de producción, se verificase con la timidez que no sólo limita la acción, sino que generalmente da por resultado gastos improductivos.

Nada más lejos de mi ánimo que censurar acto ni procedimiento alguno de mis dignos predecesores en lo que acabo de exponer: emito sólo una opinión nacida del convencimiento que abrigo de que en esta clase de asuntos y en todos los de idéntica naturaleza tienen necesidad los ministros de afrontar con ánimo sereno responsabilidades, ciertamente de un orden

secundario, ante la seguridad que su conciencia les ofrezca de que obran en interés del servicio público.

Por mi parte, convencido del deber y necesidad en que me encontraba de preparar los medios de dar mayor desarrollo á la renta, aumentando y perfeccionando la fabricación, sometí á detenido estudio la cuestión de si sería más conveniente establecer nuevas fábricas ó ampliar las actuales. Lo primero, cuyas ventajas reconozco, exigía un gasto de tal naturaleza que no cabe dentro de los límites estrechos de nuestro presupuesto ordinario; y por lo tanto, aplacé su realización, consagrandome mi eficacia á escogitar los medios de llevar á cabo lo segundo, sin renunciar en absoluto á lo primero.

Teniendo en cuenta el crédito consignado en el presupuesto de gastos, me propuse llevar á efecto la reforma y ampliación indispensable de algunas fábricas, y en especial de la de Madrid, necesidad urgentísima por razones notorias. Ordené, en su consecuencia, que se practicaran los trabajos preliminares encaminados á convertirla en un establecimiento que reuniese todas las condiciones que su importancia y los adelantos de la industria reclaman.

Formulada por la Dirección general del ramo la correspondiente propuesta de los medios conducentes al objeto y obtenida del Ayuntamiento la cesión de una parcela de terreno necesaria á completar el pensamiento, fué autorizada aquella para encomendar desde luego el proyecto completo de reforma general y nueva organización de la Fábrica de Tabacos de esta Corte al Ingeniero industrial de dicho Centro, cuyos trabajos realizados al presente permiten esperar que muy en breve sea un hecho la transformación exigida por el insostenible estado de cosas que se viene atravesando.

Al presentar á las Cortes la ley de 31 de Diciembre de 1881, expresé mi creencia de que armonizando los intereses generales y locales podría obtenerse de ciertas municipalidades, ya edificios, ya otras subvenciones que facilitasen la instalación de nuevas fábricas con menos coste para el Estado y notorias ventajas para éste y para las poblaciones en que aquéllas se establecieran.

Á consecuencia de mis disposiciones, secundadas por la eficaz gestión de la Dirección general, varias corporaciones populares solicitaron la instalación de nuevas fábricas ó ampliación de las existentes, distinguiéndose entre todas aquéllas el Municipio de Cádiz, que se prestó á hacer por su cuenta todas las obras necesarias para el ensanche y desarrollo de la fábrica establecida en dicha capital, con sujeción al proyecto que formara al efecto la Administración pública.

Allanados los obstáculos que esta clase de servicios ofrecen, se formó el proyecto, el cual fué aceptado por el mencionado Municipio, no obstante ascender su presupuesto á 400.000 pesetas; y efectuada la subasta de las obras en Enero último, se ha dado ya principio á los trabajos, siendo de creer se hallen terminados dentro de pocos meses, consiguiéndose entonces que el edificio en que está instalada la fábrica reúna todas las condiciones que son de desear, sin haberse ocasionado desembolso alguno al Tesoro. Las ventajas alcanzadas en este particular se han completado mediante haber cedido el ramo de Guerra varias construcciones antiguas, que facilitan el realizar en toda su extensión el proyecto de ensanche de talleres y servicios interiores de la fábrica.

Resta añadir sobre este punto que se siguen negociaciones con los Municipios de Alicante, San Sebastián y Bilbao para realizar iguales fines, habiendo lle-

gado á formarse por el Arquitecto del primero de estos Ayuntamientos un proyecto encaminado á conseguir el expresado objeto.

Quedaba todavía por resolver una cuestión que interesa tanto como la ampliación de las fábricas: la de sustituir los actuales elementos mecánicos existentes en algunas, ya antiguos, destruidos en su mayor parte, deficientes en todas para la fabricación, que gravan con crecidos gastos por sus continuas reparaciones y amenazan con la posibilidad de una paralización de las labores, por otros nuevos, perfeccionados, capaces de cubrir las necesidades del servicio, ofreciendo economías en la elaboración.

Cuestión es ésta muy debatida, pues si bien todas las opiniones se hallan conformes con respecto á la urgencia de proveer á las fábricas de elementos modernos, se dividen acerca de la manera de realizarlo.

Nombrada en Agosto de 1881 una Comisión para estudiar el asunto y proponer lo que considerase más conveniente en el particular, evacuó su informe en Diciembre del mismo año, y de él se deducía que siendo conveniente para normalizar el servicio emplear exclusivamente las máquinas y dedicar á los trabajos las horas ordinarias, no se podía, sin embargo, seguir este procedimiento, por cuanto la producción obtenida en 1880-81 á máquina y á brazo, en horas ordinarias y extraordinarias, no era suficiente para atender al consumo, ofreciendo un déficit importante, que sería mucho mayor, como es consiguiente, en el caso de adoptarse aquel procedimiento. Expuso también que las máquinas picadoras que actualmente se usan son insuficientes por su imperfecto sistema y carecer de los elementos que complementan los talleres mecánicos y forman la base de los procedimientos de esta clase de fabricación, haciéndose im-

prescindible una reforma radical con objeto de establecer aquéllos.

Examiné el asunto con detenimiento, teniendo en cuenta los precedentes, los gastos hechos anteriormente con análogo objeto y los resultados obtenidos; y en su consecuencia, y de conformidad con lo propuesto por la mencionada Comisión, se dictó la Real orden de 11 de Mayo de 1882, poniéndose así término á las discusiones y dilatorios trámites á que por tanto tiempo había dado lugar este asunto.

Por ella se determinó :

1.º Que la reforma industrial de talleres mecánicos en las fábricas de tabacos se llevara á efecto por medio de subasta pública para contratar este servicio.

2.º Que para dar cumplimiento á la anterior disposición, se procediese desde luego por el Ingeniero de la Dirección general de Rentas Estancadas á la formación de los proyectos completos, memorias, planos, presupuestos y pliegos de condiciones facultativas para la instalación de dichos talleres, con las máquinas y elementos auxiliares de que deben constar, según los sistemas más perfeccionados, para producir las distintas clases de picaduras de tabaco, resolviendo el problema del aprovechamiento de la vena y el de establecer en una ó más fábricas, según las necesidades del servicio, y donde la elaboración de cigarrillos no se verifica actualmente, las máquinas liadoras.

3.º Que se redactaran por la Dirección general las condiciones administrativas bajo las cuales haya de contratarse el servicio, fijándose de una manera precisa y terminante : primero, que el contratista no podrá tener otro carácter que simplemente el de obrero, sin acción directa ni intervención alguna en el régimen, gobierno y administración de las fábricas; segundo, que recibirá por inventario valorado todas las

máquinas, útiles y enseres de las mismas máquinas que existan en las fábricas, para devolverlos á la terminación del contrato, satisfaciendo los desperfectos ó pérdidas que experimentasen; tercero, que quedarán á beneficio de la Hacienda, una vez terminado el contrato, todas las máquinas, artefactos, útiles y enseres que constituyeren dichos talleres, los cuales precisamente habrán de hallarse en perfecto estado de servicio al hacer la entrega á la Hacienda; y cuarto, que una vez estudiados por el Ingeniero de la Dirección general los proyectos correspondientes á cada fábrica, é informados por corporaciones científicas, se remitieran al Ministerio de Hacienda, así como el pliego de condiciones para el contrato, á fin de que, aprobados que fueran, se procediese á subastar el servicio, en pública licitación, por diez años, sirviendo de base al efecto la mejora ó rebaja de los precios que actualmente se satisfacen y disminución de pérdidas por mermas que, según las tarifas, abona la Hacienda.

El Ingeniero de la Dirección general se hizo cargo de los trabajos de su competencia, que, según mis noticias, estarán brevemente en disposición de ser utilizados.

Por este medio, que considero práctico y realizable, alcanzaría beneficios la Hacienda si llegara á plantearlo, á la vez que obtendrían ventajas los consumidores, pues simultáneamente se aumentarían los ingresos, se perfeccionarían las elaboraciones, los surtidos serían abundantes, y aún habría posibilidad de efectuar algunas reducciones en los precios.

Debo ocuparme de otra reforma que es también importante y generalmente reclamada. Me refiero á los empaques de las labores de las fábricas de tabacos. Causas diversas dificultaban la perfección de este servicio, á pesar de las poderosas razones que lo exigían;

entre otras, la facilidad que proporcionaba para la defraudación de la renta.

Reconocida está la conveniencia, la necesidad de que estos empaques, como todas las diversas clases de papel que lleven el timbre del Estado, sean elaborados en un establecimiento oficial y sellados y distribuidos por la Fábrica del Timbre, única manera de garantizar la legitimidad de los productos estancados y evitar las falsificaciones que tanto perjuicio vienen causando al Tesoro. Esta necesidad será atendida cuando quede cumplido lo dispuesto por Real orden de 29 de Diciembre de 1882, de que haré mención al ocuparme de la renta del Timbre. Entre tanto que se realiza, y para dar un paso que creo ha de acreditar la experiencia de acertado, siquiera sólo tenga carácter de transitorio, se ha verificado en el último período de mi administración una subasta en virtud de la cual ha quedado contratado el suministro de los nuevos empaques que han de cubrir los tabacos, en condiciones tales que es de esperar sean apreciadas por el público cuando las conozca y por la Hacienda cuando experimente sus ventajas.

Cúmpleme hacer alguna indicación sobre la trascendental reforma de declarar libre la siembra é industria del tabaco en las Islas Filipinas, en cuanto se relaciona esta medida con la Hacienda pública peninsular; reforma llevada á cabo con general aplauso por el Ministerio de que he tenido la honra de formar parte y debida á la iniciativa del que era dignísimo Ministro de Ultramar, el Sr. D. Fernando de León y Castillo.

Desde que se inició con elevado criterio esta cuestión, consagré á ella detenido estudio, puesto que mi

deber exigía examinarla, no sólo bajo los conceptos que á la Administración ultramarina se referían, sino con el no menos grave é interesante de las consecuencias que la transformación intentada en aquellas apartadas provincias pudiera producir, y aun acaso afectar, á la Hacienda pública, de cuya gestión estaba encargado y cuyos intereses tenía la ineludible obligación de defender.

No debe olvidarse que el tabaco filipino constituye una de las bases y fundamentos más esenciales de las manufacturas del estanco en la Península, pues su representación es tan grande, cuanto que se eleva al 35 por 100 de la rama que se emplea en las labores.

Era, pues, justo y natural que me asaltara el temor de que si la previsión gubernamental no lo evitaba, podría dar lugar la reforma á pérdidas y perturbaciones considerables para el Tesoro, y á la posibilidad de que llegara el caso de tener que alterarse las actuales confecciones, que la tradición y el gusto de los consumidores obligan á conservar, toda vez que, como artículo de libre comercio, podría ocurrir que elevándose sus precios en el mercado, resultara demasiado costosa la adquisición ó tomara distintos rumbos el empleo de esta rama, quedando privada de ella la madre patria en las condiciones y cantidades que hasta entonces había venido realizando.

Habíase celebrado un convenio en el año de 1876 entre los Ministerios de Hacienda y de Ultramar con el fin de hacer el suministro de tabacos filipinos á las fábricas nacionales de la Península, bajo las bases en el mismo establecidas; y el progreso de la renta por el desarrollo del consumo, la disminución del contrabando y el gusto del público, cada día más pronunciado por determinadas clases de labores en que entra como principal componente la hoja de aquella procedencia,

demostraban hacía algún tiempo la conveniencia de reformar en sentido de mayor suministro el expresado convenio; consideración muy importante que era preciso tener en cuenta.

Debía asimismo tenerse presente que á pesar de los esfuerzos hechos por el Ministerio de Ultramar, con un celo digno de elogio, para satisfacer las repetidas excitaciones que al efecto le había dirigido el de Hacienda, la provisión en las fábricas resultaba escasa, obligando á disponer subrogaciones con otros tabacos, cuyo procedimiento estaba por mi parte resuelto á suprimir, porque afecta al consumo, es perjudicial é injustificado tratándose de un suministro de cuyo monopolio está encargada la Administración.

Pues bien; si la cuestión de abastecimiento de esta primera materia había sido difícil, por efecto de circunstancias especiales, no era ilógico presumir que pudieran llegar á ser mayores los obstáculos que surgieran desde el momento en que el interés privado abusara del legítimo derecho que para él naciese de la libertad absoluta del cultivo y venta del tabaco.

Para salvar esta dificultad, puestos de acuerdo los Ministerios de Hacienda y de Ultramar, el Consejo de Ministros aprobó el art. 3.º del Real decreto de 25 de Junio de 1881, que á la letra dice así :

«Con objeto de satisfacer las necesidades de las fábricas de la Península, se establecerá una contribución de tabaco en rama, repartible entre todas las provincias productoras, suficiente á cubrir aquéllas en la cantidad fijada por las leyes de Presupuestos, como subvención, y conforme á las condiciones establecidas actualmente.»

De esta manera tan precisa se determinaba la extensión é índole de la subvención con que debían contribuir al Tesoro de la Metrópoli las Islas Filipinas, y

previsoriamente se salvaban los inconvenientes que un cambio tan radical de sistema podría ofrecer.

Atendibles consideraciones sin duda, y el deseo de satisfacer reclamaciones que no carecían de fundamento, alejando todo motivo ó pretexto de perturbaciones que malograran una reforma no apreciada todavía en la extensión que merece, fué causa de que no prevaleciera la contribución en rama decretada.

Sin embargo, esas circunstancias no eran bastantes, aun reconociendo toda su importancia, para relevar al Ministro de Hacienda de la responsabilidad moral que sobre él pesaba si no dejaba asegurado el derecho de la Hacienda peninsular, salvando toda contingencia de que sufriera perturbación el servicio de la renta del Tabaco y perjuicios el Tesoro de la Metrópoli.

Difícil era ciertamente armonizar unas y otras consideraciones, unos y otros intereses; mas, sin embargo, deseoso por mi parte de contribuir á que así se realizara, estudié detenidamente el asunto, en unión con el Sr. Ministro de Ultramar, quien á su vez se hallaba animado de iguales deseos, y después de razonadas discusiones convinimos en que se obtenía el resultado apetecido, prestando importante servicio, por medio de las disposiciones que contuvo el Real decreto de 2 de Diciembre del mismo año de 1881, y fueron las siguientes :

«Artículo 1.º Queda suprimida la contribución de tabaco en rama á que se refiere el art. 3.º del Real decreto de 25 de Junio último.

»Art. 2.º Se comprenderá en los presupuestos generales de las Islas Filipinas, desde el de 1883-84 inclusive, el crédito necesario para adquirir en subasta pública el tabaco en rama que corresponda remesar á las fábricas de la Península, con arreglo á lo establecido en el art. 3.º del citado Real decreto.

» Art. 3.º Si por circunstancias especiales conviniera, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se destinará este crédito á la adquisición de tabacos similares de los Estados-Unidos ó de las islas de Cuba y Puerto Rico.»

Con estas disposiciones considero que queda debidamente asegurado el suministro de tabaco que como subvención deben hacer las Islas Filipinas; añadiendo que el art. 3.º del expresado Real decreto no ha tenido otro alcance en mi ánimo que la prevision de circunstancias excepcionales que, si hoy no pueden determinarse, acaso pudieran tener lugar algún dia.

En los veinticuatro contratos que mediante subastas públicas se han celebrado durante el período de mi administración para el suministro de primeras materias y artículos necesarios á las fábricas y á los servicios de Rentas Estancadas, se han obtenido ventajosos resultados.

Al fijar los tipos máximos admisibles en las subastas, siempre tuve presente, como es de rigor, los expedientes reservados que al efecto la Dirección general instruyera, los datos oficiales suministrados por los cónsules de España y otras autorizadas personas en los puntos de producción, así como las cotizaciones de los mercados y demás noticias oportunas; y de los tipos que resultaban como consecuencia del conjunto de estos datos, hice todavía rebajas al fijar los que habían de tenerse en cuenta en las subastas, cuyas rebajas, comparando el importe de los servicios á los precios que resultaban de aquellos datos y noticias con el señalado por mí, ascienden á la suma de 1.663.000 pesetas.

No obstante esta reducción, se obtuvo por resultado

de los precios de la subasta la economía de 12.750.109 pesetas sobre los que respectivamente sirvieron de límite.

Las comparaciones expresadas son en realidad las únicas que lógica y razonablemente pueden hacerse, puesto que la parificación de contrato con contrato de un mismo artículo ó concepto verificados en diversas circunstancias y condiciones distintas no es procedente, por la influencia que aquéllas forzosamente ejercen.

Y sin embargo de esto, la comparación con iguales contratos anteriores aun presenta una economía de 4.100.000 pesetas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.º de la ley de 31 de Diciembre de 1881, se rebajaron cinco céntimos respectivamente en cada uno de los cigarros denominados *conchas y regalías peninsulares*, y también dejé en proyecto otra pequeña reducción en los cigarros suaves. Más puede hacerse, y más se hará sin duda en este sentido, si estudiándose las conveniencias de la Hacienda y del consumo público se establecen nuevas labores, con especialidad para uso de las clases menos acomodadas de la sociedad y para la exportación, lo cual puede, en mi juicio, verificarse en buenas condiciones si se aumentan, perfeccionan y abaratan los medios de producción.

Mi digno sucesor prestará, estoy seguro de ello, la misma atención y cuidado que yo he venido prestando al fomento de esta valiosa renta, y su reconocida ilustración y celo obtendrán resultados superiores á los por mí alcanzados, de lo cual me felicito sinceramente desde ahora.

Para dar término á la exposición de cuanto consi-

dero oportuno manifestar acerca de la renta de Tabacos, presentaré el cuadro de los rendimientos que ha ofrecido desde el ejercicio de 1876-77 hasta el corriente, pues él por sí solo evidencia con qué interés debe atender la Administración á este rico manantial de ingresos para el Tesoro.

Año de 1876-77.	91.810.613,82
» 1877-78.	97.589.109,85
» 1878-79.	102.515.129,03
» 1879-80.	106.625.828,37
» 1880-81.	114.711.289,56
Primer semestre de 1881-82.	58.929.476,01
Segundo semestre de 1881-82.	60.792.461,20
	119.721.937,21

Como se ve, el aumento es progresivo, y hay fundada confianza de que en el actual ejercicio de 1882-83 los ingresos que esta renta produzca, si no llegan á 125 millones de pesetas, se aproximarán mucho.

II.

TIMBRE DEL ESTADO.

La índole diversa de los elementos contributivos que constituyen la renta del Timbre del Estado presentan notoria dificultad para llevar á la ley la equidad debida á que con recto criterio aspira siempre la Administración, deseosa de evitar fundadas reclamaciones.

Á la vez que éstas venían produciéndose desde la publicación del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, los rendimientos de la renta no alcanzaban la cifra correspondiente á su importancia; y en vista de ello y de la conveniencia de introducir algunas modificaciones aconsejadas por la experiencia, entre las que ocupaban preferente lugar la rebaja en los precios del porte de la correspondencia, la de uniformar y

suavizar las tarifas y la de hacer desaparecer el impuesto de guerra, me decidí á la reforma de esta renta.

Dos medios había de realizarlo: el de dictar nuevas disposiciones que vinieran á aumentar el número de las existentes, y formaban ya un conjunto complicado y contradictorio, difícil de conocer, así para los contribuyentes como para los mismos funcionarios encargados de aplicarlas, ó redactar un proyecto de ley en el que, armonizando todos sus preceptos con las consideraciones expresadas, estuvieran consignados de una manera clara y explícita los deberes y los derechos respectivos de la Hacienda y de los contribuyentes.

La opción no era dudosa: lo segundo tenía incuestionables ventajas sobre lo primero, y opté por ello, formulando el respectivo proyecto de ley para someterlo á la deliberación de las Cortes.

La tarea no era fácil, pero, sin embargo, la acometí, persuadido de que en la nueva legislación podría darse un paso muy avanzado en el camino de la justicia y en beneficio del Tesoro, y que los defectos que se advirtieran en la práctica se corregirían sin obstáculo, llegándose á la perfección por todos deseada.

En justificación del carácter provisional que creí oportuno dar á la ley y que ha sido censurado, debo decir que existiendo, á mi juicio, como he indicado, gran dificultad para determinar principios absolutos, reglas generales y proporcionalidad justa y uniforme en un ramo que abraza muchos y varios actos de la vida social, lo prudente era que quedase expedida la acción administrativa, siquiera por un tiempo limitado, á fin de aclarar y determinar en definitiva lo que la razón y la experiencia aconsejasen.

La ley de 31 de Diciembre de 1881 vino, pues, á satisfacer una necesidad, ampliando la reforma lle-

vada á efecto por Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, importante en verdad, y mejora positiva; pero que el transcurso de los años, las alteraciones que han sufrido los procedimientos en distintos ramos y la extensión que han tomado los negocios mercantiles la hacían irregular y deficiente.

La nueva ley y el reglamento especial para llevarla á efecto, á que han de sujetarse los Inspectores del Timbre, dictado en 3 de Mayo de 1881, y las ciento setenta y nueve consultas sobre dudas suscitadas, resueltas en el sentido que la misma ley y la equidad permitían, vienen á demostrar la preferente atención que al asunto he consagrado y la regularidad que he procurado introducir en este servicio.

Se ha facilitado además por este medio el que con los elementos reunidos y los que se alleguen aún, pueda el Ministro de Hacienda someter al examen de las Cortes, en condiciones de acierto, un proyecto definitivo, con arreglo á lo que previene el art. 2.º de la expresada ley, á fin de que, constituyéndose en esta materia una situación permanente, desaparezca todo motivo de queja por injusticia ó desigualdad y facilite al Tesoro los recursos que por este concepto debe percibir.

Es de tener presente, sin embargo, que al perfeccionarse la legislación vigente estableciendo lo oportuno para que desaparezca todo motivo de justa queja, y aun satisfaciendo en ella, con detrimento de los intereses de la Hacienda, si esto fuera posible, las más exageradas pretensiones, todavía se seguirían advirtiendo los efectos de la costumbre, por desgracia generalizada, de faltar á los preceptos de la ley, no teniendo ésta otra garantía que la fiscalización, cuyo planteamiento en buenas condiciones es por demás difícil de conseguir.

Deseando facilitar los medios para que todos los tributantes por este concepto se colocaran en condiciones legales, evitando, en cuanto el derecho permitía, la imposición de las penalidades en que hubieran incurrido por ignorancia ó negligencia, fué expedido el Real decreto de 11 de Mayo de 1882, verdadero indulto de las faltas cometidas en el empleo del timbre, el cual, otorgando un beneficio positivo á los infractores, permitía que al comenzar á regir la nueva ley desaparecieran los motivos de queja que se alegaban y se evitaran las molestias que la investigación pudiera ocasionar á los que hubieran contraído responsabilidades.

Muchos se acogieron á tan beneficiosa resolución; pero es de presumir que algunos defraudadores permanecieran en un censurable abandono, confiando acaso en la ineficacia de la fiscalización, y á reserva de levantar ruidosas protestas cuando experimentasen las consecuencias de su proceder y de calificar á aquella de atentatoria de los derechos y garantías de los ciudadanos, sin tener en cuenta que ellos dejaron de cumplir sus deberes.

No se limitan á estos perjuicios los que el Tesoro experimenta en la renta del Timbre; hay otro, de extensión incalculable, que es de absoluta necesidad evitar: me refiero á las falsificaciones.

Con los elementos existentes y por los procedimientos seguidos en la elaboración de todos los efectos timbrados, no es posible que el signo del Estado en las diferentes manifestaciones que el impuesto abarca ofrezca garantías de seguridad, y por otra parte, la reforma que no sea fundamental, variando por completo las condiciones de aquellos productos, ha de ser necesariamente ineficaz para garantizar los derechos de la Hacienda.

Fué opinión unánime de todas las personas llamadas á entender en este asunto, que debía procederse á cambiar el actual sistema de elaboración de los efectos timbrados por otro de mayor perfección, con grabados artísticos de mérito, estampaciones delicadas, tintas especiales, y al mismo tiempo emplear para todos los documentos que en una ú otra forma lleven el sello del Estado, clases de papel que ofrezcan seguridad y garantía.

Para lograr lo primero, la Administración tenía el camino expedito, pudiendo allegar cuantos elementos fuesen necesarios; lo segundo ofrecía la imposibilidad de adquirir la masa de papel destinada á las distintas elaboraciones con los requisitos que debían exigirse, no existiendo otro medio para conseguirlo que centralizar en una fábrica única, y exclusivamente vigilada ó dirigida por la Hacienda, la confección de todas las clases de papel que reclamase el servicio de las rentas estancadas, y que todo el que se emplease en el mismo, llevando dicho signo del Estado, fuese estampado, contraseñado, distribuido y en realidad administrado por la Fábrica Nacional del Timbre.

Esta era también la opinión unánime de antiguo, así de los Centros oficiales, como de los Cuerpos consultivos y de las personas competentes en la materia.

Pero si existía conformidad de opiniones en este punto, los pareceres discrepaban, y aun eran contradictorios, sobre la manera de realizar la reforma, pues mientras unos sostenían que la Administración por sí y por su exclusiva cuenta debía levantar y explotar una fábrica de papel capaz de atender al suministro, otros creían mejor procedimiento el entregar este servicio á la industria é interés privado, en determinadas condiciones. Tal divergencia hubo de dar lugar á la duda para resolver, ante el temor de ocasionar

grandes desembolsos que por cualquiera circunstancia imprevista resultasen inútiles, por más que fueran reproductivos, dado que el éxito pudiera corresponder al intento, ó que la Hacienda se ligara por un largo período que constituyera en realidad una concesión de monopolio á favor de aquel con quien se contratase el servicio, dejando imposibilitada la acción administrativa para utilizar otros procedimientos que en el transcurso del tiempo la conveniencia aconsejase.

Este estado de cosas no debía continuar, y falta hubiera sido en mí prolongarlo. Ordené, pues, que una Comisión muy caracterizada estudiase con toda urgencia la cuestión, y previo el examen de todos los antecedentes, propusiera lo que estimase más oportuno y realizable.

El informe que emitió permitía formar juicio exacto sobre lo que procedía hacer, y en su consecuencia se dispuso por Real orden de 29 de Diciembre de 1882:

1.º Que se llevara á efecto por medio de subasta pública, con arreglo á las disposiciones vigentes, la construcción en el término municipal de esta corte, en la zona que alcancen las aguas de las nuevas acequias de riego, y situada de manera que tenga fáciles las vías de comunicación, de una fábrica para papel especial, con ricas filigranas sombreadas ó por claro, según la naturaleza y condiciones del producto, pero teniendo unas y otras marcas y contraseñas reservadas, cuya fábrica se dedicara exclusivamente á las elaboraciones del papel que las rentas necesiten, y capaz de fabricar en doce horas de trabajo diario todo el que como máximo pueda calcularse prudencialmente requieran las rentas del Timbre, Tabacos y Loterías.

2.º Que para realizar lo anteriormente indicado dispusiera la Dirección general que el ingeniero indus-

trial de la misma redactase y formulase desde luego un proyecto completo, con su memoria, planos, presupuesto y pliego de condiciones facultativas de la precipitada fábrica, con arreglo y sujeción al programa que adoptara dicho Centro directivo, estipulándose en el referido pliego de condiciones que el pago de los honorarios y gastos causados en la formación del proyecto, memoria, presupuestos, planos y demás que debieran satisfacerse al mencionado ingeniero, serían de cuenta del contratista á cuyo favor se adjudicara le servicio de construcción de la fábrica.

3.º Que una vez presentado por el referido ingeniero el proyecto correspondiente, se sometiese al examen de las corporaciones competentes que procediera.

4.º Que en el caso, y una vez que fuera informado favorablemente por las expresadas corporaciones el antedicho proyecto, se redactase por la Dirección general el pliego de condiciones á que hubiere de sujetarse la construcción de la fábrica y el suministro de las clases de papel que en el período de los cuatro primeros años necesitasen las rentas estancadas, cuyo pliego habría de sujetarse á las bases generales propuestas por la Comisión creada por Real orden de 6 de Octubre de 1882, en su informe de 29 de Noviembre siguiente, sometiéndose después á la aprobación del Ministerio de Hacienda el proyecto y pliego de condiciones, á fin de que, una vez aquélla obtenida, se procediese á contratar el servicio en pública licitación.

5.º Que se incluyesen en los próximos presupuestos y en los sucesivos, hasta tanto que fuere preciso, la cantidad proporcional necesaria para la construcción de la fábrica de que se trata.

Y 6.º Que la Dirección general estudiara y propu-

siera en expediente separado los medios que estimase necesarios y convenientes para que la Fábrica Nacional del Timbre pudiese verificar todos los servicios que las rentas necesiten, en las condiciones de bondad y trabajo que indicó la Comisión antes mencionada en su base décima.

Abrigo la seguridad de que realizándose las medidas que quedan expresadas, llegará á cortarse la serie nunca interrumpida de las falsificaciones, que por la facilidad de expender los efectos falsificados, obteniendo crecido lucro, excitan un interés criminal, con grave perjuicio de la Hacienda.

Los resultados que ha ofrecido esta renta desde el ejercicio de 1876-77 al presente, es el que sigue :

Año de 1876-77.	36.061.703,94
» 1877-78.	38.953.959,97
» 1878-79.	41.833.879,02
» 1879-80.	41.181.497,82
» 1880-81.	42.702.158,94
Primer semestre de 1881-82.	24.978.964,20
Segundo semestre de 1881-82.	20.784.282,28
	45.763.246,48

Aunque el resultado del año de 1881-82 es satisfactorio en el conjunto de los dos semestres que constituyeron ejercicios distintos, no así si se examina el segundo de ellos solamente, pues habiéndose recaudado pesetas 20.784.282,28, que corresponderían al año á 41.568.564,56, presenta una baja de 1.133.594,38 en su comparación con el ejercicio de 1880-81.

Esta baja en el semestre en que empezó á plantearse la reforma, tiene su natural explicación, no sólo en las repetidas y diferentes falsificaciones descubiertas, sino también en la reducción realizada en el precio de franqueo de la correspondencia. Con efecto, aun cuando acerca de esta última causa no es posible determinar con absoluta fijeza el resultado de la refor-

ma, en atención á no haberse publicado todavía la estadística del movimiento de la correspondencia en el año de 1882, sin embargo, por datos particulares adquiridos en fuentes que deben merecerme entero crédito, estimo que la baja producida en la renta por el menor coste del franqueo ascenderá á pesetas 2.311.297, puesto que en 1881 se inutilizaron sellos por 25.154.154 pesetas, y en 1882 por 22.842.857. En cambio la circulación tuvo un incremento considerable, toda vez que en 1881 el número de sellos inutilizados se elevó á 103.382.941 y en 1882 á 136.568.880, presentando, por tanto, un aumento de 33.186.949. Y como es de esperar que este aumento continúe, llegará en breve á obtenerse el mismo producto que antes se obtenía. Aunque así no fuese, la reforma sería aplaudida por todos, pues que se trata no tanto de una renta como de un servicio, y ampliando éste, la Administración realiza un bien que favorece á todos los españoles.

III.

LOTERÍAS.

Los hombres de Administración venían reconociendo la necesidad de suprimir las rifas de carácter permanente, que notoriamente perjudicaban, y en gran escala, los resultados de esta renta. El asunto se hallaba ilustrado para formar juicio exacto; el expediente instruido ofrecía demostración completa, y sólo eran necesarias la voluntad y la decisión para resolverla.

La experiencia acreditaba que, ó llegaría en término breve una notable reducción en los productos de la renta, muy superior á la que se venía sintiendo, ó era preciso que desaparecieran las rifas de carácter permanente.

Lo primero hubiera sido perjudicial para la Administración, que ha necesitado y necesita este recurso, que lo es de verdadera importancia; lo segundo ofrecía dificultades, por ser necesario atender á consideraciones de índole y naturaleza diversas.

Pero es el caso que aunque estas consideraciones se hallaban en el ánimo de todos y que se tocaban los notorios perjuicios que la inacción ocasionaba, la cosas permanecían en el mismo estado.

Desde que se publicó la ley de Presupuestos de 11 de Julio de 1877, que autorizó las rifas de premios en metálico para atenciones de beneficencia y utilidad pública, fueron muchas las corporaciones que se aprovecharon de aquella autorización; y poco tiempo después comenzaron á sentirse sus efectos, disminuyendo el progresivo aumento que venía observándose desde 1873-74 en los valores de la renta.

Fueron éstos decreciendo gradualmente, pronunciándose resueltamente el descenso en 1879-80, y esta baja se acentuó de tal manera, que en alguno de los meses de 1881 figuraba aproximadamente por 600.000 pesetas, sin esperanza de compensación, pues de día en día se aumentaban las rifas, inspirando el fundado temor de que anulasen la Lotería nacional, toda vez que en aquéllas se había adoptado la forma de ésta en los prospectos y en los billetes, que se adaptaban, por sus precios, á la posibilidad de las clases menos acomodadas de la sociedad.

Era, pues, indispensable proceder con resolución, si bien inspirándose en la mayor equidad posible, á poner término á semejante estado de cosas, pues la necesidad de aumentar los recursos ordinarios lo reclamaba.

Mi decisión, tomada después de detenido examen, se tradujo en el proyecto que tuve la honra de presen-

tar á las Cortes en 24 de Octubre de 1881 y que se elevó á ley en 31 de Diciembre del mismo año. Por ella se suprimieron las rifas de carácter permanente, subvencionando á las corporaciones de Beneficencia que estaban autorizadas para verificarlas con la cantidad anual de 1.339.000 pesetas, equivalentes á los productos líquidos que obtuvieron en el año natural de 1879, que había servido de base para conocer sus ingresos y gastos, cuya cantidad se amplió hasta pesetas 1.363.000, concediendo por Real orden de 4 de Febrero de 1882, y á virtud de lo dispuesto por el art. 3.º de dicha ley, una subvención de 8.000 pesetas á cada uno de los establecimientos de Pobres de Nuestra Señora del Consuelo de Ciempozuelos, Asilo de Sirvientas de Madrid y Asilo de Nuestra Señora de la Asunción, también de Madrid.

Realmente se establecía un gravamen importante sobre los productos de la renta; pero teniendo en cuenta consideraciones estimables de que el Gobierno de S. M. no debía prescindir, ni las Cortes prescindieron, el medio adoptado conciliaba todos los intereses y no hacía ilusorio el derecho que pudiera considerarse adquirido.

Después de todo, los resultados han demostrado la bondad de la medida, y la prueba de ello la ofrece la siguiente comparación de los ingresos obtenidos por la renta en los meses de Enero á Diciembre de 1882 con los que se realizaron en iguales meses de 1881 :

	RECAUDACION OBTENIDA.		DIFERENCIAS EN 1882.	
	En 1882.	En 1881.	De más.	De ménos.
Enero. . . .	3.816.931	3.490.345 »	326.586 »	»
Febrero. . .	2.691.812	1.905.386 »	786.426 »	»
Marzo. . . .	3.874.200	2.991.741 »	882.459 »	»
Abril.	5.037.092	4.053.101 »	983.991 »	»
Mayo.	4.101.902	2.968.514 »	1.133.388 »	»
Junio.	5.105.314	3.768.552 »	1.336.762 »	»
	<u>24.627.251</u>	<u>19.177.639 »</u>	<u>5.449.612 »</u>	<u>»</u>
Julio.	4.029.500	2.646.012 »	1.383.488 »	»
Agosto. . . .	4.048.468	2.625.140 »	1.423.328 »	»
Setiembre. . .	4.024.709	2.648.796 »	1.375.913 »	»
Octubre. . . .	5.224.593	3.926.028 »	1.298.565 »	»
Noviembre..	4.320.641	2.746.573,86	1.574.067,14	»
Diciembre. . .	27.356.884	22.191.158,84	5.165.725,16	»
	<u>73.632.046</u>	<u>55.961.347,70</u>	<u>17.670.698,30</u>	<u>»</u>

25 por 100 del aumento. *Ptas.* 4.417.674,58

Corresponden á los establecimientos y
Corporaciones que ántes celebraban
rifas, por la indemnización de los doce
meses. » 1.339.000 »

Resulta, por tanto, un beneficio al
Estado de. » 3.078.674,58

LIBRARY
OF THE
BANK OF SPAIN

Manuscript text, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side. The text appears to be organized into several paragraphs or sections, with some lines underlined. The handwriting is cursive and typical of the 18th or 19th century.

ORGANIZACIÓN

DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA PROVINCIAL.

Dada la necesidad de la reforma en el sistema tributario, y proyectada con la extensión que aparece de lo que queda expuesto, se imponía de un modo absoluto la de la organización económica provincial, pues si bien la que existía significaba una tendencia plausible, no alcanzaba, sin embargo, á mi juicio, el grado de unidad, independencia y autoridad bastantes para llenar su cometido, siempre importante, pero más aún en momentos de reforma, en los cuales las dificultades se aglomeran y el Ministro del ramo ha menester de autoridades que dependan exclusiva y directamente de él, porque sólo en este caso le es posible dar al planteamiento de aquélla el necesario impulso para conseguir en breve plazo la realización de sus propósitos.

Al organizarse en 1845 el sistema tributario, quedó establecido que los Intendentes y los Administradores fueran los encargados en las provincias de la gestión de todo lo relativo á la Hacienda, organización que respondía á las necesidades del momento, y, en

mi opinión, debió subsistir, porque mejorándose de día en día, hubiera evitado tener que lamentar períodos de retroceso para la Hacienda, en los que, supuesto el interés económico al político, quizás contra los deseos de los Gobiernos, la administración económica carecía de independencia y el Ministerio de Hacienda se hallaba á veces sin fuerza bastante para imprimir movimiento á la marcha administrativa.

Con el objeto, sin duda, de obtener la unidad de la representación ministerial y del ejercicio de la autoridad delegada, se suprimieron en 1849 los Intendentes, encomendándose toda la autoridad en el orden económico á los Gobernadores civiles, sin tener en cuenta que si los Departamentos ministeriales necesitan independencia para funcionar con desembarazo, también la necesitan sus respectivos delegados en las provincias, sobre todo en el ramo de Hacienda, y más aún en tanto que las corporaciones provinciales y municipales no solamente ejerzan autoridad delegada en la esfera económica, sino que tengan al mismo tiempo el carácter de contribuyentes.

La reforma de 1849 produjo los efectos correspondientes. Los Gobernadores, jefes superiores de todas las corporaciones populares, encargados de hacer que éstas cumpliesen sus deberes, á la vez que de defender sus intereses, los cuales podían ponerse en circunstancias determinadas en cierta oposición con los de la Hacienda, se hallaban colocados en una situación difícil, y el Ministro del ramo, como no podía ejercer sobre sus delegados, que no dependían de él exclusivamente, toda la autoridad precisa, se veía á veces contrariado en el desarrollo de sus planes.

Y no eran éstos los únicos efectos que producía aquella organización. Por sensible que sea confesarlo, es lo cierto que en determinadas épocas la Hacienda

estaba supeditada por la Política, y los vaivenes de ésta y sus exageraciones influían de tal suerte en la marcha de aquélla, que si la una se entregaba al predominio de determinadas personalidades, lo propio ocurría respecto á la otra, con perjuicio del Tesoro y de los contribuyentes, víctimas en muchos casos de las pasiones de partido y aun de influencias é intereses predominantes en las provincias y las localidades.

Grande fué, en verdad, el paso que se dió en 1869 al crearse las Administraciones Económicas; pero ya por las dificultades que la transición ocasionaba, ya por la situación del Tesoro, no se dió toda la independencia necesaria á las autoridades que se crearon, ni se les concedió toda la fuerza y prestigio indispensables para que la reforma, utilísima en el fondo, diera los resultados que su ilustre iniciador se propusiera.

Entrañaba ésta, además, una dificultad casi insuperable. Investiase de la autoridad al mismo funcionario á quien se encomendaba la administración, y era materialmente imposible que una sola persona desempeñara ambos cometidos, de lo que se seguía que la administración de los diferentes ramos estaba en realidad confiada á empleados de las últimas categorías, faltos de respetabilidad, que es necesario tenga todo aquel que administra la fortuna pública. Por otra parte, diéronse tales atribuciones y se encomendaron tantos trabajos á las Intervenciones, que más que fiscales eran oficinas administradoras, resultando de todo esto que no existía la administración y, á veces, faltaba la intervención, pues en tanto que la oficina encargada de este servicio administraba, no podía intervenir sus propios actos. De esta confusión en la provincia se originaba inevitablemente la anulación de los Centros directivos, que carecían de autoridad

bastante sobre los Jefes Económicos, dependientes directamente del Ministerio, y ni aun podían conocer con exactitud la marcha de la gestión con respecto á los tributos, rentas y derechos que administraban, sobre todo en su realización, porque la parte administrativa, es decir, la que debfa serlo en la provincia, no llevaba la contabilidad auxiliar en los distintos ramos, y por lo tanto, no podía facilitar al Centro respectivo, sino en contados casos, los datos necesarios.

Consideré, pues, indispensable la reforma, y trazado ya el camino por la de 1869, no había sino seguirlo con decisión ; pero para que aquella diera resultados era preciso separar las funciones administrativas de las interventoras ; que la Administración liquidara y realizara, y la Intervención fiscalizase. De esta suerte, sin confusión de atribuciones, con la independencia necesaria en los Jefes provinciales, se obtendría la armonía necesaria para la buena marcha de la gestión económico-administrativa, y garantías de acierto en el desempeño de las funciones respectivas á cada uno.

Lo más útil era, sin duda, crear una verdadera autoridad en el orden económico, con facultades bastantes y el prestigio necesario para que no resultase un simulacro de autoridad. Así como en la Administración central los Directores administran sus respectivos ramos, la Intervención general fiscaliza y el Ministro dirige á todos, en la provincia los Administradores deben administrar, la Intervención fiscalizar y el Delegado dirigir ; porque de la misma manera que el Ministro no puede descender á los detalles y minuciosidades diarias de la administración, incumbencia que corresponde á los Directores, así los Delegados no pueden abarcar todos los pormenores, á los cuales deben atender los Administradores. De este modo, la unidad de los Centros, resumida en el Ministro,

existirá en cada provincia resumida en el Delegado, y asimismo las Administraciones dependen de los respectivos Centros, las Intervenciones de la Intervención general y los Delegados del Ministro, y todos ejercen la superioridad jerárquica con la independencia necesaria y bajo la responsabilidad debida, sin temor á rozamientos que tanto perjudican á la buena marcha de la Administración.

En la necesidad de crear esas autoridades, era preciso darles todo el prestigio necesario y la importancia debida; y sabido es que, al menos en España, la importancia la da la categoría y la fuerza las atribuciones. De aquí la elevación de los sueldos para los Delegados y el convertirles en las únicas autoridades del orden económico en las provincias, pues que haber dejado algunas atribuciones á otros funcionarios hubiera sido tanto como dejar el germen constante de competencias que tanto lastiman el buen nombre de la Administración. Por este medio se separa, cuanto es posible, la Administración de la Política, que si no deben ser antagónicas, no pueden estar antepuesta la una á la otra, sino marchar en perfecta armonía.

Ejemplos que saltan á la vista, son una prueba irrecusable de que los pueblos modernos dan hoy á las cuestiones financieras en general, á sus presupuestos y á su Hacienda una primordial importancia, hasta el punto de que los grandes intereses de la producción no se preocupan de la Política, en algunos países, sino en el momento en que puede traer graves perturbaciones á las fuentes de la riqueza pública; y en otras naciones poderosas, su política internacional es, ante todo, la protectora y la propagadora de sus intereses económicos, traduciéndose ahora en todas partes el poderío de los Estados por la fuerza de su organización financiera y los recursos de sus elementos económicos, á

cuyo progreso y más decidida garantía han de prestar eficaz apoyo el orden político y el administrativo, en su concepto más esencial. Y si por do quiera esto es verdad, entre nosotros existen además razones peculiares para que se procure hacer cosa completamente separada el régimen de la Hacienda de las influencias políticas, porque así se conseguirá, y no de otro modo, que el interés de la Nación se sobreponga á otros intereses particulares, que á veces se ocultan bajo el manto de cuestiones que suelen malamente recibir la calificación de políticas. Vivimos, por fortuna, en un régimen en el cual la Política, en su significación más grande y más amplia, es verdaderamente la vida del País, que merced á nuestras instituciones toma directamente una parte muy considerable en su propio gobierno; pero la índole de nuestras instituciones da precisamente un lugar muy preferente en este mecanismo á los asuntos de la Hacienda nacional, y nuestras leyes constitucionales son de ello un testimonio solemne y elocuente.

Firme mi ánimo en esos principios, y seguro de que manteniéndolos con la debida entereza prestaba un servicio á mi país, no hice un solo nombramiento de Delegado respondiendo á tendencias ó exigencias políticas, y mantuve á algunos en sus respectivos puestos, no obstante que contrariaba otros propósitos, por la seguridad que tenía de la rectitud é imparcialidad del funcionario.

No ha faltado quien creyese que esta reforma sería irrealizable porque produciría una constante lucha entre los Gobernadores y los Delegados; pero no ha acontecido así, ni aún en los momentos de su implantación, que eran, á no dudar, los más difíciles. La inteligencia y tacto distinguidos de mi digno compañero el Sr. D. Venancio González, Ministro de la

Gobernación, por una parte, y de otra mis reiteradas recomendaciones para que los Delegados no se equivocasen, con menoscabo de la autoridad que se les concedía, ni la exagerasen con detrimento de la consideración personal debida al Jefe superior de la provincia, vinieron á demostrar que la armonía era posible; y abrigo la seguridad de que si, como es de suponer, la reforma subsiste, en día no lejano se tocarán las ventajas de la creación de las Delegaciones, y hasta los mismos que la han impugnado la utilizarán, mejorándola, porque no tengo la pretensión de haber hecho una obra perfecta, si bien abrigo la creencia de haber puesto los cimientos para la organización económico-administrativa del porvenir.

La nueva organización de la Administración económica provincial ha contribuido poderosamente al aumento de la recaudación, según lo acreditan los siguientes estados:

	De 1880.	De 1881.	DIFERENCIAS EN 1881.	
			De más.	De menos.
Febrero.	79.344.542,80	76.659.281,10	»	2.685.261,70
Marzo.	51.792.667,82	56.226.721,18	4.434.053,36	»
Abril.	49.008.197,95	50.931.551,99	1.923.354,04	»
Mayo.	78.933.475,91	85.237.120,85	6.303.644,94	»
Junio.	53.041.778,74	51.034.796,39	»	2.006.982,35
Julio.	48.919.950,47	49.397.245,22	477.294,75	»
Agosto.	63.134.583,96	66.602.057,61	3.467.473,65	»
Setiembre. . . .	66.100.343,18	67.212.349,10	1.112.005,92	»
Octubre.	57.633.777,10	57.425.876,24	»	207.900,86
Noviembre. . . .	88.288.419,17	93.649.156,18	5.360.737,01	»
Diciembre. . . .	75.550.160,56	83.967.249,24	8.417.088,68	»
	<u>711.747.897,66</u>	<u>738.343.405,10</u>	<u>31.495.652,35</u>	<u>4.900.144,91</u>

Más recaudación desde Febrero á Diciembre de 1881. . . *Plas.* 26.595.507,44

		DIFERENCIAS EN 1882.	
	De 1880.	De 1882.	
			De más. De menos.
Enero.	48.511.624,30	49.182.718,43	671.094,13 »
Febrero.	79.344.542,80	70.183.242,98	» 9.161.299,82
Marzo.	51.792.667,82	68.708.757,99	16.916.090,17 »
Abril.	49.008.197,95	51.185.535,45	2.177.337,50 »
Mayo.	78.933.475,91	81.853.082,42	2.919.606,51 »
Junio.	53.041.778,74	57.813.404,71	4.771.625,97 »
Julio.	48.919.950,47	56.022.595,46	7.102.644,99 »
Agosto.	63.134.583,96	57.303.116,77	» 5.831.467,19
Setiembre.	66.100.343,18	80.526.293,73	14.425.950,55 »
Octubre.	57.633.777,10	66.085.641,52	8.451.864,42 »
Noviembre.	88.288.419,17	94.543.477,32	6.255.058,15 »
Diciembre.	75.550.160,56	88.135.055,03	12.584.894,47 »
	760.259.521,96	821.542.921,81	76.276.166,86 14.992.767,01

Más recaudación desde Enero á Diciembre de 1882. *Ptas.* 61.283.399,85

Los cuadros precedentes demuestran el celo que la Administración tuvo aun antes de plantearse la reforma, pues comparado el importe de la recaudación obtenida en los meses de Febrero á Diciembre de 1881 con la alcanzada en iguales períodos de 1880, resulta un aumento de pesetas 26.595.507,44; y desde Enero á Diciembre de 1882, hecha la misma comparación con el año de 1880, el aumento acreció hasta la suma de 61.283.399,85 pesetas.

Datos son éstos que no dejan de tener su importancia, atendido á que la recaudación por atrasos es cada año más escasa; y por otra parte justifican, no sólo la nueva organización, sino también el acrecentamiento de gastos que por razón de los sueldos de algunos funcionarios haya ocasionado.

PROCEDIMIENTO

EN LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS.

La confusión que existía en cuanto se relacionaba con el procedimiento; la infinita variedad de reglas para la tramitación de las cuestiones cuasi contenciosas; la dificultad de conocerlas todas, puesto que respecto á cada caso eran distintas; las corruptelas que á la sombra de esta confusión se habían introducido, sobre todo en orden al recibimiento á prueba, trámite que apenas si existía en algunos expedientes, y en otros de idéntica índole duraba años y años; la desigualdad, en fin, que por lo referente á las instancias resultaba desde el momento que para unos casos había cuatro en la vía gubernativa y aun se daba la contencioso-administrativa, como sucedía en lo relativo á Derechos reales, y en otros solamente existían dos en la gubernativa y no se daba la vía contenciosa, como sucedía en Aduanas, hicieron que fijase mi atención en este asunto, importante cual ninguno, toda vez que se trataba de la ley de garantía; pues de poco sirve que exista el derecho si no se concede medio fácil y seguro de obtener su respeto.

La obra no era sencilla, en verdad : había que luchar con los abusos introducidos por la práctica ; era punto menos que imposible cambiar de pronto el sistema, y más difícil aún someter al nuevo la multitud de reclamaciones pendientes ; pero dificultades de esta índole son para vencidas, no para temidas, y atendiendo á que en cualquiera ocasión existirían las mismas, me decidí á proyectar la reforma, no con la esperanza de que desde el primer momento se cortarían los abusos, aunque sí en la seguridad de que andando el tiempo se normalizaría la tramitación de todas las reclamaciones de derecho intentadas por los particulares ante la Administración.

Empezando por no dar efecto retroactivo á la ley, dejando que los expedientes en curso siguieran el procedimiento gubernativo según las reglas anteriormente establecidas, á menos que, hallándose en estado en que fácilmente pudieran ser sometidos á la nueva ley, el interesado lo solicitase y la Administración accediese á ello, me propuse realizar cuatro fines principales : primero, que las instancias fueran las mismas para todos ; segundo, que se ampliaran los medios de defensa ; tercero, establecer plazos para resolver ; y cuarto, conceder la vía contenciosa contra todas las providencias que en el orden económico se dictaran respecto á reclamaciones de derecho.

La diversidad de instancias era tal, como antes he indicado, que al mismo tiempo que unas reclamaciones contaban con cuatro, dos en la Administración provincial y dos en la central, otras no tenían sino dos, la primera en aquélla y la segunda en ésta, y á veces la segunda no pasaba del Centro directivo, que no podía contar con el auxilio de los conocimientos de los Cuerpos de más respetabilidad en la Administración ; siendo además de advertir que mientras en

aquellos casos aun se daba la vía contenciosa, en éstos era firme la resolución del Centro. Para evitar tales desigualdades se estableció la uniformidad de las dos instancias : la primera en la provincia ; la segunda ante el Ministerio ; suprimiendo la segunda instancia ante los Centros, porque al ser éstos llamados á informar en las alzas ante el Ministerio, natural era que apoyasen, por regla general, las resoluciones suyas de que se apelara.

Con arreglo á los procedimientos anteriores, ocurría que, formulada una reclamación, el interesado llegaba á verla resuelta, sobre todo en primera instancia, sin que hubiera tenido nueva entrada en el expediente, sin que le hubiese sido pedida prueba, al par que otros no salían jamás de este trámite, y siempre contaban los recurrentes con facilidades para aducir nuevos documentos, con más medios probatorios, ya para fortalecer su pretensión, ya para buscar las dilaciones que les convinieran. No tan sólo acontecía esto, sino que se admitían cuantas reclamaciones se presentasen, aunque el que lo hiciera no fuera el interesado ni acreditase su representación, dilatándose unas veces de este modo medidas administrativas de interés para el Tesoro, y entorpeciendo otras la marcha normal de la Administración. Era preciso que para lo sucesivo se corrigiese tal abuso, y al efecto propuse, y fué aprobado, que toda reclamación de parte se presentase por el interesado ó persona legalmente autorizada ; que á la pretensión acompañase la prueba documental ; y que después que la Administración uniera al expediente los documentos que estimara oportuno, se pusiera éste de manifiesto al interesado, con objeto de que viese si le convenía ó no mantener su reclamación : de esta manera se le colocaba en iguales condiciones que la Administración, y

la especie de contienda sostenida entre ésta y el particular se llevaba, hasta donde es posible, en términos de igualdad, ya que no sea dable realizarlo en absoluto por la especialidad de este procedimiento, en el que ha de resolver una de las partes contendientes.

No era menos importante y urgente poner coto á los abusos que se originaban de no haber disposiciones que fijaran plazos dentro de los cuales habían de tramitarse y resolverse los expedientes, cuya terminación, al comenzarse, no se podía prever, lo que, no favoreciendo al buen nombre de la Administración, retraía á muchos que se hallaban animados de buena fe y tal vez asistidos de derecho, y alentaba á los que, faltos de ella, esperaban alcanzar el logro de sus fines mediante su pertinaz constancia. Además, no teniendo plazos fijos de procedimiento, habría de apelarse á todos los medios para que algunos expedientes se ultimasen, y encomendar su gestión á representantes, tanto en la provincia como cerca de los Centros, ocasionándose crecidos gastos, que á veces venían á hacer hasta ineficaces las resoluciones favorables, pues al dictarse éstas habían ya gastado los interesados más que lo que obtenían por la determinación que les era beneficiosa.

Á fin de evitar estos males se fijaron plazos para todos los auxiliares de la Administración, así como para las autoridades que han de dictar resolución, con las excepciones necesarias, aunque limitadísimas. Bien conozco que en un principio no habrá podido cumplirse la ley exactamente; pero se cumplirá, sobre todo cuando los particulares, conociendo sus intereses, reclamen y pidan se exija la responsabilidad á los funcionarios que no hayan observado los preceptos de la ley, especialmente si comprenden su queja en los recursos de alzada, puesto que el Ministerio tendrá

que resolver sobre todos los extremos que la misma abraza; y la responsabilidad exigida á un funcionario es saludable enseñanza para que los demás cumplan escrupulosamente la ley.

El último de los fines que me proponía con la reforma era, en mi entender, el más necesario. Nunca he comprendido por qué en unos ramos de la Administración se concedía la superior garantía del acierto en la vía contenciosa y en otros no se otorgaba.

Si la razón de la vía contenciosa es que cabe en lo posible que en la gubernativa se lesionen derechos perfectos, infringiendo para ello las leyes, si esto puede acontecer lo mismo con respecto á los impuestos directos que á los indirectos, de igual manera en el ramo de Aduanas que en el de Propiedades y Derechos del Estado, no me explicaba por qué en unos se concedía el medio de reparar el mal y en otros no; y como tal desigualdad es contraria á la justicia, consideré absolutamente necesario que desapareciera, y así ha sucedido, con ventaja evidente para los particulares y sin perjuicio para la Administración, pues que ni aun puede decirse que se detenga en lo más mínimo la marcha administrativa, porque las providencias gubernativas se llevan á efecto mientras la Administración no considera conveniente suspenderlo y la parte lo pide.

Pudiera extenderme más acerca de este punto; pero la aprobación general que mereció la reforma, por nadie combatida, me evitan tener que ser molesto, y concluyo repitiendo que si los resultados no se han tocado desde el primer instante, se tocarán no pasado mucho tiempo.

EXPERIMENTAL RESEARCH

The following table shows the results of the experiments conducted on the effect of the temperature of the water on the rate of the reaction. The temperature of the water was varied from 10°C to 30°C, and the rate of the reaction was measured by the volume of gas evolved per unit time. The results show that the rate of the reaction increases with increasing temperature, and that the increase is more rapid at higher temperatures. This is in accordance with the general principle that the rate of a chemical reaction increases with increasing temperature.

Temperature of water (°C)	Rate of reaction (volume of gas evolved per unit time)
10	0.1
20	0.2
30	0.4

The following table shows the results of the experiments conducted on the effect of the concentration of the reactants on the rate of the reaction. The concentration of the reactants was varied from 0.1M to 0.5M, and the rate of the reaction was measured by the volume of gas evolved per unit time. The results show that the rate of the reaction increases with increasing concentration, and that the increase is more rapid at higher concentrations. This is in accordance with the general principle that the rate of a chemical reaction increases with increasing concentration of the reactants.

Concentration of reactants (M)	Rate of reaction (volume of gas evolved per unit time)
0.1	0.1
0.2	0.2
0.3	0.3
0.4	0.4
0.5	0.5

The following table shows the results of the experiments conducted on the effect of the surface area of the reactants on the rate of the reaction. The surface area of the reactants was varied from 1 cm² to 10 cm², and the rate of the reaction was measured by the volume of gas evolved per unit time. The results show that the rate of the reaction increases with increasing surface area, and that the increase is more rapid at higher surface areas. This is in accordance with the general principle that the rate of a chemical reaction increases with increasing surface area of the reactants.

Surface area of reactants (cm ²)	Rate of reaction (volume of gas evolved per unit time)
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4
5	0.5
6	0.6
7	0.7
8	0.8
9	0.9
10	1.0

The following table shows the results of the experiments conducted on the effect of the catalyst on the rate of the reaction. The catalyst was varied from 0 to 10%, and the rate of the reaction was measured by the volume of gas evolved per unit time. The results show that the rate of the reaction increases with increasing catalyst, and that the increase is more rapid at higher catalyst concentrations. This is in accordance with the general principle that the rate of a chemical reaction increases with increasing catalyst.

Catalyst (%)	Rate of reaction (volume of gas evolved per unit time)
0	0.1
1	0.2
2	0.3
3	0.4
4	0.5
5	0.6
6	0.7
7	0.8
8	0.9
9	1.0
10	1.1

INSPECCIÓN GENERAL

DE LA HACIENDA PÚBLICA.

La necesidad de inspeccionar los actos y procedimientos de la Administración económica provincial, para corregir eficazmente los abusos é irregularidades que puedan producirse en la ejecución de sus servicios, ha sido de antiguo sentida, y á ella, bajo una ú otra organización, se ha venido atendiendo ; pero la insuficiencia, por una parte, de los medios empleados para ejercer sobre las oficinas provinciales una activa y exquisita vigilancia, y la falta, por otra, de cohesión y unidad en la gestión inspectora, hicieron casi siempre, si no completamente estériles, al menos poco fecundos sus resultados.

El Real decreto de 21 de Enero de 1871 creando un Cuerpo de Inspectores de Hacienda, sólo del Ministro dependientes, con él exclusivamente relacionados y bajo su inmediata dirección y con un impulso propio y sistemático, encargados de la inspección general de todos los ramos de Hacienda y de la averiguación de la riqueza oculta, vino á satisfacer la indicada necesidad en forma y manera adecuada, hasta

cierto punto, al objeto. Pero los tiempos no eran á la sazón propicios y lo fueron mucho menos después para que aquel Cuerpo llenara cumplidamente los altos fines de su misión, y, en efecto, aunque cooperó al planteamiento de la ley provisional de Administración y Contabilidad de la Hacienda de 25 de Junio de 1870, y corrigió grandes abusos introducidos en los ramos de las contribuciones é impuestos, todavía no fueron éstos, sin embargo, todos los resultados que de su creación se propusiera alcanzar el distinguido é ilustrado Ministro que concibió y planteó la reforma.

Fué aquél un paso provechoso para los intereses y la mejor administración de la Hacienda pública, y por lo tanto, digno de encomio y aplauso. Con él se iniciaron al mismo tiempo la conveniencia de centralizar la acción inspectora para que tuviese la energía que sólo puede existir cuando todo el movimiento arranca de un impulso único, y la necesidad de conferirle á funcionarios que, á la especial circunstancia de conocer hasta en sus más insignificantes detalles la legislación de todos los ramos, reuniesen la no menos especial de estar dotados de la sagacidad necesaria para descubrir los males ocultos y tener valor bastante para atacarlos sin consideración, una vez descubiertos.

Pero subordinado unas veces á la Secretaría del Ministerio y á las Direcciones generales, de manera que, auxiliando constantemente sus trabajos normales, sirviese, sin embargo, en momentos dados para realizar los importantes fines de su institución; refundido otras únicamente en las Direcciones con encargo de ejercer en ellas, aparte las visitas que se les encomendasen, los Inspectores las funciones de segundos Jefes y los Subinspectores las de Jefes de Sección;

suprimido alguna vez bajo el supuesto de que para inspeccionar las oficinas tenía la Administración en su organismo sobrados elementos; restablecido después con dependencia directa del Ministro y formando parte de la Secretaría; el Cuerpo de Inspectores vino sufriendo alternativamente, desde la época de su creación, diferentes transformaciones, habiendo sido la última, con anterioridad al año 1881, la de 24 de Julio de 1880, por virtud de la cual se asignaron dos de aquellos funcionarios á cada una de las Direcciones generales de Contribuciones, Impuestos, Aduanas, Rentas Estancadas, Propiedades y Derechos del Estado y Tesoro público y á la Intervención general de la Administración del Estado, en la inteligencia de que las visitas que hubiesen de girar á las oficinas provinciales las dispondrían los Directores con sujeción á las reglas que fijara el Ministro por medidas generales ó en casos determinados.

Así en el corto período del año 1872 como en el de 1874, en que me cupo la honra de desempeñar el cargo de Ministro de Hacienda, ya abrigaba yo el convencimiento de que al principio fundamental de las Inspecciones de este ramo convenía, más que ninguna otra forma, la de un Centro que, recibiendo directamente las inspiraciones del Ministro, extendiera su impulso, con el vigor y la energía que la unidad presta, á todos los servicios de las oficinas provinciales, vigilándolos constantemente en sus varias y complejas ramificaciones para regularizar cuanto en cualquier sentido interesase á la Hacienda pública.

Y una Inspección general con estos fines hubiera yo establecido si la fuerza incontrastable de las circunstancias no me hubiese obligado, muy á mi pesar, á proceder de otra suerte.

Período de transición el de 1872, mi existencia mi-

nisterial de entonces había de ser, en su consecuencia, como efectivamente lo fué, muy poco duradera, y ante esta consideración hubiera sido una temeridad, que yo mismo no me hubiera perdonado, el acometer aquella reforma. En esta situación, atendido que los Inspectores y Subinspectores iban sólo á ocuparse en visitar ya una, ya otra provincia ó dependencia, á donde el Ministro creyera necesario añadir á la acción del Jefe ordinario el impulso extraordinario de un Delegado especial, cuya circunstancia permitía reducir su número sin perjuicio alguno para la buena administración y con notable economía en el presupuesto, y toda vez que de otra manera no podía proceder, me concreté, obedeciendo á la tendencia que me había marcado mi antecesor, á hacer la reducción indicada, refundiendo en las Direcciones á los Inspectores y á los Subinspectores que quedaron en activo servicio, con un ahorro de 120.000 pesetas por el concepto de personal y de otra cantidad no menos importante por el de material en provecho del Tesoro público.

En el segundo período, ó sea en 1874, eran aún más insuperables los obstáculos que se oponían á la reforma á que voy refiriéndome. En casi una mitad de las provincias de España ardía con mayor intensidad que nunca la guerra civil; en la otra mitad sentíanse todavía los efectos de pasados disturbios, y estas calamidades, trastornando la marcha metódica y ordenada de la Administración, hacían imposible la realización de mi proyecto. De suerte que, restablecido por decreto de 27 de Enero de 1874 el Cuerpo de Inspectores, como quiera que se limitaran sus deberes á visitar las oficinas provinciales, dejando en absoluto de prestar servicio, con grave perjuicio de la Administración pública, cuando no era precisa su permanencia

en las provincias, juzgué, atento á esta particular circunstancia, con la cual no podía yo estar en modo alguno conforme, que debía reunir en una sola planta, y así lo hice llevando al presupuesto de gastos una economía de 100.000 pesetas próximamente, el personal de la Secretaría del Ministerio y el de las Inspecciones, disponiendo la designación de Negociado en la misma Secretaría á los Inspectores, con objeto de que durante las épocas en que no se hallaran ejerciendo funciones de su particular instituto continuasen prestando servicios al Estado, cosa que antes, según queda dicho, no sucedía.

Tan firme y decidida era mi convicción en este punto, que juzgaba de gran interés para la Administración pública, que cuando en el mes de Febrero de 1881 tuvo S. M. la dignación de conferirme el cargo de Ministro de Hacienda, fué uno de mis primeros actos confiar el servicio de inspección de la Administración económica provincial á un Centro directivo con la denominación de Inspección general de la Hacienda pública, mediante que ya felizmente la guerra no existía y el orden público se hallaba sobre sólidas bases asegurado en todas las provincias de España.

Modestamente creada, pues, la Inspección, objeto de mis constantes propósitos, si bien reservándome ampliar en debida forma su escaso personal á medida que fueran exigiéndolo las vastas y complicadas funciones que debía ejercer, creo cumplir con un deber de justicia incluyendo en esta Memoria la reseña de sus trabajos hecha por el Inspector general, ya para que en todos tiempos conste de qué modo y en qué términos ha llenado sus fines y respondido á mis esperanzas dicho Centro, sin embarazar, ni siquiera dificultar, antes al contrario, auxiliando á las Direc-

ciones generales en la ejecución de sus servicios, ya para que los que no obstante su experiencia y práctica administrativas impugnaron su creación, tengan motivo de persuadirse de la razón con que yo aseguraba que había de ofrecer satisfactorios resultados.

INSPECCIÓN GENERAL

DE LA HACIENDA PÚBLICA.

Breve reseña de los trabajos llevados á cabo por la Inspección general de la Hacienda pública desde su creación en 24 de Febrero de 1881 hasta la fecha.

Creada por Real decreto de 24 de Febrero de 1881 la Inspección general de Hacienda pública con el fin de vigilar todos los actos de la Administración provincial, de establecer lo conducente al descubrimiento y realización de derechos del Tesoro, procurar la oportuna recaudación y cobranza de toda clase de ingresos y descubiertos, y girar visitas á las dependencias provinciales para conocer el estado de los servicios, tuvo este Centro al constituirse, y aun antes de completar su personal, que dedicar especial atención á preparar los medios adecuados de cumplir con acierto la misión que se le confiaba.

DISPOSICIONES GENERALES.—Al efecto, empezó por reclamar á las Administraciones Económicas notas de los débitos á favor del Tesoro por ramos y conceptos, con el fin de obtener el conocimiento de su origen y procurar la cobranza, con cuyos datos, secundando en cuanto ha estado á su alcance los propósitos del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, estableció una gestión activa y permanente, dirigida no tan sólo á la realización de los débitos, sino también al esclareci-

miento de las circunstancias de muchos que, ó eran ficticios, y por lo tanto debían desaparecer, ó siendo reales, hubieran llegado á resultar incobrables con el transcurso del tiempo, de no haberse removido, como se hizo, con bastante buen éxito, los obstáculos que para hacerlos efectivos se oponían.

El conocimiento de los repartimientos de la contribución Territorial y matrículas de la Industrial aprobados, había de dar la medida de la actividad empleada por las provincias para preparar el cobro de los tributos; y exigido conocimiento de los que en aquel caso se hallaban, se procuró por la Inspección, y se consiguió en gran parte, impulsar los trabajos para legalizar en muchos casos los practicados sin estricta sujeción á las instrucciones y reglamentos.

Observada por consecuencia de las visitas á las dependencias provinciales la poca regularidad y excesiva lentitud con que se tramitaban los expedientes de defraudación de la contribución Industrial, con notable perjuicio de los intereses del Estado, la Inspección se vió en el caso de reclamar á las Administraciones de Contribuciones y Rentas notas expresivas de dichos expedientes y explicaciones acerca de las causas de su detención, pidiendo asimismo noticia de los en que, ya resueltos, no se hubiesen satisfecho los recargos y estuviera, por tanto, sin abonar la parte correspondiente á los denunciadores, con el propósito de impulsar, como lo hará en cuanto tenga reunidos los datos necesarios, la tramitación y terminación de los expedientes de que se trata, con lo que se conseguirá, además de ingresos positivos, regularizar la marcha de este servicio, con gran beneficio para el desarrollo de la contribución, puesto que el estímulo que la ley concede á los denunciadores será efectivo en las épocas reglamentarias.

No era posible que se ocultase á la Inspección el gran número de expedientes de fallidos que por Territorial, Industrial y Empréstito de 175 millones de pesetas existía sin formalizar en las provincias; pero necesitaba adquirir datos precisos, y á este fin reclamó notas de los que en cada una hubiese sin despachar, en vista de las cuales se ha gestionado con bastante buen resultado la formalización de sumas importantes.

También se conocía el lamentable estado en que en la generalidad de las provincias se encontraban todos los asuntos relacionados con dicho empréstito; y con decidido empeño emprendió la Inspección general la penosa tarea de procurar que este servicio se encauzase en lo posible para lo sucesivo, puesto que el abandono con que se había mirado, si no impedía por completo, dificultaba al menos en gran parte que en término breve adquiriese la normalidad que tan necesaria se hacía; pero pedidas en fin de Noviembre de 1881 las noticias indispensables para conocer concreta y minuciosamente los defectos que hubiera que corregir en cada provincia, se tardó en obtenerlas, y llegado el fin de año, en cuya fecha se plantearon las reformas tributarias, la Inspección se vió precisada á suspender sus gestiones, que, de continuarse, hubieran perturbado el planteamiento de aquéllas, á las que en primer término debían dedicar su atención las dependencias provinciales.

Adoptadas algunas disposiciones para procurar que se realizasen los débitos de contribuciones, lo mismo se hizo, y también con éxito, respecto á los procedentes del ramo de Impuestos; pero como al propio tiempo era útil conocer si los expedientes de medios adoptados para satisfacer los cupos de Consumos se hallaban ultimados con arreglo á las prescripciones de

instrucción, se exigió nota de aquéllos, y en su vista, se previno á las provincias que dentro del mes de Noviembre de 1881 quedasen todos aprobados, haciendo en caso necesario los apercibimientos á que hubiese lugar, con lo que no dejaron de obtenerse ventajas en este servicio.

Además de gestionar con eficacia el cobro de los descubiertos por Rentas Estancadas, la Inspección se propuso, y á este fin fueron encaminadas las órdenes que hasta mediados de Octubre de 1881 comunicó á las provincias, estudiar las causas del alza y baja de los valores que en el ramo se observasen, y procurar por su parte sostener y aun elevar la primera y evitar á toda costa la segunda, para lo cual reclamó los datos y noticias que creyó indispensables á la consecución del fin que se proponía, que aunque en distinta forma, siguen remitiéndose en la actualidad y sirven de guía para disponer las visitas donde la baja de valores las hace necesarias.

Los débitos por el ramo de Propiedades también exigían que la Inspección general consagrara á ellos gran cuidado, y al efecto practicó cuantas diligencias creyó oportunas, consiguiendo la realización de algunos; pero desde luego se fijó en la conveniencia de imprimir á la desamortización el mayor desarrollo, y con este propósito reclamó relaciones de todas las fincas que quedasen por enajenar y explicación de las causas que hubieran impedido la venta.

De la misma manera que existían cuantiosos descubiertos por las contribuciones y rentas públicas, había razones para sospechar que figurasen otros no menos importantes en la primera parte de la Cuenta de operaciones del Tesoro *Deudores á la Tesorería*, tanto porque las anticipaciones no se hubiesen reembolsado materialmente, como por la falta de

formalización de muchas cuya definitiva aplicación no se haya podido obtener por distintas causas de las Ordenaciones de los respectivos Ministerios. Á conseguir lo primero, proporcionando así positivos ingresos al Tesoro, y á facilitar lo segundo con objeto de establecer la debida normalidad en las cuentas, se han dirigido los esfuerzos de la Inspección, que en muchos casos ha obtenido el resultado que apetecía.

Como prueba de que los esfuerzos empleados no han sido estériles, la Inspección general tiene el gusto de consignar que los débitos de ejercicios cerrados hasta el de 1879-80 inclusive, que era el último que ya lo estaba definitivamente en 31 de Enero de 1881, sin embargo de que proceden de épocas lejanas en su mayoría, y que para su realización, por diferentes causas han tenido que oponerse dificultades que no es fácil enumerar ni distinguir, en 31 de Enero citado ascendían:

Por ejercicios cerrados de contribuciones, rentas y demás ramos hasta la terminación del ejercicio de 1879-80, á pesetas 208.661.184,93; y por *Deudores* en la primera parte de la Cuenta de operaciones del Tesoro, á pesetas 90.280.484,09, según los datos remitidos por las Administraciones Económicas de las provincias por contestación á la circular de este Centro de 17 de Junio de dicho año de 1881 en que se reclamaron.

De las notas de contracción, recaudación y débitos que en virtud de la nueva organización dada á las oficinas provinciales vienen remitiendo las respectivas Administraciones y las Intervenciones, aparece que los mencionados débitos quedaron reducidos en 31 de Diciembre último á pesetas 175.913.262,16 por ejercicios cerrados, y 79.923.174,35 por *Deudo-*

res en la Cuenta de operaciones del Tesoro, habiéndose, por consiguiente, disminuído en 32.747.922,77 pesetas los ejercicios cerrados, y en 10.357.309,74 los de la Cuenta de operaciones.

Respecto á la recaudación de época reciente, ó sea desde el ejercicio de 1880-81 en adelante, esta Inspección general se abstiene de hacer igual demostración, porque los satisfactorios resultados que se obtuvieron aparecen de los datos que la Intervención general de la Administración del Estado, con mayor y más exacta copia de antecedentes, publica periódicamente, y porque cada uno de los Centros respectivos ha de tener sin duda más minuciosos detalles que la Inspección para evidenciar los esfuerzos dirigidos á conseguir el fin propuesto, á que ha coadyuvado en la medida que lo permitió su esfera de acción.

El olvido de las disposiciones vigentes respecto á la custodia de los fondos de las Tesorerías en las arcas provisional y reservada llegó á reflejarse claramente en las actas de arqueo, con notoria infracción de las disposiciones vigentes, puesto que cantidades de gran importancia se conservaban bajo la exclusiva vigilancia de dos de los claveros, cuando debiera serlo de los tres que las instrucciones designan. Este mal se ha remediado casi en absoluto, merced á la tenaz insistencia con que la Inspección general ha procurado que sus órdenes respecto á este servicio sean cumplidas.

Por diferentes causas, y de época remota casi siempre, existían en gran parte en las cajas de las Tesorerías, como efectivo, multitud de documentos que, ó debían convertirse en metálico, ó formalizarse con la correspondiente aplicación, y que por su número, por la oscuridad de su procedencia y la dificultad de realizarlos, se han mantenido sin examen de ningún gé-

nero, encubriendo en más de una ocasión alcances considerables que han venido á evidenciarse cuando el reintegro era, si no imposible, difícilísimo, por haber desaparecido los responsables directos y hasta los subsidiarios. El mal era grave indudablemente, y comprendiéndolo así, la Inspección ha dirigido y sigue dirigiendo con ahínco su acción á remediarlo, consiguiéndolo en gran parte.

Otro de los servicios que yacían en más lamentable abandono era la facturación por vencimientos de los pagarés de compradores de bienes nacionales, cuyo exorbitante número ha hecho hasta imposible su conservación en el arca reservada á que corresponden, y que en muchas provincias vienen figurando en Caja por sumas fabulosas, ficticias las más de las veces. El volumen y número de estos documentos, tan interesantes y tan descuidados, había infundido sin duda alguna temor de emprender la facturación, y han pasado de unos á otros claveros, con protesta en muchos casos por no haber tiempo material de dedicarse á clasificarlos y averiguar su verdadero importe y distinguir después los cobrables de los que no lo son, para hacer que desaparezcan de la Caja documentos que, caducados, sólo sirven para embarazar las operaciones, y realizables, pueden extraerse y dificultar la persecución de los débitos. No han sido estériles los esfuerzos de la Inspección para conseguir que los pagarés de que se trata se facturen como está prevenido, y además se custodien por los tres claveros responsables, evitando el abuso de que existieran en muchos casos en poder de los Jefes de Caja exclusivamente; y hoy es indudable que este servicio se halla adelantado, no habiéndose conseguido su total terminación por la índole de los trabajos y lo numeroso de los documentos.

El planteamiento de las reformas de 31 de Diciembre de 1881 exigió, como queda indicado, toda la atención de las oficinas provinciales, y no era posible que la Inspección general, sin perturbar su desarrollo, continuase, como hasta entonces lo había hecho, procurando á toda costa el cumplimiento de las órdenes que tenía comunicadas para terminar los servicios que ligeramente quedan señalados; y por lo tanto, atravesó una época no de inacción, puesto que fueron varias las visitas y comisiones especiales á que en este período hubo de dedicarse, sino de espera forzosa para no agobiar á las provincias con reclamaciones á que en aquellos momentos no hubieran podido atender sin descuidar los importantísimos trabajos á que con absoluta preferencia tenían que consagrarse. Sirvió además este período para obtener conocimiento, por los datos recibidos, de las visitas que en lo sucesivo sería oportuno practicar.

Hecha la anterior observación, resta manifestar el resultado de las visitas giradas á las oficinas provinciales, haciéndolo en conjunto, porque ocuparse uno por uno de los múltiples detalles que exigiría el examen hecho de los servicios, á más de prolijo, daría demasiada extensión á esta reseña y tal vez se produjese confusión, que es conveniente evitar.

VISITAS.—Todas las dependencias de Hacienda de 27 provincias y 19 Administraciones subalternas de Rentas Estancadas han sido objeto de visita; y las disposiciones que se adoptaron para corregir errores, impulsar trabajos, descubrir derechos del Estado y avivar la recaudación de los ya reconocidos, fueron las siguientes:

Contribuciones.—En el ramo de Contribuciones, á más de disponer la inmediata corrección de faltas observadas en los repartimientos de la contribución Te-

rritorial, se ordenó en algún caso que para lo sucesivo se tomasen en cuenta á los hacendados forasteros las sumas satisfechas de más por haberseles exigido el mismo tanto por ciento que á los vecinos, así como la inclusión de sumas repartidas de menos en el año anterior; la inmediata remisión de los repartos no enviados por los pueblos y la devolución de varios para que se formasen de nuevo por no haberse repartido el cupo señalado, habiendo provincia en que hasta fué necesario organizar un negociado especial para impulsar estos trabajos, que estaban bastante atrasados, activando á la vez el despacho de numerosos expedientes de denuncia. También se dispuso la rectificación de algunos resúmenes de riqueza equivocados, y el envío de cédulas declaratorias que indebidamente se habían devuelto á varios pueblos. En el deseo de coadyuvar á los propósitos del Excmo. Señor Ministro de Hacienda, las Inspecciones, cumpliendo las órdenes de la general, han procurado, por cuantos medios han estado á su alcance, vencer toda clase de obstáculos para que la recaudación por Territorial se haga efectiva en los términos marcados por instrucción, y que la formalización de las cuantiosas sumas por cuotas impuestas á bienes del Estado tenga efecto en breve término.

Respecto á la contribución Industrial, se han encontrado sin tramitación gran número de expedientes de baja que se ordenó cursar, así como también la inclusión en matrículas de muchos industriales y arrendatarios de consumos que no figuraban en ellas, y rectificar los cargos á las empresas teatrales, de corridas de toros y fábricas de gas, dándose el caso de que en alguna provincia resultase un aumento efectivo de importancia que ascenderá á más de 8.000 pesetas que deben ingresar en las arcas del Tesoro por el primero

de dichos conceptos. Además de activarse en lo posible la investigación y la comprobación de las industrias en las provincias del interior, se extendió ésta en las del litoral á la de los buques matriculados. Sólo en una capital se hallaron 3.056 cuotas de diversas industrias eliminadas de la matrícula, considerándolas desde luego como partidas fallidas sin previo examen y aprobación de los expedientes respectivos, y en la misma localidad se ordenó que inmediatamente se comunicaran al Banco 70 declaraciones de altas, importantes 16.129 pesetas.

La formación de padrones de la contribución Industrial ha sido uno de los servicios hallados en mayor abandono, con gran perjuicio para los intereses del Estado; y por consiguiente, tenía que llamar la atención de los funcionarios encargados de practicar las visitas, los cuales dirigieron sus esfuerzos á conseguir, como lo han conseguido, que se lleve á cabo, produciéndose en consecuencia altas efectivas de consideración.

No en menor descuido se ha encontrado el cobro de las cuotas por patentes, servicio que se ha regularizado donde ha llegado la acción de las Inspecciones, ya abriéndose los registros, ya reclamando del Banco los cuadernos talonarios de años anteriores, y ya haciendo que en las ferias se exigiese el pago que en muchos años y casi por costumbre inveterada no había tenido efecto.

Los millares de expedientes de partidas fallidas, tanto pertenecientes al primero como al segundo contrato con el Banco, que existían en las provincias completamente paralizados, se han puesto en curso en gran parte, consiguiéndose importantes formalizaciones y la devolución á dicho Establecimiento de muchos por defectos esenciales que los hicieron inadmisibles.

En los expedientes de alcances, también detenidos en muchas provincias, se ha recomendado la más pronta tramitación y cumplimiento de las ordenes recibidas tanto del Tribunal de Cuentas como de los Centros respectivos, obteniéndose por consecuencia mayor actividad y más facilidades para hacerlos efectivos.

El estado de los incidentes del empréstito de 175 millones de pesetas, servicio que por desgracia ha sido mirado con gran indiferencia, por lo menos ha proporcionado á las visitas gran trabajo, no tan fructífero como era de desear, por la índole especial de este asunto; pero, sin embargo, se ha conseguido la remisión de muchas facturas á la Dirección general de la Deuda pública y la formalización del importe de otras que se hallaban en las Tesorerías como efectivo.

De los débitos por Derechos reales y transmisiones de dominio, hallados al girarse las visitas, se han conseguido algunos ingresos, entre los cuales figura uno de 13.588 pesetas 98 céntimos, y además se han mandado remitir los estados de valores que se hallaban sin rendir, y formar un expediente gubernativo por defraudación de 7.000 pesetas.

También han cuidado las Inspecciones de perseguir los débitos importantes que existen por el impuesto de minas, y dispuesto que en caso necesario se despachen apremios y tramiten los expedientes en que haya de declararse la caducidad de las concesiones, y en algunos casos se ha obtenido buen resultado.

Los descubiertos por el 5 por 100 sobre los ingresos municipales é incidencias del impuesto personal, han sido también objeto de las gestiones de la Inspección, que ha procurado se realicen comunicando al efecto las órdenes más apremiantes para que tenga efecto.

La falta de datos en muchos casos, y el abandono en otros, ha dado margen á que el Estado siga pagando la contribución de los bienes que como pertenecientes al mismo han sido enajenados en varias provincias, y á evitar este mal se han dirigido las órdenes comunicadas para que se remitiesen á los alcaldes relaciones de las fincas vendidas, y que, por consecuencia, se impongan á los poseedores las cuotas que les correspondan.

La liquidación practicada en una provincia de lo que ha correspondido al Banco por recargos y costas en virtud de la adjudicación al Estado de multitud de fincas por débitos de contribuciones, dió por resultado averiguar que se habían abonado indebidamente á dicho Establecimiento 215.706 pesetas 93 céntimos, en vista de lo que la Inspección dispuso se instruyera expediente administrativo para depurar con toda exactitud las cantidades satisfechas por aquellos conceptos, además de la que se deja consignada, y otro gubernativo para inquirir y determinar la responsabilidad que pueda alcanzar á los empleados que ordenaron, extendieron é intervinieron los libramientos y sus justificantes, y la de los que, sin haber sido examinados, censurados ni aprobados por la Administración los expedientes de adjudicación de fincas, propusieron el pago de las sumas que resultan y puedan resultar pagadas indebidamente, y á cuyo reintegro tiene derecho el Tesoro.

La falta absoluta en unos casos, y el gran atraso en otros, de los libros que componen la contabilidad auxiliar del ramo de Contribuciones, han obligado á las visitas á dedicar á este servicio atención preferente, conociendo su importancia, y al efecto han dispuesto y conseguido en muchas Administraciones que las cuentas existentes se pongan al día y que se abran

las que no existían, dejando establecida bastante regularidad en este servicio, que no puede menos de ser provechosa, tanto para la persecución de débitos como para la formación de cuentas y datos periódicos que las Administraciones deben rendir á los Centros.

Rentas.—No menos eficaces han sido las gestiones practicadas por la Inspección en sus visitas con relación al ramo de Rentas Estancadas. Atestíguanlo, entre otros muchos resultados, notoriamente beneficiosos para los intereses de la Hacienda, los obtenidos respecto al cumplimiento de la ley del Timbre, exigiendo el reintegro correspondiente á muchísimos repartimientos de Territorial, matrículas de Industrial, repartos de Consumos, expedientes de subasta, actas de encabezamiento y otros documentos que carecían de él; activando el despacho de un considerable número de expedientes de defraudación; encareciendo la más exquisita vigilancia sobre el exacto cumplimiento de los convenios celebrados con las empresas de espectáculos públicos por el timbre móvil de los billetes, y adoptando otras medidas de indudable oportunidad, á las que se ha debido el ingreso en las arcas del Tesoro de sumas importantes y que se eviten defraudaciones.

En una provincia se dió el caso de efectuarse por la Inspección dos aprehensiones de tabaco, que tuvieron, sobre la importancia del comiso, la de contener el fraude que se venía realizando en algunos establecimientos.

En otra de las de mayores rendimientos se pasó á los tribunales de justicia el tanto de culpa resultante de un expediente instruido por defraudación en la renta de Tabacos, y se incoaron dos más para corrección de abusos.

Y en todas las visitadas se han regularizado muchos

servicios, ya subsanando faltas advertidas en la contabilidad auxiliar de Rentas y haciendo abrir libros que no se llevaban, ya venciendo atrasos en la rendición de cuentas y envío de estados y notas á los Centros directivos, ya, en fin, exigiendo la observancia de todas las formalidades reglamentarias en los recuentos de los almacenes, arriendos de locales para los mismos, provisiones de estancos, etc., etc.

Propiedades y derechos del Estado.— En cuantas provincias ha girado visita la Inspección se ha procurado activar la desamortización, á cuyo fin se han recogido de algunos Comisionados de ventas los inventarios propios de la Administración del ramo que existían en poder de aquéllos, sin que, por lo tanto, pudieran hacerse las anotaciones correspondientes y establecer la claridad necesaria para el debido desarrollo de este servicio.

Se mandó adicionar aquéllos, utilizando al efecto los libros de cuentas corrientes y cuantas noticias pudiese facilitar la Comisión de ventas, á fin de conocer la propiedad que al Estado pueda quedarle, tanto de fincas como de censos, cuyo dato puede decirse que era casi desconocido en la mayor parte de las provincias visitadas, excitando al propio tiempo el celo de la investigación, al objeto de descubrir la propiedad que estuviese detentada y promover su enajenación.

Para el mejor orden del negociado de que se trata, se ordenó en varias provincias la apertura de libros importantes, que, aunque prevenidos por las instrucciones, no se hallaban habilitados; tales eran, entre otros, los de registro de pagarés otorgados, registro de arrendamientos, de fincas enajenadas, etc.

Se dictaron disposiciones para activar el despacho de multitud de expedientes de denuncias, que representaban cantidades de consideración.

Hallándose en el mayor abandono la incautación por el Estado de las muchas fincas que en diferentes provincias le fueron adjudicadas por débitos de contribuciones, se dictaron por la Inspección las órdenes necesarias para que aquélla se llevase á efecto, indicando la tramitación que debía darse á este importante servicio, según el estado de descuido en que lo encontró, mandando también abrir un libro registro donde fueran inscritas las fincas, y arrendarlas con las formalidades prevenidas, devolviendo previamente al Banco los expedientes todos que no llenasen los requisitos legales, á fin de sacar muchas de ellas de manos de los mismos deudores que las poseían.

Habiéndose observado un gran abandono en el deber cometido á las Administraciones para que oportunamente se participe á los Alcaldes la relación de fincas vendidas, á fin de que el Estado no continúe pagando la contribución que deben satisfacer los compradores, se dictaron las órdenes convenientes para que se llevase á efecto tan importante servicio.

Se ordenó asimismo la mayor observancia de la ley de 13 de Junio de 1878 por lo que respecta á la enajenación de fincas embargadas, cuyo cumplimiento no se observaba enteramente, promoviendo también la realización de descubiertos por vencimientos de plazos, y en alguna provincia se dispuso la instrucción de expediente gubernativo por haber saldado una cuenta corriente de un comprador que sólo había satisfecho un plazo.

Se mandó renovar muchos expedientes de arriendo que subsistían por la tácita contra lo terminantemente dispuesto, y se instruyó uno gubernativo para depurar las causas de no haber ingresado una subalterna 45.639 pesetas por rentas de años anteriores.

Se ordenó reponer á estado de trámite un expe-

diente de apremio seguido contra un deudor á quien no se había apremiado en siete años, á pesar de lo considerable de su débito, á fin de llevar á efecto el embargo de los bienes de otra procedencia é indemnizar al Tesoro del perjuicio irrogado, cuyo requisito no se llenó por el ejecutor.

Existiendo en alguna importante provincia un considerable número de solicitudes de redención y transmisión de censos, que representaban cantidades de importancia para el Tesoro, se ordenó dar el mayor impulso á su tramitación.

Muchos expedientes de excepción, que existían en el mayor abandono, fueron puestos en curso por virtud de las prevenciones dictadas al efecto.

La cobranza del 20 por 100 de Propios estaba en bastante retraso, y la Inspección dictó asimismo las órdenes convenientes para la realización de dichos descubiertos.

Tanto la contabilidad como la rendición de cuentas por algunos subalternos, que dejaban mucho que desear, han sido objeto de atención por parte de la Inspección de Hacienda, que ha dictado las órdenes convenientes para regularizar ambas cosas.

Impuestos.—Acerca de los servicios del ramo de Impuestos, han sido también muchos los prestados por la Inspección. Para que de ellos se pueda tener idea, basta indicar :

Que en el impuesto de Consumos, todas las visitas han producido la corrección de muchos defectos en que se venía incurriendo por los Municipios y por las Administraciones en la adopción de medios para cubrir los cupos y en la observancia de la instrucción respecto á encabezamientos, arriendos y repartos, debiéndose á las gestiones de los Inspectores el despacho de muchos expedientes y la terminación de

importantes servicios que se hallaban retrasados.

Que á la iniciativa de la Inspección, y aun á su concurso material, se ha debido en muchas provincias la rectificación de errores padecidos en los padrones del impuesto equivalente á los de sal, haciendo aumentar los rendimientos del mismo con liquidaciones complementarias ó repartos adicionales, venciendo las dificultades surgidas en el planteamiento de este nuevo gravamen y activando su recaudación.

Que para obtener de los Ayuntamientos los padrones y listas cobratorias del impuesto de Cédulas personales é impulsar su examen, aprobación y entrega á las Delegaciones del Banco, evitando retrasos en la distribución y cobranza, y acomodando estas operaciones al procedimiento reformado en la instrucción de 31 de Diciembre de 1881, no ha sido menos eficaz y provechosa la cooperación individual y colectiva prestada.

Que á sus excitaciones se debe la mayor atención, que en todas las provincias visitadas se consagra al acrecentamiento de los productos del impuesto sobre tarifas de viajeros y mercancías, y la más exquisita vigilancia que se ejerce cerca de las empresas obligadas á tributar, para evitar ocultaciones; que al minucioso examen á que en las visitas se ha descendido por el deseo de que las gestiones practicadas se traduzcan en hechos de tangible conveniencia ó beneficio para la Hacienda, se ha debido también, respecto al impuesto sobre sueldos y asignaciones, el descubrimiento de algunas defraudaciones y la instrucción de expedientes para el debido reintegro de las sumas defraudadas y la exacción del 6 por 100 de interés de demora por cuantiosos descubiertos de Diputaciones provinciales y Ayuntamientos.

Que de considerabilísimas cantidades pendientes

de cobro por todos los impuestos, así de época corriente como de presupuestos anteriores, se han realizado ingresos muy importantes.

Y que no menos útiles han resultado las visitas en cuanto á la organización de la contabilidad auxiliar de los impuestos, que hallándose desatendida en unas provincias é incompleta en otras, ha sido reconstituída y puesta al corriente.

Intervención.—Los cuantiosos débitos que á favor del Tesoro aparecían en la primera parte de las Cuentas de operaciones, forzosamente habían de fijar la atención de las visitas, con tanto mayor motivo, cuanto que este importante servicio había sido ya objeto de continuas excitaciones desde que se creó la Inspección general; pero, sin embargo, se ha recomendado con bastante buen éxito la prosecución de los expedientes para obtener el reembolso ó formalización donde existían, instruyéndose en las provincias en que esto no había tenido efecto. Se han redoblado también las gestiones hechas para conseguir de las Ordenaciones de pagos de los Ministerios la formalización de las cuantiosas sumas anticipadas á cada uno de ellos con objeto de que desaparezcan de las cuentas saldos realmente ficticios en su mayor parte, pero entre los cuales hay algunos reembolsables á metálico, y que el transcurso del tiempo hace irrealizables por diferentes causas, de no imprimirse á los citados expedientes el impulso que se ha procurado con gran esfuerzo.

El pago de intereses de inscripciones á las Corporaciones civiles se ha recomendado siempre que se han producido quejas, procurándose á la vez la aplicación, en lo posible, de estos pagos á saldar los débitos de dichas Corporaciones por varios conceptos.

También se han dictado disposiciones para que se

formalicen los valores existentes en las Tesorerías como efectivo, consiguiéndose bastante buen éxito, puesto que algunas de ellas han quedado en situación normal, conteniendo sólo sus cajas el metálico y aquellos efectos que no es posible desaparezcan sin obtener para ello resoluciones superiores de diferentes Centros respecto á su formalización.

En cuanto á la contabilidad de las Intervenciones, se ha ordenado y conseguido la mayoría de las veces, durante la permanencia de las Inspecciones en las provincias, que se pongan al corriente los libros atrasados, se abran los que no existían, y quede, por fin, regularizado este servicio, así como la rendición de cuentas atrasadas y la remisión de relaciones, datos y noticias que periódicamente deben pasarse á la Intervención general de la Administración del Estado.

Tesorería.—Uno de los servicios que por su índole especial y desde época remota ha venido en el más lamentable abandono ha sido la facturación por vencimientos de los pagarés de compradores de bienes desamortizados, sin lo cual difícilmente ha de llegarse á conocer cuáles son los realizables y cuáles los que deben desaparecer porque pertenecen á ventas que han sido anuladas ó á quiebras en virtud de las cuales se dan casos de existir dos ó más juegos de pagarés por una misma finca. Se ha conseguido, en gran parte, la terminación de este importante servicio en unas provincias y obtenido adelantos en otras que permiten esperar quede por completo normalizado en término no muy lejano, lo que será indudablemente provechoso para los intereses del Estado, porque tal vez haya casos en que las existencias ficticias de pagarés encubran faltas de metálico que no ha sido posible descubrir por la dificultad invencible de hacer recuento escrupuloso de tantos millares de efectos que

pasan de unos á otros claveros casi siempre con protestas, según se indica al principio de esta reseña, por desconocerse su verdadero importe.

Se han verificado, en los casos que se creyó conveniente, arqueos extraordinarios y presenciado en otros los que previenen las instrucciones tengan efecto periódicamente, ingresando por consecuencia de órdenes de las Inspecciones 21.000 pesetas próximamente que existían sin cargo á las Cajas, cuya pertenencia no se explicó satisfactoriamente, la que tal vez resulte de los expedientes mandados instruir al efecto y que han de tramitarse por la Dirección del ramo.

SERVICIOS ESPECIALES.—Como servicios especiales, la Inspección general ha gestionado y conseguido el ingreso en la Tesorería de Hacienda pública de Albacete de 12.942 pesetas por cuenta de las 18.102,79 que resultaron de alcance al liquidador de Almansa por el impuesto de Derechos reales en los ejercicios de 1876-77 á 1881-82, ambos inclusive.

Para cumplir lo dispuesto en Real orden de 29 de Agosto de 1881 se giró visita especial á las oficinas de las minas de Almadén y Almadenejos, con objeto de observar el carácter de los empleados en la explotación del Establecimiento y las condiciones de la maquinaria y útiles de elaboración de la primera y enterarse de los trabajos de investigación de la segunda, fijándose en la valía del mineral y en las manifestaciones del terreno, sobre cuyos extremos se formó por el Inspector encargado de esta comisión la oportuna Memoria, que pasó á la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado.

En las provincias de Córdoba y Huelva la Inspección general, en cumplimiento de Real orden de 14 de Noviembre último, ha inspeccionado la realización de los bienes adjudicados al Estado en el expediente

de apremio seguido contra la testamentaria del Conde de Altamira por descubiertos de plazos procedentes de redención de censos é intereses de demora, cuya tramitación se ha dispuesto, dictando las medidas conducentes á la más pronta y satisfactoria terminación de tan importante servicio.

El pago duplicado hecho en varios meses de los años 1879 y 1880 en la provincia de Lérida de cartas de pago de préstamo de libramientos de Guerra motivó que por Real orden de 26 de Junio de 1881 se comisionase á un Subinspector de Hacienda pública para continuar el expediente en averiguación de las causas ocasionales de tan punible hecho, dando por resultado la entrega á los tribunales del asunto y la instrucción de expedientes gubernativo y de reintegro de las 40.297 pesetas satisfechas por duplicado.

Á consecuencia de propuesta de la Intervención general de la Administración del Estado en expediente tramitado por la Dirección general de Propiedades, y por virtud de reclamación de los derechos que pertenecían á un perito tasador en la provincia de Logroño, se comisionó á un Subinspector para que rectificase la liquidación formada á aquél, lo que tuvo efecto con beneficio para los intereses del Estado, puesto que se anuló la cuenta de dicho perito, formándose otra de mucha menor importancia por haberse eliminado de ella partidas de bastante consideración que no se hallaban debidamente justificadas y cuyo abono se pretendía.

También se comisionó por Real orden de 10 de Junio de 1881 á un Inspector para que se enterase en las dependencias de Hacienda de Santander de si respecto de los tabacos torcidos, picadura y cigarrillos de Cuba y Puerto Rico ó de cualquiera otra procedencia que los particulares están en libertad de intro-

ducir para su consumo, se cumplía con todos los requisitos y formalidades que los respectivos reglamentos determinan, dando por resultado la adopción de las medidas necesarias para que en lo sucesivo no se entorpezca el despacho y se llenen las formalidades reglamentarias.

Con motivo de faltas advertidas en la Tesorería de la misma provincia se ordenó que un Subinspector puntualizase el alcance que pudiera resultar, que fué de 14.738 pesetas 98 céntimos, instruyéndose en consecuencia los oportunos expedientes gubernativo y de reintegro, que se han tramitado con arreglo á las instrucciones vigentes.

También se confirió comisión especial á un Inspector para que, acompañado de varios funcionarios de la Inspección general, se trasladase á Santander con objeto de presenciar la llegada de tabacos procedentes de Vigo, que habían de ser reconocidos por los empleados periciales nombrados al efecto, desempeñando su cometido hasta finalizar el servicio.

Á consecuencia de expediente instruido con motivo de una aprehensión de tabacos en la estación del ferrocarril de Sevilla, propuso la Dirección de Aduanas que un Inspector de Hacienda pasase á ampliar las diligencias instruidas; y dispuesto así por Real orden de 13 de Enero de 1882, el nombrado cumplió su comisión.

Por Real orden de 29 de Octubre de 1882 se dispuso que un Inspector de Hacienda se trasladase á Valladolid á investigar si alcanzaba responsabilidad á la suprimida Administración Económica en la compensación admitida al Ayuntamiento de Tordesillas por la suma de 31.095 pesetas 31 céntimos en facturas de intereses de una inscripción perteneciente al Hospital de Peregrinos de aquella villa con aplicación á

débitos por impuestos y anticipaciones á profesores de instrucción primaria; y practicadas las diligencias oportunas, se dió conocimiento á la Dirección general de Impuestos para que, teniéndolas presentes, pueda resolver lo que considere más acertado, como asunto de su competencia.

Para impulsar las diligencias comenzadas en la Administración Económica de Zamora con motivo de las faltas y abusos cometidos en el pago de recargos municipales del segundo semestre de 1869-70, fué nombrado también un Subinspector que por consecuencia del expediente, á más de entregar á los tribunales ordinarios el tanto de culpa correspondiente, acordó la suspensión de empleo y sueldo de varios empleados.

Con objeto de representar á la Hacienda en la Comisión encargada de proponer la distribución de las fincas rústicas y urbanas del departamento de Toro del Canal Imperial de Aragón, se nombró un Subinspector, el que, después de practicadas varias diligencias, tuvo que suspender su comisión por haber tenido que salir de Zaragoza para servicios urgentes parte de los individuos que por los demás ramos componían la Junta.

Por efecto de expediente instruido en la Dirección de Aduanas á consecuencia de denuncia de alijos hechos en las costas de las islas Baleáres, se dispuso que pasase á depurar los hechos un Subinspector; y emitido el informe correspondiente, se pasó á la Dirección citada para que surta sus efectos.

Otro de los servicios más importantes y que con mayores ventajas positivas para el Tesoro ha practicado la Inspección ha sido la vigilancia de los aforos de los establecimientos públicos de venta, con motivo de la entrega de los Consumos á las empresas arrendatarias de los mismos en Alicante, Granada, Jaén y

Sevilla y á los Ayuntamientos respectivos de Murcia y Cartagena, y el de las fábricas de azúcar de Adra, Granada, Motril, Almuñécar, Salobreña, Málaga, Vélez-Málaga, Torre del Mar, Torrox, Nerja, Marbella, Manilva y Frigiliana, por cesar en fin de Diciembre último el concierto existente con los fabricantes para el cobro del impuesto sobre el azúcar nacional peninsular, y hacerse, por lo tanto, cargo la Hacienda de la administración de dicho impuesto.

Además de los servicios que, aunque ligeramente, quedan reseñados, ha sido menester, para secundar los deseos y poderosa iniciativa del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, emplear gran suma de actividad en asuntos que por su índole reservada exigían el mayor cuidado y el examen más atento si habían de producir los resultados que afortunadamente se han obtenido en pro de los sagrados intereses del Erario y de la organización de las oficinas provinciales.

Tales son, aunque en resumen, los trabajos de mayor importancia que la Inspección general, inspirándose en el recto y elevado criterio del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, ha llevado á cabo desde su creación.

Detallarlos más sería difuso para una reseña, y los resultados de sus gestiones es difícil que luzcan aisladamente, puesto que habiendo de referirse á todos los servicios de la Administración de la Hacienda, cuya dirección está encomendada á los respectivos Centros, tienen forzosamente que resultar, en la mayoría de los casos, entre el conjunto de los obtenidos por el común esfuerzo.—Madrid, 9 de Enero de 1883.

—OLEGARIO ANDRADE.

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA DEUDA PÚBLICA.

I.

El examen que de los servicios confiados á la Dirección general y Junta de la Deuda pública tuve necesidad de practicar como Presidente de la Comisión de las Cortes, inspectora de las operaciones de aquel importante Centro de la Administración del Estado, examen que me dió á conocer la situación anormal y el estado de atraso en que se hallaban algunos de sus más importantes trabajos, y el estudio detenido que de estos mismos servicios y de los procedimientos á que estaban sujetos hice después, como Presidente que fui también de la Comisión de Senadores, Diputados y altos funcionarios á quienes se confió el encargo de proponer las reformas que estimaran necesarias en dicho centro, en virtud de las observaciones que me creí obligado á consignar en la Memoria que presenté á las Cortes en 10 de Enero de 1881 á nombre de la primera de dichas Comisiones, afirmaron de tal modo en mi ánimo la convicción que ya tenía cuando realicé este acto, de que la organización dada á tan importante centro por Real decreto de 1.º de No-

viembre de 1851 no se armonizaba ya, aun cuando en esta fecha hubiese sido una garantía de acierto, con las exigencias de la época actual ni con los nuevos servicios que desde entonces se le habían encomendado, ni, lo que era más grave, con las prescripciones de la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública en cuanto se dirige á separar la acción interventora de la administrativa. Así es que tan luego como tuve el honor de ser elevado, por la voluntad de S. M., al Ministerio de Hacienda en 8 de Febrero del mismo año de 1881, uno de mis primeros cuidados fué buscar la más acertada solución á este delicado asunto, con tanto más motivo cuanto que, debiendo realizarse en dicho centro importantísimas operaciones por virtud de los planes financieros que tenía el propósito de desarrollar y después he llevado á cabo, era de todo punto necesario corregir en él los vicios de organización que podían entorpecer la ejecución de aquélla.

Fundábanse principalmente las reformas que estimaba precisas en que, dividida la autoridad de dichas oficinas generales entre el Director y los Jefes de los Departamentos que constituían la Junta de la Deuda pública, todo el celo, eficacia y voluntad del primero, empleados con el propósito de obtener el más pronto despacho de los asuntos, tenía una compensación desfavorable en la falta de atribuciones para tomar ciertos acuerdos que los reglamentos reservaban á la Junta y á los Jefes expresados; en los excesivos trámites á que por esta misma división estaban sujetos la mayoría de los asuntos que debían resolverse, ya en la Dirección, ya en la Junta; en no estar bien marcados los límites dentro de los cuales debían funcionar algunos de dichos Departamentos, especialmente el de Emisión y la Contaduría, hasta el punto que el primero realizaba servicios que por su índole eran más

propios de la segunda, como encargada de fiscalizar, intervenir y llevar la contabilidad del ramo ; y, finalmente, en que formando esta oficina parte integrante de la Dirección, no podía tener la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones, ni llenar éstas en la forma que previene la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública de 25 de Junio de 1870.

La obra de corregir estos defectos, una vez conocidos, aunque delicada, como son todas las que se relacionan con el crédito, no era difícil, puesto que del solo examen de aquéllos se desprendían clara y naturalmente las medidas que los mismos reclamaban.

Estas medidas, en su expresión más concreta, consistían en establecer en dicho centro la unidad en el mando, suprimiendo la Junta de la Deuda pública; en clasificar los servicios verdaderamente administrativos que debían correr á cargo del mismo, y en encomendar la fiscalización é intervención de todos los actos que produjeran en él emisión y amortización de Deuda é ingreso y salida de valores y caudales, á una Contaduría dependiente de la Intervención general de la Administración del Estado, con arreglo á lo dispuesto en la ley ya citada de 25 de Junio de 1870.

La primera medida, ó sea la relativa á la supresión de la Junta, no podía ofrecer dificultad de ningún género, puesto que si bien el reconocimiento y liquidación de los créditos, á veces de crecido valor, es de suyo asunto importante y por demás delicado, que requiere la sólida garantía de acierto que debe esperarse de una Corporación, en legítima defensa de los intereses públicos y particulares, esta misma garantía, y mayor si cabe, podía también obtenerse, sin necesidad de la expresada Junta, con sólo disponer que los acuerdos del Director en los expedientes de recono-

cimiento de créditos que hubiesen de producir abono no fuesen ejecutivos, en tanto que no recayera la aprobación del Ministro del ramo, previo dictamen de los Centros y Cuerpos consultivos del Estado.

Y en cuanto á las otras medidas, parece innecesario decir que tampoco podían ofrecer dificultad alguna, porque tratándose en ellas solamente de clasificar servicios, bastaba examinar el objeto y fin de los mismos para determinar con todo acierto cuáles eran los que, teniendo un carácter puramente administrativo, debían correr á cargo de la Dirección, y cuáles los que, constituyendo un acto de fiscalización é intervención, debían encomendarse á la Contaduría, que es á quien correspondía desempeñar estas funciones á nombre del Interventor general de la Administración del Estado, con arreglo á lo prescrito en la ley antes citada.

Fundado, pues, en estas consideraciones, por Real decreto de 12 de Abril de 1881, que tuve el honor de someter á la aprobación de S. M., á la vez que se suprimió la Junta de la Deuda pública, y por tanto la Secretaría de la misma, los Departamentos de Liquidación y de Emisión y la Fiscalía, se dió á la Dirección general y Contaduría la organización que aun conservan, dictando además en el mismo día las instrucciones necesarias á la ejecución de aquél.

La Dirección de la Deuda, por virtud de estas disposiciones, se compone : de un Director, Jefe superior del ramo ; dos Subdirectores, uno de ellos con el carácter de Letrado, el primero con la categoría de Jefe de Administración de segunda clase, y el segundo con la categoría de Jefe de Administración de tercera clase ; un Tesorero con esta misma categoría, y los demás Jefes de Negociado, Oficiales y subalternos que se designaron en la planta publicada en dicho decreto.

Los asuntos propios de esta Dirección están divididos en dos secciones. La primera, que tiene á su cargo el despacho de los expedientes sobre reconocimiento y liquidación de créditos antiguos y cargas de justicia, está desempeñada por el Subdirector letrado, y la segunda, á la cual se hallan encomendados los trabajos propios de la deuda reconocida, ó sea el recibo, emisión, amortización y canje de valores, se encuentra á cargo del segundo Subdirector.

Para el despacho de los expedientes se previene que cuando corresponda declarar la improcedencia de lo solicitado ó la caducidad de los créditos pedidos, se dicte el acuerdo debido por el Director general, publicándolo en la *Gaceta de Madrid*, á fin de que los interesados puedan entablar, si se consideran perjudicados, el oportuno recurso de alzada; pero que en los expedientes que deben producir abonos no se ejecuten los acuerdos del mismo Director entre tanto que no sean confirmados por el Ministro de Hacienda, después de oír á los Centros y Cuerpos consultivos del Estado.

Se limitan las funciones de la Tesorería á recibir, custodiar y entregar los valores, efectos y caudales á manera que lo acuerde el Director é intervenga el Contador, y á llevar los libros correspondientes, rendir las cuentas de Caja y responder de la personalidad en los pagos.

Y últimamente, y prescindiendo de otras medidas de menor interés, se dispone que la Contaduría general dependa de la Intervención general de la Administración del Estado y fiscalice é intervenga todos los actos de aquel Centro y de la Tesorería en la forma que previene el art. 53 de la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública de 25 de Junio de 1870.

Hecha esta ligera reseña de las reformas que, por los motivos expuestos, se han realizado en las oficinas encargadas de llevar á efecto el servicio de la Deuda pública, no está de más consignar, antes de concluir, los resultados obtenidos con las mismas.

El primero que se consiguió fué el de realizar una economía de 42.000 pesetas, y esto después de aumentar nueve empleados entre Oficiales y Aspirantes en la Dirección y diez y nueve en la Contaduría; pero los más importantes son el de haberse llevado á cabo, desde que se plantearon estas reformas, la formalización de una gran parte, casi la mayoría, de los valores de la Deuda aplicados á operaciones del Tesoro y pago del empréstito de 175 millones de pesetas, asunto interesante que se hallaba en un lamentable estado de atraso, según más detalladamente explicaré después; el impulso que se ha dado al despacho de las reclamaciones de créditos antiguos que son objeto de las leyes de caducidad y á la liquidación de los capitales correspondientes á Corporaciones civiles, según lo demuestran las numerosas relaciones que por uno y otro concepto se han publicado en la *Gaceta de Madrid*; y el haber, últimamente, realizado, á la vez que estos importantísimos trabajos, las difíciles y costosas operaciones de la amortización y conversión de todas las Deudas del Estado, sin dar motivo á la menor queja y con una brevedad y precisión de las que bien puede decirse que no hay ejemplo; resultados que no hubieran podido obtenerse de seguro con las tramitaciones embarazosas y dilatorias de la antigua organización de aquellas oficinas.

II.

En la Memoria que, según dejo dicho, sometí á la consideración de las Cortes en 10 de Enero de 1881,

ocupándome del estado de atraso en que se hallaban algunos importantes servicios de aquel ramo, presenté un cuadro expresivo de los valores de diferentes clases que, hallándose pagados por medio del empréstito de 175 millones de pesetas y de operaciones del Tesoro, á cuyos fines estaban aplicados, no habían sido aún formalizados por la Contaduría general de la Deuda, ni llevado, por consiguiente, su importe á las cuentas generales de gastos públicos y presupuestos.

Estos valores, según aquel cuadro y las explicaciones dadas sobre el mismo en la Memoria, estaban entonces representados por un total de 116.707 documentos, importantes pesetas 122.680.233,32.

El Sr. Ministro de Hacienda, tomando en consideración cuanto en la precitada Memoria había yo expuesto, acordó el nombramiento de la Comisión especial á que antes me he referido, dispensándome el honor de designarme para que la presidiera.

Poco tiempo después me encargué del Ministerio de Hacienda, y si bien entonces se habían ya comenzado las comprobaciones preliminares que exigía este trabajo, el estado del mismo, en cuanto á las verdaderas operaciones de formalización, no había variado, puesto que aun no resultaba datada en cuentas una sola cantidad de las que dichos valores representaban.

Como era natural, dada la importancia que en mi concepto tenía este asunto, uno de mis primeros cuidados, desde el momento que me hice cargo de aquel Ministerio, fué impulsar su ejecución por todos los medios de que podía disponer.

En esta fecha, sin embargo, no se limitaba ya la extensión de las formalizaciones al número de documentos indicados, sino que con motivo de nuevas remesas de las oficinas provinciales por una parte, y á

causa, por otra, de no haberse comprendido en el primitivo cuadro que se facilitó á la Comisión las facturas aplicadas al pago del cuarto plazo de la suscripción de Bonos del Tesoro de la emisión de 1879, los valores á formalizar por los conceptos expresados estaban representados por un

	Documentos.	Pesetas.
<i>Total de.</i>	124.958	143.244.135

hallándose además pendientes de amortización y de aplicación á presupuestos todos los primeros décimos de títulos del empréstito de 175 millones de pesetas y residuos aplicados al pago de contribuciones.

Grandes eran las dificultades que ofrecía la ejecución de estos trabajos, y más dada la variedad y distinta procedencia de los documentos y las diferentes formas de liquidación de los mismos; mas por esto les presté desde luego toda mi atención, y reformando primero la organización de las oficinas de la Deuda que habían de ejecutarlos, de modo que resultara, como resultó, más unidad en el mando, más independencia en la intervención y más facilidad en los trámites, y aumentando después los medios de que antes disponían, he conseguido, en el tiempo que tuve la honra de desempeñar el Ministerio, si no ver terminadas dichas formalizaciones, reducirlas por lo menos á un punto que, aunque importante todavía, no puede ya alarmar, puesto que estando representadas, como he dicho, en lo que hace á los valores aplicados al empréstito y á operaciones del Tesoro, por un

	Documentos.	Pesetas.
<i>Total de.</i>	124.958	143.244.135
Y resultando formalizadas en 31 de Diciembre de 1882.. . . .	84.410	124.295.662
Restan solamente por formalizar.. .	40.548	18.948.473

que hay motivos fundados para esperar que se formalicen en un plazo no lejano.

Y por lo que hace á los demás valores, ó sea á los primeros décimos y residuos de títulos del empréstito, habiéndose amortizado hasta la misma fecha de 31 de Diciembre de 1882, formalizando su importe con aplicación á presupuestos,

	Documentos.	Pesetas.
En primeros décimos.	865.002	5.913.830 »
En documentos representativos de íd.	877	302.339,94
En residuos.	237.088	2.324.610,45
Que hacen un total de.	<u>1.102.967</u>	<u>8.540.780,39</u>

tampoco es de creer que pueda ofrecer graves dificultades la amortización de los que quedan pendientes, cuyo número no ha podido determinarse exactamente por hallarse aún muchos en poder de las oficinas provinciales.

Lo que no pudo conseguirse fué sacar al mismo tiempo del atraso en que también se hallaba la rendición de las cuentas.

Verdad es, y esto no puede menos de estimarse como justificación del estado de aquel servicio, que, aparte de la índole especial del mismo, que no permite subdividirle como otros, la Contaduría de la Deuda, á quien incumbe, á más de los prolijos trabajos de las formalizaciones, que también la corresponden en su totalidad, tuvo á la vez que ocuparse de otros extraordinarios de no menor importancia y extensión.

Uno de ellos fué el de la conversión de las Deudas amortizables, decretada por la ley de 9 de Diciembre de 1881, el cual la obligó, entre otras operaciones

propias del asunto, á practicar en sus libros los asientos de amortización de los valores siguientes:

	Documentos.	Pesetas.
Títulos del 2 por 100 amortizable interior.. . . .	180.569	458.114.500
Obras públicas.	17.577	8.788.500
Carreteras de Abril de 1851. . . .	2.617	2.617.000
Id. de Agosto de 1852. . . .	9.023	4.511.500
Id. de Junio de 1856. . . .	181	90.500
Id. de Julio de 1856. . . .	2.688	1.344.000
Deuda del personal.	1.796	3.869.938
Deuda del material del Tesoro. . .	141	328.065
Que hacen un total de.	<u>214.592</u>	<u>479.664.003</u>

Después de estos delicados trabajos, retirados del Banco de España, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de 9 de Diciembre de 1881, los títulos de la renta perpetua al 3 por 100 interior que se hallaban garantizando las obligaciones denominadas del Banco y Tesoro, tuvo la expresada oficina que practicar también los asientos y operaciones de amortización y cancelación de los expresados títulos, representados por un

	Documentos.	Pesetas.
<i>Total de.</i>	<u>146.339</u>	<u>2.621.324.000</u>

que es el mismo que resulta de la liquidación á que me referí en mi citada Memoria, practicada para puntualizar la situación de los títulos procedentes de garantías de contratos.

Y últimamente, decretada la conversión de las Deudas consolidada y de ferrocarriles por la ley de 29 de Mayo de 1882, la expresada Contaduría tenía que practicar, y ha practicado ya en casi su totalidad:

1.º La amortización de los valores siguientes:

	Documentos.	Pesetas.
Títulos de la renta perpetua interior.	229.712	3.005.933.500
Obligaciones por subvenciones de ferrocarriles.. . . .	1.135.333	605.421.500
Que hacen en junto.	1.365.045	3.611.355.000

2.º La emisión y después la amortización por conversión en definitivos de los títulos provisionales del 4 por 100 perpetuo, que representan un total de

	Documentos.	Pesetas.
Títulos.	89.958	769.048.000 »
Residuos.	17.733	4.641.989,75
<i>En junto.</i>	107.691	773.689.989,75

Y 3.º La emisión de los títulos definitivos de la expresada Deuda del 4 por 100 perpetuo, por conversión de los provisionales, de los residuos y de las Deudas consolidada y de ferrocarriles, emisión que en 31 de Diciembre de 1881 estaba representada por un total de

	Documentos.	Pesetas.
Títulos.	208.429	1.727.289.500 »
Residuos.. . . .	14.546	3.903.968,75
Que hacen en junto.. .	222.975	1.731.193.468,75

Á pesar de estos importantísimos trabajos, el servicio de que últimamente me he ocupado, esto es, el relativo á la rendición de cuentas, si bien no ha salido, como he dicho, del estado de atraso en que se hallaba, tampoco ha sufrido aumento en este sentido, puesto que en el período de que vengo tratando la Contaduría de la Deuda ha formado y rendido al Tribunal las cuentas generales de gastos públicos y presupuestos de un ejercicio, el de 1870-71, las de operaciones de la Deuda por los ramos de liquidación,

conversión, amortización é intereses de otro año económico, el de 1869-70, y las correspondientes á ocho meses del ejercicio de 1871-72, siendo por consiguiente de esperar, que desembarazada de los trabajos de la conversión y libre en un plazo breve de los de formalización, impulse grandemente la formación y rendición de dichas cuentas.

Tales son los resultados obtenidos con la reforma introducida en la organización de las dependencias de la Deuda, con las medidas adoptadas para la ejecución de los servicios expuestos y la persistente atención que les he consagrado.

DIRECCIÓN GENERAL

DE LO CONTENCIOSO DEL ESTADO.

Otro de los decretos que tuve el honor de presentar á la firma de S. M., fué el de 10 de Marzo de 1881 creando el Cuerpo de Abogados del Estado, propuesto por el que entonces era Asesor general, D. José Gallostra, cuya ilustración y competencia son de todos conocidas.

Para comprender exactamente la trascendencia de esta reforma, es preciso atender á la importancia de las funciones de asesoramiento y demás propias de abogados en la administración de la Hacienda pública, y á la organización que hasta la fecha indicada tuvieron los diversos elementos á quienes estaban confiadas tan elevadas funciones.

Respecto á lo primero, lo mismo el ilustre hombre de gobierno, D. Juan Bravo Murillo, que militaba en el campo moderado, que los demócratas, Sres. Tutau y Pedregal, todos reconocieron la necesidad, ya de un Centro consultivo y directivo en Derecho, ya la de un Cuerpo compuesto de letrados conocedores de la Jurisprudencia y experimentados en la Administración,

que, asesorando á ésta para procurar el acierto en sus resoluciones y dirigiendo los asuntos que se ventilasen en los Tribunales á nombre ó de interés de la Hacienda, á fin de conseguir su mejor defensa y la homogeneidad de los principios que hubieran de sustentarse, lograran además encarnar en el procedimiento administrativo las doctrinas del Derecho, y promovieran las oportunas reformas en esta interesante parte de la legislación en vista de los progresos de la ciencia y de los resultados, efectos é influencias de las disposiciones vigentes, estudiados en la escuela práctica de los hechos y de los negocios.

Prescindiendo de que hay muchos impuestos que por su índole requieren, para su más acertada gestión y administración, el concurso de personas peritas en Derecho, la mayor parte de los asuntos que se ventilan en el ramo de Hacienda entrañan cuestiones jurídicas. No es extraño, por tanto, que en todas épocas los Ministros encargados de este Departamento hayan sentido la necesidad del asesoramiento por abogados, ni podía serme desconocida la importancia de sus funciones.

Claramente se comprenden las ventajas que ha de reportar á la Administración el consejo inteligente de los funcionarios conocedores del Derecho, á fin de que las resoluciones adoptadas en la vía gubernativa tengan sus fundamentos en la ley, y no puedan ser eficazmente combatidas ó impugnadas, mereciendo por otra parte el respeto y la consideración general.

Mas al propio tiempo, la necesidad de atender á la eficaz defensa de los intereses del Estado que se ventilan en juicio, exige de suyo, no sólo el conocimiento del Derecho civil, sino el conocimiento de la Administración y de su organismo, y la experiencia que se adquiere en su diario servicio. Así, este Cuerpo jurí-

dico para el asesoramiento de la Administración activa es al propio tiempo el más especialmente llamado á dirigir los asuntos de interés del Estado, en su mayor parte del ramo de Hacienda, que se ventilan en juicio, lo que después de todo se explica fácilmente si por otra parte se atiende á que nadie puede defender mejor la providencia impugnada, que aquel que puso sus fundamentos y la produjo con su informe, ni dirigir la acción que se entabla y que también preparó con su dictamen.

Y todavía la necesidad de estas funciones se siente más vivamente en un país donde, por numerosas causas, no ha llegado la Administración pública á alcanzar una organización perfecta y en el cual las providencias que de ella emanan no logran de los administrados el debido respeto. De aquí la importancia de funcionarios que, con especiales conocimientos, penetrados de la alteza de su misión, responsables y al mismo tiempo con la independencia precisa para ejercer con imparcialidad una fiscalización científica, sean celosos y constantes defensores de la ley, garantía de los intereses sociales y amparo de los derechos de los particulares; eviten que á título de interpretación se incurra en arbitrario casuismo, ó á pretexto de equidad se llegue á una desigualdad irritante; procuren que los derechos de la Hacienda no se lesionen por ignorancia de la ley ni se desconozcan de los administrados; é infiltren, en fin, en el organismo de la Hacienda un sentido jurídico y un elevado espíritu de rectitud y de justicia, que le hagan merecer el prestigio, la consideración y el respeto de todos.

Ahora bien; tan elevados fines sólo pueden conseguirse con una acertada organización de los elementos de asesoría, y para explicar el Real decreto de 10 de Marzo de 1881 y su importancia y trascendencia

en la Administración, preciso es examinar la situación en que encontré esos elementos.

Existía por una parte la Asesoría general del Ministerio, cuya reorganización me cupo también la honra de llevar á cabo, poniendo á la firma del Presidente del Poder Ejecutivo el decreto de 26 de Julio de 1874. Suprimida por decreto de la Regencia de 30 de Junio de 1869, dejó un vacío que en vano se había tratado de llenar, ya con la reunión de letrados en el Ministerio, ya con la de un Cuerpo colegiado en que se transformó aquélla por decreto de 5 de Mayo de 1873, y que fué más tarde suprimido para establecer, aunque en distinta forma, la antigua sección. Inútiles, como se expuso en el preámbulo, habían sido los ensayos intentados durante los últimos cinco años para sustituir el inteligente y á la vez respetable asesorado con que contaban el Ministerio y sus altas dependencias en el Centro suprimido, que había reemplazado á la Dirección de lo Contencioso, y aconsejaba con notoria autoridad sobre las resoluciones que podían ser objeto de demanda ante los Tribunales de justicia ó administrativos, y facilitaba con su merecido prestigio y con sus atribuciones resolutivas la defensa de los intereses fiscales que en los mismos se ventilaban.

El decreto de 26 de Agosto de 1874 estableció las bases de organización de la Asesoría, determinando la esfera de sus atribuciones y dictando reglas para sus relaciones con los otros Centros y dependencias de la Administración pública. Sus facultades eran las que había tenido la Dirección de lo Contencioso respecto al consejo y dirección de los asuntos contenciosos que se ventilaban ante los Tribunales, y éstas eran las que fundamentalmente conservaba, aunque había unido á su denominación la de Dirección de lo Contencioso, y se había declarado que le correspon-

día dirigir, comunicando instrucciones, todos los negocios en que tuviese interés el Estado y se sustanciase ante los Tribunales.

Respondiendo, como era consiguiente, en 1874 á la necesidad más apremiante de restablecer un Centro á cuyo frente existiera un alto funcionario versado en la ciencia del Derecho y de verdadera responsabilidad, que asesorase al Ministro para tranquilidad de su conciencia y mayor garantía de los intereses públicos, no era por entonces posible conseguir una organización perfecta. Así, sólo se exigió la cualidad de letrados á los jefes de Negociado y no á los oficiales, y no se reconocieron tampoco aquellos derechos que, si no indispensables para el honrado ejercicio de tan especiales funciones, sirvieran, sin embargo, de mayor garantía de independencia y de imparcialidad.

Por otra parte, existía un Cuerpo, muy modesto en verdad, pero que en el período de su vida, luchando siempre con la contrariedad, había alcanzado brillantes resultados para la Administración. Su organización y sus funciones han podido servir en cierto modo de norma y base á la creación del Cuerpo de Abogados del Estado.

El Cuerpo de Letrados de Hacienda, al que me refiero, nació como ensayo de un sistema general y de un plan más vasto acariciado en 1867, á saber: la creación de cuerpos especiales en la Hacienda pública; y se encomendó á sus individuos la administración del impuesto de Traslaciones de dominio. La ley de su creación exigía á estos funcionarios conocimientos especiales, acreditados en oposición pública, y les concedía el derecho de la inamovilidad.

Antes que tomasen posesión de sus nuevos cargos, el decreto de 26 de Junio de 1868, que suprimió los Promotores fiscales de Hacienda, les impuso el más

importante y elevado deber de asesorar á los funcionarios de la administración provincial, sin darles, sin embargo, los medios y las condiciones indispensables y adecuadas á sus nuevas funciones. Pero á pesar de que nunca llegaron á una conveniente organización; aunque su modesta posición oficial podía quitar prestigio y autoridad á sus dictámenes, no sintiéndose por esto tan eficazmente como fuera de desear su influencia en la Administración; aunque sus defensas de la ley suscitasen contra ellos, dentro y fuera de aquella, cierto espíritu de hostilidad, ese Cuerpo consiguió mejorar notabilísimamente la administración de un impuesto cuya importancia no es aún hoy generalmente conocida, y cuyos rendimientos han crecido extraordinariamente; asesoró á la Administración provincial; consiguió llevar á sus resoluciones la unidad de criterio, inspirado en los principios de justicia y de una equidad rectamente entendida y aplicada; fué fiscal y mantenedor en toda su pureza del procedimiento; amparó los intereses del Estado y los derechos de los particulares, procurando á éstos la intervención que les concedían las leyes para su defensa; y dulcificó, en consecuencia, la antigua aspereza de relaciones entre la Administración y los administrados.

Como lo defectuoso al fin se siente por las diarias lecciones de la experiencia, encuéntranse en nuestras modernas disposiciones algunas que revelan que se conocía la imperfecta organización de ese Cuerpo y existían tendencias hacia una reforma, que no había, sin embargo, recibido un poderoso impulso hasta la publicación del Real decreto de 10 de Marzo de 1881.

Así, atendiendo á la importancia capital de los deberes de asesoría encomendados á los letrados de Hacienda, se les hizo depender en Abril de 1875 de

la Asesoría general del Ministerio, y fueron destinados algunos de sus individuos á prestar servicios en el Centro. Por otra parte, la conveniencia de atender á la mejor y más eficaz defensa de los derechos del Estado en juicio, aconsejó en Octubre de 1876 destinar también algunos letrados á auxiliar á los fiscales de determinadas Audiencias.

No podía menos de llamar mi atención la situación anómala é irregular en que se encontraban los elementos de asesoría. De una parte, la Asesoría general aconsejando al Ministerio y á los Centros, y comunicando instrucciones á los fiscales en los asuntos contenciosos de interés del Estado; de otra, los letrados de Hacienda asesorando á la Administración económica provincial, prestando servicios en algunos Centros, auxiliando á los fiscales de las Audiencias en el despacho de los negocios contenciosos en que estuviese interesado el Estado; sin que, á pesar de la analogía de las funciones, existiese más dependencia que la meramente personal de los últimos al Centro, insuficiente para lograr la unidad que requiere una organización bien entendida.

Ya en algunas revistas, como la del *Impuesto de derechos reales* y la de *Hacienda*, sostenidas por el Cuerpo de Letrados, que llamaron la atención hacia los estudios administrativos, y señaladamente hacia los económicos, habían aparecido proyectos de creación de un gran Cuerpo Jurídico de Hacienda; pero no se había llegado á una fusión que aconsejaban imperiosamente las circunstancias, las conveniencias de este servicio y la necesidad de basar la organización de aquellos elementos en principios de unidad, dada la analogía de sus funciones.

El Real decreto de 10 de Marzo de 1881 fundió esos elementos, les dió la apetecida unidad; concedió

á unos y reivindicó para otros el derecho á la estabilidad, garantía de la imparcialidad de sus funciones, y que no es, como algunos pretenden, la irresponsabilidad; abrió mayores horizontes al porvenir de sus individuos, ofreciéndoles nuevos estímulos, é hizo depender á todos de un Centro común, con autoridad bastante para dirigirlos.

Expuestos se hallan en el preámbulo del Real decreto los principios, fundamentos, condiciones y fines que me propuse al crear el Cuerpo de Abogados del Estado, de quienes esperaba que, « precedidos de garantías de suficiencia, y estimulados por las ventajas » de la escala cerrada y el riguroso ascenso, y defendidos por una estabilidad reglamentaria, lograsen, » bajo una dirección única, entendida, perseverante y » enérgica, todas las condiciones que reclama el importante servicio que se les tiene encomendado.»

Ya entonces se manifestó que la reforma no era completa y que necesitaba de mayores ampliaciones y perfeccionamientos. Pero el hombre previsor y de gobierno, cualquiera que sea el ideal que conciba sobre la organización de un servicio, no puede desatender las circunstancias, y lleva á la práctica sus ideas en cuanto han de ser viables y posible su realización, sin desatender otros servicios importantes.

Por lo demás, claro es que la reforma llevada á cabo no alcanzó el límite de perfección necesario, y que necesita mayor ampliación el pensamiento que dió vida al Cuerpo de Abogados del Estado, si ha de cumplir todos los fines que deben encomendársele, y que principalmente se refieren :

1.º Á informar á la Administración para buscar el acierto en las resoluciones que adopte en la vía gubernativa, procurando el prestigio de aquélla, dándole unidad de criterio y evitando litigios, por estar

fundadas en la ley las providencias que quisieran impugnarse.

2.º Á dirigir y quizás, en casos dados, á representar en juicio al Estado, defendiendo los asuntos en que el mismo tenga interés, que son principalmente de Hacienda, porque nadie puede defender mejor la resolución combatida, ó dirigir con más acierto la acción que se entable, que el funcionario que con su informe dió origen á aquélla ó preparó ésta poniendo sus fundamentos.

Y 3.º Á ejercer una alta fiscalización, bajo el aspecto jurídico, en la Administración; defendiendo con celo la ley, expresión de la justicia y garantía de los intereses públicos y de los derechos de los particulares, y velando por la pureza del procedimiento administrativo.

Pero aun dentro de los límites en que se encerró la reforma, no obstante mis aspiraciones, ha producido ya importantes beneficios á la Administración, sintiéndose los efectos de una organización más acertada de estas funciones. El servicio se ha mejorado, tanto en el Centro como en provincias; la Dirección de lo Contencioso y los funcionarios destinados á otras dependencias alcanzaron mayor autoridad; y el número de expedientes en que emitieron informe prueba el prestigio que alcanzan sus dictámenes, al propio tiempo que se acredita también, en su creciente actividad, los efectos de haberles concedido mayores estímulos.

GENERALIDADES DEL ESTADO

CUENTAS GENERALES DEL ESTADO.

No bastaba que para remediar el atraso con que venían rindiéndose las cuentas generales del Estado estableciera la ley de 27 de Diciembre de 1878, á partir de 1879, una época de contabilidad corriente, á reserva de que, continuándose á la vez la liquidación y ajuste de las cuentas anteriores, se enlazaran en su día los resultados de éstas con aquéllos, de que había de partir la nueva contabilidad ; preciso era, para levantar el cúmulo de trabajo que por consecuencia de aquel retraso se había aglomerado, crear los elementos necesarios, y ciertamente que no lo eran los que con tal fin se llevaron á la Intervención general de la Administración del Estado, según lo consigné detalladamente en la exposición que precedía al Real decreto de 24 de Mayo de 1881, en virtud del cual se aumentó en aquel Centro una sección de empleados con destino exclusivo á la formación de las cuentas generales atrasadas, y á fin de que el personal existente en el mismo pudiera ocuparse de la contabilidad corriente y de los demás servicios propios de la Intervención ; siendo mi propósito conseguir mantener al

corriente la contabilidad de la nueva época y levantar el atraso de la anterior, penosa y difícil por las causas que expresé en aquel documento, en términos que permitieran rendir una cuenta general de la corriente y otra, por lo menos, de la atrasada en el período de cada ejercicio.

Si no he conseguido ver realizadas todas mis aspiraciones, lo cual en verdad no era posible en tan corto plazo, he logrado que se diera gran impulso á tan importante servicio.

En el mes de Febrero de 1881 estaban presentadas originales á las Cortes, con el proyecto de ley de aprobación, las cuentas definitivas de 1867-68. Posteriormente se terminaron las anuales y provisionales de 1868-69, habiéndose presentado á las Cortes en 12 de Marzo de 1883 la cuenta anual impresa de este último año, que comprende á su vez las anteriores.

En Junio de 1881 se terminaron las definitivas de Rentas y Gastos públicos y de presupuestos del ejercicio de 1868-69. En 1.º de Abril de 1882 las de 1869-70, de Tesoro, Propiedades, Administración, Deuda y Caja de Depósitos, así como también las provisionales de este año, que con las anteriores forman la cuenta anual de 1869-70, presentada también impresa á las Cortes en 12 de Marzo de 1883, con el proyecto de ley sobre aprobación de las definitivas del año anterior.

En 1.º de Octubre del mismo año 1882 se remitieron al Tribunal de Cuentas del Reino las definitivas de 1869-70.

Han quedado, por último, muy adelantadas las de 1870-71 y las de 1879-80.

CONVERSIÓN DE LAS DEUDAS

AMORTIZABLES.

I.

La necesidad de llevar á cabo la conversión de las Deudas amortizables estaba reconocida por todos, hasta el punto que mi digno predecesor en el Ministerio de Hacienda ha proclamado que yo no he hecho otra cosa en este asunto que utilizar un pensamiento suyo, pretendiendo atribuirme un mérito que sólo á él y á su partido corresponde.

Ni en el pensamiento hay mérito especial, ni puede haberlo. Nadie podía dudar hacía mucho tiempo que desde el momento en que los valores que constituían las llamadas Deudas amortizables gozaban en las transacciones el cambio de par y el interés del numerario había decrecido, era de reconocida conveniencia el proceder á una conversión que disminuyera el interés que por ellas satisfacía el Estado y llevase á más largo plazo las amortizaciones del capital ; y á nadie se ocultaba, al propio tiempo, que siendo preciso hacer una operación que extinguiera la Deuda flotante del Tesoro, que tan grandes proporciones había alcanzado nuevamente tras las repetidas emisiones que consti-

tuían aquellas Deudas, debiera aprovecharse tal ocasión para verificarla.

Por otra parte, la nivelación del presupuesto, tan ofrecida y nunca cumplida, exija que se disminuyese cuanto fuera dable la cantidad que en el mismo figuraba para las expresadas atenciones por pago de intereses y amortización.

Si algún mérito pudiera resultar en la realización del pensamiento, sería el que ofrecieran los procedimientos empleados para conseguirlo; y yo, que en este punto no me he atribuido ninguno sino en el momento en que se me ha excitado, afirmando que hubieran sido mejores los que antes se proyectaban, me veo en la imperiosa necesidad de tratar esta cuestión bajo todos sus aspectos, para dejar probada la sinrazón con que se me ha combatido.

PRIMER PUNTO. — La conversión proyectada por mi entendido antecesor ¿llenaba las necesidades del Tesoro y colocaba á éste en un verdadero estado de solvencia?

Me atrevo á asegurar que no.

El Gobierno proyectaba la conversión en los primeros días de Febrero de 1881, y en honor á la verdad, el Ministro de Hacienda la tenía hasta cierto punto concertada con el Banco de España en los términos que aparecen del apéndice adjunto á este capítulo, siendo sólo cuestión la fijación del tipo á que hubiera de emitirse el nuevo valor, que, según mi digno antecesor ha manifestado en el Congreso de los Diputados, creía ó aspiraba fuese el de 92, y según se dijo entonces, el Banco se proponía no pasar de 90. Pero sea de ello lo que fuere, pues no importa á mi propósito depurar esta circunstancia, es lo cierto que la presentación del proyecto á las Cortes, su discusión y los procedimientos consiguientes á una operación de esta

indole no hubieran permitido llevarla á cabo antes de 1.º de Junio.

Pues bien : en esa fecha, los valores llamados á convertir hubieran tenido la importancia siguiente :

Obligaciones Banco y Tesoro.	Ptas.	376.375.000
Obligaciones de Aduanas.	»	122.900.000
Bonos del Tesoro.	»	336.194.000
Deuda flotante.	»	239.789.119
<i>En junto.</i>	»	<u>1.075.258.119</u>

Y la cantidad que anualmente exigiría el pago de intereses y amortización sería la de. Ptas. 128.078.000

En el plan del Sr. Ministro, el Banco de España debería retener de las contribuciones que recauda para atender á la amortización é intereses del nuevo valor. » 77.327.000

De consiguiente la suma que venía á constituir una menor obligación en el presupuesto de gastos hubiera sido. . . » 50.751.000

En la suma de valores que había de convertirse por el procedimiento de mi digno antecesor figura la Deuda flotante por la cantidad de 240 millones de pesetas, número redondo, por las razones siguientes :

La expresada Deuda ascendía en 30 de Junio de 1881 á. Ptas. 173.789.119

Y hago gracia de lo más á que pudiera haber ascendido, pues esa cifra era ya mínima y resultado de mi gestión, según queda indicado en el capítulo *Deuda flotante*.

Era el importe de lo que hubiera exigido el pago del cupón de 1.º de Julio, con arreglo á los precedentes establecidos. » 66.000.000

Total. » 239.789.119

Mas como quiera que el déficit del presupuesto que era necesario cubrir, si existía verdaderamente el propósito de llegar á la nivelación, ascendía á. *Ptas.* 116.988.899,03

Y el aumento que el nuevo presupuesto para 1881-82 estaba llamado á tener por el un cuartillo por ciento que con arreglo á los convenios de 1876 con los acreedores del Estado debían estos recibir por intereses sobre lo que venía satisfaciéndoseles, era de. » 22.988.349,50

En junto. » 139.977.248,53

Y prescindo del aumento que en rigor procedía en la partida del cupón de Deuda exterior por el cambio de 5,40 correspondiente á un 8 por 100, y que sobre los 10.284.767,50 á que aquélla ascendía, importan 822.781 pesetas.

Demostrado que llevada á cabo la conversión entonces proyectada, la cantidad que venía á constituir una menor obligación en el presupuesto de gastos hubiera sido de. *Ptas.* 50.751.000 »

Resultaría una insuficiencia de recursos despues de hecha la conversión y para que el presupuesto quedára nivelado de. » 89.226.248,53

Vengamos ahora á la conversión proyectada por mí y realizada con arreglo á la ley de 9 de Diciembre de 1881.

Las Deudas amortizables existentes á la sazón, y á cuya cancelación yo aspiraba, importaban, según por-menor que más adelante detallaré, 1.522.115.940 pesetas, y seguirían produciendo en otro caso el siguiente gasto anual :

Las obligaciones del Banco y Tesoro. . .	<i>Ptas.</i>	71.220.000
Las obligaciones sobre Aduanas.	»	19.488.000
Los Bonos del Tesoro.	»	37.370.000
Los resguardos al portador de la Caja de Depósitos.	»	5.548.400
La Deuda amortizable al 2 por 100 exterior.	»	13.963.406
La Deuda amortizable al 2 por 100 interior.	»	26.782.804
Las acciones de Obras públicas.	»	819.100
Las de carreteras.	»	2.428.387
Los billetes del material del Tesoro.	»	66.250
La Deuda del personal.	»	1.250.000
La Deuda flotante.	»	14.175.000
<i>Que suman.</i>	»	<u>193.111.347</u>

Y como la anualidad necesaria para intereses y amortización de la nueva Deuda al 4 por 100 importaría, con la comisión del Banco.	»	<u>91.631.250</u>
Resultaba una economía ó sea reducción en los gastos públicos de.	»	<u>101.480.097</u>

Dejo hecha la comparación de uno y otro proyecto, y sólo debo añadir, como tributo á la exactitud, que siendo potestativo el presentarse á la conversión algunos de los valores que yo comprendía, hubiera podido llegar á producirse una baja, aunque nunca de grande importancia, si no acudían todos á ella.

Pero como mi objeto ha sido solamente presentar estos proyectos uno al lado de otro para demostrar el mayor beneficio que el mío ofrecía á los intereses del Tesoro, creo que lo he conseguido.

Réstame únicamente recordar sobre este punto que, según queda expuesto, por el proyecto de mi antecesor faltaban pesetas 89.226.248,53 para cubrir el déficit del presupuesto y la obligación de pago de intereses de la Deuda pública, siéndome lícito preguntar:

¿Por qué medios se cubría la expresada suma al formarse el nuevo presupuesto? ¿Sería con aumento en las contribuciones existentes, ó con la creación de algún nuevo tributo, toda vez que era imposible la disminución en los gastos? Desde luego puede asegurarse que tales procedimientos estarían muy lejos de justificar la oposición que se me ha hecho.

Dejando á un lado la posibilidad de un aumento en las contribuciones existentes, ya por medio de reformas, ya por elevación de tipos, pues basta á mi propósito la indicación que acabo de hacer, vengamos á ocuparnos del segundo extremo, esto es, del establecimiento de un nuevo impuesto.

Puede afirmarse que no hubiera sido más popular que el que á propuesta mía votaron oportuna y convenientemente las Cortes, el *equivalente á los que existían sobre la sal*, que tan censurado ha sido, bastando, sin embargo, para completa satisfacción mía, los beneficiosos resultados que con él se han obtenido y que quedan suficientemente explicados en su lugar correspondiente.

Pero no debo fatigarme en buscar la solución del problema que he presentado, cuando tengo á la vista un programa de la misma dignísima persona, que, desempeñando el Ministerio de Hacienda, se proponía llevar á cabo el pensamiento de la conversión.

Decía el Sr. Cos-Gayón en el Congreso de los Diputados, sesión del 14 de Enero de 1881, esto es, veinticuatro días antes de cesar en el cargo de Ministro de Hacienda, lo siguiente, que constituye un verdadero programa de sus opiniones respecto al presupuesto de ingresos que estaba preparando ó que, según se ha desprendido de sus manifestaciones posteriores, tenía ya formado :

«Hay, pues, que tomar en cuenta: primero, la nece-

»sidad de reforzar el presupuesto de ingresos; segun-
»do, las dificultades é inconvenientes graves que se
»oponen á toda clase de establecimiento de impues-
»tos nuevos ó acrecentamiento de los existentes; y
»tercero, los movimientos de la opinión en determi-
»nado sentido, que tratándose de nuevos impuestos ó
»de aumentar los existentes, toman ciertas tendencias
»ó las contrarian. Y respecto de la sal tenemos ade-
»más que tomar en consideración que no por nosotros,
»sino por vosotros, se decretó en 1874 que por sepa-
»rado de la contribución de Consumos se estableciera
»una contribución sobre la sal; que esa contribución
»sobre la sal no se ha mantenido con la independen-
»cia de la de Consumos que vosotros mismos queriais;
»que no produce, no ya la cantidad que vosotros que-
»ríais sacar de ella, sino otra muchísimo menor, y
»que en la imposibilidad absoluta que hay de pensar
»en un aumento de la contribución Territorial, y en
»la dificultad de establecer nuevos impuestos ó au-
»mentarlos sobre las contribuciones indirectas, surge
»en el ánimo de todos los que se ocupan de estas ma-
»terias una cuestión que no es de este momento espe-
»cial, sino de todos los momentos y de todos los tiem-
»pos y de todos los países, relativa á la mayor facilidad
»que un impuesto sobre la sal pueda ofrecer respecto
»de otros gravámenes y de otros impuestos.»

Es evidente, pues, en presencia de estas declara-
ciones, que mi ilustrado antecesor no tenía en reser-
va otros recursos para cubrir el déficit de 89.226.000
pesetas que había de resultarle en el nuevo presu-
puesto, después de hecha la conversión de las Deudas
amortizables, sino una contribución sobre la sal; y no
quiero decir que se propusiera restablecer el estanco,
porque no tengo en este punto antecedente cierto y
seguro.

Ahora bien : si bajo el principio de obtener una suma equivalente á los productos del estanco he impuesto yo un tributo de 21.000.000 de pesetas, y ha suscitado la contradicción y el clamoreo que todos han visto, ¿á dónde hubiera llegado éste si hubiera pretendido obtener, por el estanco ó sin él, la suma de 89.226.000 pesetas?

Y prescindo, en gracia de la brevedad, y mucho más por otras respetables consideraciones, de sacar todo el partido á que se prestan para mi defensa las expresadas declaraciones.

SEGUNDO PUNTO. — ¿Existían ó no diferencias esenciales entre el proyecto formulado por mi antecesor y el que tuve la honra de presentar á las Cortes, elevado á ley en 9 de Diciembre de 1881?

Yo creo que sí, y paréceme que no me ha de costar gran trabajo llevar al ánimo de todos el convencimiento de que existían esenciales diferencias entre los dos proyectos, hasta el punto que no guardan otra semejanza que la de que el uno y el otro se ocupan de la conversión de las expresadas Deudas.

En el que estaba proyectado, el importe de la operación se elevaba á pesetas 1.100.000.000, y en el que á mi propuesta llegó á ser ley, á 1.800.000.000 de pesetas.

El período de duración para las amortizaciones se fijaba en veinticinco años en el de mi antecesor, y en cuarenta en el propuesto por mí.

En el primero el interés que devengaría el valor que se emitiese era el de 5 por 100, y en el segundo el de 4.

El tipo de la emisión se reservaba en el primero, y en el segundo se fijaba en 85 por 100.

Creo que semejantes diferencias constituían condiciones de tan diverso alcance, que hacían esencialmente distintos ambos proyectos.

Otra diferencia, que no deja de ser importante, existía entre uno y otro, no por lo que se relacionase con la mayor ó menor bondad de la operación en sí misma, sino por lo que pudiera influir en su éxito; me refiero á la suscripción pública que se consignaba en el de mi antecesor, y de la que yo prescindí con razón poderosa para obrar de esta manera.

¿Estaba concertada con el Banco la operación? Pues la suscripción pública sólo podía tener por objeto que aquel Establecimiento adquiriese menos valores, idea que no vacilo en calificar de prudente, pero que, á mi juicio, podía acaso no llenar cumplidamente el intento. Si se presentaban solicitando el reembolso más número de valores que lo que en este concepto fuera de desear, el Banco acrecería su cartera y disminuiría el metálico de su Caja, resultando que lo que aquel pensamiento beneficiaba, los hechos podían convertirlo en daño.

Yo creí, y es particular de que me ocuparé con alguna detención más adelante, prescindir de la suscripción, y así lo estimó en aquella ocasión la Administración del Banco, ya porque éste podía asociarse los elementos que creyese oportuno, ya también porque, en mi juicio, daba más importancia á la operación y podía favorecer mucho la conversión, evitando que los interesados reclamasen el reembolso. El éxito, afortunadamente, no defraudó mis esperanzas.

II.

Votada la ley y contratada ya la negociación con el Banco de España, procede ahora presentar la liquidación general de la operación.

La ley de 9 de Diciembre de 1881 autorizó al Gobierno para emitir 4 por 100 amortizable por pesetas nominales. 1.800.000.000 »
Y siendo el tipo de negociación el 85 por 100, á haberse emitido la totalidad de dicha suma, su producto efectivo sería. 1.530.000.000 »
para atender á la conversión ó reintegro de los siguientes valores :

Valor nominal.	Valor efectivo.
352.850.000 » De obligaciones Banco y Tesoro, á la par.	352.850.000 »
117.050.000 » De id. sobre Aduanas, á la par.	117.050.000 »
326.694.500 » De Bonos del Tesoro, á la par.	326.694.500 »
25.945.500 » De resguardos de la Caja de Depósitos, á la par.	25.945.500 »
247.703.200 » De Deuda amortizable al 2 por 100 exterior, á 50 por 100.	123.851.600 »
475.088.800 » De id. interior, á id.	237.544.400 »
10.546.500 » De Obras públicas, al 76 por 100.	8.015.340 »
2.285.000 » De Carreteras. — 1.º de Abril de 1850, á la par.	2.285.000 »
5.745.500 » De id. 31 de Agosto de 1852, al 80 por 100.	4.596.400 »
152.500 » De id. 25 de Julio de 1855, al 80 por 100.	122.000 »
1.516.500 » De id. 6 de Junio de 1856, al 80 por 100.	1.213.200 »
148.000 » De material del Tesoro, á la par.	148.000 »
8.500.000 » De Personal, al 80 por 100.	6.800.000 »
315.000.000 » Deuda flotante, á la par (cálculo).	315.000.000 »
1.889.226.000 » <i>nominales.</i>	1.522.115.940 »
<i>Efectivos.</i>	
De manera que si todo se hubiese emitido y todo convertido, quedaría un remanente de.	7.884.060 »
para atender á	

Los gastos de la operación, su importe.	2.103.718,30
El aumento de acciones de Carreteras de 1.º de Abril de 1850 por no haberse hecho en Diciembre la amortización correspondiente, á causa de no haberse presentado proposiciones en la subasta.	332.000 »
La Deuda del material del Tesoro emitida con posterioridad á la fecha del estado de la Deuda en circulación que sirvió de base al proyecto de ley, efectivo.	180.000 »
Idem en crédito de la misma Deuda del material y del personal, pendiente de emisión.	1.194.745 »
Por la mitad del cambio que venía reconocido á la Deuda amortizable al 2 por 100 exterior.	4.954.064 »
<i>Faltando sólo.</i>	940.530,30

Siendo la conversión voluntaria en cuanto al 2 por 100 exterior y á los demás valores cuyos cambios se fijaban por bajo de la par, dejaron de convertirse:

Valor nominal.	Valor efectivo.
108.170.200 » De Deuda amortizable al 2 por 100 exterior, que al 52 por 100, 50 de su par y 2 mitad del cambio reconocido á estos valores á su creación, importan.	56.248.504 »
Y 2 por 100 de lo presentado en Madrid, que ha ascendido á 919.000 pesetas, convertibles al 50 por 100 por no tener beneficio de cambio.	18.380 »
Acciones de Obras públicas, al 76 por 100.	1.336.080 »
Id. de Carreteras.—31 Agosto 1852, al 80 por 100.	987.200 »
Id. id. 25 Julio 1855, al 80 por 100.	49.600 »
Id. id. 6 Junio 1856, al 80 por 100.	138.000 »
Deuda del personal, al 80 por 100.	3.704.046 »
<i>Total efectivo.</i>	62.481.810 »

Suma anterior. 62.481.810 »

Mas como, por otra parte, los valores á convertir tuvieron, como se ha demostrado, un aumento de. 1.706.810 »

Se eleva la baja líquida á. 60.775.000 »

que capitalizada al 85 por 100, da un nominal de. 71.500.000 »
Y como el total de la emisión autorizada era de. 1.800.000.000 »
Quedó reducida la emisión á pesetas nominales. 1.728.500.000 »
Que hacen un efectivo de. 1.469.225.000 »

Á este efectivo se le ha dado la siguiente

APLICACIÓN.

Valor nominal.		Valor efectivo.
352.850.000 »	De obligaciones Banco y Tesoro convertidas ó reembolsadas á la par.	352.850.000 »
117.050.000 »	De obligaciones sobre Aduanas, á la par.	117.050.000 »
326.694.500 »	Bonos del Tesoro, á la par.	326.694.500 »
25.945.500 »	Resguardos de la Caja de Depósitos.	25.945.500 »
138.614.000 »	2 por 100 ext. presentado en el Extranjero, al 52 por 100.	72.079.280 »
919.000 »	Id. id. en Madrid, al 50 por 100.	459.500 »
475.088.800 »	Id. interior, al 50 por 100.	237.544.400 »
8.788.500 »	Acciones de Obras públicas, al 76 por 100.	6.679.260 »
2.617.000 »	Id. de Carreteras.—1.º Abril 1859, á la par.	2.617.000 »
4.511.500 »	Id. id. 31 Agosto 1852, al 80 por 100.	3.609.200 »
90.500 »	Id. id. 25 Julio 1855, al 80 por 100.	72.400 »
1.344.000 »	Id. id. 6 Junio 1866, al 80 por 100.	1.075.200 »
		328.065 »

1.344,000 »	Id.	6 Junio 1866, al 80 por 100.	1.075,200 »
328,065 »	Material del Tesoro, á la par.		328,086 »
3.869,938 »	Personal del Tesoro, al 80 por 100.		3.095,954 »
1.194,745 »	Material y personal pendiente de emisión.		1.194,745 »
186.378,943,63	Deuda flotante en 31 de Diciembre de 1881, á la par.		186.378,943,63
2.163,716,30	Gastos de la operación..		2.163,716,30
62.769,086,15	Entregados por el Banco para pagar descubiertos del Tesoro, déficits anteriores..		62.769,086,15
66.618,249,92	Existentes en el Banco ganando el 4,71 por 100 de interés.		66.618,249,92

Igual al producto de la emisión. 1.469.225.000 »

— 395 —

Segun queda demostrado, el total producto de la liquidación importó. *Plus.* 1.469.225.000 »
De la expresada suma corresponde á la nueva Deuda al 4 por 100 entregada en canje de las antiguas amortizables. » 1.151.295.004 »
Queda, pues, como verdadero producto de Deuda emitida y negociada para cubrir déficits y otras atenciones. » 317.929.996 »
Deducido de este producto el importe de los gastos de la operación que se detallan en la liquidación oficial. » 2.163.716,30
Resulta un producto líquido, cuya aplicación se determina en la precitada memoria, de. » 315.766.279,70

III.

Lo expuesto podría bastar para que fuese conocido el empleo que ha tenido el producto de la emisión; pero como en uso de un derecho que estoy muy lejos de desconocer han deseado algunos, en presencia de la liquidación oficial presentada á las Cortes, que se dieran mayores explicaciones, voy á ver si consigo disipar todas las dudas que se les han ofrecido, demostrando al mismo tiempo la exactitud de los resultados que aquélla presenta.

Deseoso, pues, de realizar de la mejor manera mi propósito, y comprendiendo que el método conciso empleado por la Intervención general era la causa de aquellas dudas sobre el empleo dado á las precitadas pesetas 315.766.279,70, me decidí á formar una nueva que por su forma más extensa hiciese desaparecer toda observación. Para ello me he valido de los datos oficiales que son de dominio público y de algunas noticias, muy contadas por cierto, que hubé de pedir á la Intervención general del Estado.

Fueron estas últimas:

1.º Las diferencias que pudieran existir en el cálculo de la situación del Tesoro en fin de Agosto de 1881, que sirvió de base al proyecto de conversión presentado á las Cortes en 24 de Octubre del mismo año, y lo que los hechos posteriores acreditasen.

2.º El importe de las sumas que en los pagos de los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre no hubiesen producido salida material de fondos, por constituir formalizaciones.

3.º El importe de las cantidades que, figurando en el activo del Tesoro en el precitado estado de situa-

ción de fin de Agosto de 1881, se hubiesen realizado durante los ejercicios de 1880-81 y primer semestre de 1881-82.

Con presencia de estos datos, he aquí la liquidación que he formado, y que viene á demostrar, como antes he dicho, la exactitud de la comprendida en la Memoria presentada á las Cortes por el Sr. Ministro de Hacienda en 12 de Marzo del corriente año.

DEMOSTRACIÓN DE LA INVERSIÓN QUE HAN TENIDO LAS PESETAS 315.766.279,70 PRODUCTO LÍQUIDO DE LA CONVERSIÓN, DEDUCIDO EL IMPORTE DE LOS GASTOS.

La Deuda flotante que existía en fin de Agosto de 1881, según la Memoria presentada á las Cortes en 24 de Octubre del mismo año, importaba.. . . . *Ptas.* 216.485.803,85

En la expresada Memoria se calculó que el exceso de los pagos sobre los ingresos en los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre por el ejercicio de 1880-81, que se encontraba en el período de ampliación, sería de 40 millones de pesetas, elevándose, sin embargo, según aparece de los respectivos estados de recaudación y pagos publicados por la Intervención general, á las sumas siguientes:

	Ingresos.	Pagos.
En Setiembre..	4.351.532,64	10.145.557,41
» Octubre. . .	3.686.793,81	22.788.914,43
» Noviembre.	3.844.098,23	18.587.307,50
» Diciembre..	7.944.720,05	20.975.179,86
	<u>19.827.144,73</u>	<u>72.496.959,20</u>

RESÚMEN.

Importe de los ingresos. .	19.827.144,73	
» de los pagos. .	72.496.959,20	
Exceso de los pagos sobre los ingresos. .	<i>Ptas.</i>	52.669.814,47
<i>Total.</i>	»	269.155.618,32

Suplido por el déficit del primer semestre de 1881-82, cuyo importe consta de la liquidación del ejercicio adjunta á la Memoria oficial. Ptas. 29.709.615,75

Total de los suplementos que procedería hubiese hecho el Tesoro por los déficits de los presupuestos de 1880-81 y primer semestre de 1881-82. » 298.865.234,07

Pero la verdad es que no tuvo el Tesoro necesidad de suplir la totalidad de la precitada suma, y que deben ser baja de ella las partidas siguientes, según los datos que me han sido facilitados por la Intervención general del Estado.

Las reservas que tenía en su poder el Banco de España en 31 de Agosto de 1881, no comprendidas en la liquidación de aquella fecha, y que por lo tanto no suplió el Tesoro en el período restante del ejercicio de 1880-81. . . » 12.451.138,57

Lo datado con cargo al presupuesto de 1880-81 por amortización de Bonos del Tesoro admitidos en pago de Bienes desamortizados y que no representa tampoco fondos suplidos por el Tesoro. » 3.040.000 »

Importe de las sumas realizadas desde 1.º de Setiembre de 1881 á fin de Junio de 1882 de las que en fin de Agosto del primero de dichos años figuraban en el activo del Tesoro, á saber :

Reembolso de la anticipación hecha á la Compañía del ferrocarril de Tudela á Bilbao. 250.000 »

Ingresado por cuenta de la anticipación hecha á la compañía del ferrocarril de Zaragoza á Pamplona y Barcelona. 1.130.000 »

Ingresado por cuenta de la anticipación hecha á la

Suma y sigue. . . . 1.380.000 »

<i>Suma anterior.</i> . . .	1.380.000 »		
compañía del ferrocarril del Norte.	500.000 »		
De varios Ayuntamientos por obligaciones de Ins- trucción primaria; y de los que recibieron auxilios en las inundaciones. . . .	248.672,09	<i>Plas.</i>	<u>2.128.672,09</u>
Importan las deducciones que procede ha- cer por las razones que quedan deta- lladas.	»		<u>17.619.810,66</u>
Líquido á que asciende el importe de la Deuda flotante y de los suplementos hechos por el Tesoro.	»		281.245.423,41
Importe de la Deuda flotante convertida.	»		<u>186.378.943,63</u>
Importan en realidad los suplementos hechos por el Tesoro de cuenta de los presupuestos de 1880-81 y primer se- mestre de 1881-82, cuya cifra es confor- me con la que aparece en la liquidación oficial.	»		94.866.479,78
Pero además, el Tesoro suplió el saldo á favor del Consejo de redenciones y en- ganches, que debe serlo en el producto de la conversión.	»		<u>15.065.339,83</u>
<i>Total de los suplementos que por los con- ceptos expresados ha hecho el Tesoro.</i>	»		<u>109.931.819,61</u>
En su consecuencia, queda demostrado que la aplicación de las.	»		315.766.279,70
es la siguiente:			
Importe de la Deuda flo- tante en 31 de Diciem- bre de 1881, que fué convertida.	186.378.943,63		
Importe de los suplemen- tos hechos por el Teso- ro, por cuenta de los presupuestos de 1880-81 y primer semestre de 1881-82.	109.931.819,61		
	<u>296.310.763,24</u>		

<i>Suma anterior.</i> . . .	296.310.763,24	
Remanente de la operación, de conformidad con el que arroja la liquidación oficial. . .	<u>19.455.516,46</u>	<i>Ptas.</i> <u>315.766.279,70</u>
		<u>IGUAL.</u>

Demostrada la exactitud de la liquidación oficial, deseo presentar otros detalles que son su complemento.

El Tesoro suplió, según queda dicho. . . *Ptas.* 109.931.819,61

REINTEGRO DE ESTA SUMA.

Recibió en efectivo. . .	62.769.086,15	»	
Tiene en el Banco de España, como parte de las 66.618.249,92 pesetas que devengan á favor del Tesoro el interés anual de 4,71 por 100.	<u>47.162.733,46</u>	»	109.931.819,61
			<u>IGUAL.</u>

De consiguiente, la suma existente en el Banco de España. » 66.618.249,92
se descompone de la manera siguiente:

Saldo á favor del Tesoro.	47.162.733,46	»	
Remanente de la operación.	<u>19.455.516,46</u>	»	66.618.249,92
			<u>IGUAL.</u>

Para que no quede ningun punto de esta liquidación sin la ilustración debida, y aunque parezca ya innecesario, me resta demostrar por qué pidió el Tesoro al Banco los 62.769.086,15 pesetas por cuenta de sus suplementos y á qué se aplicaron.

En el semestre de ampliación del ejercicio del primer semestre de 1881-82 los pagos excedieron á los ingresos en pesetas 114.866.479,88, según consta del

Balance provisional que acompaña á la Memoria oficial presentada á las Cortes por el Sr. Ministro de Hacienda. Esto por sí solo justifica que el Tesoro pidiese los 62.769.086,15 pesetas de que me ocupo, y aún justificaría que hubiese pedido los 52.097.393,63 restantes, lo cual no hizo porque el remanente de fondos por la recaudación del segundo semestre de 1881-82 permitía atender á esa diferencia y no hubiera conducido á otra cosa el recibirlos que á aumentar innecesariamente fondos en el Tesoro.

Y por otra parte, ¿á qué pedir los precitados 52.097.393,63 pesetas, cuando ganaban en el Banco el interes de 4,71 por 100, dándose el raro ejemplo de que lo que en realidad constituía deuda flotante devengase interés, en vez de satisfacerlo?

Todo otro pormenor sobre este asunto es absolutamente innecesario, dirigiéndome á personas reconocidamente entendidas.

Pero de cuanto dejo expuesto resulta lo siguiente, que debo consignar por término de las explicaciones concernientes á la liquidación.

1.º Que yo no he utilizado, ni he estado en el caso de utilizar, antes al contrario, cantidad alguna, grande ni pequeña, del producto de la conversión para el entretenimiento del ejercicio del segundo semestre de 1881-82.

2.º Que si en la operación de conversión de las Deudas amortizables y flotante ha resultado un remanente de pesetas 19.455.516,46, en el Banco de España se encuentra, ganando un interés de 4,71 por 100 ínterin las Cortes resuelven sobre su aplicación.

¿Dónde están, pues, los empréstitos simulados en provecho de mi administración y tantas otras cosas que se han supuesto?

No faltará quien diga que calculé con demasiada

amplitud el producto de la conversión, pero ya he dicho en el capítulo de *Deuda flotante* las razones que me obligaban á no hacerlo con estrechez. Nunca fué, sin embargo, mi propósito que resultase un remanente de cuantía, sino que los 315 millones cubriesen sin duda los débitos á que se destinaban.

Pero, ¿qué culpa tengo yo de que la fortuna ayudase á mi administración y el presupuesto del primer semestre de 1881-82 sólo ofreciera un déficit de 29 millones de pesetas en vez de los 50 que se le calcularon?

IV.

Debo, por último, ocuparme, si bien sea brevemente, del objeto y del resultado del convenio celebrado con el Banco de España para llevar á cabo esta operación, no sólo porque una de las partes contratantes fué la Hacienda, sino también porque se me ha hecho más de una vez el cargo de haber colocado al Banco en una situación un tanto difícil para su marcha normal, y aun de haberle perjudicado considerablemente en el valor de su cartera; y es mi propósito no dejar conscientemente en olvido ningún punto de los que se relacionan con mi administración; pues, antes por el contrario, el objeto de este trabajo es el perfecto esclarecimiento de todos y cada uno de ellos, en la medida de su importancia y de mi inteligencia.

¿Por qué preferí yo al Banco de España para negociar la realización de mi pensamiento y llevar á cabo la emisión del 4 por 100 amortizable? Lo hice así por muchas razones cuya evidencia es de todos conocida.

En efecto, me encontré desde luego con los precedentes, pues el Banco había sido el encargado de las emisiones de las *Obligaciones del Banco y Tesoro*,

de las *Obligaciones sobre la renta de las Aduanas* y de los *Bonos del Tesoro*, en virtud sin duda de ser un establecimiento de crédito privilegiado y de carácter público, que fué creado Banco nacional *para recoger las inmensas masas de valores que como pedazos del patrimonio nacional andaban divididas y dispersas en prenda de múltiples operaciones, y darles vida al amparo de nuevos y sólidos capitales* (decreto-ley del 16 de Marzo de 1874), cuya alta y fecunda misión de ser un *auxiliar eficaz de la Hacienda* venia llenando por diversos procedimientos desde que en 1874 también se inició la liberación del Tesoro por medio de la conversión de una importantísima parte de la antigua gravosa Deuda flotante, empresa que yo trataba de completar y he terminado con la definitiva evolución que ha sido el remate natural de aquella obra.

Pero había más : el Banco, por efecto de estos mismos antecedentes, era el mayor acreedor del Tesoro, así en el concepto de poseedor de letras como en el de tenedor de títulos de los valores amortizables, y estaba también llamado á anticipar las cantidades que hiciera preciso la Deuda flotante hasta la fecha en que se verificase la conversión. De todos modos, la suma á que ascendía su crédito en 31 de Diciembre de 1881, según puede verse en la Memoria de 1882, se elevaba:

Por letras, á.	Ptas. 186.378.943,63
Por obligaciones Banco y Tesoro, série interior.	» 45.311.800 »
Por obligaciones Banco y Tesoro, série exterior.	» 47.571.950 »
Por obligaciones de Aduanas.	» 15.639.360,25
Por Bonos del Tesoro.	» 382.973 »
Por amortizable interior al 2 por 100.	» 191.100 »
<i>Que hacían.</i>	<u>» 295.476.126,88</u>

Esta cifra resulta así, computadas las letras por su valor en efectivo y los demás valores por sus tipos de emisión, que es como siempre ha estimado el Banco en sus balances los valores amortizables, porque nunca los enajena á ménos de estos tipos, y, cuando los amortiza á la par, abona la ventaja obtenida en la cuenta de ganancias y pérdidas, teniendo sin duda presente que, con arreglo al art. 11 de su ley constitutiva, no puede negociar en efectos públicos, y que, por tanto, cuando en virtud de leyes especiales adquiere valores del Tesoro amortizables á la par, lo hace precisamente por tener esta Deuda asegurado su reembolso con una prima sobre el tipo de emisión, circunstancia esencial que en varios conceptos importa mucho tener presente cuando se trata de la cartera del Banco de España, y que precisamente por esto menciono ahora al ocuparme del estado de ella á propósito de la conversión, para dejar desvanecido el infundado concepto, harto repetido, aunque se haya muchas veces rectificado, de que su capital ha sufrido quebranto por consecuencia del canje de los valores de su cartera, lo cual no es cierto por lo que acabo de exponer, y aun prescindiendo de las pingües y legítimas utilidades que este mismo canje le ha proporcionado y ha venido á ser para sus accionistas que las han percibido el reembolso de una parte de su capital.

Pues bien: si el Banco era el llamado por la institución á realizar esta operación, y si era en ella el mayor interesado, había bajo otro aspecto de parte del Gobierno grandes razones de interés y de crédito público para procurar que la operación se hiciese de una vez, en España y por el Banco nacional, asegurando así el resultado apetecido y haciendo fáciles las demás evoluciones que debían ser el complemento del arre-

glo de toda la Deuda pública con la fijación de un tipo común.

Hecho el convenio, cesaba la intervención del Gobierno en las operaciones posteriores, propias exclusivamente del interés y de la gestión del Banco, que así podía reservarse el negocio en su integridad, como concertarse con otros establecimientos de crédito para subdividirlo. En este terreno no me toca á mí entrar; el Banco sabrá si intentó estas combinaciones y si encontró ó no quien aceptase las condiciones mismas con que él, en un sentido altamente patriótico que merece todo el reconocimiento del País y nunca elogiaré bastante, había cooperado á la liquidación del Tesoro y al equilibrio del presupuesto del Estado.

Pudo el Banco creer que con su capital efectivo entonces realizado de cien millones de pesetas, su capital fiduciario y todos los demás recursos propios de la institución le era posible asociarse en la manera que lo hizo á esta grande obra de interés público; pero de todas suertes, hay que convenir en que la rica y sólida cartera que la conversión le proporcionaba era un elemento poderosísimo de crédito y de recursos efectivos, caso necesario, aun conservándola sin otras bajas que las realizaciones á la par por efecto de la amortización.

Es verdad que el Banco ha efectuado después la emisión hecha entre sus accionistas, y con grande ventaja para ellos, del número de acciones necesarias para llegar al límite legal de 150.000.000 de pesetas de capital; pero esto, lejos de ser un mal, es sumamente beneficioso también al comercio y al crédito; y si el Banco, por efecto de poseer Deuda del 4 por 100 amortizable por valor de 555.145.000 pesetas nominales; que son 471.883.250 al 85 por 100, ha creído con-

veniente completar su capital, operación es ésta que, además de pertenecer á su propia y exclusiva iniciativa, ha de ser tan beneficiosa al Establecimiento como al País.

Según el último ejercicio (1882), aparece haber hecho el Banco operaciones por 1.467.276.581,41 pesetas con el público de Madrid y las plazas de la Península, representando un aumento sobre el año anterior de 39 millones de pesetas en los descuentos, más de un 50 por 100 en los préstamos sobre garantías, y de 38.928.020 en las cuentas corrientes con garantía y crédito, lo cual, unido á las utilidades repartidas á los accionistas, es la demostración más evidente de que ni el Banco ni el comercio en sus relaciones con él han padecido por efecto del convenio celebrado por la Hacienda con el expresado establecimiento de crédito, á semejanza de otros que tuvieron lugar cuando la potencia financiera del Banco era mucho menor y pudiera motivar verdaderas dificultades.

Por último, ha habido quien, por más que parezca extraño, ha pretendido relacionar las dificultades de la circulación monetaria con la manera en que la operación á que estas explicaciones se refieren fué llevada á cabo; pero entiendo yo que todos los hombres competentes desecharán por completo esta preocupación, si hubiese podido asaltarles, con sólo considerar que esas dificultades tienen orígenes conocidos y evidentes, que en todas ocasiones han producido iguales efectos y que se refieren al pago de los saldos en el exterior, que cuando no puede hacerse librando sobre las plazas que tienen relaciones de banca ó industriales en España, se realizan por remesas en metálico hechas por intermediarios que obtienen de ellas gran provecho, lo cual traerá en la circulación general, cuando quiera que se presente, si no una crisis,

una sensible perturbación al menos; y ejemplos de ello se ven con frecuencia en todos los países según que varían las existencias metálicas amonedadas y los cambios ligados con ellas.

En la confianza de haber explicado suficientemente los pormenores de la conversión de las Deudas amortizables, y contestado las observaciones que á ella se han hecho, paso á ocuparme de la de la Deuda perpetua.

APÉNDICE.

PROYECTO PARA LA CONVERSIÓN DE LAS DEUDAS AMORTIZABLES FORMULADO POR EL MINISTRO DE HACIENDA, MI ANTECESOR.

Artículo 1.º Se emitirá por el valor nominal de 1.100 millones de pesetas, Deuda del Estado, que devengará 5 por 100 de interés anual, y será amortizada en 25 años.

Art. 2.º El pago de los intereses se hará por trimestres, y el de la amortización por sorteos también trimestrales.

Art. 3.º Para atender á este gasto, en los presupuestos generales del Estado se incluirán anualmente créditos por la suma de 77.327.000 pesetas.

De esta cantidad se destinará la necesaria para pagar los intereses del 5 por 100, y el resto se invertirá en la amortización.

Art. 4.º El servicio del pago de los intereses y de la amortización estará á cargo del Banco de España.

Mientras éste recaude las contribuciones directas, retendrá en su poder las cantidades necesarias para esos pagos.

Si el Banco cesase en la recaudación, el Gobierno

le entregará los fondos correspondientes en los términos y con las formalidades que por común acuerdo se establezcan.

Se abonará al Banco por este servicio la comisión que con él convenga el Gobierno.

Art. 5.º El Ministro de Hacienda, previo acuerdo del Consejo de Ministros, negociará los títulos de la Deuda del Estado creados por esta ley, en la forma que considere más económica, segura y conveniente á los intereses del Estado.

Art. 6.º El producto de la negociación se invertirá:

1.º En retirar de la circulación las obligaciones creadas con arreglo á las leyes de 3 de Junio de 1876 y de 11 de Julio de 1877, y los Bonos del Tesoro.

2.º En saldar la Deuda flotante.

Art. 7.º En la suscripción que se abra para la negociación de los nuevos títulos del 5 por 100 amortizable, serán admitidos en pago por su valor nominal como efectivo metálico los valores enumerados en el párrafo primero del artículo anterior.

Art 8.º Las obligaciones creadas por las leyes de 3 de Junio de 1876 y de 11 de Julio de 1877, y los Bonos del Tesoro que no estuvieren todavía amortizados y que no se presenten al canje por los nuevos títulos del 5 por 100 en los términos indicados en el artículo que precede, serán retirados de la circulación, mediante el pago de su valor nominal en efectivo metálico, cesando de devengar interés desde la fecha señalada para el pago.

Art. 9.º En cuanto queden retiradas de la circulación las obligaciones creadas por la ley de 3 de Junio de 1876, serán cancelados y quemados los títulos de la Deuda del 3 por 100 que se hallan pignorados á favor de las mismas.

CONVERSIÓN

DE LA DEUDA PERPETUA.

I.

La ley de 21 de Julio de 1876 estableció que en el año 1882 se elevaría en $\frac{1}{4}$ por 100 el interés de la Deuda, y se trataría con los acreedores del Estado, portadores de los títulos de la Deuda pública perpetua, para fijar, de común acuerdo, el tiempo y la entidad de los aumentos que habrían de hacerse en lo sucesivo; y yo creí que, sin perjuicio de cumplir la primera obligación, debía acudir á las Cortes solicitando, respecto á la segunda, que la autorización que para estas negociaciones estaba otorgada al Gobierno se anticipara, si los acreedores lo solicitaban, y se ampliara con el propósito de que, á ser posible, el arreglo que se llevase á cabo fuese definitivo. Las razones de excepcional importancia que me aconsejaron intentar el arreglo de la Deuda quedaron expuestas extensamente en el preámbulo del proyecto de ley, como en su discusión en las Cortes.

Caminaba yo á la fijación del tipo de interés de la Deuda española en armonía con el de otras Deudas europeas, cuya analogía era evidente, y con el valor

del dinero en todas partes: me proponía, como en otro lugar dejo consignado, librar á la Nación de la nota de insolvente; y ya que, merced á la conversión de las Deudas amortizables y al equilibrio de los presupuestos, iba á ser posible emprender desde luego la senda señalada por la justicia, la honra y el interés de la patria, pensaba lealmente, y tengo ahora igual convencimiento, que era aquél el instante oportuno, que no debía malograrse, de demostrar que la falta anterior en el cumplimiento de nuestros compromisos, lejos de ser caprichosa é injustificada, había sido el efecto fortuito de desgracias evidentes y tris-tisimas, de aquellas que en una ú otra forma padecen los pueblos en el curso vario de su historia; pero que en el momento en que nos era hacedero llegar á una inteligencia digna, íbamos á ofrecer cuanto podíamos dar, compensando los sacrificios que para lograrlo demandábamos de nuestros acreedores con un esfuerzo del País en la suma que destinásemos al pago de intereses, que quedó al cabo perfectamente garantido y con cabal independencia de las eventualidades de lo porvenir, las cuales, por otra parte, no son de esperar, y con la posesion de un valor fijo y definitivo.

Si he alcanzado el logro de tan nobles propósitos, el resultado de esta grande operación que voy á exponer y justificar harto lo demuestra; y por lo demás, á los que no toman en cuenta las inmensas ventajas que he obtenido para la Nación en la reducción del capital de la Deuda y en el importe de los intereses, y que sólo se ocupan de que se ha llegado demasiado pronto á un máximo de interés, yo tendría el derecho de preguntarles qué era lo que ellos se proponían hacer en el año de 1882 frente á Europa, y si piensan que por otros rumbos habríamos ganado más en hon-

ra, en valer ni en ventajas pecuniarias. En éste como en otros asuntos yo podría responder de mi conducta con la razón concluyente del éxito.

Los resultados lisonjeros para nuestro nuevo signo de crédito serían evidentemente mayores (á pesar de la crisis económica de las plazas interesadas en nuestros valores, la cual ocasionó su venta, precisamente porque ellos eran los que, lejos de ofrecer pérdidas, ofrecían utilidad en las realizaciones) y los tipos del 4 por 100 español se irían acercando más rápidamente á su cotización natural y proporcionada, si no fuésemos por desgracia nosotros mismos una excepción lamentable en punto á propagar por el mundo la duda y hasta el descrédito propio respecto á la eficacia y solidez de nuestros recursos, dando así inconscientemente pábulo á la preocupacion con que se suelen mirar fuera nuestros negocios, preocupación de que manejos interesados suelen sacar provechoso partido.

Por fortuna, en el importante asunto de la conversión de la Deuda nos precedió y alentó la opinión pública dentro y fuera de España, y luego hemos encontrado cooperación ilustrada, moderación y confianza en la gran mayoría de la opinión, así como la unanimidad en los acreedores, para los cuales debo consignar aquí el más leal y solemne testimonio de reconocimiento por la fe que han tenido en nuestro país y en mis propias ofertas, á las cuales tengo el sagrado deber de mantenerme inquebrantablemente fiel.

No puse, sin embargo, mano en esta ardua empresa de la conversión y arreglo definitivo de las Deudas, sin prevenir antes á la opinión y á los tenedores por medio de frases bien explícitas, que S. M. se dignó pronunciar en la parte del discurso de la Corona que encabeza este trabajo, y que cumple á mis propósitos recordar aquí :

« También os presentará mi Gobierno, y será sin
» duda objeto de vuestra preferente atención, un pro-
» yecto que tiende á unificar las Deudas amortizables
» á tipo fijo, y otras que por su escasa importancia es
» conveniente cancelar desde luego. Por este medio,
» que la mejora del crédito facilita, se consigue la
» nivelación del presupuesto y se podrá llegar á las
» negociaciones con los acreedores por la Deuda del
» Estado, que ordenó la ley de 21 de Julio de 1876,
» en situación favorable á obtener transacciones con-
» venientes para todos. Á este fin, y con objeto de que
» el rigorismo de la ley no se oponga á las aspiracio-
» nes de los acreedores, mi Gobierno os pedirá una
» autorización para tratar desde luego, en el caso que
» así conviniera. »

Es de advertir que el Consejo de tenedores establecido en Londres, que tiene de antiguo la representación de éstos, y con el cual se trató y convino para la ley de 21 de Julio de 1876, se había dirigido muy atentamente al Ministerio de Hacienda, manifestándome que habiendo llegado la época señalada en aquélla para el arreglo, me expresaba su deseo de conocer mis planes respecto á los términos en que podría llevarse á cabo, provocando así las negociaciones al efecto; á lo cual, por mi parte, me apresuré á contestar que la ley determinaba el aumento, desde 1882, de $\frac{1}{4}$ por 100 anual, y esta obligación, como las demás contenidas en el convenio, sería religiosamente cumplida; pero que no existía hasta 1882 la de tratar con los acreedores, lo cual no impedía que si éstos, debidamente representados, ó la corporación á que tenía la honra de contestar, querían anticipar alguna proposición, el Gobierno estaría dispuesto á recibirla y meditar sobre ella.

Entendí que ésta era la contestación ajustada á la

dignidad del País, á sus intereses y á la ley de 21 de Julio de 1876, que fijaba la situación legal del asunto, y cuyo art. 3.º decía así:

« La Deuda consolidada al 3 por 100, interior y exterior, así como las amortizables al 6 por 100 procedentes de carreteras, obras públicas y obligaciones por subvenciones á ferrocarriles, devengarán al año desde 1.º de Enero de 1877 la tercera parte de su actual interés.

» Desde 1.º de Enero de 1882, la Deuda consolidada, interior y exterior, devengará 1 $\frac{1}{4}$ por 100 anual, y 2 $\frac{1}{2}$ las amortizables al 6 por 100.

» Este interés será desde entonces un *mínimum* que garantiza el Estado, y durante el referido año de 1882 el Gobierno negociará con los tenedores de ambas clases de Deuda respecto á los aumentos del interés en los plazos que se establezcan, hasta volver al interés íntegro, al 3 y 6 por 100 respectivamente. »

Por resultado de mi contestación, el Consejo de los Tenedores en Londres nombró en 15 de Setiembre del mismo año de 1881, con la misión de representarlo, á M. Carlos O'Leary, persona distinguida y perfectamente enterada, según el Presidente del dicho Consejo me decía, de los puntos de vista generales del mismo Consejo en la importante materia de que se trataba.

Estas negociaciones, que nada establecían, y lo que es más, ningún propósito de resolución revelaban, tuvieron un absoluto carácter de reserva de una y otra parte hasta la publicación de la ley de 9 de Diciembre de 1881, que autorizó al Ministro de Hacienda para tratar con los tenedores de Deuda perpetua y de obligaciones del Estado por ferrocarriles antes de la fecha señalada en la ley de 21 de Julio de 1876 si los

mismos acreedores lo solicitasen, pues yo había manifestado, desde luego, que hasta que una ley me autorizase, el Ministro podría oír, pero no tratar.

Es, por tanto, de toda evidencia que el *statu quo* legal fué respetado por mí, como no podía menos, y que para venir á otra legalidad adopté el camino más prudente y más favorable, en mi concepto, á los intereses públicos, porque ni ofrecí lo que no podía dar antes de tiempo, ni me negué, como un deudor que oye con disgusto las proposiciones del acreedor, á colocarme, si las Cortes aceptaban lo que de acuerdo con el Consejo de Ministros tuve la honra de proponer, en situación legítima de resolver de una vez tan peligroso asunto, restableciendo la normalidad entre España y sus acreedores, lo cual estaba yo ya seguro de que nos traería á un terreno de negociación mucho más satisfactorio que lo hubiese sido el ampararse á los términos estrictos de la ley de 1876, negarse á su ampliación y á todo trato que no fuese relativo al tanto y á los plazos del aumento de intereses, y abandonar esta natural y propicia ocasión de negociar al propio tiempo sobre el capital. La inmensa importancia de la cifra de éste era para la Patria la más grave cuestión de todas las que podían influir sobre su porvenir, y por lo mismo, ninguna como ella merecía una intensidad tan grande de voluntad y una apreciación tan exacta para procurar resolverla, á lo cual la opinión, dentro y fuera de España, impulsaba al Gobierno con incansable afán por todos los medios posibles de manifestación y cooperación.

Dado este estado de la cuestión, ¿qué hubiera podido hacer otro Gobierno que no participase de estas ideas? ¿Conceder aumentos futuros de interés, justificando así mayores exigencias respecto al capital en lo futuro, y por consecuencia, haciendo más difícil, y aun

puede decirse imposible, por ser superior á las fuerzas del País, el arreglo definitivo, cuyo aplazamiento indefinido era indecoroso y quimérico? Pues no haciendo esto habría tenido que aceptar el principio equitativo y salvador para todos de la conversión, y en tal caso la diferencia entre ellos y yo sólo habría consistido en el tanto y en los procedimientos. Examinaremos los unos y los otros, pero con la desventaja natural para mí de que yo he de ser juzgado por hechos conocidos y consumados, y mis contradictores por sus opiniones *à posteriori*, que no sabemos si son las mismas que hubieran sostenido y podido realizar si á ellos hubiese tocado la responsabilidad de la resolución.

Las opiniones que ellos han mantenido en el Parlamento sobre este punto, por el órgano autorizado de mi digno antecesor el Sr. Cos-Gayón, y sin contradicción de ninguno de los hombres de su partido, me considero en el deber de dejarlas consignadas en este trabajo, en muestra de imparcialidad.

Decía lo siguiente el Sr. Cos-Gayón en la sesión de 25 de Abril de 1882 :

« Con estas malas condiciones; con esta falta de
» preparación; abandonando por una parte la posición
» fortísima que el Gobierno había encontrado, y no
» preparándose, por otra parte, con verdaderos re-
» fuerzos en el presupuesto de ingresos, hemos llega-
» do á pactar con los acreedores. Claro está que si
» hemos de tratar esta cuestión con grandeza y con
» generosidad, todos tendremos que aproximarnos á
» las ideas manifestadas por el Sr. Eguilior, que nos
» excitaba á que no regateemos. Lo más bonito y lo
» más decoroso sería dar el 3 por 100 y además los
» atrasos y los intereses de los atrasos, si quereis; pero
» ¿era éste el punto en que debía colocarse el Gobier-
» no? ¿Está el País para estas esplendideces y para

» estas grandezas, ó por el contrario, nõ necesita por
» una parte el interés del País y por otra el interés de
» los acreedores, á los cuales lo que principalmente les
» conviene es que, obrando con formalidad, no les
» prometamos sino lo que haya seguridad completa de
» poderles cumplir, que nos colocáramos en el terre-
» no de la ley de 1876, hasta ahora leal y estrictamente
» cumplida? Si hemos de borrar aquella fecha; si no
» hemos de tomar como punto de partida el convenio
» de 1876, entonces quien tiene razón es el Sr. Laá,
» que se queja ahora todavía del convenio de 1876; el
» Sr. Laá, que está en su puesto diciendo ahora lo que
» decía aquel año, repitiendo que no quedaron con-
» tentos los acreedores, ó una parte de los acreedo-
» res, de los cuales S. S. tenía dignísimamente la re-
» presentación. Si de lo que se trata es de conceder
» la revancha á los acreedores del convenio de 1876,
» como en el tratado de comercio con Francia hemos
» concedido á los franceses la revancha del convenio
» de 1877, entonces quien tiene razón es el Sr. Laá;
» pero á mi me parece que así como el Sr. Laá está
» perfectamente en su puesto, no le corresponde al
» Sr. Ministro de Hacienda venir aquí á decir que le
» parece que en 1876 se dió poco á los acreedores,
» como dando á entender con esto que en efecto vie-
» ne á darles ahora una compensación por lo que en-
» tonces no se les dió. No; para el Gobierno no había
» más que una base sólida de negociación y un punto
» de partida justificado, que era el cumplimiento es-
» tricto, el cumplimiento leal y completo de la ley
» de 1876; y desde este punto de partida entiendo yo
» que el Gobierno, ó debía haber hecho un convenio
» para todos los acreedores al mismo tiempo, ó debía
» haber comenzado por hacerlo con los acreedores
» extranjeros. Yo no quiero recordar episodios dolo-

» rosos y verdaderamente lamentables de la historia
» financiera de España, que han tenido por causa y
» por origen disidencias del Gobierno español con los
» acreedores extranjeros en esta cuestión de arreglos
» de la Deuda; yo no quiero recordar por qué trances
» tan amargos han tenido que pasar todos los Go-
» biernos españoles por no haber atendido á su tiem-
» po lo que los acreedores extranjeros exigían; no
» hay para qué recordar cuáles fueron las solucio-
» nes nada agradables que hubo que dar á esta cues-
» tión; pero si no los recordamos aquí para insistir
» sobre ellos en los debates, todos debemos tener
» presentes aquellos sucesos para evitar peligros se-
» mejantes. »

« Es cierto que la ley había autorizado al Gobierno
» para hacer convenios con los acreedores, juntos ó
» separados; pero el espíritu de aquella ley al auto-
» rizar á hacer un convenio ó dos convenios, era
» el de que el Gobierno pudiese convenir con los
» acreedores sobre la base del convenio de 1876,
» de fijar plazos y aumento de cuotas para volver á
» pagar la totalidad de los intereses, ó bien para con-
» vertir el papel en un nuevo papel con otras con-
» diciones; pero no pudo ser el espíritu de la ley
» el que se tratara con unos y con otros no, y que
» en el caso de llegarse á este extremo desagrada-
» ble, fuera precisamente el convenio que se hu-
» biera de traer el que debiera haberse hecho con
» los acreedores extranjeros. »

No se dirá que trato de desnaturalizar ó tergiversar los argumentos de la oposición: los exhibo textualmente, tal cual fueron pronunciados. Se formularon al discutirse el proyecto de ley que tuve la honra de presentar á las Cortes para que se sirvieran aprobar el convenio hecho con los acreedores por Deuda perpe-

tua interior y llamando bajo iguales bases á los del exterior á una conversión voluntaria. Todos tuvieron entonces su debida respuesta, pero la tendrán más amplia al presente, en que los sucesos posteriores han acreditado la prudencia y tacto con que procedí, pues no podía revelar entonces pormenores que tienen aquí su correspondiente lugar.

Resulta desde luego, y es de lo que por el momento debo ocuparme, que yo me aparté por completo de los procedimientos que hubiera seguido mi antecesor, al tratar primero con los tenedores de la Deuda interior, teniendo por mi parte la satisfacción de que no haya acontecido nada de lo que él temía, y de que la experiencia posterior acreditase la oportunidad de haber procedido como procedí.

Si bien me era conocido el general deseo de los tenedores españoles en favor de la conversión, nadie se me acercó á hacerme proposiciones hasta después de publicada la mencionada ley de autorización. Ésta me facultaba también para tratar con los tenedores ó sus representantes de las Deudas exterior é interior, reunidos ó por separado. Yo opté por el segundo extremo, y aunque éste no hubiera sido mi propósito, como lo era, por creerlo el más conveniente, las circunstancias se presentaron en ese sentido, siendo además evidente que ninguno de los tenedores de ambas Deudas tenía interés en que la negociación fuese unida, antes al contrario.

¿ Por qué negocié yo primeramente con los tenedores de la Deuda interior y de la de ferrocarriles, aplazando por el tiempo necesario tratar con los representantes de la Deuda exterior? Yo traté primero con los tenedores de Deuda interior por razones que estimaba de rectitud y conveniencia.

He procurado mantener en esta ardua negociación

que las Cortes me encomendaron, el carácter que correspondía á la Nación, que no pretende especular en beneficio propio con perjuicio de los intereses de nadie. Los tenedores españoles, no por ser españoles habían de renunciar á sus derechos legítimos, y habían, sí, de aspirar á satisfacerlos dentro de la posibilidad, y como más conocedores de la situación del País y de sus medios, habían de venir á compensaciones razonables. Ahora bien; por este camino, una vez concertado con los tenedores del interior, me colocaba en situación de demostrar á los del exterior que la Nación no podía hacer mayores sacrificios, que llegaba al límite de la posibilidad, y que eran los acreedores españoles con su ejemplo la más perfecta demostración de esta verdad.

Tuve la suerte de llevar á cabo la negociación con los tenedores de la Deuda interior y de ferrocarriles, y luché con algunas dificultades para que los dé la exterior aceptasen el mismo convenio, pero mi decisión las salvó, presentando el proyecto de ley ya citado, que aprobaba el primero de dichos actos y hacía voluntaria la conversion del exterior, y las Cortes lo aprobaron.

Si hubiese vacilado, ó la conversión hubiera dejado de hacerse, ó sido más costosa, lo cual yo no podía admitir.

Descartados estos preliminares, entro á detallar los fundamentos y resultados de las respectivas negociaciones y sus favorables consecuencias.

II.

CONVERSIÓN DE LA DEUDA PERPETUA INTERIOR AL 3 POR 100 Y DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO POR SUBVENCIONES DE FERROCARRILES.

Promulgada la ley de 9 de Diciembre de 1881, los tenedores de Deuda perpetua interior y de las obligaciones del Estado por subvenciones de ferrocarriles se congregaron no sólo en Madrid, sino también en Barcelona y Bilbao, puntos de la mayor contratación, y nombraron Comisiones que los representasen para tratar con el Ministro de Hacienda el arreglo que hubiera de llevarse á cabo.

Madrid nombró sus apoderados á los Excelentísimos Sres. Marqués de Urquijo, D. Jaime Girona y D. Bernardo Rengifo y Goyechea.

Barcelona, á los Sres. D. Manuel Girona, D. Camilo Fabra, D. Antonio Ferrer, D. Ramón Comas y Cañas y D. Antonio José Torrella.

Bilbao dió su representación al Excelentísimo Señor Marqués de Urquijo.

En conferencias particulares manifestaron los precitados señores su deseo de que las negociaciones se planteasen bajo el punto de vista de la conversión; y recomendádoles por el Ministro que discutiesen entre sí y se pusieran de acuerdo sobre las pretensiones que hubieran de formular, teniendo en cuenta que por su parte se hallaba decidido, en cumplimiento de su deber y en presencia de la situación de la Hacienda, á limitar cuanto fuera posible sus concesiones, llegó á celebrarse el 22 de Enero de 1882 la conferencia solemne, en la cual quedaron definitivamente acordados los términos de la conversión.

Mi deber era prevenirme para la precitada conferencia, y medité en la mañana de aquel día, aun más que lo había hecho desde que presenté á las Cortes el proyecto de autorización, no tanto sobre el aumento de interés que pudieran pedir los representantes de los tenedores para realizar la conversión, como aquel que yo pudiera comprometerme á conceder en representación del Estado, y salva siempre la aprobación del Consejo de Ministros primero y de las Cortes después.

Confieso sinceramente que inspirándome en el más vivo deseo del acierto, llegué á adoptar una resolución que, aunque temiera fuese combatida, nunca creí que esto tuviera lugar bajo los fundamentos en que *à posteriori* apoyó su oposición mi antecesor en el Ministerio.

En la misma sesión á que antes me he referido, la del 25 de Abril de 1882, se expresaba el Sr. Cos-Gayón en los términos siguientes, que la lealtad con que quiero tratar esta importante cuestión me decide á consignar textualmente :

«Había convenido el Estado con los acreedores en »1876, en que les pagarían el 1 por 100, en vez del 3, »durante cinco años; que durante el año 1882 se »abrirían unas negociaciones; que esas negociaciones »tendrían por objeto fijar los plazos y las cuotas de »aumento, por medio de los cuales se volvería á pagar en su integridad el 3 por 100. ¿Por qué en 1876 »no se hizo desde luego un arreglo definitivo? ¿Por »qué se dejó esta negociación para 1882? Lo he dicho »aquí más de una vez. No pudo tener por objeto aquel »aplazamiento de una solución completamente definitiva, sino una de estas dos cosas : ó la esperanza »de que en 1882 se podría dar á los acreedores más »de un cuartillo por 100 cada cinco años, ó el temor

»de que no se podría dar tanto. Yo he invitado varias
»veces á los defensores del proyecto ministerial á que
»me indiquen un solo documento, un sólo texto, una
»sola frase de la discusión de 1876 de la cual se pueda
»deducir que fuese la esperanza de poder dar más,
»y no el temor de no poder dar tanto, lo que había
»señalado un período de nuevas negociaciones para
»1882; yo les prometí desde luego, si lo necesita-
»ban, presentarles varios textos que prueban que
»por lo que entonces no se estipuló definitivamen-
»te que cada cinco años se aumentaría un cuartillo más
»por 100, fué por el temor de que luego en 1882 no
»podría hacerse de una manera formal y eficaz seme-
»jante promesa. Sin necesidad de recurrir á textos,
»el propio de la ley está bien claro y expícito, pues-
»to que dice, después de disponer que desde 1882 se
»pagaría 1 y cuartillo, que el cuartillo sería un míni-
»mum que desde esta fecha pagará el Estado; es de-
»cir, que se adelantaba en 1876 la promesa de que á
»contar de 1882 no se bajaría de 1 y cuartillo. Esta es
»la única indicación que para las negociaciones lleva-
»ba nuestra ley de 1876. La situación, pues, estaba
»claramente definida; lo que tenía que arreglar el Es-
»tado con los acreedores en la época actual eran los
»plazos, bien de cinco años ó de otro período de
»tiempo, en los cuales se había de ir, por medio de
»aumentos que también se determinasen ahora, hasta
»volver á pagar el 3 por 100. La indicación de la ley
»era, por tanto, como punto de partida para las nue-
»vas negociaciones, volver á pagar el 3 por 100 en
»cuarenta años, contados desde 1876; lo que había
»que negociar era si esos plazos se habían de alargar
»ó de acortar. Pero antes de llegar el año 1882, los
»acreedores del Estado, creo que puede decirse uná-
»nimemente, porque la petición era universal, y con-

»tra ella no salió jamás ninguna voz disidente, los
»acreedores del Estado comenzaron á solicitar que en
»vez de señalar plazos y aumentos para que la Deuda
»que había venido á ser diferida se convirtiera en lo
»que por su propia naturaleza debía ser, volviera á re-
»cobrar su carácter de perpetua al cumplirse los cua-
»renta años ó los que se estipularan, empezaron á soli-
»citar que en cambio de esto se les diera desde luego
»un papel que definitivamente resolviera la cuestión.
»Ellos eran los que lo solicitaban; el Gobierno no te-
»nía otra cosa más que aguardar tranquilamente esas
»solicitudes, proponerles el cumplimiento estricto y
»leal de la ley de 1876 y acceder á las peticiones de
»aquellos que en vez de aguardar á un largo período
»de tiempo para volver á cobrar la totalidad de los in-
»tereses, prefirieran cobrar un papel con otro interés,
»el cual les fuera emitido, naturalmente, con nuevas
»condiciones.»

Como se ve por lo expuesto, y por lo que practiqué también en este punto del tanto de aumento de interés, tuve la desgracia de apartarme de las opiniones del Sr. Cos-Gayón. Pero ¿fueron caprichosos ó arbitrarios mis procedimientos?

El Sr. Cos-Gayón interpretaba el convenio de 1876 y aplazamiento hasta 1882 de la designación de aumentos respectivos de interés, en el sentido de que en dicha última fecha acaso no se podría otorgar á los acreedores el aumento de $\frac{1}{4}$ cada cinco años; que lo que tenía que arreglar el Estado con los acreedores en 1882 eran los plazos, bien de cinco años, ó de otro período de tiempo, para volver á pagar el 3 por 100; que la indicación de la ley de 1876 era como punto de partida para volver á pagar el 3 por 100 en cuarenta años, contados desde 1876; y por último, acceder á las peticiones de los que en vez de aguardar

un largo período de tiempo para volver á cobrar el total de los intereses, prefirieran cobrar un papel con otro interés, el cual les fuera emitido naturalmente con otras condiciones.

Dejo al juicio de la crítica la importancia y valor de las tres primeras consideraciones, no debiendo sin embargo, ocultar mi opinión contraria á ellas y mi sentimiento de que se proclamasen, pues no redundan ciertamente en favor del crédito y formalidad de España. Y ocupándome de la última diré que lo que por ella se indicaba, y no otra cosa, fué lo hecho en realidad, si bien partiendo de principios distintos y con alcance diferente de los que se desprenden de las palabras del Sr. Cos-Gayón.

Aunque naturalmente me preocupaba mucho el resultado de la conferencia y debía estudiar los puntos de defensa que empleara en ella, y aunque en realidad había de tomar en cuenta espontáneamente las observaciones del Sr. Cos-Gayón, si bien no con el carácter de imposición con que están presentadas, es lo cierto que nunca podían obrar en mi ánimo como punto esencial de partida para la negociación. Comprendía y comprendo que se utilizaran las primeras al fin de obtener las mayores ventajas para el Tesoro, pero de ningún modo como condición *sine qua non*, que es lo que se ha pretendido al exponer aquellas ideas cuando la negociación estaba terminada y cuando se presentaba el convenio á las Cortes para su aprobación.

Si en 1876 el Gobierno de S. M. pudo obtener las concesiones que alcanzó de los tenedores de la Deuda, en presencia del período tristísimo que el País acababa de atravesar por consecuencia de disturbios políticos y de una sangrienta y fratricida guerra, á los seis años siguientes, reorganizada la Hacienda, en cre-

cimiento las rentas públicas, desahogado el Tesoro y con todas las demás ventajas que decantan mis adversarios haber obtenido, ¿podrían hacerse seria y formalmente semejantes intimaciones á los tenedores de la Deuda pública?

Pues qué, ¿el Estado no tenía la obligación en su propia conveniencia, además de llegar á un estado de solvencia, de reorganizar verdaderamente la Hacienda, de colocar al Tesoro en una situación de desahogo verdadero? Pues qué, ¿hay derecho de buscar recursos para todo lo que se estima necesario, y se ha de prescindir sistemáticamente en una situación completamente normal del pago de una obligación tan sagrada como lo es el de los intereses de la Deuda pública, y esto en un país que quiere aparecer progresando en todo, que no economiza gastos que pueden calificarse de puro lujo y que justamente había de procurar ya dar impulso á las obras públicas, fomentar su marina y fortificar los medios de seguridad y defensa nacional?

Así es que yo entendí que los aumentos sucesivos de interés hasta llegar al pago íntegro del 3 por 100 no podían extenderse, ni con mucho, fuesen cuales fueren las opiniones que en las negociaciones previas á un acuerdo pudiera yo mantener, al período de cuarenta años, pues no tenía justificación decorosa que la Hacienda de un país, aun medianamente dirigida, necesitara plazo tan desmesuradamente largo para entrar en su completa normalidad y poder atender al pago de todas sus obligaciones.

Pues si siguiendo el plan y propósitos de mi digno contradictor, dentro de diez años había de aumentarse, sobre el 1 $\frac{1}{4}$ que al presente se satisface, $\frac{1}{2}$ por 100 más, es evidente que habría para el Estado grandísima conveniencia en adelantar esa suma desde luego

como compensación de la renuncia que los tenedores de las Deudas hiciesen del restante $1 \frac{1}{4}$ por 100; por este medio, y como más adelante explicaré detalladamente al demostrar las ventajas de la conversión, bastando ahora á mi objeto esta indicación, si el Estado experimentaba al presente un gravámen anual de 42 millones de pesetas, número redondo, obtenía en lo ulterior un beneficio de grandísima é indiscutible importancia. ¿Se quería cumplir honradamente con los acreedores del Estado? Pues el medio indicado era el único y más económico posible.

He aquí por qué yo era partidario de la conversión y no de los aumentos sucesivos de interés, y por qué llegué en el convenio al aumento de $\frac{1}{2}$ por 100.

Después de una detenida discusión, en la que se reflejaba que la Comisión de tenedores se fijaría, como se fijó en efecto de una manera definitiva, en el aumento del $\frac{1}{2}$ por 100, y de sostener yo el de $\frac{1}{4}$ y después de la manera más decidida y como término de conciliación el solo aumento de $\frac{1}{8}$, surgieron varias otras cuestiones, tales como la de mayor ventaja que sobre la renta perpetua querían obtener los tenedores de obligaciones del Estado por ferrocarriles, y la de que el aumento del interés se devengaría desde 1.º de Enero ó 1.º de Julio de 1882, oponiéndome por mi parte á ambas exigencias. El término de aquel debate fué el que reconociendo yo que los representantes de los tenedores de la renta perpetua no cedían en manera alguna del $\frac{1}{2}$ por 100, y considerando en mi rectitud por otra parte, aunque no lo manifestara entonces, la equidad de la pretensión, la acepté, á condición de que se sujetasen á ella los tenedores de la Deuda por ferrocarriles y de que el aumento de interés empezaría á devengarse desde 1.º de Julio de 1883.

Nueva y prolongada discusión se suscitó, pues el deseo unánime de las Comisiones era que el interés se devengase antes, y la de ferrocarriles no consideraba justa la igualdad de éstos con la perpetua; pero al fin mis razonamientos fueron oídos y el convenio quedó efectuado, sujeto á la aprobación del Consejo de Ministros primero, y de las Cortes después.

Naturalmente se formuló también la pretensión de que en el caso que á los tenedores extranjeros se les reconociese un mayor aumento de interés sobre el $\frac{1}{2}$ por 100 convenido, sería igualmente aplicable á los españoles, lo cual no tuve inconveniente en aceptar, pero sin que constara en el convenio, pues esto hubiera sido admitir en el documento una posibilidad que yo estaba decidido á no realizar.

Se formuló, por último, la pretensión de que el pago de los intereses quedase á cargo del Banco de España, en la misma forma que lo estaban entonces las obligaciones de Banco y Tesoro, á lo cual me negué, no porque yo viese en absoluto un grave inconveniente en ello, sino por ser un medio que en último resultado podía utilizar en la negociación con los tenedores de la Deuda exterior, que era para mí seguro habrían también de exigirlo.

He dado detenida cuenta de todos los pormenores de la negociación, y sentiría incurrir en algún olvido, pues es mi deber ilustrar la opinión sobre un punto que he estudiado profundamente, por lo mismo que no tenía sólo el carácter de interior, ni es de aquellos en los cuales cabe introducir reformas sin lastimar nuestro propio decoro y al cabo nuestros verdaderos intereses; y si yo las intenté y las realicé en este caso, fué porque mis proyectos se encaminaban á mejorar el *modus vivendi* que se había establecido por la ley de 21 de Julio de 1876, que es la que, y yo no lo cen-

suro, tuvo que acudir por la dura ley de la necesidad á una verdadera quita que no ha agravado, sino antes bien mejorado el arreglo que tuve el honor de proponer y la suerte de ver aceptado por las Cortes.

Aprobados por el Consejo de Ministros mis procedimientos y el convenio, la conversión de la Deuda interior, salva la aprobación de las Cortes, que igualmente se dignaron otorgarla, era ya un hecho que venía á influir poderosamente en pro de nuestro crédito y á facilitar un acuerdo con los tenedores de la Deuda exterior en idéntico sentido.

Digno es de superior elogio el proceder de los representantes de los tenedores de la Deuda interior que contribuyeron poderosamente á hermanar los intereses de la Nación con los suyos propios; y yo que tuve la honra de presenciar todo el patriotismo y abnegación que revelaron en su conducta, me complazco en proclamarlo así.

III.

CONVERSIÓN DE LA RENTA PERPETUA EXTERIOR AL 3 POR 100.

Convenidas las bases de la conversión de la Deuda perpetua interior y de la de las obligaciones del Estado por ferrocarriles, era en mi juicio el momento de entablar las negociaciones con los tenedores de la Deuda exterior. Ya había yo celebrado una conferencia preliminar el 18 de Diciembre de 1881 con Mister O'Leary, representante de aquéllos, y le había manifestado mi deseo de conocer cuáles fueran sus propósitos, si mantener nuestras conferencias en el sentido de aumentos sucesivos de interés, ó en el de una conversión en la que por mutuas compensaciones se obtuvieran beneficios recíprocos. No era refracta-

rio Mr. O'Leary al segundo extremo, reservando el primero para el caso en que no fuese posible una avenencia.

De todos modos, la primera proposición que Mister O'Leary me comunicó confidencialmente fué la siguiente :

«Hasta 31 de Diciembre de 1883 el interés de la
»Deuda permanecerá á su actual rata de 1 $\frac{1}{4}$ por 100
»anual.

»De 1.º de Enero 1884 hasta 31 de Di-			
»ciembre de 1885 devengará la Deuda,			
»interés á razon de.	1 $\frac{1}{2}$	por	100 anual.
»De 1.º de Enero 1886 á 31 Diciembre 1887.	1 $\frac{3}{4}$	»	»
»De 1.º de Enero 1888 á 31 Diciembre 1889.	2	»	»
»De 1.º de Enero 1890 en adelante. . . .	2 $\frac{1}{4}$	»	»

»El 2 $\frac{1}{4}$ por 100 será el máximun de interés que
»devengará la Deuda, lo que equivale á una conver-
»sión al tipo de 56-25 por 100; de modo que por
»cada bono de £. 100 del 3 por 100 se dará un Bono
»de £. 56-5-0, ganando 4 por 100 anual.

»Desde 1892 se destinará un fondo de amortización
»acumulativo de $\frac{1}{2}$ por 100 anual para la redención
»de la nueva Deuda á la par.»

No creo incurrir en inconveniencia alguna publi-
cando la anterior proposición, que autógrafa, aun-
que no firmada, conservo, pues ella hace honor al
Council of Foreign Bondholders, que representaba y
defendía los intereses de los tenedores, y además con-
duce al esclarecimiento de hechos en que soy parte
muy interesada.

No se dirá que procedí con precipitación y formu-
lando proposiciones con anterioridad á las que pudie-
ran hacérseme. El Consejo de tenedores y su Comité
de bonos españoles habían deseado conocer los pro-
pósitos del Gobierno, y reclamaban cortesmente el

principio de las negociaciones aun antes que les fuese conocido todo pensamiento mío, como ya dejo expuesto; y más tarde formulan su proposición en los términos que estiman conveniente, sin presión ni excitación de ningún género.

Yo no podía tomar en consideración, ni aun para discutirla, una propuesta que, nacida sin duda de legítimo derecho, vendría á colocar al Estado en situación difícilísima; y aprovechando la ocasión del convenio celebrado con los tenedores de la Deuda interior, hice á mi vez la proposición de que los de la Deuda exterior se adhiriesen á aquél; y este fué en rigor el principio de las negociaciones que nos llevaron al término de la conversión.

Con tales antecedentes, que no me corresponde á mí calificar en esta Memoria, pero que apreciarán en lo que valgan los hombres entendidos y el público imparcial, podrá juzgarse de las dificultades vencidas en el arduo asunto de que me ocupo.

Debo declarar que las negociaciones fueron mantenidas simultáneamente en Madrid y Londres. Reconociendo como de antiguo reconozco las distinguidas cualidades de inteligencia y celo por cuanto con los intereses del país se relaciona de mi distinguido y queridísimo amigo el Excmo. Sr. D. Manuel Rancés y Villanueva, Marqués de Casa-Laiglesia, Ministro plenipotenciario de España en Londres, y la autoridad é influencia que por sus especiales condiciones tiene en la sociedad inglesa, le pedí su cooperación, á la que decididamente se prestó, llevando, con sujeción á mis instrucciones, la negociación con el honorable Mr. Bouverie, Presidente del *Council of Foreign Bondholders*; por manera que yo lo verificaba aquí con el representante de éste y me hallaba á la vez representado, inteligentemente, en Londres para dis-

cutir con el mismo Presidente y con los más importantes é influyentes tenedores de nuestra Deuda exterior.

El aumento de $\frac{1}{4}$ más que el $\frac{1}{2}$ por 100 convenido con los tenedores de las Deudas interiores, es decir, el pago de un 2 por 100 de interés en vez del $1\frac{3}{4}$ para llegar á la conversión; el señalamiento de un fondo de amortización; que el pago de los intereses se hiciera por el Banco de España en la misma forma que lo verificaba para las Deudas amortizables; y algunas otras, fueron las exigencias sucesivamente presentadas por los tenedores de la Deuda exterior, exigencias mantenidas con perseverancia y defendidas con singular inteligencia por el digno é ilustrado representante del Consejo de tenedores, Mr. O'Leary, hasta el momento de celebrarse en Londres el 17 de Marzo de 1882 el *meeting* en que, como más adelante explicaré, no fué atendida mi proposición.

En el entretanto se ventilaron cuestiones diferentes; una de ellas, la del cambio á que había de fijarse el importe de las libras esterlinas y francos con relación al peso fuerte, ó sean 5 pesetas.

De antiguo venía reconocido el cambio de 5 francos 40 céntimos y 51 dineros esterlines por peso fuerte en los títulos de la Deuda exterior, diferencia que se fundaba en la distinta ley de la moneda, pues que valiendo más la peseta que el franco y más los 5 pesos que la libra esterlina, preciso era establecerlo así.

Teniendo la moneda española desde la reforma monetaria efectuada en 1869 la misma ley que la de aquellos países en que nuestros valores se cotizan, convenía fijar el valor de nuestra Deuda, determinando en los títulos la par monetaria, modificación absolutamente necesaria, siquiera para que desapareciese la oscuridad que resultaba en nuestros presu-

puestos, presentando una menor Deuda y un menor gasto, pues tanto valía decir que los intereses se elevaban á 100 y pagar realmente 108, existiendo un 8 por 100 de aumento por cambio.

Pero al hacer esa alteración, precisaba reconocer á los tenedores de la Deuda exterior el valor de sus títulos, siempre que fuesen presentados en el extranjero, pues en el interior no procedía reconocer mejora alguna por razón de cambio. En los títulos estaba fijado el valor en pesos, libras y francos. El de 200 pesos expresaba 1.080 francos, y una cantidad equivalente en libras al cambio de 51 dineros el peso. Por estos valores venían negociándose en Bolsa, y en las distintas emisiones efectuadas la negociación se había llevado á cabo bajo esta base; es decir, que los suscritores en el exterior habían pagado los títulos que adquirieron por el valor expresado en francos ó en libras, según las plazas en que se realizara la operación. Y si en transmisiones sucesivas eran enajenados por los mismos valores, sobre todo si el título declaraba al Estado español deudor de 1.080 francos, equivalentes á 200 pesos de los antiguos ó 216 de los modernos, forzoso era reconocerles ese derecho, pues de otro modo se les hubiera privado de parte de su capital, é injusticia semejante hubiera hecho de seguro imposible la conversión.

Dos medios podían emplearse: uno, efectuar la conversión entregando los nuevos títulos con la misma diferencia proporcional de valor; otro, determinar la par monetaria, y expresarla en los títulos. Era sin duda preferible el segundo, y lo adopté, consiguiendo al fin la conformidad del *Council* en estas discusiones previas. Por este medio ningún perjuicio se seguía al Estado, ni tampoco lo experimentaban los acreedores; antes bien, con ventajas para to-

dos, se lograba como se ha logrado que sea conocido el verdadero importe de la Deuda y el gasto anual por intereses, particulares que, como he indicado antes, no se conocían, dejándose de figurar en la misma sección del presupuesto todo el gasto, pues se formalizaba el que el cambio representaba como quebranto ocasionado por el pago de la Deuda exterior en el Extranjero.

Otro punto, objeto de detenida discusión, fué el relativo al pago de los intereses por el Banco de España en la misma forma que venía establecido para el de la Deuda amortizable. Resistí esta pretensión como la había resistido con los tenedores de la Deuda interior, pero la comprendí por último en las bases de convenio que se presentaron al *meeting* de tenedores, para dar una prueba de mi deseo de llegar á un término satisfactorio, y porque, como he dicho al tratar de la conversión de la Deuda interior, no veía en ello un grave inconveniente si el Estado tenía la decisión de cumplir sus compromisos en el pago, como yo creía y creo que lo debe tener y tiene, y sobre todo después de dado el ejemplo que desde 1876 venía dándose respecto á las Deudas amortizables, porque no vale ciertamente decir, como se ha dicho, tratándose de una cuestión que sólo puede considerarse de principios, que deba ser examinada con relación á su importe y por el período de duración: lo que es con fundamento improcedente en el todo, lo es ciertamente en una parte.

Se exigió también una declaración relativa á la exención de todo impuesto sobre los nuevos títulos. Yo estimé esta declaración innecesaria, toda vez que en la ley de 21 de Julio de 1876, que consignó el arreglo hecho de las Deudas, quedó establecido en su art. 4.º que no se impondría ningún gravamen ni tributo á los

intereses; y como quiera que ese artículo no se derogaba por el nuevo arreglo, esto bastaba para satisfacción de los interesados, sin que hubiese necesidad de otras declaraciones.

Al discutirse en las Cortes la ley de conversión de las amortizables se formuló idéntica pretensión, y yo tuve el honor de contestar, con asentimiento de todos, en los términos que quedan expuestos.

Parecía que, provocadas y resueltas las antedichas cuestiones, en justicia las unas y benévolutamente otras, ninguna dificultad podría ofrecerse para llegar al término satisfactorio de la negociación. No sucedía así, sin embargo: un día se ofrecía una dificultad, y desvanecida, aparecía otra á poco tiempo, y de todos modos siempre resultaba mantenerse el tipo de 2 por 100 para la conversión y la exigencia de $\frac{1}{4}$ por 100 para amortización desde la fecha que se designara.

Merece especial mención, por lo que puede conducir á que algunos que lo dudan reconozcan que las pretensiones de los tenedores fueron enérgicamente rechazadas por mí en cuanto afectaban al decoro y á los intereses de la Nación en lo porvenir, y para que comprendan también la verdadera actitud de algunos de ellos, que el *Council of Foreign Bondholders* se hizo intérprete de la exigencia de que los títulos del 3 por 100 que se recogiesen por la conversión quedasen depositados siete años en el Banco de Londres para ver si el contrato se cumplía. Á proposición semejante, altamente depresiva para la Nación y tanto menos justificada desde el momento en que había accedido á que el Banco de España se encargase del pago de los intereses como lo hacía con la Deuda amortizable, contesté que no yo, sino ningún ministro español tendría el valor ni la abnegación de presentarlo á las Cortes.

Ante la creencia de que yo me decidiera, como me decidí en efecto, á presentar á las Cortes el proyecto de conversión voluntaria para el exterior, si no se aceptaba mi propuesta, se manifestó que la Bolsa de Londres se cerraría para la cotización del nuevo valor, que se expedirían certificados por la diferencia de tipos entre el de la conversión y el 3 por 100; y cuanto pudiera, en verdad, contribuir á enervar las fuerzas y la voluntad del más decidido. En realidad, ni á lo uno ni á lo otro dí gran importancia: á lo primero, porque no podía concebir se autorizase una medida contraria al interés de los mismos tenedores extranjeros que, en uso de un libérrimo derecho, vinieran á la conversión; y á lo segundo, porque entraba en mi propósito, como lo realicé, de que cuantos aceptaran la conversión habían de declarar bajo su firma que renunciaban á toda ulterior reclamación.

En realidad, lo que acontecía era lo siguiente. Los individuos que componían el *Council of Foreign Bondholders* se hallaban divididos: unos, á cuyo frente estaba el honorable Mr. Bouverie, hacían justicia á la rectitud de mi propósito de no conceder más aumento de interés que el que creía podía soportar la Nación ante la noble y trascendental idea de resultar solvente á los ojos de Europa; y otros, que, compartiendo las opiniones del respetable Mr. Bennoch, Presidente del Comité de tenedores de Bonos españoles, con profunda convicción, y por tanto con la mejor buena fe, consideraban al País en un gran estado de prosperidad y de riqueza y creían que podía y debía hacer mayores sacrificios, tanto más, cuanto que suponían aquella prosperidad y riqueza en progresión ascendente.

Á su vez los tenedores se encontraban también di-

vididos, y si algunos y muy importantes creían deber adherirse al convenio celebrado con los de la Deuda interior, otros sostenían la opinión contraria, fundados en la misma que los que en el *Council* mantenían esta tendencia.

No era posible, á la altura en que nos encontrábamos, caminar más tiempo por el sendero de los aplazamientos y las vacilaciones en que yo veía envuelto al *Council of Foreign Bondholders*, ante el deseo que sin duda le animaba de colocarse en situación de poder recomendar á los tenedores la aceptación de una propuesta que en su propio juicio estimase fundada. Era, pues, preciso poner término con resolución á semejante estado de cosas, para hacer comprender siquiera que España se había prestado en las conferencias á lo que consideraba justo y legítimo, pero que no le era dado ampliar sus concesiones.

En su virtud, di encargo al Sr. Marqués de Casa-Laiglesia para que entregase á Mr. Bouverie, Presidente del *Council of Foreign Bondholders*, la proposición discutida, á fin de que, reuniendo al *Council*, acordase si la recomendaba ó no al *meeting*, y determinara la fecha en que éste hubiera de celebrarse para serle sometida.

La opinión general parecía favorable á la propuesta; los hombres más importantes de la alta banca en Londres no dudaban que sería admitida; pero resultara de ello una ú otra cosa, es lo cierto que no podía prescindirse del procedimiento, dadas las prácticas de aquel país y nuestra propia conveniencia.

Si el *meeting* aprobaba la propuesta, con ó sin la recomendación favorable del Comité de tenedores de bonos españoles, estaba conseguido el objeto; si no la admitía, reivindicaba yo la libertad de acción ne-

cesaria para proceder como mejor estimase convenir á los intereses públicos.

La proposición presentada al *Council* en 11 de Marzo de 1882 fué la siguiente :

« 1.º La actual Deuda consolidada exterior al 3 por
» 100 se convertirá desde luego en otra Deuda perpe-
» tua con 4 por 100 de interés anual, pagadero según
» se convenga, bien por trimestres vencidos en 1.º de
» Enero, 1.º de Abril, 1.º de Julio y 1.º de Octubre,
» bien por semestres vencidos el 1.º de Enero y 1.º de
» Julio. — 2.º La conversión ó canje se hará en la pro-
» porción necesaria para que el interés al 4 por 100
» anual de la nueva Deuda represente el del 1,75 por
» 100 sobre el capital de la consolidada al 3 por 100.
» — 3.º El capital de esta Deuda del 3 por 100 será
» reconocido como base para la conversión, y los ac-
» tuales tenedores ingleses de dicha Deuda exterior
» del 3 por 100 recibirán, por tanto, un capital de
» £ 43-15-0 de la nueva Deuda al 4 por 100 por cada
» £. 100 del de la Deuda del 3 por 100. — 4.º Los titu-
» los de la nueva Deuda y los cupones de estos títulos
» expresarán un capital en cantidades equivalentes en
» moneda española, inglesa y francesa. — 5.º La nue-
» va Deuda devengará su interés anual de 4 por 100 á
» partir del 1.º de Julio de 1883; y con el fin de que la
» emisión y canje puedan hacerse desde luego, los nue-
» vos títulos llevarán unidos tres cupones semestrales,
» pagaderos en 1.º de Julio de 1882 y 1.º de Enero y
» 1.º de Julio de 1883, arreglados al interés anual de
» 1,25 por 100 por la consolidada exterior del 3 por
» 100; y los sucesivos cupones trimestrales ó semestra-
» les según se convenga, representativos del interés de
» 4 por 100 que la nueva Deuda ha de empezar á de-
» vengar desde 1.º de Julio de 1883. — 6.º El servicio
» de pago de los intereses de la nueva Deuda estará,

» como en el caso de la renta del 4 por 100 amortiza-
» ble, á cargo del Banco de España, el cual retendrá
» trimestral ó semestralmente, según se convenga,
» de las contribuciones directas, la cantidad necesaria
» para el pago puntual de dichos intereses. — 7.º El
» pago de los intereses se efectuará en Madrid, Lon-
» dres ó París, á voluntad de los tenedores. — 8.º Los
» acreedores del Tesoro español por Deuda exterior
» renunciarán á toda otra reclamación ulterior y se
» darán por satisfechos de todos sus derechos con las
» condiciones que preceden. — 9.º El convenio que se
» hiciese sobre estas condiciones necesitaría, para ser
» ejecutivo, la conformidad del Consejo de Ministros
» y la aprobación de las Cortes. — Londres, 11 de Mar-
» zo de 1882. »

Pasada dicha propuesta por el Presidente del *Council* al del Comité de tenedores de bonos españoles para que emitiesen opinión, el Comité la dió en los términos siguientes :

« Esté Comité, habiendo considerado las condicio-
» nes de la conversión ofrecida á los tenedores de
» bonos españoles por el Ministro de Hacienda, rue-
» ga al *Council* de los tenedores de bonos extranje-
» ros que examine dichas condiciones; pero el Comi-
» té no está preparado á recomendarla á los tene-
» dores. »

No es costumbre que el *Council* recomiende al *meeting* lo que el respectivo Comité no acepta, y en su consecuencia, la proposición fué presentada á aquél sin recomendación alguna.

El motivo principal que obró en el ánimo del Comité para proceder de la manera que lo hizo, fué el que no se otorgaba el 2 por 100 que constantemente se venía exigiendo como base de la conversión, y también debió entrar por mucho en su resolución el

que no se aceptara que los títulos del 3 por 100 que se convirtiesen quedaran depositados en el Banco de Inglaterra para hacer revivir antiguos derechos en el caso que no fuera cumplido el contrato que se hiciera, pues esta exigencia había vuelto á reproducirse en los últimos momentos.

El *meeting* reunido el 17 de Marzo no aceptó la proposición. El honorable Mr. Bouverie, Presidente del *Council*, hizo justicia á la rectitud y lealtad con que España había procedido, y su discurso pudo considerarse como de apoyo personal á la propuesta; Mr. Bennoch, Presidente del Comité de tenedores de bonos españoles, la combatió enérgicamente por insuficiente, y el *meeting* acordó por una gran mayoría la siguiente resolución :

« Este *meeting* de tenedores de bonos de la Deuda
» externa de España, aprueba la decisión de su Co-
» mité y confirma su opinión de que la propuesta del
» Ministro de Hacienda es inaceptable porque ella
» tiene por objeto disminuir el importe nominal de la
» Deuda en más de 50 por 100, sin ofrecer un equiva-
» lente que compense el propuesto sacrificio del capi-
» tal; porque ella (la propuesta) es una violación de la
» letra y espíritu de la Convención solemnemente pac-
» tada en 1876, por la cual la nación española está
» obligada á pagar á sus acreedores externos por in-
» tereses la suma mayor que su hacienda le permita
» pagar; y porque no hay estipulación ni indicación
» (en la Convención de 1876) sobre la posible reduc-
» ción de la Deuda, ni se ocupa acerca del abandono
» de Bonos existentes en cambio de otros de menor
» cuantía ».

Es este momento de que consideren los hombres imparciales, en cuyo espíritu no obre la pasión política, cuál hubiera sido la situación del Ministro de

Hacienda, y aun del Gobierno todo, si las negociaciones hubiesen empezado con los tenedores de la Deuda exterior; es decir, si previamente no se hubiera ultimado convenio alguno con los de la interior. Nada debo decir sobre este punto desde el momento que en los antecedentes expuestos existen los suficientes datos para juzgar con acierto.

En realidad, las negociaciones no quedaban rotas ni podían quedar con arreglo al espíritu y letra de la ley de 21 de Julio de 1876; pero si hubiese tenido el intento de tomar la iniciativa para reanudarlas, que nunca pasó por mi mente, es indudable que la posición fortísima en que me había colocado haciendo las concesiones que estimaba posibles, la hubiera perdido por completo.

Me decidí, pues, contra la opinión de los que lo consideraban un paso aventurado y que podría originar complicaciones para ulteriores avenimientos, temor que confieso no abrigué nunca, á presentar inmediatamente á las Cortes, como lo verifiqué el 20 de Marzo, tres dias después de la celebración del *meeting*, el proyecto de ley en que proponiéndose la aprobación del convenio celebrado con los tenedores de la Deuda interior, se hacia voluntaria la conversión de la exterior, dando un plazo de cuatro meses bajo las mismas bases contenidas en la propuesta que les había sido hecha, con la sola adición de que la quinta parte al menos de los sobrantes que pudieran ofrecer los presupuestos sucesivos, á partir del correspondiente á 1883-84, se invertirían necesariamente en amortizar Deuda perpetua del 4 por 100 después que fuesen aquéllos liquidados, pretensión que me había sido formulada por importantes tenedores de nuestra Deuda exterior, y en acceder á lo cual no veía inconveniente alguno; cuya adición, así como lo referente

al pago de los intereses por el Banco de España, se hizo en justicia extensivo á los tenedores de la Deuda interior.

Debo explicar la situación verdadera en que me encontraba en aquellos momentos.

Ante la posibilidad de que no obstante las opiniones que en contrario mantenían importantes tenedores de nuestra Deuda exterior en Inglaterra, el *meeting* no aceptase mi propuesta, había explorado, por medio del digno Presidente de nuestra Comisión de Hacienda en París al Comité de tenedores franceses; por medio del Ministro plenipotenciario de España, á Mr. Stern, Director del Banco de Brusélas, representante de muchos tenedores, y al Comité de éstos en aquella plaza; en Holanda, por la mediación de nuestro Cónsul, D. G. A. Van-Osterzee; y en otras plazas extranjeras por los conductos de que me era dado disponer: y en ellas había conseguido saber que, no obstante que las pretensiones de los tenedores eran en general superiores á las establecidas en el convenio con los tenedores de la Deuda interior, se adherirían al fin á este aunque haciendo todos la salvedad de que si á los ingleses se concedía algo más, ellos habían de participar de esta ventaja.

Por consiguiente, el proyecto de conversión podía realizarse, si no en totalidad, en grandísima parte, no haciendo ninguna otra concesión al *Council of Foreign Bondholders*; pero hubiera quedado por convertir sin duda parte de la Deuda existente en Inglaterra, hubiera habido necesidad de negociar por separado con los tenedores de esta, y por último, y era lo más importante para mí, se hubiera creado una situación de hostilidad entre el *Council* y el Gobierno español poco favorable para el interés de nuestro crédito y de las transacciones.

Con el proyecto de ley daban la muestra de decisión necesaria los que creían lealmente haber llegado en sus concesiones al límite de lo posible, se ofrecía un plazo de cuatro meses, que las Cortes extendieron á seis, para que la reflexión de lo que á sus intereses conviniera, aconsejase á los tenedores; y por último, se preparaba el camino al *Council* para que espontáneamente ilustrase á los mismos tenedores.

Ya en los momentos en que el *meeting* adoptaba su resolución, se decía que si la proposición en vez de reconocer por compensación de la renuncia de los acreedores un $\frac{1}{2}$ por 100 se hubiese extendido á $\frac{5}{8}$ por 100, acaso hubiese sido admitida.

Al ponerse á discusión en el Congreso de los señores Diputados el proyecto de ley, se acercaron en Londres al Ministro plenipotenciario de España los Presidentes del *Council* y del Comité de tenedores españoles en solicitud de una nueva inteligencia, y á mí, en representación de aquellos señores, Mr. O'Leary, con quien yo había llevado las negociaciones. No habiendo podido aceptar la proposición de aumento de un $\frac{1}{8}$ por 100, atendida su importancia y la necesidad de hacerla extensiva á los tenedores de la Deuda interior y manteniéndome firme en mi propósito de no hacer modificaciones en el proyecto de ley, cuando ya estaban votados la mayor parte de sus artículos en el Congreso de los Diputados, las pretensiones tomaron otro carácter. Se reducían á que el capital de la Deuda exterior al 3 por 100 fuera recibido para la conversión á 45,75 por 100 en vez de 43,75, proposición que, aparte de la cuantía que ofrecía aún, no era tampoco admisible, pues alteraba los tipos fijados en la ley, ya votados, y les daba además un aumento de capital de 2 por 100.

Las reclamaciones de los tenedores de la Deuda

exterior en este sentido tenían en verdad fundamento atendible, que esforzaron más y más cuando, votada la ley por ambos Cuerpos Colegisladores, estaba á punto de ser sancionada por S. M. y promulgada.

La conversión, decían, produce ventajas para los tenedores, y de ellas disfrutamos los extranjeros como los nacionales, pero produce beneficios de suma importancia para la nación española. Por la conversión se reduce el capital de la Deuda, esto es, la Nación resultará deudora de menor cantidad, se evita tener que aumentar progresivamente el interés hasta llegar al íntegro del 3 por 100, y le es conocido el límite máximo de su obligación. Y como mediante estas ventajas, los intereses ya no han de aumentar aunque la riqueza pública prospere, á medida que se desarrolle crecerá el bienestar de los españoles, y tendrán más ferrocarriles, y más carreteras, y más canales, y mejores puertos, y mejor material de guerra y de marina, y mayor comercio, y más industria, y más barato el consumo; que mucho puede hacerse con lo que representa los $\frac{3}{4}$ de interés á que renunciamos. Pues bien, de todas estas ventajas de que los españoles disfrutarán, nada puede alcanzarnos á los extranjeros. Y añadian : dadnos una fórmula por medio de la cual obtengamos la parte proporcional de esos beneficios, y estaremos conformes; pues de otra suerte, los acreedores del interior serían notoriamente beneficiados.

Desconocer en absoluto la fuerza de estas observaciones, imposibilitar el éxito de la conversión por no atenderlas en los límites que fuera posible, hubiera sido falta de previsión y de prudencia, y dejar una puerta abierta para ulteriores reclamaciones y disgustos.

Discutí, pues, las sucesivas pretensiones, y al fin

convine en lo siguiente, persuadido de prestar un servicio á mi país y de haber llenado mis deberes.

CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL SR. D. CARLOS O'LEARY, REPRESENTANTE DEL COUNCIL OF FOREIGN BONDHOLDERS Y DEL COMITÉ DE TENEDORES DE LA DEUDA ESPAÑOLA EN LONDRES.

«El Excmo. Sr. D. Juan Francisco Camacho, Ministro de Hacienda, en representación del Estado y en uso de la facultad que le concede el art. 8.º de la ley de conversión de la Deuda perpetua, y D. Carlos O'Leary, en representación del *Council of Foreign Bondholders* y del Comité de Tenedores de Deuda española en Londres, reunidos el día de la fecha en el despacho oficial del primero con el fin de poner término á las reclamaciones de los referidos Consejo y Comité, y después de consignar el Sr. O'Leary estar debidamente autorizado para el presente acto, convienen en lo siguiente:

«Primero. Á los tenedores de Deuda consolidada exterior que durante el plazo de dos meses, á contar desde el día en que la Comisión de Hacienda de España en el Extranjero publique el oportuno anuncio en las respectivas plazas, soliciten la conversión en Deuda perpetua al cuatro por ciento, se les abonará, en concepto de comisión, siete octavos por ciento del capital de la del tres por ciento que entreguen. Dicha comisión se abonará en títulos de la nueva Deuda al cuatro por ciento.

»Segundo. El *Council* y el Comité recomendarán á los tenedores de la Deuda consolidada exterior la conversión por la perpetua al cuatro por ciento en el plazo que queda expresado y con sujeción á los tér-

minos de la ley, contribuyendo en cuanto su influencia en los mercados permita al pronto término del canje de los referidos valores. Hecho por duplicado y á un solo efecto, en Madrid á veintiocho de Mayo de mil ochocientos ochenta y dos. — Juan Francisco Camacho. — O'Leary. — Aprobado en Consejo de Ministros. — Leon y Castillo. — Hay un sello de la Presidencia del Consejo de Ministros.»

Fué mi constante propósito en el curso de las negociaciones para la conversión respetar por igual todos los derechos, exigir idénticos sacrificios á todos los tenedores y concederlès las mismas ventajas, deseando colocarles en igual condición, ya lo fueran por Deuda interior, ya por exterior. En la esencia tengo la seguridad de haberlo conseguido, pues no ha constituido una diferencia de condiciones en el aumento del $\frac{1}{2}$ por 100, la concesión últimamente hecha de abono de un $\frac{7}{8}$ por 100 sobre el importe nominal de la renta del 3 por 100 exterior.

Los tenedores de la expresada Deuda llegaron á estar conformes en la igualdad del capital á convertir, en el interés anual, en el tipo de la conversión y en la fecha en que comenzara el pago; pero presentaban la reclamación que antes he expuesto, y para declararse satisfechos exigían se tomase de alguna manera en consideración. Lo que quedó convenido sólo grava al País con el aumento anual de 1.529.500 pesetas, cantidad harto insignificante si se tienen en cuenta las grandes ventajas obtenidas por la conversión, que desde aquel momento se hizo fácil. Por otra parte, dentro de la ley era posible atender á lo pedido, y sobre todo, concedido únicamente á los que convirtiesen en el plazo de dos meses, é interesaba sobremanera que la conversión fuera pronto un hecho, no podía, no debía dejar de obrar

de la manera que lo hice, abrigando la seguridad de que los primeros en conformarse habían de ser los tenedores de Deuda interior; y los hechos han venido después á demostrarlo.

Abrigaba profundo convencimiento de haber obrado en este asunto con sujeción á la ley y con arreglo á lo que exigían los intereses del País, y grato fué para mí, por lo tanto, que los Cuerpos Colegisladores aprobasen mi conducta al no tomar en consideración los dos siguientes votos de censura que se formularon por la oposición conservadora en el Congreso de los Diputados y en el Senado, inmediatamente después de publicarse el Real decreto de 29 de Mayo de 1882 conteniendo la disposición que era consecuencia del precitado convenio.

En la sesión del Congreso de los Diputados de 31 de Mayo de 1882 se presentó y discutió la siguiente proposición:

« Los Diputados que suscriben tienen el honor de » proponer al Congreso se sirva declarar que cons- » tituye un abuso de las facultades otorgadas al Mi- » nistro de Hacienda por la ley de 29 del mes actual » la comisión de $\frac{7}{8}$ por 100 que se concede en Real » decreto de la misma fecha á los tenedores de la » Deuda perpetua exterior.—Palacio del Congreso, 30 » de Mayo de 1882.—Raimundo Fernández Villaver- » de.—Francisco Romero Robledo.—Francisco Sil- » vela.—Fernando Cos-Gayón.—C. El Conde de » Toreno.—Rafael Atard.—Manuel González Lon- » goria. »

La proposición no fué tomada en consideración, por 189 votos contra 27.

En el siguiente día, 1.º de Junio, fué igualmente presentada y discutida la proposición siguiente:

» Pedimos al Senado se sirva declarar que la comi-

» sión de $\frac{7}{8}$ por 100 del valor nominal de la Deuda
» perpetua exterior, reconocida á los tenedores por
» decreto del Ministerio de Hacienda de 29 de Mayo,
» constituye un abuso de las facultades otorgadas por
» la ley de la misma fecha sobre conversión de la
» Deuda consolidada del Estado y de las obligaciones
» por subvenciones á ferrocarriles.—Palacio del Se-
» nado, 1.º de Junio de 1882.—El Marqués de Oro-
» vío.—El Conde de Puñonrostro.—Acisclo Miran-
» da.—José Sánchez Ocaña.—El Marqués de Torre-
» lavega.—El Marqués de Villamejor.—El Vizconde
» de Campo Grande. »

Tampoco fué tomada en consideración, por 99 vo-
tos contra 36.

Después de estas satisfactorias aprobaciones, consi-
dero ocioso insistir más en demostrar la justicia, la
conveniencia y las ventajas de la comisión de $\frac{7}{8}$ con-
cedida en los términos expuestos.

Sólo añadiré que si el mencionado Real decreto
fué expedido antes que un nuevo *meeting* de tenedo-
res aprobara el convenio, esto no sólo lo originó la
premura del tiempo, pues la publicación de la ley no
podía detenerse, sino también y muy principalmente
porque ni el *Council* ni yo abrigábamos ya la menor
duda de que recaería unánimemente aquella aproba-
ción, como así aconteció al celebrarse en 13 de Junio
de 1882.

Es necesario resumir en cifras todos los anteceden-
tes expuestos para que se comprenda bien el curso
de la negociación y las ventajas obtenidas en ella.

La primera pretensión del *Council of Foreign
Bondholders* mantenida con insistencia has-
ta la celebración del *meeting* que no aceptó
mi propuesta, excedía en un cuartillo por
ciento á lo que yo concedía, cuyo importe

representaba una carga para el presupuesto de.	Plas. 10.925.000
El un octavo por ciento á que parecía se limitaba la pretensión en los momentos mismos de verificarse el precitado <i>meeting</i> importaba.	» 5 462.500
El aumento de 2 por 100 representado por la petición de que se admitiera la Deuda llamada á convertir al 45,75, se elevaba á.	» 3.496.000
El arreglo llevado á cabo concediendo $\frac{7}{8}$ por 100 sobre el nominal del 3 por 100, producía un aumento de.	» 1.529.500
Cuya última cifra viene á resultar, sobre el $1\frac{3}{4}$ por 100 de intereses á la Deuda del 3 por 100, 0,035 milésimas, ó sea $3\frac{1}{2}$ céntimos por 100.	
De manera que lo que llegó á convenirse representa con relación á la primera pretensión, mantenida, repito, hasta la celebración del <i>meeting</i> , una ventaja en la carga anual de.	» 9.395.500
Con relación á la segunda.	» 3.933.000
Y si se verifica la comparación con la tercera.	» 1.965.500

El convenio dió el resultado más satisfactorio. El 24 de Agosto, día en que terminó el plazo de dos meses, señalado para gozar del beneficio de los siete octavos, se habían presentado á la conversión 4.162.372.800 de pesetas de los 4.413 millones á que ascendía el total de la Deuda exterior al 3 por 100. Faltaban, pues, por presentar 250.627.200 que no gozaron ya de aquel derecho.

Desde aquel momento la conversión de la Deuda exterior pudo considerarse felizmente terminada.

Sucesivamente se fueron presentando títulos á convertir por cuenta de los precitados 250 millones, en términos que en 6 de Noviembre se hallaba reducida esta cifra á la de 204 millones de pesetas. Sin embargo de que suma tan insignificante no podría ofrecer dificultades ulteriores, atendida la total importancia

de la Deuda exterior al 3 por 100, y sin embargo también de que debía considerarse reducida en la parte que en una masa de valores tan considerable se produce en operaciones de esta clase por pérdidas ó inutilizaciones en el período de la emisión, que se calcula no bajar del 1 $\frac{1}{2}$ ó 1 por 100, lo cual representaría 66 millones de pesetas, ó 44 cuando menos, consideré de conveniencia provocar una declaración del *Council of Foreign Bondholders* que fijase definitivamente la situación.

Mi punto de vista era el siguiente :

La conversión de la Deuda exterior no había tenido en verdad, ni por la ley ni por el Decreto de 29 de Mayo, carácter obligatorio, pero debía considerarse que el *meeting* celebrado el 13 de Junio de 1882 se lo había dado, y sobre todo, el hecho de que la cuasi unanimidad de los tenedores había aceptado la conversión, demostraba que no sería justo que una insignificante minoría pudiera pretender sobreponerse á los fines y propósitos que habían animado, no sólo al Gobierno español, sino á la inmensa mayoría de los tenedores de la Deuda; esto es, que la conversión al 3 por 100 en 4 fuese un hecho definitivo, desapareciendo el antiguo signo.

Ahora bien, ¿podría aspirar el exiguo número de tenedores del 3 por 100 que resultase á mediados ó fin de Diciembre, en que terminaba el plazo de seis meses señalados por la ley para la conversión, á que se les aplicase el artículo del convenio de 1876 que estableció se abrirían negociaciones en 1882 para acordar los sucesivos aumentos de interés hasta llegar al íntegro de 3 por 100?

No podía creerlo ni suponer siquiera que el *Council of Foreign Bondholders* apoyase semejante pretensión si, contra lo que era de esperar, se formulara,

habiendo acordado el segundo *meeting*, á mi propuesta, recomendar á todos los tenedores que aceptasen la conversión.

No cabía para mí duda que el *Council* estaría en el caso de recomendar á los tenedores en los primeros días de Diciembre que se presentasen á la conversión, dando por este medio á la resolución del último *meeting* la interpretación que procedía, pues si la adoptada en 1876 tuvo carácter obligatorio, aunque hubo minoría que se opusiera al acuerdo, en los momentos en que yo me ocupaba de la cuestión la evidencia de los hechos ofrecía, no una mayoría respetable, sino la cuasi totalidad del número de los tenedores, y otra interpretación que no fuera la del mismo carácter obligatorio, sería de todo punto inexplicable.

Dadas mis instrucciones en este sentido al dignísimo representante de España en Londres, el *Council* acogió de completa conformidad mis indicaciones, y me dirigió las comunicaciones siguientes, que disipaban ya toda duda y demostraban la lealtad y buena fe con que en todo procedía.

«Consejo de tenedores extranjeros.—17 Moorgate
»Street.—Londres, 1.º de Diciembre de 1882.—Al
»Excmo. Sr. D. Juan Camacho, Ministro de Ha-
»cienda de S. M. C. el Rey de España.—Señor:—El
»«Consejo de tenedores extranjeros me encarga diga
»á V. E., de su parte, que ha publicado un anuncio,
»advirtiéndole á los tenedores españoles que no han
»convertido todavía su papel, que no pierdan tiempo y
»hagan en seguida esta operación.—Aseguro también
»á V. E. que el Consejo no dará paso alguno ni ayu-
»dará á que se perturbe el arreglo hecho para la con-
»versión con su aprobación y consentimiento, sino
»que hará todo lo posible para promoverlo hasta su
»completa realización.—V. E. me permitirá añadir

» que he visto con la mayor satisfacción que esta notable operación financiera se haya llevado á cabo con completo éxito, y que han acertado los que la miraban como el principio de una nueva era en la historia financiera de España, que había de redundar en beneficio de la prosperidad nacional. Tengo el honor, etc.—Bouverie.»

« Consejo de tenedores extranjeros.—17 Moorgate Street.—Londres, 1.º de Diciembre de 1882.—Al Excmo. Sr. D. Juan Camacho, Ministro de Hacienda de S. M. C. el Rey de España.—Señor:—Como Presidente del Comité de tenedores españoles, he recibido el encargo de poner en conocimiento de V. E. un acuerdo que tomó ayer, que será satisfactorio para V. E., como prueba de la manera de ver y considerar el arreglo financiero inaugurado por V. E. en el año 1882. Es sinceramente satisfactorio para ellos y para mí que la conversión haya sido generalmente aceptada, por ser el primer gran paso que se ha dado bajo los auspicios de V. E. para la restauración financiera de España.—Tengo el honor, etc.—Bennoch, Presidente.—En una reunión ó junta del Comité general de tenedores, celebrada en Londres en la casa del Consejo, Moorgate Street, se acordó en 30 de Noviembre de 1882:—*Que habiendo consentido el Comité en el arreglo de la Deuda española, felicitaba al Ministro, autor de la conversión, que deseaba se dejase abierta, en beneficio de los pocos tenedores que todavía no la habían llevado á cabo.*—Bennoch, Presidente.»

La ventaja de este procedimiento, aun aparte de dejar satisfactoriamente orilladas todas las dificultades que en lo sucesivo hubieran podido surgir, han sido evidentes, pues de los 4.413 millones que importaba nuestra Deuda exterior al 3 por 100, sólo faltan

por presentar en el día de hoy, 8 de Mayo de 1882, 56.764.220, cantidad próximamente igual á la que siempre se ha estimado como mínima de la que puede haberse extraviado ó inutilizado en manos de sus poseedores.

No debo omitir dar conocimiento de que algunas plazas del Extranjero pidieron se establecieran en ellas Delegaciones para la presentación de los títulos que hubieran de convertirse, del mismo modo que se había hecho en Bruselas, Amsterdam y Lisboa; pero sólo la de Francfort pudo ser atendida, por reunir condiciones que así lo reclamaban. La petición fué hecha al Cónsul de España por la Cámara de Comercio y los tenedores de la Deuda allí residentes: y habida consideración á que la precitada plaza de Francfort es la única de Alemania en donde se cotizan oficialmente los valores españoles; que en ella existían cantidades importantes de la Deuda que había de convertirse; que accediendo á lo pedido se aseguraba más el éxito de la operación; que los gastos que de ello se originasen habían de ser de escasa importancia y grandes los beneficios para el crédito público; y por último, que la pretensión de los reclamantes no se extendía á procurar ampliaciones en el plazo, que ya venía corriendo, para gozar de la bonificación de los $\frac{7}{8}$ por 100, se creó por Real orden de 17 de Julio de 1882 la Delegación de Francfort, compuesta del Cónsul de España, un Jefe de Negociado y un Auxiliar.

A consecuencia de lo preceptuado en la ley para que el pago de los intereses de la Deuda se verificase por el Banco de España, se hizo con éste el oportuno convenio en 22 de Noviembre de 1882, por el cual reservará el mismo las cantidades necesarias de las contribuciones directas que recauda, habiendo de

completarse, cuando sea preciso, el importe de cada vencimiento con parte de los procedentes del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes, que recibirá previamente el Banco de los recaudadores.

Del reconocido patriotismo del Banco de España se obtuvo que realice este servicio sin premio ó comisión de ninguna especie.

No debiera ocuparme en esta exposición que hago de todos los incidentes de la conversión, de un punto que tiene conocidos antecedentes, que está ajustado á las prácticas seguidas por los Gobiernos anteriores y á la autorización que las Cortes se sirvieron otorgarme : me refiero á la comisión concedida al *Council of Foreign Bondholders*. Pero desde el momento que este particular ha sido objeto de discusión para algunos, pudiera aparecer como temor á ella el dejar de tratarlo ; y yo, que podré haberme equivocado en los actos que he llevado á cabo, pero que he procurado inspirarme siempre en la justicia y en el interés de mi país, creo que puedo afrontar sin embarazo alguno el asunto de que me ocupo, con la fundada esperanza de que habrá de reconocerse por todos la rectitud y la parsimonia con que he procedido.

Nadie ignora que el *Council of Foreign Bondholders* es una institución pública que interviene en las negociaciones que los Estados tienen con sus acreedores extranjeros para el arreglo de sus Deudas ó modificaciones de sus condiciones ; que lleva siempre una comisión por sus servicios, y que su representación viene reconocida por los Gobiernos españoles. Por su mediación se pactó con los tenedores ingleses en 1876, convenio que aceptaron, ó se impuso después á los demás tenedores de nuestra Deuda, pues con la autoridad de aquella Corporación y de aquellos acreedores se conforman en definitiva todos.

El representante del *Council* me había manifestado las pretensiones de éste sobre el importe de la comisión, y también su Presidente después, quedando al fin acordada, previo expediente, por Real orden de 4 de Julio de 1882, en la suma de 50.000 libras esterlinas en títulos de la Deuda perpetua exterior al 4 por 100, con la cláusula precisa de que el pago se verificaría al considerarse terminada la conversión.

Que el pago de una comisión era procedente queda demostrado con lo expuesto, y lo que resta probar es que el importe de la que yo llegué á acordar fué extraordinariamente módico con relación á los antecedentes y á la importancia del servicio.

Por la negociación realizada con el *Council of Foreign Bondholders* en 1872 para el pago en papel de la tercera parte de los intereses de la Deuda consolidada exterior al 3 por 100, se abonó á aquél en títulos de la misma Deuda y al respecto de 1 por 100 del valor nominal de los títulos que se emitieron, pesos fuertes 63.493, ó sean 317.465 pesetas.

En 1876 se hizo con el mismo *Council* el convenio que ha estado vigente hasta la conversión, y por él se le abonó como comisión $\frac{1}{2}$ por 100 de la emisión del 2 por 100 amortizable para pago de los intereses atrasados, lo cual importó 1.504.195 pesetas, cantidad superior, aun con la baja en el tipo del 1 al $\frac{1}{2}$ por 100, á los 1.250.000 pesetas que ahora se satisfacen. Y cuenta que con arreglo á este precedente, que es el de la comisión más mínima, siendo la emisión del nuevo 4 por 100 exterior de 1.970.000.000 pesetas, procedería pagar por comisión 9.850.000 pesetas. Todavía satisfaciendo sólo el 1 por 1.000 en vez del $\frac{1}{2}$ por 100, importaría la comisión 1.970.000 pesetas, en vez de las 1.250.000 en que he convenido. ¿Puede negarse que es módica la comisión convenida por mí

para la operación más grande que se ha conocido?

Pero no pudiendo negarse ante la evidencia de estos hechos que la comisión es realmente insignificante, comparada con las anteriores y la importancia de los respectivos arreglos, se dirá sin duda alguna : entonces ¿para qué la comisión de los $\frac{7}{8}$ por 100 á los tenedores de la Deuda?

Pocas palabras bastarán para demostrar lo infundado de la observación.

Ya queda suficientemente explicado, para que puedan formar juicio los hombres imparciales, por qué se otorgó esa comisión de $\frac{7}{8}$ por 100 y lo que significaba; pero ahora añadiré que esta comisión, que, como es sabido, no se extendía á todos los tenedores, sino sólo á los que presentaran sus títulos á la conversión en el período de los dos primeros meses de los seis que la ley concedía, no redundaba en provecho del *Council*, negociador é intermediario de la operación y el que por sus gestiones y trabajos lleva siempre una comisión, como la obtiene el agente de cambios que, procurando las mayores ventajas posibles para su comitente, percibe comisión de la otra parte con quien contrata, si termina favorablemente el negocio.

Aprovecho con especial complacencia esta oportunidad que se me ofrece para satisfacer antes de terminar, y por lo que á mi hace, una deuda de lealtad y de honor que como miembro del Gobierno, y especialmente como Ministro de Hacienda, tengo contraída con las personas que, ayudándome en esta obra de la conversión de la Deuda exterior, prestaron á nuestro país en diversos grados y por distintas maneras un gran servicio, cuya debida publicidad es una de las recompensas á que se han hecho acreedoras las personas á que me refiero, que son : el Sr. Marqués de

Casa-Laiglesia, Ministro plenipotenciario de España en Londres, que consagró á este asunto, con perseverante afán, tan singular inteligencia, tanta discreción y tan señalado patriotismo, que por lo mismo que se trataba de un encargo extraño á su carrera, hacen más justa esta mención y la del personal de aquella Legación, que con esmerado celo cumplió sus órdenes ; el Sr. Merry del Val, Ministro plenipotenciario de España en Bruselas, cuya cooperación fué también tan útil como activa y entendida ; el Sr. S. F. Stern, Director del Banco de Bruselas, digno de todo elogio y reconocimiento por el eficaz apoyo que prestó á la conversión ; el Sr. Dr. D. Luis Braunfels, Cónsul de España en Francfort, cuyos servicios son dignos de aplauso y recompensa por la adhesión y eficacia que ha mostrado para con este país ; así como los demás funcionarios ajenos al Departamento que tuve la honra de dirigir, y cuyos servicios solicité.

Justo es también decir que el Sr. Bouverie, Presidente del *Council of Foreign Bondholders*, y el señor Bennoch, que lo es del Comité de tenedores españoles en el mismo Consejo de Londres, mostraron un espíritu tal de moderación, buen deseo y equidad, que hizo más fácil la negociación, á cuyo buen resultado contribuyeron de un modo muy útil algunas altas personalidades financieras de grande importancia y respetabilidad en Europa, vivamente interesadas por el crédito y el bien de nuestro país.

Y por lo que hace al orden administrativo de la Hacienda, es mi deber declarar en justicia que los dignos Subsecretario é Interventor general de la Administración del Estado, D. Celestino Rico y García y D. José Ramón de Oya, me prestaron muy útiles é importantísimos servicios con su reconocida inteligencia y celo ; que son igualmente dignos de men-

ción, por los importantes trabajos que llevaron respectivamente á cabo, el Director general; que era á la sazón, de la Deuda pública, D. José Creagh; el Presidente de la Comisión de España en el Extranjero, D. Francisco Luis de Retes; el Interventor de la misma Comisión en Londres, D. Nicasio E. Jauralde, y todos los empleados á las órdenes de los expresados señores, que contribuyeron en la medida de su posición y de sus fuerzas al desempeño de aquellos trabajos.

IV.

RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

DEUDA INTERIOR.

La Deuda perpetua consolidada al 3 por 100 interior ascendía, sin tomar en cuenta las inscripciones nominativas, á. *Plas.* 3.006.399.000

Pues aun cuando debían existir 13.125.000 más, procedentes de emisiones anteriores al año de 1870, la circunstancia de no haberse presentado al canje en dicho año, ni con posterioridad, hace suponer fundadamente que sus títulos están perdidos, como muy oportunamente se hace constar en la Memoria oficial presentada á las Cortes en 12 de Marzo del corriente año por el Sr. Ministro de Hacienda.

Se han presentado á la conversión hasta el 30 de Abril de 1883. » 2.940.777.500

Pendientes de presentación en la precitada fecha de 30 de Abril. » 65.621.500

Las inscripciones nominativas de la Deuda del 3 por 100 serán convertidas al 4 por 100 en Julio de 1883, con arreglo á lo determinado en el art. 13 del Real decreto dictado para reglamentar la ejecución de la ley.

Las obligaciones del Estado por subvención á ferrocarriles, al 6 por 100, importaban.	<i>Plas.</i>	605.521.000
Se han presentado á la conversión hasta el 30 de Abril de 1883.	»	601.154.500
Pendientes de presentación en la precitada fecha de 30 de Abril.	»	<u>4.366.500</u>

DEUDA EXTERIOR.

El importe de la Deuda consolidada exterior al 3 por 100, importaba.	<i>Plas.</i>	4.413.000.000
Se han presentado á la conversión hasta el 4 de Mayo de 1883.	»	4.356.235.780
Pendientes de presentación en la precitada fecha de 4 de Mayo.	»	<u>56.764.220</u>

De lo expuesto se deduce que si en la Memoria oficial, según los datos conocidos hasta su fecha, y partiendo del mismo supuesto de que parten cuantos conocen esta clase de operaciones, de que el 1 por 100 de la cantidad total debe considerarse perdido ó inutilizado, se expresa que sólo faltaban convertir 17 millones de pesetas de Deuda exterior, al presente sólo deben faltar por presentarse á la conversión, á lo sumo, unos 12 millones de pesetas.

Conviene ahora á mi propósito dejar demostrado el verdadero aumento de gastos que ha traído al presupuesto del Estado la conversión de la Deuda perpetua, y para ello me valdré de los datos que proporciona la Memoria oficial presentada á las Cortes por el Sr. Ministro de Hacienda en 12 de Marzo del corriente año, partiendo de las cifras fijadas como crédito para el año económico de 1883-84.

DEUDA INTERIOR.

El total importe de la Deuda interior al 3 por 100, se elevaba, según la precitada Memoria, á.			
	Ptas.	3.937.850.004	
El de las obligaciones del Estado por ferrocarriles, al 6 por 100, ascendía á pesetas 605.521.000; pero duplicando la cantidad para buscar el mismo tipo de venta, puesto que este valor devengaba doble interés, resulta.			
	Ptas.	1.211.042.000	
<i>Que en junto suman.</i>			
		5.148.892.004	
Cuyos intereses, al respecto de 1,25 por 100 que actualmente se satisface, importan.			
	Ptas.	64.361.150,05	
Aumento de 1/2 por 100 que por la conversión le corresponde.			
	»	25.744.460,02	
<i>Total interés que debe satisfacerse en 1883-84.</i>			
	»	90.105.610,07	
En el proyecto de presupuestos para 1883-84 se fija este gasto de la manera siguiente:			
Por intereses de la Deuda perpetua al 4 por 100 interior.			
		77.749.600	
Por íd. de inscripciones intransferibles á favor de corporaciones civiles.			
	Ptas.	12.423.171	90.172.771 »
<i>Diferencia en más.</i>			
	Ptas.	67.160,93	
Que debe nacer del aumento que se calcule al 4 por 100 por los gastos de operación y lo que haya de emitirse en inscripciones á favor de las corporaciones civiles. De lo que á este concepto corresponde, sólo 2/3 son imputables al aumento por la conversión; pero aun tomando íntegra la cantidad, como más gasto, resulta.			
	»	25.811.620,95	

DEUDA EXTERIOR.

El importe de la Deuda consolidada al 3 por 100 exterior, estimando su valor en pesos fuertes y apreciando cada uno de éstos por 5 pesetas, se elevaba, según la mencionada Memoria, á. *Ptas.* 4.092.894.000

Aumento por razón de la diferencia entre los cambios de francos 5,40 y dineros esterlines 51 por peso fuerte, á que estaba hecha la reducción, y á la par. . . *Ptas.* 320.106.000

Verdadero valor de la Deuda consolidada al 3 por 100 exterior. *Ptas.* 4.413.000.000 »

El 1,25 por 100 de interés importa. » 55.162.500 »

El aumento de $\frac{1}{2}$ por 100. » 22.065.000 »

Total importe del interés. » 77.227.500 »

Se fija en el proyecto de presupuesto para 1883-84 en. *Ptas.* 78.846.040 »

Diferencia en más. » 1.618.540 »

A que se eleva el aumento por los $\frac{7}{8}$ por 100 que se concedieron de comisión y todos los gastos de la operación. Y agregando á esta partida el aumento de $\frac{1}{2}$ por 100 convenido, ó sean. » 22.065.000 »

Forman un total aumento de. » 23.683.540 »

RESUMEN Y DEMOSTRACIÓN.

Elevándose el aumento por la Deuda interior á. *Ptas.* 25.811.620,95

Y por la exterior á. » 23.683.540 »

Hacen un total aumento de. » 49.495.160,95

Pero como por virtud de la conversión dejó de ser amortizable la Deuda de ferrocarriles, y ésta exigía por amortización un gasto, que es baja, de.

Queda reducido el verdadero au-

mento á.. »

Ptas. 7.029.975 »

42.465.185,95

Además, la conversión de la Deuda perpétua produce en el presupuesto las siguientes reducciones, que en realidad deben considerarse como una mino-
ración del aumento que resulta en el presupuesto par-
cial de la Deuda :

Por efecto de la conversión queda su-
primida la amortización que se hacía
de Deuda perpetua, en la que se in-
vertía, con arreglo á la ley de 1876, el
producto de la venta de los bienes del
Estado; y por consiguiente, este re-
curso se aplica á otras atenciones, y
es, por tanto, un menor aumento en
el presupuesto general de gastos. Im-
porta próximamente.

Ptas. 1.600.000 »

También por efecto de la conversión en
lo sucesivo no habrá que abonar la di-
ferencia entre el valor de los intereses
de la Deuda exterior, expresado en los
presupuestos de la Deuda en pesetas,
y el que se abonaba en francos y libras
á los cambios de 540 y 51 dineros,
cuyo quebranto, que debía aplicarse
al presupuesto parcial de Hacienda,
no baja de.

» 3.000.000 »

En junto. »

4.600.000 »

Por consecuencia de la conversión en 4 por 100, el
capital de nuestra Deuda perpetua interior y exterior
ha quedado reducido considerablemente. He aquí la
demostración :

DEUDA INTERIOR.

Había en circulación al hacerse la conversión:

3 por 100 consolidado.	Ptas.	3.006.399.000 »
Inscripciones á favor de particulares.	»	208.430.498 »
Id. de corporaciones civiles, (emitidas y á emitir)..	»	709.895.506 »
Obligaciones del Estado por ferrocarriles, reducido su valor nominal á 3 por 100.	»	1.211.042.000 »
<i>En junto.</i>	»	<u>5.135.767.004 »</u>
El valor nominal del 4 por 100 que se emitirá por todos conceptos asciende á..	»	2.253.620.000 »
<i>Reducción en la Deuda interior.</i>	»	<u>2.882.147.004 »</u>

DEUDA EXTERIOR.

La circulación al hacerse la conversión, apreciado su valor á los cambios de francos 5,40 y dineros 51 por peso fuerte, importaba.	Ptas.	4.413.000.000 »
Se emitirá 4 por 100 por todos conceptos en cantidad de.	»	1.971.151.000 »
<i>Reducción en la Deuda exterior.</i>	»	<u>2.441.849.000 »</u>

RESUMEN.

Había en circulación por Deuda interior al hacerse la conversión.	Ptas.	5.135.767.004 »
Había en circulación por Deuda exterior.	»	<u>4.413.000.000 »</u>
<i>Total de Deuda perpetua que habia en circulación.</i>	»	9.548.767.004 »
El total que se emitirá en la nueva Deuda al 4 por 100 por todos conceptos importa.	»	4.184.771.000 »
Importe total de la reducción que por la conversión ha experimentado la Deuda perpetua.	»	<u>5.363.996.004 »</u>

Cuya cifra de pesetas 5.363.996.004 representa el 55,75 por 100 de la Deuda en circulación antes de convertirse.

Si la operación de conversión no se hubiera llevado á cabo, el Gobierno hubiese tenido que negociar con los tenedores para fijar los plazos de los sucesivos aumentos de interés; y dada la situación de ánimo de éstos, difficilísimo sería que se sometiesen al largo período de los cuarenta años para llegar á obtener el interés íntegro del 3 por 100; pero en la suposición de que esto se hubiese conseguido, procede examinar la diferencia de resultados de uno y otro sistema.

Es de advertir que los intereses que gravasen á la renta perpetua del 3 por 100, ya con arreglo á los precedentes de 1876, ó conforme han quedado establecidos por la conversión, podrían fijarse con exactitud, puesto que el capital era el mismo y los intereses aumentaban progresiva y proporcionalmente; mas como en la conversión se han comprendido las obligaciones por subvenciones á ferrocarriles, cuyo tipo de amortización era variable, toda vez que ésta se efectuaba por subastas, preciso es hacer un cálculo del tiempo que se tardaría en amortizar toda la Deuda por este concepto, tomando como base el promedio de la diferencia del tipo de la última de aquéllas y la par. El tipo de la subasta última fué 62,50, y siendo 100 la par, resulta como término medio 81,25. Importando el capital 605.521.000 pesetas, daría un efectivo de pesetas 491.985.812 á dicho tipo medio, y destinándose cada año 7.029.975 á la amortización, serían necesarios setenta años para realizarla por completo. Pero con objeto de que no pueda decirse que este cálculo está hecho en sentido favorable á lo que me propongo demostrar, supóngase que avanzando la amortización fuera menos costosa y que se

efectuara en cincuenta años, resultando que se amortizarían anualmente 12.110.420 nominales, y por lo tanto, en cada quinquenio, 60.552.100 pesetas. Haciendo esta rebaja cada cinco años en el capital á devengar interés, aumentando éste en un $\frac{1}{2}$ por 100 cada quinquenio, y siendo constante la cantidad destinada á la amortización anual, el resultado comparado de una y otra operación sería el siguiente :

PROGRESIÓN de los gastos de la Deuda perpetua y la de ferrocarriles si no se hubiese hecho la conversión, tomando por base los precedentes de la ley de 1876, y comparación con los que ha de exigir, dada la conversión.

AÑOS.	DEUDA DEL 3 POR 100.			FERROCARRILES.		TOTAL. gasto anual.	GASTO anual por la conversión.	DIFERENCIA.		EN LOS CINCO AÑOS.	
	Tipos.	Interior.	Exterior.	Tipos.	Intereses y amortización.			De más.	De menos.	De más.	De menos.
1882	1 1/4 por 100	49.223.125	55.162.500	2 1/2 por 100	22.168.000	126.553.625	169.018.811	42.465.186	»	(1) 212.325.930	»
1887	1 1/2 »	59.067.750	66.195.000	3 »	23.379.042	148.641.792	169.018.811	20.377.019	»	101.885.095	»
1892	1 3/4 »	68.912.375	77.227.500	3 1/2 »	23.984.563	170.124.438	169.018.811	»	»	»	5.528.135
1897	2 »	78.757.000	88.260.000	4 »	23.984.563	191.001.563	169.018.811	»	»	»	109.913.700
1902	2 1/4 »	88.601.625	99.292.500	4 1/2 »	23.379.042	211.273.167	169.018.811	»	»	»	211.271.780
1907	2 1/2 »	98.446.250	110.325.000	5 »	22.168.000	230.939.250	169.018.811	»	»	»	309.602.195
1912	2 3/4 »	108.290.875	121.757.500	5 1/2 »	20.351.437	250.399.812	169.018.811	»	»	»	406.905.005
1917	3 »	118.135.500	132.390.000	6 »	17.929.353	268.454.853	169.018.811	»	»	»	99.436.042
(1) De los 212.325.930 que figuran en la primera partida de la casilla <i>De más</i> por resultado de los cinco años, debe deducirse la cantidad correspondiente al de 1882 y primer semestre de 1883, en que sólo se satisface el cupón á 1 1/4 por 100, y no á 1 3/4, que es lo que allí aparece para no alterar la homogeneidad de la operación; cuya diferencia importa:										314.211.025	
Por los intereses de la renta perpetua.											
Por id. de las obligaciones del Estado por subvenciones de ferrocarriles.											
Por la suma destinada á la amortización de ferrocarriles en el periodo mencionado.											
<i>Total importe de la baja.</i>										82.259.152	
<i>Verdaderos resultados para la comparación.</i>										231.951.873	1.142.656.917
<i>Economía hasta el año 1917 inclusive.</i>										910.705.044	

Paréceme que quedan probadas de una manera concluyente las inmensas ventajas que experimenta el Estado por efecto de la conversión realizada, pues no sólo hasta el año 1917 se economizan pesetas 910.705.044, sino que desde dicho año se economiza también la carga anual de 99.436.042.

No puedo dejar de ocuparme, al concluir, de un cargo de cierta apariencia, que vulgarmente, y aun por hombres de reconocida autoridad, se me ha dirigido por haber gravado con la conversión el presupuesto con un aumento de gastos que era superior á sus recursos, y que habría de acarrear un nuevo déficit.

Permitido me sea decir que esta observación no es verdaderamente propia de hombres de gobierno, de publicistas que se precian de hombres de Estado. Las grandes cuestiones que interesan al honor y á la vitalidad de una nación no pueden apreciarse desde un solo punto de vista, sino que, por el contrario, es preciso juzgarlas en su conjunto, bajo todas sus fases; y tal hizo en esta ocasión el Gobierno de que formaba parte.

Además de otras razones de carácter político é internacional, y todavía dentro exclusivamente del terreno financiero, la conversión de la Deuda perpetua no fué un hecho aislado; el pensamiento del arreglo fué más grande, más comprensivo. La operación de la Deuda amortizable producía al presupuesto una enorme economía ideada con propósitos varios, tales como matar el déficit, extinguir la Deuda flotante y hacer, en fin, posible la conversión general: porque nada era más natural, más oportuno, más interesante, como he dicho ya repetidas veces, que reintegrar á España en su puesto en el mundo. Los beneficios, pues, obtenidos en las Deudas amortizables debían

emplearse, y se consagraron en efecto, á este grande objeto; y si el presupuesto futuro, en su conjunto, podía aún traer la necesidad de un aumento, no era esta razón bastante para seguir en la afrentosa situación en que nos encontrábamos, cuando en el capítulo especial de los gastos de la Deuda yo no gravaba el presupuesto, sino que lo había beneficiado.

Semejante cargo podría dirigirse á un administrador ligero é imprevisor que hubiese caído inconscientemente en la dificultad, sin haber previsto su remedio, pero no por cierto al que ha demostrado que si había previsto un presupuesto nivelado, á pesar del aumento á 1 $\frac{1}{4}$ y por 100 del interés de la Deuda, tenía también estudiado de antiguo el sistema financiero del presupuesto *definitivo*, esto es, de un presupuesto dotado con los recursos necesarios, no sólo para el pago de los intereses de la Deuda convertida, ó sea de la Deuda *definitiva* también, sino para satisfacer además otras grandes necesidades nacionales de las cuales no cabe ya prescindir por más tiempo.

Tenía yo mi pensamiento: este pensamiento estaba dentro de mi criterio general de gobierno; y he dejado de pertenecer á aquel de que formaba parte, desde el punto en que este sistema no ha sido aceptado.

La carga producida por la conversión verificada, comparada con la que hubiera sido forzoso hacer, como en este escrito se ha demostrado, es bien pequeña, pues se reduce á pagar por tres años y medio y ocho años y medio una cantidad de escasa importancia relativamente á la grande ventaja obtenida de más de 910 millones de pesetas de economía en los intereses, en un periodo ciertamente no muy largo, y 55,75 por 100 de rebaja en el capital de la Deuda nacional.

Para mi sistema, que resolvía cuestiones más grandes y trascendentales, no podía ser obstáculo digno de ser tenido en cuenta, ni razón bastante para buscar pretexto de aplazar aún lo que se debía y perder la oportunidad de una grande y utilísima compensación.

LA DESAMORTIZACIÓN

DE LOS MONTES PÚBLICOS.

Como la desamortización de los montes públicos ha sido ajena á mi gestión en el último Ministerio, no es, en cierto modo, propio este asunto del presente trabajo, y en tal concepto puede considerarse extraño en el cuadro natural de mi pobre Memoria justificativa; pero, esto no obstante, he considerado que en alguna manera, y como apéndice, debí aprovechar la ocasión que se me ofrece para ocuparme de este interesante particular, por dos razones de gravedad. Es la primera, que habiendo sido la causa ocasional de la crisis, me cumple demostrar que no procedí por ligeros motivos al presentar y al mantener en Consejo de Ministros el pensamiento; y es la segunda, que habiendo adquirido la idea una determinada importancia en la opinión, y atribuyéndola por mi parte mucha, como base de un presupuesto extraordinario consagrado al fomento verdadero de los intereses materiales del País y á otras obligaciones de suprema entidad nacional, debo á esa misma opinión pública el tributo modestísimo de mis estudios en la materia, por si en alguna sazón ó forma pudieran llegar á ser de utilidad.

Me decido, por lo tanto, á publicar el bosquejo que sometí al Consejo de Ministros, así como las explicaciones escritas que le presenté después para mayor ilustración; y con el fin de que la opinión pública, que ha desconocido ó impugnado los fundamentos en que se apoyaba mi proyecto, pueda hacerse cargo de la mayor ó menor fuerza de las contradicciones que ha merecido y de lo que se les puede oponer en otro sentido, añadiré, por último, otra serie de razonamientos, que, en mi juicio, abonan aquélla.

Es posible que muchos tengan por inútil la publicación de estos datos, y hasta cierto punto yo convengo, como ya he dicho, en que no son del todo pertinentes en la tarea de que me ocupo; pero para mí es de la mayor importancia el que se comprenda bien mi conducta en los precedentes inmediatos á la crisis.

Había yo contraído un compromiso sagrado de lealtad nacional, en mi entender, con los tenedores de la Deuda perpetua del Estado, que para llevar á cabo la conversión habían hecho concesiones de gran importancia, como queda en otro lugar explicado, y no me era honradamente posible presentar á las Cortes un presupuesto ordinario y permanente dentro del cual apareciese roto el equilibrio apetecido y que debía asegurar por el contrario que dentro de él y sin que resultase déficit, cupiesen los intereses de la Deuda con el aumento que en virtud de la ley están llamados á experimentar en el próximo año económico.

Tampoco, por otra parte, me era dable hacer que se renunciase á los gastos que grandes y patrióticos motivos aconsejaban, y que por su carácter son materia natural de un presupuesto extraordinario, sobre todo desde el punto en que yo creía que existía base para formarlo, y por consecuencia de estos puntos de vista, mi sistema, realizado en su primera parte ya

con el poderoso auxilio que la confianza de mis colegas de Gobierno me proporcionaba, se amplió entonces lógicamente con una segunda parte, concebida como complemento de la primera y una necesidad además de la situación, y presentada con la fe y decisión que maduras reflexiones habían creado en mi ánimo.

¿Podía yo obligar á mi país á que renunciase á ciertas empresas de seguridad y desarrollo de sus intereses materiales? ¿Debía buscar los recursos para dichas necesidades en operaciones de crédito indotadas ó en negociaciones de Deuda flotante? Evidente es que no me eran posibles la una ni la otra cosa, y, por consiguiente, que tampoco lo era mi continuación en el Gobierno si el Consejo de Ministros no hallaba, con convencimiento y resolución, aceptables los medios que yo proponía para alcanzar los mencionados propósitos.

Posible era el aplazamiento; el presupuesto para 1883-84 no podía ofrecerme dificultad alguna, dada la cartera del Tesoro, lo cual no se ignoraba; pero desde el momento que sólo podía considerarse transitorio, no era yo ciertamente el llamado á formarle, comprometiendo mi sistema y dando lugar á la duda, cuando menos, respecto á la sinceridad y realización de mis ofrecimientos.

El sistema tenía que ser ya completo; el presupuesto ordinario, definitivo, no sólo para el ejercicio próximo, sino para los futuros; y si mis proyectos no los consideraba realizables el Gobierno de que tenía el honor de formar parte, se me creaba la obligación de facilitar al Gabinete los medios de hallar en otros sistemas ú otros procedimientos la solución de una dificultad que á mí no me era dado buscar, en atención á mis especiales personalísimos compromisos.

Con la desamortización de los montes públicos, idea en verdad antigua en mí, veía yo resueltos de una vez todos los inconvenientes que pudieran suscitarse á la mejor y más provechosa gestión de la Hacienda pública y á la satisfacción de las necesidades que antes he indicado, aunque someramente.

Mi pensamiento estaba reducido á separar del actual presupuesto ordinario todos los gastos que figuran en él y tienen el carácter de extraordinarios. Elevándose éstos en junto á la suma de 51.288.978 pesetas 94 céntimos, el presupuesto ordinario, después de comprendidos en él todos los intereses de la Deuda pública, ofrecería un importante excedente de ingresos para atender con más holgura á otras obligaciones que lo reclaman y que tienen carácter permanente.

El pormenor de las 51.288.978,94 pesetas á que me he referido, es el siguiente :

CRÉDITOS PRESUPUESTOS.

Capítulo.	Artículo.	DESIGNACION DE LOS GASTOS.	Por Secciones.	Totales.
MINISTERIO DE LA GUERRA.				
7.º	6.º	Adquisición y construcción de efectos nuevos para material de Artillería.	5.894.996,94	
		Obras de los talleres de Ingenieros de Guadalajara, para continuar la organización de los parques de campaña de los distritos, y adquisición de material de Ingenieros.		
		Para continuar la factoría de provisiones de Palma de Mallorca.	131.000 »	
		Para continuar la factoría de provisiones de los Doks de Madrid.	50.000 »	
		Subvención para las obras del cuartel del Rey, en Salamanca.	200.000 »	
7.º	7.º	Para reintegrar al Ayuntamiento de Burgos adelantos hechos para obras de reforma de los cuarteles de San Pablo y San Francisco.	30.000 »	
		Para la factoría de subsistencias de Vitoria.	71.390 »	
		Para estudios, inspección ó vigilancia de ciertas obras, trabajos de campo y otros especiales, gratificaciones reglamentarias que á ellos corresponden.	105.000 »	
			140.000 »	
		<i>Suma y sigue.</i>	6.622.386,94	

Capítulo.	Artículo.	DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.	CRÉDITOS PRESUPUESTOS.	
			Por Secciones.	Totales.
		<i>Suma anterior.</i>	6.622.386,94	
		OBRAS DE FORTIFICACIÓN.		
		En las murallas de Cádiz y plaza de Ceuta.	700.000 »	
		En la fortaleza de Isabel II, de Mahón.	150.000 »	
		En el puente de Almeida, de Santa Cruz de Tenerife. . . .	50.000 »	
		En el puerto de Barcelona.	300.000 »	
		En el castillo de la Palma, del Ferrol.	200.000 »	
		En la plaza de Melilla.	80.000 »	
		En la de Cartagena.	80.000 »	
		En el camino militar de la frontera francesa.	48.812 »	
		En el edificio Capitanía general de Aragón.	68.798 »	
7.º	7.º	Para reintegrar al Ayuntamiento de Logroño de los adelan- tos hechos para un cuartel nuevo.	75.000 »	
		Para obras del hospital militar de Santa Cruz de Tenerife. .	8.000 »	
		Adquisición de terrenos y construcción de nuevos cuarteles en Madrid.	100.000 »	
		Gastos de instalación de la Academia general militar. . . .	100.000 »	8.582.996,54

MINISTERIO DE MARINA.

8.º	2.º	Obras nuevas y en construcción.	4.130.272 »	4.130.272 »
-----	-----	---	-------------	-------------

23	1.º	Estudios de carreteras, expropiaciones de terrenos, obras por administración, gastos de acotamiento y análogos, indemnizaciones por averías causadas por fuerza mayor, saldos de liquidaciones, intereses de demora y demás conceptos que envuelven las obras por contrata y gastos de inspección facultativa y vigilancia de las mismas.	7.500.000 »
		Subvención para el ferrocarril de Selgua á Barbastro. . . .	60.710 »
		Crédito especial para la traslación de las Escuelas de Minas.	15.000 »
35	2.º	Obras de carreteras en curso de ejecución.	17.000.000 »
1.º adicional.	»	Subvenciones á ferrocarriles.	12.500.000 »
2.º íd.	»	Subvenciones de canales de riego y encauzamiento de ríos. . .	500.000 »
3.º íd.			37.575.710 »

GASTOS DE LAS CONTRIBUCIONES

Y RENTAS PÚBLICAS.

6.º	9.º	Gastos extraordinarios para ampliación de fábricas de tabacos, compra de máquinas, útiles y artefactos.	1.000.000 »	1.000.000 »
				51.288.978,94

Pasando al presupuesto extraordinario las antedichas partidas, y dotando al mismo de recursos extraordinarios también, suficientes, no sólo para atender al pago de ellas, sino igualmente á todos los gastos de idéntico carácter que el País reclama con justicia, consideraba yo que habría cumplido los deberes que sobre mí pesaban.

Por lo demás, la defensa de ambos presupuestos, ordinario y extraordinario, en los términos que dejo expuestos, era la única línea de conducta que yo podía seguir. Todo lo que por lo presente ó para lo porvenir, por necesidades de gobierno ó diversidad de sistemas ó procedimientos, se apartase de este programa, era imposible para mí.

No ha faltado quien haya dicho que yo he buscado en esta ocasión el pretexto para eludir las dificultades que el cumplido planteamiento de mis reformas podía ofrecer; pero contestaré á esto con la lealtad de mi carácter y con la demostración ya hecha, de que sin jactancia, pero con firmeza, sé llenar mis deberes. Lo que hay es que si un Ministro tiene el de realizar sus medios de administración y de gobierno, incurriría en grave pecado de indelicadeza si se mostrase dispuesto á ejecutar asimismo sistemas que no son los suyos ni se armonizan con su significación y sus compromisos.

Hechas estas declaraciones, que he considerado precisas, paso á consignar el pensamiento sometido por mí al Consejo de Ministros, que no era en realidad un proyecto de ley, sino un bosquejo de las ideas en que pudiera éste fundarse.

I.

BOSQUEJO DEL PENSAMIENTO DE ENAJENACIÓN DE LOS
MONTES PÚBLICOS Y DE LA APLICACIÓN DE SUS PRO-
DUCTOS, PRESENTADO AL CONSEJO DE MINISTROS EN 4
DE DICIEMBRE DE 1882.

El aumento que en el presupuesto del próximo año económico de 1883-84 han de tener los intereses de la Deuda, en cumplimiento de la ley de conversión de la perpetua, por una parte, y por otra el crecimiento que exigen en los gastos públicos muchos de los servicios del Estado, si éste ha de alcanzar el grado de cultura, bienestar é importancia que ya disfrutaban otras naciones, y la manera de procurar medios con que ocurrir á tan necesarias atenciones, cuando la tributación ha llegado á un límite que no es prudente ni aun sería posible traspasar, han sido el origen y fundamento de muy detenido estudio por el Ministro que suscribe, en demanda de una solución favorable para tan importante problema.

La cuestión es de suyo grande, porque grandes son también las necesidades del País: si la riqueza agrícola, fabril y comercial ha de obtener el desarrollo indispensable, preciso es acudir en su auxilio, facilitándole las comunicaciones y fomentando en grande escala la construcción de carreteras, de pantanos y canales de riego, de puertos y faros y toda clase de obras públicas; si en el estado actual de Europa hemos de tener seguridad de que serán respetadas nuestra independencia y nuestras provincias ultramarinas, necesario es también poner en estado de defensa nuestras costas y fronteras, construyendo y adquiriendo el material indispensable de guerra y de marina, que por los adelantos de la época se ha hecho

en extremo costoso; y si, por último, todo el organismo del Estado ha de tener el impulso de adelanto y perfección que es propio de los tiempos presentes, necesidad imperiosa existe también de dedicar fuertes sumas á la instrucción, á los templos, á las cárceles, á las fábricas y á todos los servicios que se explotan y monopolizan por el Estado.

Tan fácilmente como se conocen y sienten estas necesidades, se comprende bien que es imposible su satisfacción por los medios ordinarios; el aumento de algunos pocos millones en el presupuesto de cada año, sobre hacer difícil la marcha económica, llevándonos de nuevo al funesto estado del déficit, sería un medio, por lo penoso y lento, de ineficaces resultados.

Debe, pues, acudir-se á uno de esos recursos extraordinarios que suelen poseer los pueblos sin verdadera conciencia de su valor, y que, utilizados con oportunidad y con prudencia, son ó pueden ser fuente abundante de bienestar y riqueza.

España cuenta hoy afortunadamente con esos recursos extraordinarios, pues no escasos puede ofrecerlos

LA ENAJENACIÓN DE LOS MONTES PÚBLICOS.

Se dedicarán algunas líneas á expresar muy ligeramente su extensión, su clase, su valor, razones que aconsejan su venta, procedimiento que debe seguirse é idea general de la operación.

EXTENSIÓN.

Según datos publicados por el Ministerio de Fomento, que concuerdan con los del departamento de Hacienda y otros, existen vendibles :

De montes reservados.	Hectáreas.	4.797.000
De id. no reservados.	»	2.334.000
<i>En total.</i>	»	<u>7.131.000</u>

Conviene observar:

1.º Que en los no reservados hay algunos montes que se han concedido como dehesas boyales.

2.º Que existen dehesas boyales, declaradas tales, que nunca figuraron en los catálogos de montes exceptuados por no tener especies arbóreas; y

3.º Que de las dehesas boyales que se hayan cedido y estén comprendidas en los montes reservados ó no reservados, solamente fué concedido el suelo, pero no el vuelo.

En consecuencia de estas observaciones, no es exagerado suponer que, como minimum, son vendibles las expresadas hectáreas 7.131.000.

CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN.

Los montes se dividen en *altos*, *medios*, *bajos* y *rasos*, y por lo que se refiere á las dehesas boyales, en *prados*.

Según los datos del Ministerio de Fomento, la anterior cifra de 7.131.000 hectáreas se descompone de la manera siguiente, atendida la clase de los montes:

Montes altos.	Hectáreas.	2.987.000
Id. medios.	»	218.000
Id. bajos.	»	1.210.000
Id. rasos y prados.	»	2.716.000
<i>En junto las dichas.</i>	»	<u>7.131.000</u>

Los precios de las hectáreas son de suyo diferentes, según sus clases y circunstancias:

Las de monte alto oscilan desde 1.000 á 5.000 pesetas.

Las de id. medio desde 500 á 1.000 »

Las de id. bajo desde 200 á 500 »

Las de id. raso desde 25 á 200 »

Y las de prado desde 100 á 600 »

Apreciando, sin embargo, las referidas hectáreas por el valor más infimo, resulta:

Hectáreas 2.987.000 de monte alto á 1.000		
pesetas una, importan.	<i>Plas.</i>	2.987.000.000
218.000 de monte medio á 500.	»	109.000.000
1.210.000 de id. bajo á 200. . .	»	242.000.000
2.716.000 de id. raso y prado á		
100.	»	271.600.000
<hr/> 7.131.000 hectáreas. <i>En total.</i> .	»	<hr/> 3.609.600.000

Ó sea un valor, término medio por hectárea, de algo más de 500 pesetas.

RAZONES QUE ACONSEJAN LA VENTA.

Deben enajenarse todos los montes sin excepción alguna, porque lejos de seguirse perjuicios, se obtienen reconocidas ventajas.

Los montes, por efecto de las ventas no desaparecen, según demuestra la experiencia de lo que ha sucedido con los que se vendieron anteriormente; pudiendo consultarse Extremadura, Castilla y provincias del Norte.

Los montes en poder de particulares prosperan; en manos del Estado ó del Municipio perecen.

Las condiciones climatológicas, por las razones antes dichas, en vez de empeorar, mejorarán.

La razón que se opone á la venta de los montes alegando que son algunos precisos para las construcciones navales, es de escasa fuerza, porque no se acostumbra en España á utilizar en ellas las maderas del país, y porque además, si fueran necesarias, se comprarían á los particulares.

Los pueblos percibirán mucho más de lo que obtienen hoy de los aprovechamientos forestales que se les conceden, á la sombra de los cuales unos pocos particulares medran, los ganaderos se empobrecen con las repetidas multas que sufren, y los desgraciados jornaleros pueblan las cárceles.

Los montes producen actualmente al Estado unas 800.000 pesetas.

Cuestan 2.200.000.

PROCEDIMIENTO.

Los montes deben venderse á pagar en diez plazos y nueve años.

La casi totalidad de los montes pertenece á los pueblos, y por consiguiente, al Estado correspondería sólo un 20 por 100; pero la ley puede adoptar una medida que, sin constituir un quebranto para aquéllos, sea beneficiosa para los intereses de ambos, estableciendo que de los productos de las ventas reciban los pueblos el 50 por 100 íntegro.

Con esta disposición los pueblos ganarán mucho, porque podrán disponer desde luego de una renta muy superior á la que actualmente obtienen, y en caso necesario, y con sujeción á las leyes, de un capital que ahora está muerto para ellos.

La parte del producto correspondiente á los pueblos se invertirá inmediatamente en la compra de títulos de la renta perpetua al 4 por 100, los cuales se convertirán en inscripciones intransferibles para su entrega á los mismos pueblos.

IDEA DE LA OPERACIÓN.

Hecha la aplicación ó distribución de productos en la forma indicada, el Estado percibirá lo que arroja la siguiente

DEMOSTRACIÓN.

Importe de hectáreas 393.000 que son propiedad del Estado, á 500 pesetas una, término medio antes establecido.	196.500.000
50 por 100 del valor de hectáreas 6.738.000 que son pertenecientes á las Corporaciones civiles, al mismo tipo término medio de 500 pesetas.	1.684.500.000
<i>En total pesetas.</i>	<u>1.881.000.000</u>

Con el expresado capital por base, se formará un presupuesto extraordinario de ocho años: sus recursos serán los que actualmente figuran en el presupuesto especial de bienes desamortizados y los que ha de producir la venta de los montes; y sus obligaciones, las obras públicas, construcciones, material, etc., de los diferentes departamentos ministeriales, entre los que se distribuirán 1.000 millones de pesetas, en esta forma:

Gracia y Justicia.	40.000.000
Guerra.	150.000.000
Marina.	200.000.000
Gobernación.	60.000.000
Fomento.	500.000.000
Hacienda.	50.000.000
	<hr/>
	1.000.000.000

Este presupuesto de ocho años se dividirá en ocho presupuestos parciales, detallando en cada uno la parte de crédito del general que haya de invertirse durante cada año, pero partiendo de la base de que los créditos no consumidos en un año se acumularán á los del siguiente hasta el término del año octavo, y por tanto, la época de la liquidación del presupuesto general de los ocho años.

Como los recursos no podrán obtenerse en la misma proporción que los gastos deban verificarse, una vez obtenidos pagarés suficientes como resultado de las ventas, podrán hacerse sobre ellos operaciones de crédito, con el fin de anticipar los recursos que han de realizarse después al llegar al vencimiento de los mismos pagarés.

Con el expuesto sistema se facilitará el empleo en los ocho años del capital que el Estado ha de cobrar en muchos más, siendo necesaria la prudencia únicamente al fijar los gastos del primer año, en el cual no

ha de haber todavía existencia bastante de pagarés para negociar.

La diferencia entre los 1.881 millones de pesetas que se calculan de valor de los montes, y los 1.000 millones en que se fijan los gastos extraordinarios de material, se destinará á cubrir los gastos de la operación y á la amortización de la Deuda pública, á menos que sucesos extraordinarios obligaran algún año á utilizar estos recursos para los gastos imprevistos.

La ejecución de las importantes obras que han de realizarse, si se acepta este proyecto, producirá seguramente para la terminación del presupuesto extraordinario un aumento proporcionado en los gastos ordinarios de entretenimiento, conservación, etc., etc.; pero el desarrollo que en el mismo período ha de tener la riqueza del País, y por consiguiente, las rentas públicas, compensarán con ventaja aquel aumento de gastos.

Si el Consejo de Ministros participa de las opiniones del que suscribe, encaminadas á consolidar la reorganización de la Hacienda pública, á desarrollar los intereses materiales del País y á fomentar su crédito, y entiende como él mismo que el único medio que hoy existe de conseguir tales fines es el que tiene la honra de proponer, podrá servirse dar su aprobación á la idea bosquejada, para que puedan desde luego acometerse los trabajos preliminares que la empresa demanda.

II.

JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO AL CONSEJO DE SEÑORES MINISTROS POR EL DE HACIENDA, SOBRE ENAJENACIÓN DE LOS MONTES PÚBLICOS, EN CONTESTACIÓN Á LAS OBSERVACIONES HECHAS.

El aumento de gastos que la conversión de la Deu-

da exige desde 1.º de Julio de 1883; la conveniencia de favorecer el desarrollo de la riqueza pública; la necesidad de consolidar el crédito de España en el interior y el exterior, hacen preciso, de una manera absoluta, escogitar recursos cuantiosos y duraderos, cuando menos para una época dentro de la que la producción, el cambio y el consumo adquieran el desarrollo posible, en términos que la riqueza de los españoles sufrague holgadamente en adelante las necesidades todas de la Nación.

Notoria es la dificultad que existe al presente de buscar mayores recursos en los tributos, ya para atender al pago de la nueva obligación por intereses de la Deuda, ya para dar á las obras públicas el impulso que el País reclama y el desarrollo de la riqueza exige. No puede esperarse atender á lo primero con el inmediato resultado del aumento que tienen las rentas eventuales, ni las circunstancias de nuestro presupuesto permiten elevar las cantidades precisas para lo segundo. En tal situación, el Ministro que suscribe considera que la solución del problema está en la formación de dos presupuestos, ordinario uno, extraordinario otro, conteniendo aquél los gastos de carácter permanente, éste los que pueden más bien llamarse accidentales; y pasando del primero al segundo los créditos para gastos que más bien merecen la consideración de extraordinarios, que actualmente se elevan á 51.288.978 pesetas, quedaría completamente asegurada la nivelación del presupuesto ordinario del porvenir, ofreciendo un margen aún que pudiera dedicarse á dotar mejor algunos servicios, como el de instrucción pública y otros semejantes, y á precaver la eventualidad de alguna baja difícil de prever.

Mas para llevar á cabo este pensamiento, preciso

es dotar al presupuesto extraordinario de recursos de igual carácter, que afiancen, no sólo la realización de los servicios que del presupuesto ordinario se segregan, sino otros de mayor importancia que faciliten el inmediato desarrollo de la riqueza pública.

¿Los hay?

Existe uno de importancia suma, de éxito seguro, de realización inmediata, circunstancias precisas para afianzar la nivelación de los presupuestos, base esencialísima de nuestra regeneración financiera; éste es la venta de los montes públicos, dehesas boyales y baldíos, ya pertenezcan hoy al Estado, ya á los Municipios, ya á otras corporaciones civiles, medida que si bajo el punto de vista financiero resuelve la cuestión del presupuesto ordinario durante largo espacio de tiempo, el bastante para que los tributos y las rentas igualen ó superen á los gastos que entonces fuesen precisos, bajo el punto de vista económico resuelve, á no dudar, uno de los problemas más difíciles, cual es el de que la actividad individual, siempre celosa, siempre útil, sustituya á la descuidada del Estado y del Municipio.

Muchas son las razones que contra esta medida se invocan, pero fácil es demostrar la ninguna fuerza que tienen.

Por de pronto, es un axioma económico por nadie combatido que la propiedad en manos del Estado muere, en manos del particular vive, se desarrolla, crece; porque aquél no es buen administrador, éste lo es; aquél representa el interés ajeno, éste el propio. Esta verdad no existe sólo en las regiones de la ciencia, la vemos en el mundo de la realidad.

Recórranse las fértiles campiñas de Extremadura, véase la laboriosa provincia de Salamanca, en las que la mayor parte de los montes son de propiedad par-

ticular; compárense con los pinares de Soria, Segovia ó Cuenca, y se verá palpablemente que mientras aquéllos se conservan, crecen, prosperan, éstos merman, perecen.

Es más : compárense dentro de cada provincia los públicos y los privados, y se observará una diferencia tan marcada, que el más míope podrá apreciarla con toda exactitud.

Si, pues, el principio científico está corroborado en la realidad, la lógica aconseja no negar el principio, y, una vez admitido, todas las declamaciones de los opositores á esta idea no resisten al razonamiento más pobre.

En efecto, una de las objeciones principales, quizás la más poderosa, que se emplea contra la venta de los montes, es que su conservación es de absoluta necesidad, pues sin ellos las condiciones climatológicas variarían en términos que la agricultura perecería y hasta la salud pública se resentiría notabilísimamente; pero aparte de que los montes no enajenados por las especies arbóreas que contienen no son los más á propósito para la conservación de la humedad, que favorezca la evaporación y la periodicidad de las lluvias, ni sus apretadas hojas permiten la absorción de miasmas perjudiciales á la salud, ¿no son sanas las provincias de Salamanca, Cáceres y Badajoz? ¿No se encuentra en ellas la agricultura tan desarrollada como en las demás? ¿No tienen las mejores ganaderías boyales, lanares, mulares, caballares y de cerda? Pues si en ellas los montes casi todos son de propiedad particular, ¿por qué no esperar que en todas las provincias suceda lo propio?

¿En qué consiste que la ganadería se sostiene y aumenta en esas provincias, que alimentan á gran parte de los ganados de Castilla la Vieja, y han pere-

cido las célebres cabañas de Segovia, y tras ellas huyeron, para no volver, sus renombrados paños? En que aquellos montes están vigilados por el ojo del amo, éstos están entregados al interés extraño.

Se supone, es cierto, en muchas poblaciones de España un espíritu destructor del arbolado; pero es natural que en todo caso destruya lo ajeno y no lo propio; que esto, además, cuenta con la defensa del dueño, interesado constante, tenaz; aquéllo con la acción pública, indiferente, débil, por regla general.

Luego las condiciones climatológicas no cambiarán, y en todo caso será en sentido favorable, puesto que es axiomático que los particulares cuidan más de *sus* árboles que la Administración de los que *á otros* pertenecen, y la demostración es evidente: véanse los árboles plantados por la actividad individual, cuéntense y compárense con los plantados por la Administración.

Pero es, se dice, que tras la venta vendría la tala de los montes, porque los compradores, ante la idea de poder obtener de los árboles gran parte del precio de la venta, se excederían en las posturas en el remate, y de aquí la tala y quizás la pérdida del precio para el Tesoro; pero este peligro no existe, puesto que se evita fácilmente con las fianzas en metálico ó valores que aseguran el importe del arbolado, y en cuanto al de la tala, no debe presumirse sino cuando las ventas se hacen como ahora, paulatina y aisladamente. Es más, la ley de 9 de Enero de 1877 ofrece medios que permitirán, en todo caso, evitar el riesgo de los primeros momentos, que pudieran ser los únicos temibles.

No debe hacerse la enajenación como hasta el día, porque si se vende un solo monte en una provincia, ó dos ó tres, los compradores pueden emprender la tala, porque serían los únicos que pudieran hacer madera,

leña y carbón, compitiendo en términos que las subastas de los aprovechamientos en los montes públicos quedasen desiertas; pero ese peligro no es temible vendiéndose mucho á la vez, todo á ser posible, porque sería entonces tal la competencia, que abarataría la leña, el carbón y la madera, de suerte que los adquirentes se persuadan de que les tiene más cuenta la conservación que la destrucción, y por lo tanto, no sólo es conveniente la venta de los montes, sino que es preciso se haga de una vez; además que la Historia enseña que la realización paulatina de las ventas cuenta con tales y tantas dificultades, que á pesar de las leyes del 55 y 56, no obstante los buenos propósitos de la de 1859, á pesar de la firme voluntad del Ministro de Fomento que lo era en 1862, los montes no se han vendido, ni aun los rasos y baldíos, siquiera no contengan otro arbusto que el tomillo y el can-tueso.

Y para concluir con las razones que como de más fuerza se emplean contra la venta, á los que dicen que los montes son precisos para las construcciones navales, puede contestárseles que los particulares criarían con esmero las piezas de mayor marca, y en nuestros arsenales no se encuentran las maderas de los montes nacionales.

Careciendo, pues, en absoluto de fuerza las principales razones alegadas, parece inexplicable cómo abogando todo por la inmediata enajenación, ésta no se ha realizado ni aun en la parte en que desde hace mucho tiempo era preceptivo. Sin embargo, la explicación es fácil, si se tienen en cuenta las razones que quedan expuestas. Los montes públicos, ya pertenezcan al Estado, ya á las Corporaciones, no producen beneficios á la generalidad de los españoles, y para persuadirse de ello basta saber lo que ocurre en la gran

mayoría de los pueblos, pudiera decirse que en la totalidad.

Los pastos, ó los aprovechan á veces los pocos ganaderos, sin beneficio alguno para los demás vecinos, ó si se arbitra algún recurso sobre ellos con que atender á los gastos municipales, el interés de los Ayuntamientos los lleva naturalmente á que tales recursos no figuren en el presupuesto como de los montes, porque en este caso se tendrían que considerar los bienes como de Propios, más expuestos á la venta y obligados á pagar el 20 por 100 al Tesoro.

Y en cuanto á los aprovechamientos forestales, como leñas, carbones ó maderas, nada he de decir, siendo públicos y notorios los hechos que repetidamente se denuncian.

En cambio, los infelices jornaleros que, faltos de trabajo, buscan el sustento en una carga de leña, se encuentran á menudo sometidos á un proceso largo y dispendioso, y como término, á uno, dos ó tres meses de arresto, con más las costas, pudiendo asegurarse que en algunas provincias la mayor parte de las causas criminales que se instruyen son por robo de leñas, sobre todo desde la reforma del Código penal de 1876.

Pues hágase la venta, y todos esos inconvenientes desaparecerán, y no volverán las multas, ni renacerán las causas y se moralizarán los pueblos.

Sobre todo, una vez vendidos, el producto que obtengan los pueblos del capital será para todo el vecindario.

Luego es conveniente á los pueblos la enajenación; y ¿cómo no?

¿Qué tienen hoy los pueblos de los montes? Nada ó muy poco, según queda demostrado, y por lo tanto, es seguro que lo que obtengan de las láminas ó títulos de crédito que en equivalencia se les entregue, será

mucho más que lo que al presente logran, razón que justifica la entrega de la mitad, y de seguro que todos recibirán con inmensa alegría la noticia de la venta.

Habrà quizás quien diga que á los pueblos correspondía el total del capital; pero por de pronto, en lo relativo á los de Propios, el 20 por 100 es del Estado; la mayor parte de los montes son de Propios, ó deben considerarse tales, porque, aun cuando en escasas proporciones, algo se arbitra sobre ellos; y sobre todo no permitiéndose hoy á los pueblos disponer sino de una parte de los productos, no llegando ésta ni á la mitad de los que pueden obtenerse, el reconocerles la mitad del capital, ingresarlo en la Caja de Depósitos, invertirlo inmediatamente en valores nominativos del Estado, el cobrar trimestralmente los intereses, el poder disponer, con la autorización debida, caso de una necesidad ó utilidad manifiesta, de un capital, son ventajas que no habrá pueblo que las rechace.

Y que éste ha de producirles más, infinitamente más que al presente les producen los montes, es indiscutible y por lo tanto de facilísima demostración: los presupuestos y las cuentas del Estado lo paten- tizan.

Á 320.000 pesetas se eleva lo que en el presupuesto del Estado luce como producto del 20 por 100 de todos los bienes de Propios: aun suponiendo que no quedasen por vender más que los montes, si esa cifra representa la quinta parte del producto anual, el 80, que es para los pueblos, representaría 1.280.000 pesetas, y por mucho que sea el valor que se dé á los pastos, como éste no es para el Municipio sino en la pequeña cantidad que se arbitra, no ha de ser ni comparable el producto que hoy obtienen con el que obtendrán, como más adelante se demostrará.

Luego si á la riqueza pública interesa; si á los particulares importa y á los Municipios conviene, no existe razón seria que á la venta de los montes se oponga, y lo propio y con mayor fundamento puede y debe decirse de las dehesas boyales, pues basta enunciar que la razón aparente de su excepción es el facilitar pastos gratis para los ganados de la labor, para adquirir el convencimiento de que se aprovecha más el que más ganado tiene y que en nada la utiliza el que carece de él, y no hay razón ni justicia para que los bienes de la Nación sean privilegio de unos en perjuicio de otros.

¿Qué es, pues, lo que se opone á la enajenación inmediata de los montes, dehesas y baldíos? ¿Será que la opinión no está hecha?

Todo lo contrario, está completamente formada, porque la idea no es nueva, sino muy antigua, y la generalidad que la aplaude está persuadida de las causas que se han opuesto á su realización.

¿Podrá acaso decirse que no esperaba en este momento la venta de los montes? Tampoco es exacto; pero en todo caso, siendo grande la idea, siendo de importancia suma las ventajas, siendo necesario utilizar este medio para consolidar nuestro crédito, asegurar la nivelación de los presupuestos del porvenir para poder ostentar con orgullo por Europa entera nuestro nuevo y honroso título de nación solvente, sería preciso realizarlo aun á riesgo de la impopularidad; que no ha habido idea salvadora que no haya costado la impopularidad de sus generadores ó ejecutores, siquiera la Historia haya venido más tarde á hacerles la justicia que los contemporáneos les negaran.

Resta solamente examinar la cuestión bajo un punto de vista, el más importante quizás; esto es, si

el momento es oportuno, si ofrecerá la cantidad que se busca á todos los fines al principio indicados, y si los recursos se obtendrán tan pronto como los intereses públicos reclaman.

La oportunidad, difícil siempre de determinar, está hoy justificada por la necesidad.

Es absolutamente preciso cumplir lealmente los compromisos contraídos á nombre de la Nación, y sobre todo cuando se ha exigido á los acreedores la renuncia de más de la mitad del capital nominal y $\frac{5}{12}$ de la renta, y no sólo es preciso cumplirlos de presente, sino asegurarlo para lo porvenir.

Es conveniente y necesario dar grande impulso á las obras públicas, protegiendo de este modo el inmediato desarrollo de la riqueza nacional. Es menester poner el material de todos los servicios y rentas á la altura debida, y tal cual lo exigen las necesidades públicas.

Si, pues, todo esto es preciso, y los recursos ordinarios no son hoy susceptibles de aumento, y no existe otro que la venta de los montes, claro es que ésta es necesaria, y lo necesario es oportuno.

¿Producirá lo bastante?

En el bosquejo sometido á la deliberación del Consejo en 4 de Diciembre último, quedó demostrado que se obtendrían 1.881 millones de pesetas, y no hay necesidad de repetir los fundamentos del cálculo.

Basta leer esta cifra para adquirir el convencimiento de que el recurso es poderoso y suficiente para llenar los fines antes indicados y realizar el pensamiento, pues aun admitiendo la hipótesis de que pudiera haber algún error en el cálculo, es tal el margen que queda, como en dicho documento se expresa, que ni dudarse puede de la suficiencia del recurso.

Este ¿será de inmediata realización? Dicho se está

que la venta total no puede hacerse en un día, ni en un año, ni en dos ; pero llevándose á cabo con la rapidez debida, y dada la importancia de la suma, facilitará una operación de crédito que permita asegurar su realización en un plazo de ocho años, en el que el desarrollo de la producción, el cambio y el consumo acrecentarán los recursos ordinarios del presupuesto, en términos que, como se dijo al empezar, los recursos ordinarios basten con holgura para atender á todas las necesidades ordinarias de la Nación, aun contando con el aumento que han de tener los gastos por la conservación y reparación de las obras que han de realizarse con el recurso propuesto, debiendo advertirse que la participación que á los pueblos se reconoce no aumentará la Deuda pública, puesto que no se emitirá más para pagarles, sino que retirarán del mercado lo que su parte representa, convirtiéndose en inscripciones nominativas los títulos al portador, favoreciendo también por este medio el crédito público con la reducción del papel circulante.

Si la necesidad de los recursos es evidente ; si la conveniencia de la medida es notoria ; si no existe otro disponible de fácil, inmediata y segura realización ; si los pueblos obtendrán de los 1.684.500.000 pesetas una renta mínima de 57.380.000 pesetas, aun suponiendo que adquiriesen los títulos á la par, lo que por ahora desgraciadamente no es creíble, cuando al presente no obtienen ni la quinta parte ; si de este modo se consigue que el beneficio sea para todos ; si tantos defectos se corrigen, y sobre todo, si con esta medida se consolida el crédito de la Nación, el proyecto está justificado por el estudio y por la reflexión.

III.

AMPLIACIÓN DE EXPLICACIONES SOBRE EL PROYECTO DE ENAJENACIÓN DE LOS MONTES PÚBLICOS.

Aun cuando la razones expuestas y las consignadas en los documentos á que me he referido bastan para llevar el convencimiento de la utilidad de la medida propuesta al ánimo del más refractario á la venta de los montes, no debo dar por terminado mi trabajo en esta parte sin hacerme cargo de algunas observaciones que se han formulado, ya en los debates, ya en la Prensa, ya en las conversaciones particulares.

Presumen algunos que produciría gran alarma la venta *inmediata* de todos los montes, y en verdad que lo alarmante es dar una interpretación poco recta á la palabra *inmediata*, que no puede tener la significación que han querido atribuirle, entre otras razones, porque es materialmente imposible que en un solo día, ni en un mes, ni en un año, se llevara á cabo servicio tan grande como es el de la enajenación de todos los montes públicos, baldíos y dehesas boyales.

La frase *inmediata* se empleó en el proyecto más bien como antítesis de la eterna lentitud con que se ha realizado la amortización en la escasa parte llevada á cabo; lo que en realidad quería decir es que desde que la ley fuese precepto obligatorio estarían todos los montes declarados en estado de venta, dejando, por lo tanto, de tener el carácter de reservables.

Por lo demás, ¿cómo podría hacerse inmediatamente, si una vez sancionada la ley, debía realizarse la incautación formal por parte de la Hacienda y el oportuno índice y la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad; si después tenían que

practicarse las debidas peritaciones, y no había personal suficiente para hacerlas á la vez; si en muchos casos habría que tramitar previamente el expediente de división en lotes, cuando fuese conveniente; si luego había de seguirse el expediente de subasta hasta llegar á la aprobación, liquidación, pago y toma de posesión?

No; la desamortización, sobre todo en su ejecución, la había yo calculado en seis años, y de lo anteriormente expuesto se deduce clarísimamente. Si se había de enajenar á pagar diez plazos en nueve años, y si se fijaba á los quince el último vencimiento, forzoso era enajenar en seis, que con los nueve de fecha hacen los quince de vencimiento.

Además, esa falsa alarma porque se hiciera con toda la rapidez posible la venta de los montes carecía de fundamento, pues, como antes se ha dicho, en la prontitud y simultaneidad de la venta se encuentra el principal remedio contra la supuesta tala general, porque si todos se dedicaban á talar, y esto fuera posible, la competencia abarataría el carbón, las leñas, las maderas, en términos que el interés particular se decidiría por la conservación, por serle mucho más ventajosa.

Sobre todo, lo relativo á la manera de realizarse el pensamiento era cuestión de detalle, no sometida aún al Consejo y más propia de la reglamentación que de la ley. En aquélla habían de ser atendidas todas las indicaciones que, sin oponerse á la desamortización, hicieran que ésta se llevara á cabo con el tino y la prudencia debidos para evitar esos imaginarios peligros que tanto se abultan, y hasta para acallar esas falsas alarmas, que siempre preceden y subsiguen en la realización de todos los pensamientos financieros de alguna importancia, porque como no es posible que

á todos, absolutamente á todos, sea agradable la idea, los descontentos se encargan de producir la alarma, que, cuando no tiene fundamento, se disipa como el humo á la más imperceptible brisa de la opinión sensata.

Conviene á mi propósito ocuparme ahora de otra de las observaciones hechas, que al pronto parece de gran fuerza, tanta, que por algunos se ha supuesto que era obstáculo invencible para la enajenación de los montes. Se dice : si el valor de los montes se eleva á 3.000 millones de pesetas, ¿los tienen disponibles los españoles? No. Luego la desamortización de los montes es imposible.

Si así hubiera discurrido el insigne Mendizábal, que desenvolvió su pensamiento cuando aun en muchos pueblos de la Península más que ventas había permutas de productos; si de este modo hubieran pensado los desamortizadores del bienio de 1854 á 1856, cuando tres años antes la moneda de oro no circulaba sino en las grandes poblaciones, pues si alguna había en las pequeñas estaba á veces hasta enterrada, de seguro que la desamortización no se hubiera realizado. Felizmente no se detuvieron ante semejante dificultad, que entonces pudiera decirse con verdad que existía; pero comprendiendo el desarrollo que alcanzaría la riqueza con entregar á la actividad individual lo que poseían manos muertas, vieron claro que esa gran palanca de la Economía política crearía los capitales para satisfacer los remates; y la Historia ha venido á patentizar cuan acertados estuvieron, pues si bien es cierto que en los primeros momentos la usura se aprovechó de las circunstancias, hoy la propiedad va sacudiendo su pesadísimo yugo, y la Nación se encuentra con fuerzas bastantes para adquirir aquella de que se trata, gracias al aumento considerabilísimo

de la producción, al rápido progreso del comercio, á la facilidad de las comunicaciones, al desarrollo inmenso que ha tenido el consumo.

Pero no es esto sólo. ¿Han creído los impugnadores que tan equivocada interpretación dan á la palabra *inmediata*, que el desembolso deba hacerse de una sola vez? ¿Han presumido que una de las bases de mi pensamiento era contar con que del ahorro pudieran los españoles desembolsar en un instante los 3.000 millones de pesetas? Ligeros están los que aquello crean, los que esto presuman.

Ya he dicho que calculaba quince años para satisfacer todos los plazos; luego, cuando menos, los 3.000 millones de pesetas habían de dividirse en quince años, y no es lo mismo desembolsarlos de una vez que satisfacer 200 millones cada año. Pues bien; si cada plazo representaba el 10 por 100 de la finca que se adquiriese, y no es mucho presumir que el que se hacía propietario obtuviese un 5 por 100 de producto, lo único que se pedía al ahorro era otro 5 por 100, ó lo que es lo mismo, al ahorro se le demandaba la mitad del importe de la venta, y si ésta representaba en junto y término medio 200 millones de pesetas al año, 100 millones eran los que se pedían al ahorro. ¿Y será cierto que los compradores no puedan realizar ese sacrificio al año para hacerse propietarios? Si los que contraria opinión mantienen pensarán detenidamente en el asunto, verían que no sólo es fácil encontrar ese ahorro, ó al menos ese capital, sino que es más, que quizás la misma enajenación de los montes busque el capital.

Queda demostrado que casi la mitad del importe total de las ventas se adjudicaría á los pueblos, pues que los montes propios del Estado no exceden de 393.000 hectáreas de las 7.100.000 de que había de

disponerse. En su consecuencia, toda la parte correspondiente á los pueblos habría que emplearla en adquirir títulos del 4 por 100, que serían convertidos en nominativos, lo cual retiraría de la constante circulación una masa enorme de papel, elevaría su precio, y al estar á la par ó cerca de ella, ¿dónde iría el efectivo que por él se diera? Mucho podría ir á la industria y al comercio, es verdad; pero ¿no aminoraría en la mayor parte lo que al ahorro hubiera de pedirse? Más aun: ¿qué se haría de todo el importe de las amortizaciones del 4 por 100? ¿Qué del sobrante del rentista? En nuestro país, donde no se conoce el pequeño tenedor, donde el especulador, por regla general, lo es en pequeña escala, pero el rentista lo es en grande, ¿qué se haría, repito, del sobrante del interés que trimestralmente sale á la plaza, sobre todo cuando los valores públicos adquieran el precio á que están llamados, y si continuamos en la paz de que felizmente disfrutamos? Retirarlos de las especulaciones bursátiles y llevarlos á la propiedad ó al préstamo barato; y los montes darían ellos mismos, con las ventajas de la producción y con esas otras ventajas, lo bastante para pagarlos. Y vean, pues, cómo los que se arredaban ante la cifra de los 3.000 millones no meditaron lo bastante al alarmarse ante una dificultad ilusoria, y por consiguiente, no comprendieron que en la venta de los mismos montes estaba el metálico para pagarlos.

Esto aparte de que el desarrollo de la riqueza produce el ahorro en todas las clases, el cual por sí solo se bastaba para desembolsar los 100 millones de pesetas anuales; á más que podría suceder, y es probable sucediera, que viniesen capitales extranjeros á interesarse en la adquisición, con tanto mayor motivo, cuando hay industrias, como la resinera, tan descuidada en España.

Cuadra aquí perfectamente el que me ocupe de otra observación que se ha hecho, relativa al valor dado por mí á los montes en el cálculo que sirvió de base al pensamiento de la enajenación. Se ha dicho que era insignificante el valor que tienen y que no bastaría á sacar de apuros al presupuesto.

Si esto fuera cierto, podría yo preguntar: ¿qué ha hecho la Administración, que después de todo no ha sabido crear y conservar lo que tan poco vale? Si esto es verdad, ¿qué interés existe en conservar el *statu quo*? ¿Por qué se cree que no tendrían los españoles dinero para adquirir cosa de tan poco valor? ¿Cómo es que solamente al Estado le cuesta más de dos millones de pesetas el servicio de montes, sin contar la Guardia civil?

No; los montes valen lo que se ha dicho, y al fijarles yo ese valor, no procedí á capricho y sin conocimiento del asunto, sino que, con la reserva conveniente, pedí noticias á muchas provincias, consulté antecedentes dignos de ser tenidos en cuenta, y pude convencerme de que había montes cuya hectárea se tasaba en más de 5.000 pesetas, y los rasos de menos precio se peritaban en 75 pesetas; y tomando los precios mínimos de la valoración que debía darse á los montes altos, á los medios, á los rasos y á los prados, puesto que en el plan entraban las dehesas boyales, la mayor parte praderas de bastante valor, me ofrecía el resultado que sirvió de tipo. Es más: queriendo proceder en este punto con el pulso con que procuro proceder en todo, hice comprobaciones con los datos publicados por el *Anuario Estadístico*, en el que no constan sino los aprovechamientos legales, que no exceden del 50 por 100, y de la comparación resultó comprobada la exactitud del cálculo.

Verdad es que hay quienes, diciéndose conocedores

de la materia, aseveran que el término medio de la hectárea es el de 50 pesetas, sin duda haciendo el minimum de una peseta y el maximum de 100. Para contestar esta afirmación me bastaría decir á quienes tal opinión mantengan, que pueden pedir precios á los particulares propietarios de montes; no admitiendo además, como no admito, que en igualdad de condiciones se pague más por las ventas al contado que por las hechas á plazo. Pero recórranse las campañas de Redondela, en Pontevedra, de las Arriendas, en Oviedo, los pinares de Cuenca y Soria, los de Ávila y Segovia, ofrézcase á 50 pesetas por la hectárea, y es posible que contesten sus dueños que ese precio no alcanzaría acaso á pagar alguno de los árboles que en cada hectárea existen. Sobre todo, si fuera el precio, como se supone, el de 50 pesetas, el total valor de los 7.100.000 hectáreas sería el de 355 millones, y no se concibe que bienes poco bien administrados, que alcancen esa estimación, produzcan al año lo que resulta del *Anuario Estadístico*.

Sabido es que esta importante publicación se limitaba á la relación de productos que los Municipios facilitaban, pues que las Secciones de Estadística sólo tenían conocimiento directo de los aprovechamientos forestales que se concedían á los Municipios y de los que se hacían en los montes del Estado; notorio es además que las concesiones no eran anuales, ni siquiera bienales, pues que, en cuanto á cortas, no se autorizaban sino de largo en largo plazo, y los pastos se reducían todo lo posible; y por último, ni aun los Ayuntamientos podían precisar otros muchos aprovechamientos, porque se escapaban á su fiscalización: pudiendo asegurarse, por lo tanto, que los productos figurados en el *Anuario* no llegaban ni á la mitad de los de que son susceptibles los montes públicos.

Esto sentado, tomando de él como tipo una provincia en la que la propiedad alcanza menos valor, ya por sus condiciones climatológicas, ya por la dificultad de las vías de comunicación, como es la de Soria, vemos el resultado siguiente :

En los años 1864 y 1865 figura en la mencionada publicación un producto de 3.556.882,50 pesetas, que por la razón antedicha debe considerarse como el producto anual, y no completo. Tenia á la sazón sin vender 147.663 hectáreas. Pues bien ; capitalizando aquella renta al 5 por 100, que es el producto mínimo que ha de ofrecer dicha riqueza en manos de los particulares, el capital se eleva á 71.337.650 pesetas, y dividido por las 147.663 hectáreas, da un valor á la hectárea de 483 pesetas, término medio. Pues si éste es el precio donde la propiedad menos vale, buscando el promedio en todo el País no puede considerarse excesivo el de 500 pesetas por hectárea, que es el que ha servido de base al cálculo de que antes me he ocupado.

Pero despues de todo, y para concluir sobre este punto, quiero conceder por un momento que hubiera exageración en el cálculo hecho del valor de los montes. ¿Se supone que la hay en una cuarta parte? Pues todavía quedarían para el Estado 1.410.750.000 de pesetas de las 1.881.000.000 que se estima ha de producir la enagenación de los montes. ¿Quiere decirse, por absurdo que parezca, que el precio fijado debe disminuirse en una tercera parte? Pues aun quedarían para el Estado 1.254 millones de pesetas; y en uno y en otro caso podría hacerse una distribución conveniente de las respectivas sumas, que atendiera holgadamente á todas las necesidades y á todos los servicios, sin que por otra parte en la disminución dejasen de obtener los pueblos beneficios superiores á los que hoy obtienen.

Presumo que he llevado las concesiones sobre el cálculo al último límite; más no se olvide que las he hecho solamente en hipótesis, pues, por lo demás, abrigo el convencimiento de que aquel es exacto.

Alégase asimismo por los impugnadores de la enagenación que el pensamiento por mí iniciado priva á los vecinos pobres de ciertos aprovechamientos, como leñas, pastos, etc.; mas en verdad tiene poca fuerza la observación. ¿Es que sobre la finca pesaba esa servidumbre legítimamente adquirida, documentalmente probada? Pues en la desamortización se han respetado, respetan y habrían de respetarse los derechos legítimos. Pero son rarísimos los casos en que tal sucede: lo que existe son muchas corruptelas, no pocos abusos, cortados en gran parte por la reforma del Código penal hecha en 1876, determinando que se consideraría delito de robo el tomar hojarasca en cualquier monte. Á contar desde esa época, el abuso ha podido existir, pero también existen millares de causas criminales y multitud de familias en la miseria por el aprovechamiento de leñas; y en cuanto al pastoreo, la Guardia civil podría decir, así como el Ministerio de Fomento, á cuánto se elevan las multas que anualmente se imponen, y los pequeños ganaderos dirán si prefieren tener que acoger sus ganados en el monte de un particular ó tener el aliciente de un monte público donde apacentarlos durante todo un año sin que nada les cueste, pero sufriendo en casos dados la imposición de una multa que, aun condonada en sus tres cuartas partes, importara la cuarta mucho más que lo que pudiera costarles el acogimiento de su ganado; esto aparte de los juicios de faltas, que repetidos conducen á una causa criminal de funestas consecuencias para los infelices ganaderos.

Tales son las ventajas que alcanzan la generalidad

de los vecinos que no utilizan legalmente sino los escasos aprovechamientos forestales que se conceden á los Municipios, por lo que éstos y los vecinos se darán por muy satisfechos con recibir el 50 por 100 del producto de la venta, que les proporcionaría doble interés anual que lo que obtienen hoy, según los datos del *Anuario Estadístico* antes mencionado.

Se ha dicho también que los montes no pueden entregarse á la actividad individual porque ésta no tiene espera bastante para aguardar los años que son necesarios á que el monte esté en productos; pero aparte de que los hechos demuestran lo contrario, puesto que son más los que en la actualidad se plantan ó se repueblan por los particulares, no obstante que se ve al particular hacer ciertas plantaciones, como la del olivo, que tarda mucho en producir, y hasta que esto sucede está constantemente gastando y privando de todo interés al capital, y sin embargo de que el que planta un monte sólo tiene que esperar, pero sin gastar, aprovechando muy luego el producto de los pastos, tan pronto como la guía del pimpollo ó la mata está á mayor altura que aquella á que pueda alcanzar la res que pasta en el monte, ¿se trata ahora de la plantación? ¿Se trata de hacer montes, ó de vender los que existen, y en vías de destrucción? Pues si es de esto último de lo que se trata, el monte ya está criado, está en productos, y la falta de espera no puede alegarse, porque desde el primer día el que se hace propietario le tiene en producto.

Por último, suponen algunos que cuando menos los montes que se encuentran situados en las alturas de las montañas deberían reservarse, y en verdad que no alcanzo á comprender la razón. Esos son los que menos expuestos están á la destrucción, por la dificultad de los arrastres, siendo en cambio los que ofrecen

pastos en la estación de verano, en que no los tienen los valles, ofreciendo ventajas que nadie como el particular sabe apreciar, y de los que el Estado obtiene reducido producto y puede vigilar menos, porque retirados de la ruta de la Guardia civil, son menos visitados y, por lo tanto, objeto de constante merodeo.

He expuesto todos los antecedentes de la cuestión de enagenación de los montes, y las razones que en mi juicio abonaban la medida. Cúmpleme ahora, para que no quede duda del alcance de mis opiniones al someter al Consejo de Ministros tan grave asunto, tratar, aunque ligeramente, del método que me proponía emplear, si llegaba el momento de realizarlo.

Con franqueza, que podría acaso ser innecesaria, pero que acredita desde luego mi lealtad y la sinceridad de mi carácter, he dejado consignado en el bosquejo de ideas que presenté al Consejo de Ministros que como los recursos no se obtendrían en la misma proporción que los gastos debieran verificarse, *podrían* hacerse sobre los pagarés que las ventas produjesen operaciones de crédito que anticipasen los recursos.

Siendo como son conocidos mis deseos y mis tendencias de que el crédito público se fortifique y de que los tenedores de la Deuda pública no se vean defraudados en las fundadas esperanzas que las negociaciones para la conversión debieron ofrecerles de que no se harían prematura é incondicionalmente nuevas emisiones de valores que perjudicasen los suyos, sería posible que los que parecen estar siempre dispuestos á combatir mis soluciones encontrasen contradicción entre aquellas y estas opiniones, y es deber mío, por lo tanto, explicar con claridad mis propósitos.

Al presentar el referido bosquejo, sólo hacía enunciación de ideas generales, sin precisar sus detalle ; pero desde luego se advierte que no se trataba de una

medida definitiva, cuando se expresaba que *podrían* hacerse operaciones de crédito, y no que se harían, con lo cual daba á entender que sólo tendrían lugar en el caso que fueran absolutamente precisas.

Si esta necesidad llegaba, si no fuera bastante la negociacion de los pagarés á que previamente debía acudir y la cual no trae anexa la necesidad de una emisión de valores, como lo prueban las diferentes que han tenido lugar con el Banco de España y otros establecimientos de crédito, la operación que se efectuase se verificaria dentro de las reglas que exige una buena administración para que no resultase lastimado interés alguno.

Los poseedores de la Deuda pública sufren perjuicio, y lo experimenta también el Estado, cuando los intereses, y la amortización en su caso, no caben holgadamente dentro del presupuesto ordinario y hay que mantener estas obligaciones por medio de una Deuda flotante, que al fin ha de saldarse por una operación de crédito que produce idénticos inconvenientes, si no se arbitraron los recursos que desde el primer día debieron arbitrase.

En el caso extremo de que sobre los pagarés de compradores de los montes hubiese que hacer una operación de crédito que produjese emisión, ésta no podría tener lugar, con arreglo á la base de mi proyecto, sino con las condiciones siguientes:

1.^a Con un presupuesto ordinario en el cual cabían holgadamente todos los intereses de la Deuda pública, no sólo por lo presente, sino también para lo porvenir.

2.^a El presupuesto extraordinario que se formaba, estaba dotado para cubrir todos sus gastos con recursos positivos y realizables, alejando toda posibilidad de crearse débitos que afectasen á los presupuestos ulteriores.

3.^a Que aun no obstante lo expuesto, la emisión sólo tendría lugar por la cantidad absolutamente precisa para atender al desenvolvimiento de la riqueza y á las necesidades públicas actuales, con lo cual gana notablemente el crédito público.

4.^a Que, dado el caso de que me ocupo, si por una parte nacía un nuevo valor, por otra se disminuía en cantidad muy superior la circulación del 4 por 100, toda vez que la parte del producto de los montes correspondiente á los Ayuntamientos se destinaba á la adquisición de títulos del 4 por 100 que se convertirían en inscripciones.

5.^a Que entraba en mi propósito, según también consta en el bosquejo presentado al Consejo de Ministros, que una parte del producto de la enagenación de los montes se destinase á la amortización de la Deuda pública.

Con estas condiciones, que no son arbitrarias ni meramente hipotéticas, sino que nacen todas del mismo pensamiento presentado al Consejo de Ministros, los mismos tenedores de la Deuda pública se felicitarían de ver adoptar caminos que, contribuyendo poderosamente á fomentar la riqueza pública y á engrandecer al País, contribuirían eficazísimamente al enaltecimiento del crédito.

Demostrado, pues, que eran imaginarios los inconvenientes de la venta de los montes públicos; demostrado asimismo que serían grandes las ventajas que la riqueza pública y la Hacienda habian de alcanzar con la realización del pensamiento que sometí á la deliberación del Consejo; teniendo fe en mis convicciones, hijas del estudio y del vehemente propósito de contribuir con todas mis fuerzas al bienestar de la Nación, espero que el tiempo ha de darme la razón y que la verdad se abrirá paso.

CONCLUSIÓN.

He terminado mi trabajo. Acaso haya quien lo tenga por sobrado extenso; pero yo afirmo que en todo caso mi intención ha estado muy lejos de considerarlo como asunto de un vano interés personal.

Tenía yo una obligación que cumplir, en virtud de los respetos debidos á la mayoría parlamentaria que con verdadera decisión apoyó mis planes, y al Gobierno de que he formado parte recientemente. Por más que yo piense que la Política y la Hacienda son cosas distintas, y que la segunda se mueve en una esfera propia, sin desconocer por esto que tienen sus puntos de contacto, es lo cierto que si bien me cupo la honra y me corresponde la responsabilidad de haber iniciado, en cumplimiento estricto de mi deber, el sistema financiero del Gabinete de 8 de Febrero de 1881, hay que reconocer que el Consejo de Ministros me favoreció con su cooperación, y que por consecuencia, yo no hago nada de más como miembro de aquel Gabinete con procurar dar ahora extensa cuenta á la opinión de los móviles y resultados del sistema financiero consignado concretamente en el párrafo que

el Gobierno tuvo el alto honor de poner en los labios augustos de S. M. el Rey en un documento parlamentario de la importancia del discurso de la Corona, estampado en la parte oportuna á la cabeza de esta Memoria.

Con mis ideas y compromisos fui llamado á formar parte de aquella Administración; y debo hacer constar aquí mi reconocimiento hacia mis compañeros por la benévola confianza que en mí se sirvieron depositar, y por la decisión con que apoyaban lo que estimaron útil para la Nación, y la experiencia está justificando, si no como la fórmula definitiva de nuestra Hacienda, alarde de satisfacción y confianza propias en que yo jamás incurriré, como fruto al menos de meditaciones consagradas á la Patria con el deseo sincero de que otros vayan corrigiendo y mejorando la obra de un Gobierno que quiso ganar para el País honra, crédito y mayor seguridad para lo porvenir. Satisfecha esta obligación, me resta que llenar otros dos, que tienen también para mí natural y legítima importancia.

Es la primera, declarar que, respetando el uso que de su perfecto derecho hagan los que estén llamados á corregir ó modificar mis planes, no puedo aceptar la responsabilidad de sus consecuencias, sino en tanto que los procedimientos conduzcan al perfeccionamiento de las reformas por mí planteadas, y de ningún modo cuando lleven en sí el germen de su anulación ó las destruyan en alguna parte esencial. Nadie en justicia podrá pretender que esta declaración sea ociosa: si yo he obrado con perfecto convencimiento de la bondad de las reformas, y abrigo la esperanza de que han de seguir dando, como hasta de presente han dado, resultados provechosos, nadie extrañará esta salvedad: si la bondad de las medidas que puedan

adoptarse produce beneficios y han de redundar en honra de sus autores, es equitativo que no sean en daño mio si la experiencia acredita lo contrario, pues harto tengo que hacer con defender lo por mí practicado, ante las censuras de mis adversarios, para decidirme á aceptar silenciosamente ó entrar en nuevos debates sobre responsabilidades que no sean exclusivamente mias.

Esta consideración, nacida de la experiencia que me proporcionó mi administración en 1874, me obliga á hacer otra por idénticos motivos.

Contestando como dejo contestadas en este libro todas las censuras que se me han dirigido, explicados lealmente mis actos y mis patrióticos propósitos para lo porvenir, no he de estar dispuesto á dar el gusto á mis contradictores de que me tengan en perpetua lucha activa. Así, pues, no teniendo nada que añadir ni quitar á lo dicho, sólo aceptaré debate cuando me convenga, dejando en el entretanto el juicio de los nuevos ataques ó censuras que puedan dirigírseme, á la opinion pública, que podrá pesar su fundamento y su justicia, con lo que sobre cada punto me he considerado en el deber de exponer.

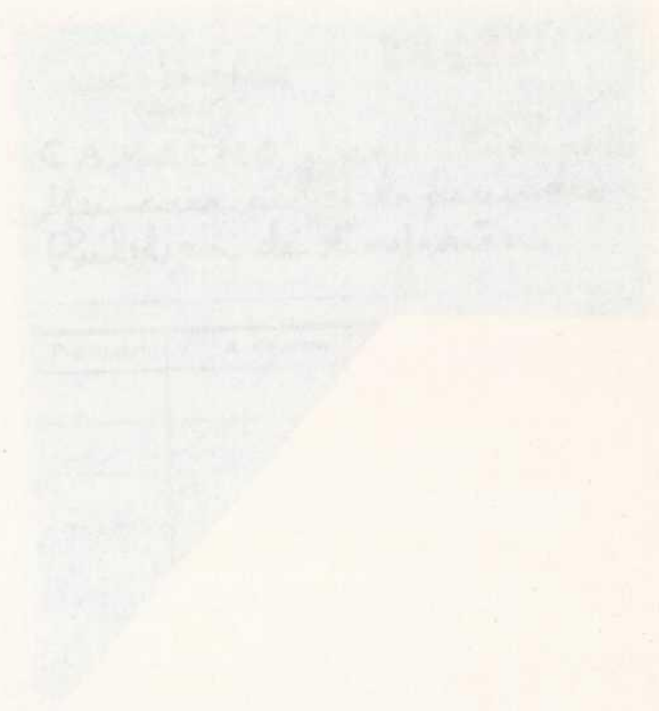
No se entienda por esto que renuncio á la defensa de mi obra, en lo que de trascendental é importante pueda tener; pero la elección del asunto y del momento será exclusivamente mia.

Antes lo he dicho: la Hacienda es el País en sus intereses más permanentes y más generales. Está por encima de los partidos, y jamás, mirando por la salud de la Patria, estos intereses pueden subordinarse, ni en el gobierno ni en la oposicion, á consideraciones mezquinas de parcialidad y de amor propio. No quiere decir esto que la neutralidad equivalga al asentimiento común y á privarse de los serenos é impar-

ciales juicios de la crítica, hija de la propia conciencia de cada uno, pues al contrario, con estos juicios se coopera también muy útilmente á la mejor Administración y al provecho de la Patria.

ÍNDICE.

	<u>Páginas.</u>
Introducción.	5
Tesoro público.	15
Deuda flotante.	25
Presupuestos.	37
Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería.	87
— industrial y de comercio.	119
Impuesto de Derechos reales.. . . .	139
— de Minas.	147
— de Cédulas personales.. . . .	155
— de Consumos.. . . .	163
— equivalente á los que existían sobre la sal.	197
— sobre sueldos y asignaciones.	213
Aduanas.. . . .	223
Rentas Estancadas.	285
Organización de la Administración económica provincial.	315
Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas.	323
Inspección general de la Hacienda pública.	329
Dirección general de la Deuda pública.	359
— — de lo Contencioso del Estado.	371
Cuentas generales del Estado.	381
Conversión de las Deudas amortizables.	383
— de la Deuda perpétua interior y exterior.	409
Desamortización de los montes públicos.. . . .	469
Conclusión.. . . .	507



BANCO DE ESPAÑA
Biblioteca

28484

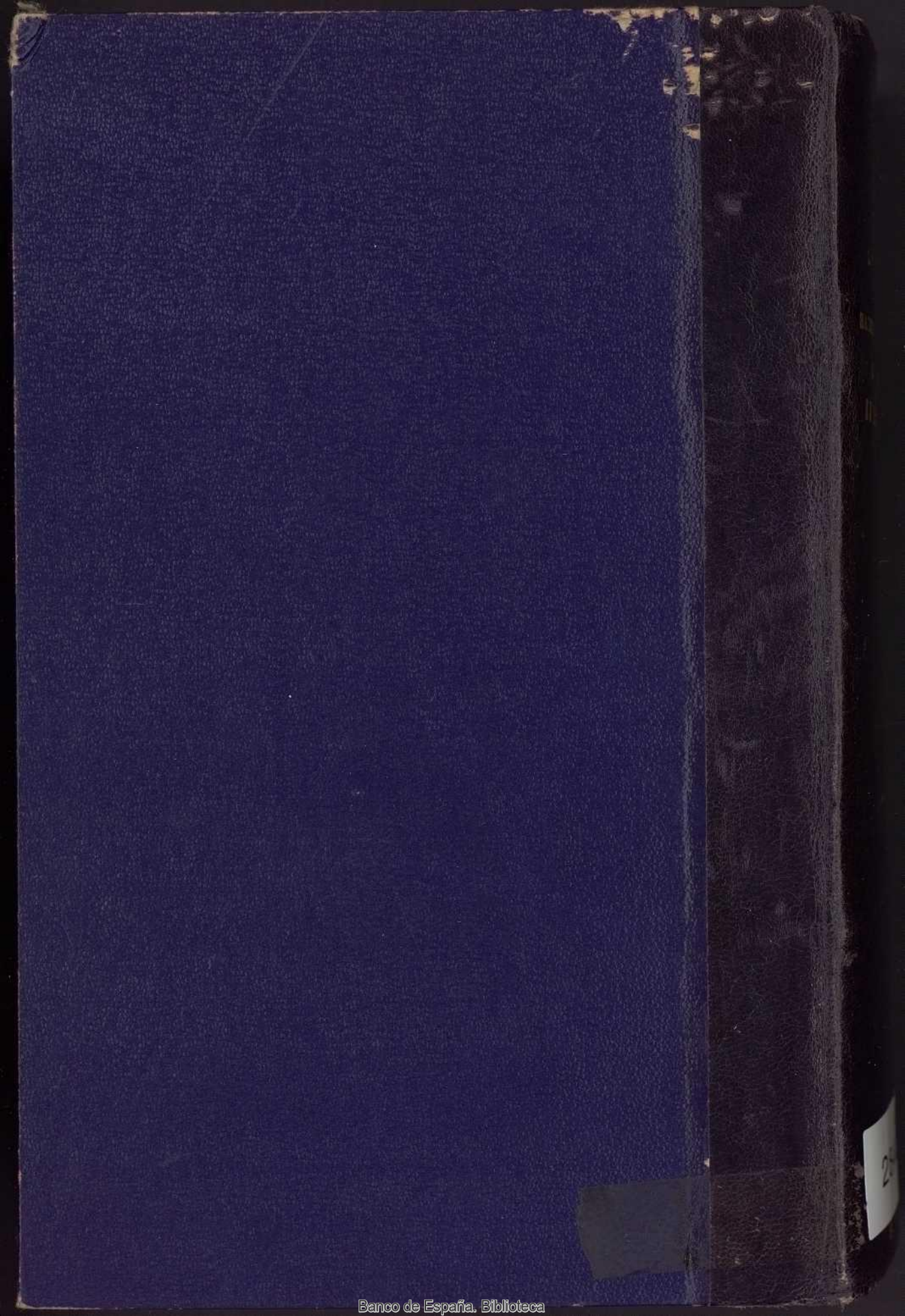
Signature
Autor
Título

CAMACHO Juan Francisco
Memoria sobre la Hacienda
Pública de España.

Prestatario	A devolver	Devuelto
-------------	------------	----------







J. P. CAMACHO

HACIENDA PÚBLICA

DE ESPAÑA

EN 1881 A 1888

28484

S. DE E.